CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
14 JUN. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1783/2021-CR, 2171/2021-CR, 2302/2021-CR, 2628/2021-ZR, 2958/2022-CR, 3391/2022-CR, 3500/2022-CR, 3645/2022-CR, 4549/2022-CR, 4601/2022-CR, 4602/2022-CR, 4738/2022-CR, 4979/2022-CR, 5032/2022-CR, 5167/2022-CR, 5192/2022-CR, 5224/2023-CR, 5721/2023-CR, 5884/2023-CR, 6522/2023-CR, 6615/2023-CR, 6773/2023-CR, 6955/2023-CR, 7112/2023-CR y 7992/2023-CR que con texto sustitutorio que propone la Lley que determina el proceso de calificación y los beneficios de los Defensores de la Patria y los Defensores de la Democracia.

COMISIÓN D E DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2023-2024

DICTÁMEN

Señor Presidente:

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la República, las iniciativas siguientes

El Proyecto de Ley 1783/2021-CR, iniciativa legislativa actualizada por el Consejo Directivo en su sesión del 11 de abril de 2022 -antes Proyecto de Ley 7010/2020-CR del Grupo Parlamentario Fuerza Popular-, que propone Ley que declara "Héroes de la Democracia" a los integrantes de la Patrulla "Miguel" y modifica la Ley N° 29031.

Proyecto de Ley 2171/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País - Partido de Integración Social, a iniciativa de los congresistas Williams Zapata José Daniel, Gonzales Delgado Diana Carolina, Bazán Calderón Diego Alonso Fernando, Córdova Lobatón María Jessica, Burgos Oliveros Juan Bartolomé y Chirinos Venegas Patricia Rosa; que propone la Ley que reconoce como Defensor de la Democracia al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que han recibido condecoración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de su respectiva institución, u otra Institución Armada o Policial diferente a la que pertenece por haber puesto en riesgo su vida en la lucha contra el terrorismo.

Proyecto de Ley 2302/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Montalvo Cubas Segundo Toribio, Palacios Huamán Margot, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Rivas Chacara Janet Milagros, Cruz Mamani Flavio, Quito Sarmiento Bernardo Jaime y Cerrón Rojas Waldemar José, que propone la Ley que modifica la Ley 30874 y el Reglamento 26511 Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Proyecto de Ley 2628/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de los congresistas Espinoza Vargas Jhaec Darwin, Martínez Talavera Pedro Edwin, Doroteo Carbajo Raúl Felipe, Portero López Hilda Marleny, Vergara Mendoza Elvis Hernán y Arriola Tueros José Alberto, que propone la Ley que modifica el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y reconoce a Defensores de la Patria.

Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 12:49:03-0500

Proyecto de Ley 2958/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Integridad y Democracia, a iniciativa de los congresistas Zeballos Madariaga Carlos Javier, Pablo Medina Flor Aidee, Acuña Peralta Segundo Héctor, Alcarraz Agüero Yorel Kira y Paredes Piqué Susel Ana María, que propone la Ley que reconoce y declara Héroes de la Democracia a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec

Proyecto de Ley 3391/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa de los congresistas Cutipa Ccama Víctor Raúl, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Balcázar Zelada José María, Varas Meléndez Elías Marcial y Coayla Juárez Jorge Samuel, que propone la Ley que modifica la Ley N° 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Proyecto de Ley 3500/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de los congresistas Cordero Jon Tay María Del Pilar, Lizarzaburu Lizarzaburu Juan Carlos Martín, Morante Figari Jorge Alberto, Jiménez Heredia David Julio, Aguinaga Recuenco Alejandro Aurelio, Obando Morgan Auristela Ana y Cordero Jon Tay Luis Gustavo, que propone la Ley que precisa el acceso de los excombatientes en su calificación como Defensores de la Patria y como Defensores de la Democracia.

Proyecto de Ley 3645/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de los congresistas Flores Ancachi Jorge Luis, Monteza Facho Silvia María, Soto Palacios Wilson, Vergara Mendoza Elvis Hernán, Aragón Carreño Luis Ángel, Mori Celis Juan Carlos y Doroteo Carbajo Raúl Felipe, que propone la Ley que reconoce como "Defensor de la Patria" a los ex miembros de las Fuerzas Armadas.

Proyecto de Ley 4549/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de los congresistas Moyano Delgado Martha Lupe, Olivos Martínez Vivian, Zeta Chunga Cruz María, Lizarzaburu Lizarzaburu Juan Carlos Martín, Castillo Rivas Eduardo Enrique y Guerra García Campo Hernando, que propone la Ley que interpreta la Ley 24053, denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio día central conmemorativo, sobre la bonificación mensual de los Calificados Defensores de la Patria.

Proyecto de Ley 4601/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa de los congresistas Cutipa Ccama Víctor Raúl, Cruz Mamani Flavio, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcia y, Coayla Juárez Jorge Samuel, que propone la Ley que extiende los beneficios de la Ley N° 24053, al personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto con el Ecuador del año [sic] 1978, 1981 y 1995

Proyecto de Ley 4602/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, a iniciativa de los congresistas Cutipa Ccama Víctor Raúl, Cruz Mamani Flavio, Marticorena Mendoza Jorge Alfonso, Varas Meléndez Elías Marcial y Coayla Juárez Jorge Samuel, que propone la Ley que extiende las áreas de delimitación que corresponde a la zona de

Combate del Alto Cenepa que participaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles en el conflicto con el Ecuador del año 1995.

Proyecto de Ley 4738/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa de los congresistas Paredes Castro Francis Jhasmina, Quiroz Barboza Segundo Teodomiro, Medina Hermosilla Elizabeth Sara, Paredes Gonzales Alex Antonio, Vásquez Vela Lucinda y Gutiérrez Ticona Paul Silvio, que propone la Ley que precisa los requisitos que deben presentar los excombatientes de las FFAA de 1980 al 2000 de la lucha contra el terrorismo para acceder a los beneficios que se les ha otorgado.

Proyecto de Ley 4979/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Mita Alanoca Isaac, Agüero Gutiérrez María Antonieta, Palacios Huamán Margot, Flores Ramírez Alex Randu, Cruz Mamani Flavio, Cerrón Rojas Waldemar José, Montalvo Cubas Segundo Toribio y Gonza Castillo Américo, que propone la Ley que modifica el artículo 2 y la primera disposición complementaria final de la Ley N° 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053.

Proyecto de Ley 5032/2022-CR iniciativa legislativa actualizada por el Consejo Directivo en su sesión del 2 de mayo de 2023 -antes Proyecto de Ley 6621/2020-CR del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso- que propone la Ley que incorpora a los excombatientes de la zona del Alto Cenepa durante el conflicto con el Ecuador en 1995, calificados como Combatientes en la zona del Alto Cenepa, dentro de los alcances del artículo 10 de la Ley N° 24053, Ley que denomina Campaña Militar de 1941, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de julio día central conmemorativo.

Proyecto de Ley 5167/2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa de los congresistas Ruíz Rodríguez Magaly Rosmery, Soto Reyes Alejandro, García Correa Idelso Manuel, Trigozo Reátegui Cheryl, Acuña Peralta María Grimaneza, Camones Soriano Lady Mercedes y Salhuana Cavides Eduardo, que propone la Ley que declara héroes de la democracia a los miembros de la unidad de desactivación de explosivos — UDEX — PNP.

Proyecto de Ley 5192/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa de los congresistas Gutiérrez Ticona Paul Silvio, Dávila Atanacio Pasión Neomías, Paredes Castro Francis Jhasmina, Paredes Gonzales Alex Antonio, Quiroz Barboza Segundo Teodomiro, Tacuri Valdivia Germán Adolfo, Tello Montes Nivardo Edgar, Vásquez Vela Lucinda y Medina Hermosilla Elizabeth Sara, que propone Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nor oriente; y que declara el 31 de julio día central conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

Proyecto de Ley 5224/2023-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de los congresistas Mori Celis Juan Carlos, Espinoza Vargas Jhaec Darwin, Paredes Fonseca Karol Ivett, Soto Palacios Wilson, Aragón Carreño Luis Ángel y Flores Ancachi Jorge Luis, que propone la Ley que modifica el artículo 1° de la Ley 26511, que reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, modificado por Ley 27124.

Proyecto de Ley 5721/2023-CR, presentado por Grupo Parlamentario Unidad y Dialogo Parlamentario a iniciativa de los congresistas Medina Minaya Esdras Ricardo, Acuña Peralta Segundo Héctor, Cordero Jon Tay Luis Gustavo, Ugarte Mamani Jhakeline Katy y Burgos Oliveros Juan Bartolomé, que propone la Ley que revaloriza los servicios prestados por los licenciados de las Fuerzas Armadas, para la preservación la paz y seguridad de la nación, durante la época de la lucha antiterrorista.

Proyecto de Ley 5884/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Cerrón Rojas Waldemar José, Palacios Huamán Margot, Quispe Mamani Wilson Rusbel, Mita Alanoca Isaac, Gonza Castillo Américo y Taipe Coronado María Elizabeth, que propone la Ley para el reconocimiento justo al personal militar, policial y civil que participó en las operaciones militares en el conflicto del Cenepa 1995.

Proyecto de Ley 6522/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Montalvo Cubas Segundo Toribio, Portalatino Ávalos Kelly Roxana, Taipe Coronado María Elizabeth, Quispe Mamani Wilson Rusbel, Gonza Castillo Américo, Cerrón Rojas Waldemar José y Cruz Mamani Flavio, que propone la Ley de restablecimiento, actualización y nivelación de la bonificación mensual de los ex combatientes, sobre la base de la remuneración mínima vital vigente en cada ejercicio fiscal, en el marco de la ley 24053 y su modificatoria y la ley 26511 y sus modificatorias.

Proyecto de Ley 6615/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, a iniciativa de los congresistas Montoya Manrique Jorge Carlos, Ciccia Vásquez Miguel Ángel, Zeballos Aponte Jorge Arturo, Padilla Romero Javier Rommel, Jáuregui Martínez de Aguayo María de los Milagros Jackeline y Cueto Aservi José Ernesto, que propone la Ley que amplía el plazo de la Ley N° 30874 para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos armados con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Proyecto de Ley 6773/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú, a iniciativa de los congresistas Bermejo Rojas Guillermo, Sánchez Palomino Roberto, Kamiche Morante Luis, Cortez Aguirre Isabel, Limachi Quispe Nieves y Echeverría Rodríguez Hamlet, que propone la Ley que establece la asignación económica mensual para los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa

y Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional.

Proyecto de Ley 6955/2023-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de los congresistas Espinoza Vargas Jhaec Darwin, Doroteo Carbajo Raúl Felipe, Vergara Mendoza Elvis Hernán, Flores Ancachi Jorge Luis, Portero López Hilda Marleny y Aragón Carreño Luis Ángel, que propone la Ley que establece la calificación a instancia de parte el reconocimiento de Defensores de la Patria al personal que participó en los conflictos armados con el ecuador y prorroga la vigencia de la Ley 30874.

Proyecto de Ley 7112/2023-CR, presentado por el congresista no agrupado Martínez Talavera Edwin, que propone la Ley que modifica la Ley 29031 Ley que instituye el día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente.

Proyecto de Ley 7992/2023-CR, presentado por EL Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de los congresistas Waldemar Cerrón Rojas, María Agüero Gutiérrez, Margot Palacios Huamán, Flavio Cruz Mamani, Américo Gonza Castillo, Segundo Montalvo Cubas e Isaac Mita Alanoca, que propone la Ley que amplía el plazo para el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

En Vigesimosegunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas celebrada el 10 de junio de 2024, luego del análisis y debate correspondiente, se aprobó el dictamen por MAYORÍA de los parlamentarios presentes, recaído en los Proyectos de Ley 1783/2021-CR, 2171/2021-CR, 2302/2021-CR, 2628/2021-CR, 2958/2022-CR, 3391/2022-CR, 3500/2022-CR, 3645/2022-CR, 4549/2022-CR, 4601/2021-CR, 4602/2022-CR, 4738/2022-CR, 4979/2022-CR, 5032/2022-CR, 5167/2022-CR, 5192/2022-CR, 5224/2022-CR, 5721/2023-CR, 5884/2023-CR, 6522/2023-CR, 6615/2023-CR, 6773/2023-CR, 6955/2023-CR, 7112/2023-CR y 7992/2023-CR; con los votos a favor de los congresistas Patricia Chirinos Venegas, Patricia Juárez Gallegos, Fernando Rospigliosi Capurro, Tania Ramírez García, Edhit Julón Irigoín, Héctor Valer Pinto, Luis Aragón Carreño y Katy Ugarte Mamani; sin votos en contra; y con los votos en abstención de los congresistas Jorge Montoya Manrique, José Williams Zapata, Roberto Chiabra León, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza; con las licencias / justificaciones de insistencia de los congresistas Susel Paredes Piqué y Abel Reyes Cam.

Asimismo, en la misma sesión se aprobó por unanimidad de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta; con los votos a favor de los congresistas Patricia Chirinos Venegas, Jorge Montoya Manrique, Fernando Rospigliosi Capurro, Tania Ramírez García, José Williams Zapata, Roberto Chiabra León, Edhit Julón Irigoín, Héctor Valer Pinto, José Cueto Aservi, Luis Aragón Carreño, Alfredo Azurín Loayza y Katy Ugarte Mamani

I. SITUACIÓN PROCESAL

1. Antecedentes procedimentales

a. **Proyecto de Ley 1783/2021-CR,** fue actualizado por el Consejo Directivo el 11 de abril de 2022; siendo presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 21 de abril de 2022; se decretó y fue recibido el 26 de abril de 2022 en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, como única comisión dictaminadora. A la conclusión del periodo parlamentario 2016-2021 quedó en estudio en la comisión; siendo remitido al archivo por Acuerdo de Consejo Directivo N°19-2021/CONSEJO-CR.

b. **Proyecto de Ley 2171/2021-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 30 de mayo de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 31 de mayo del 2022.

c. **Proyecto de Ley 2302/2021-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 09 de junio de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 15 de junio del 2022.

d. **Proyecto de Ley 2628/2021-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 15 de julio de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 18 de julio del 2022.

e. **Proyecto de Ley 2958/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 02 de setiembre de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 07 de setiembre del 2022.

f. **Proyecto de Ley 3391/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 21 de octubre de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 26 de octubre del 2022.

g. **Proyecto de Ley 3500/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 09 de noviembre de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 11 de noviembre del 2022.

h. **Proyecto de Ley Nº 3645/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 23 de noviembre de 2022; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 25 de noviembre del 2022.

i. **Proyecto de Ley 4549/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 23 de marzo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 29 de marzo del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la principal comisión dictaminadora.

j. **Proyecto de Ley 4601/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 29 de marzo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como primera comisión dictaminadora, el 31 de marzo del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la segunda comisión dictaminadora.

k. **Proyecto de Ley 4602/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 29 de marzo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 31 de marzo del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como principal comisión dictaminadora.

l. **Proyecto de Ley 4738/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 17 de abril de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 19 de abril del 2023.

m. **Proyecto de Ley 4979/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 12 de mayo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 15 de mayo del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como principal comisión dictaminadora.

n. **Proyecto de Ley 5032/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 17 de mayo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 23de mayo del 2023. A la conclusión del periodo parlamentario 2016-2021 quedó en estudio en la

comisión; siendo remitido al archivo por Acuerdo de Consejo Directivo N°19-2021/CONSEJO-CR.

o. **Proyecto de Ley 5167/0222-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 24 de mayo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 26 de mayo del 2023.

p. **Proyecto de Ley 5192/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 26 de mayo de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 30 de mayo del 2023.

q. **Proyecto de Ley 5224/2022-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 01 de junio de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 02 de junio del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como principal comisión dictaminadora.

r. **Proyecto de Ley 5721/ 2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 16 de agosto de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 17 de agosto del 2023.

s. **Proyecto de Ley 5884/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 11 de setiembre de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 13 de setiembre del 2023.

t. **Proyecto de Ley 6522/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 24 de noviembre de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 28 de noviembre del 2023; siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la comisión principal.

u. **Proyecto de Ley 6615/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 11 de diciembre de 2023; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 12 de diciembre del 2023.

v. **Proyecto de Ley 6773/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 5 de enero de 2024; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como segunda comisión dictaminadora, el 9 de enero de 2024; siendo la Comisión de Presupuesto la principal comisión dictaminadora.

w. **Proyecto de ley 6955/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 1 de febrero de 2024; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 5 de febrero de 2024.

x. **Proyecto de Ley 7112/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 23 de febrero de 2024; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 26 de febrero de 2024.+

y. **Proyecto de Ley 7992/2023-CR,** fue presentado en el Área de Trámite y Digitalización Documentaria el 30 de mayo de 2024; e ingresó a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como única comisión dictaminadora, el 3 de junio de 2024.

2. Antecedentes parlamentarios

a. **Proyecto de Ley 1287/2016-CR,** presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por iniciativa de la Congresista Luis Alberto Yika García; que propone la Ley que facilita el reconocimiento como defensores de la patria al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995

b. **Proyecto de Ley 894/2016-CR**, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, por iniciativa de la Congresista Edwin Alberto Donayre Gotzch; que propone la Ley que amplía el plazo para el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador de los años 1978, 1981 y 1995.

3. Control del cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 75 y 76 del reglamento del congreso de la república a los proyectos de ley.

Conforme a los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República se ha verificado que las presentes proposiciones de leyes cumplen con las exigencias señaladas en los fundamentos de las mencionadas proposiciones de ley, los efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre el ordenamiento jurídico, así como los análisis costo-beneficios. Además, cuentan con la firma de los

portavoces de los respectivos Grupos Parlamentarios, así como las firmas correspondientes de los integrantes de estas bancadas.

Las iniciativas presentadas en su gran mayoría proponen modificar Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, actividades funcionales del Ejecutivo, Directivas y Planes de Operaciones; en otros casos consideran incorporar requisitos para ser calificados como Defensores de la Democracia los mismos que generan gasto, buscando incorporarse en la Ley 24053, para conseguir que se les abone la bonificación que consiste en tres (03) Remuneraciones Mínimas Vitales; lo que necesariamente colisiona con la Constitución Política del Perú, artículo 79.

II. OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS

1. Opiniones solicitadas:

a) Proyecto de Ley 1783/2021-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio N° 1309-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	03.05.22
Oficio N° 1310-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Educación	03.05.22
Oficio N° 1311-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	03.05.22
Oficio N° 1312-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	03.05.22
Oficio N° 1313-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	03.05.22

b) Proyecto de Ley 2171/2021-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio N° 1521-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	09.06.22
Oficio N° 1522-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	09.06.22
Oficio N° 1523-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	09.06.22
Oficio N° 1524-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	09.06.22
Oficio N° 1525-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	09.06.22
Oficio N° 1526-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	09.06.22
Oficio N° 1075-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	30.11.22

c) Proyecto de Ley 2302/2021-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio N° 1598-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	16.06.22
Oficio N° 1599-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	16.06.22
Oficio N° 1600-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	16.06.22
Oficio N° 1601-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	16.06.22
Oficio N° 1602-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	16.06.22
Oficio N° 1603-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Poder Judicial	16.06.22
Oficio N° 1604-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio Público	16.06.22
Oficio N° 1077-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	30.11.22
Oficio N° 1468-2022-2023CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	17.01.23
Oficio N° 1469-2022-2023CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	17.01.23
Oficio N° 1470-2022-2023CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	17.01.23

d) Proyecto de Ley 2628/2021-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 084-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	22.08.22
Oficio Nº 085-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	22.08.22
Oficio Nº 086-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	22.08.22
Oficio Nº 087-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	22.08.22
Oficio Nº 088-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	22.08.22
Oficio N° 089 -2022-2023/CDNOIDALCD/CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	22.08.22
Oficio Nº 1472-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio del Interior	17.01.23

e) Proyecto de Ley 2958/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 215-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	08.09.22
Oficio Nº 216-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	08.09.22
Oficio Nº 217-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	08.09.22
Oficio Nº 218-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	08.09.22
Oficio Nº 219-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	08.09.22
Oficio Nº 220-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	08.09.22
Oficio Nº 1149-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Defensa	02.12.22
Oficio Nº 1150-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Economía y Finanzas	02.12.22
Oficio Nº 1151-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	02.12.22

f) Proyecto de Ley 3391/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 741-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	03.11.22
Oficio Nº 742 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	03.11.22
Oficio Nº 743-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	03.11.22
Oficio Nº 744 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	03.11.22
Oficio Nº 745 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	03.11.22
Oficio Nº 746-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	03.11.22
Oficio Nº 1479-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Defensa	13.01.23
Oficio Nº 1480-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Economía y Finanzas s	13.01.23
Oficio Nº 1481-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Justicia y Derechos Humano	13.01.23
Oficio Nº 1482-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Defensoría del Pueblo	13.01.23

g) Proyecto de Ley 3500/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 972-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	22.11.22
Oficio Nº 973-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	22.11.22
Oficio Nº 974-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	22.11.22
Oficio Nº 975-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	22.11.22
Oficio Nº 976-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	22.11.22
Oficio Nº 1483-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio del Interior	13.01.23
Oficio Nº 1484-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Economía y Finanzas	13.01.23
Oficio Nº 1485-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13.01.23
Oficio Nº 1486-2022-2023/CDNOIDALCD-CR-r	Defensoría del Pueblo	13.01.23

h) Proyecto de Ley 3645/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha

Oficio Nº 1043-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	28.11.22
Oficio Nº 1044-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	28.11.22
Oficio Nº 1045-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	28.11.22
Oficio Nº 1046-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	28.11.22
Oficio Nº 1047-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	28.11.22
Oficio Nº 1048-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	28.11..22
Oficio Nº 1487-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio del Interior	13.01.23
Oficio Nº 1488-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Defensa	13.01.23
Oficio Nº 1489-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Economía y Finanzas	13.01.23
Oficio Nº 1490-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13.01.23
Oficio Nº 1491-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Defensoría del Pueblo	13.01.23
Oficio Nº 1492-2021-2022/CDNOIDALCD-CR-r	Presidencia del Consejo de Ministros	13.01.23

i) Proyecto de Ley 4549/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2483-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	12.05.23
Oficio Nº 2484-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	12.05.23
Oficio Nº 2485-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	12.05.23
Oficio Nº 2486-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	12.05.23
Oficio Nº 2487-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	12.05.23
Oficio Nº 2488-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	12.05.23

j) Proyecto de Ley 4601/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2257-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	04.04.23
Oficio Nº 2258-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	04.04.23
Oficio Nº 2259-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	04.04.23
Oficio Nº 2260-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	04.04.23
Oficio Nº 2261-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	04.04.23
Oficio Nº 2262-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	04.04.23

k) Proyecto de Ley 4602/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2263-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	04.04.23
Oficio Nº 2264 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	04.04.23
Oficio Nº 2265-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	04.04.23
Oficio Nº 2266 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	04.04.23
Oficio Nº 2267 -2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	04.04.23
Oficio Nº 2268-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	04.04.23

l) Proyecto de Ley 4738/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2416-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	25.04.23
Oficio Nº 2417-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	25.04.23
Oficio Nº 2418-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	25.04.23
Oficio Nº 2419-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	25.04.23
Oficio Nº 2420-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	25.04.23
Oficio N° 2421-2022-2023/CDNOIDALCD/CR	Ministerio de Defensa	25.04.23
Oficio Nº 2422-2022-2023CDNOIDALCD-CR	Ejercito del Perú	25.04.23
Oficio Nº 2423-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Fuerza Aérea del Perú	25.04.23
Oficio N° 2424 -2022-2023/CDNOIDALCD/CR	Marina de Guerra del Perú	25.04.23

Oficio N° 2425 -2022-2023/CDNOIDALCD/CR	Policía Nacional del Perú	25.04.23

m)Proyecto de Ley 4979/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2730-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	17.05.23
Oficio Nº 2731-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	17.05.23
Oficio Nº 2732-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	17.05.23
Oficio Nº 2733-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	17.05.23
Oficio Nº 2734-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	17.05.23
Oficio Nº 2735-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	17.05.23
Oficio Nº 2736-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	17.05.23

n) Proyecto de Ley 5032/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2772-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	25.05.23
Oficio Nº27732022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	25.05.23
Oficio Nº 2774-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	25.05.23
Oficio Nº 2775-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	25.05.23
Oficio Nº 2776-2022-202/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	25.05.23
Oficio Nº 2777-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	25.05.23
Oficio Nº 2278-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Educación	25.05.23

o) Proyecto de Ley 5167/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2940-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	09.06.23
Oficio Nº 2941-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	09.06.23
Oficio Nº 2942-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	09.06.23
Oficio Nº 2943-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	09.06.23
Oficio Nº 2944-2022-202/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	09.06.23
Oficio Nº 2945-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Educación	09.06.23
Oficio Nº 2946-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	09.06.23
Oficio Nº 2947-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	09.06.23

p) Proyecto de Ley 5192/2022-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 2965-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	02.06.23
Oficio Nº 2966-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	02.06.23
Oficio Nº 2967-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	02.06.23
Oficio Nº 2968-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	02.06.23
Oficio Nº 2969-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	02.06.23
Oficio Nº 2970-2022-2023CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Educación	02.06.23
Oficio Nº 2971-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Poder Judicial	02.06.23
Oficio Nº 2972-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	02.06.23
Oficio Nº 2973-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio Público	02.06.23

q) Proyecto de Ley 5224/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 3026-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	13.06.23
Oficio Nº 3027-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	13.06.23

Oficio Nº 3028-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13.06.23
Oficio Nº 3029-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	13.06.23
Oficio Nº 3030-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	13.06.23
Oficio Nº 3031-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	13.06.23
Oficio Nº 3032-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Educación	13.06.23

r) Proyecto de Ley 5721/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 00197-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	04.09.23
Oficio Nº 00198-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	04.09.23
Oficio Nº 00199-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	04.09.23
Oficio Nº 00200-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	04.09.23
Oficio Nº 00201-2022-2023/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	04.09.23

s) Proyecto de Ley 5884/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 422-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	21.09.23
Oficio Nº 423-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	21.09.23
Oficio Nº 424-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	21.09.23
Oficio Nº 425-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	21.09.23
Oficio Nº 426-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	21.09.23
Oficio Nº 427-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	21.09.23

t) Proyecto de Ley 6522/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 01148-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	29.12.23
Oficio Nº 01149-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	29.12.23
Oficio Nº 01150-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	29.12.23
Oficio Nº 01152-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	29.12.23
Oficio Nº 01152-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	29.12.23
Oficio Nº 01153-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	29.12.23

u) Proyecto de Ley 6615/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 01371-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	19.12.23
Oficio Nº 01372-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	19.12.23
Oficio Nº 01373-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	19.12.23
Oficio Nº 01374-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	19.12.23
Oficio Nº 01375-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	19.12.23
Oficio Nº 01376-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	19.12.23
Oficio Nº 01377-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Fiscalía de la Nación-Ministerio Publico	19.12.23
Oficio Nº 01378-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	19.12.23
Oficio Nº 01379-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Poder Judicial	19.12.23

v) Proyecto de Ley 6773/023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 01572-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	17.01.24
Oficio Nº 01575-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	17.01.24
Oficio Nº 01576-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	17.01.24

Oficio N° 01577-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	17.01.24
Oficio N° 01578-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	17.01.24
Oficio N° 01579-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	17.01.24
Oficio N° 01580-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Fiscalía de la Nación-Ministerio Publico	17.01.24
Oficio N° 01581-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Poder Judicial	17.01.24

w) Proyecto de Ley 6955/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio N° 01744-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	15.02.24
Oficio N° 01745-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	15.02.24
Oficio N° 01746-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	15.02.24
Oficio N° 01747-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	15.02.24
Oficio N° 01748-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	15.02.24
Oficio N° 01749-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	15.02.24
Oficio N° 01750-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	15.02.24
Oficio N° 01751-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ejercito del Perú	15.02.24
Oficio N° 01752-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Marina de Guerra del Perú	15.02.24
Oficio N° 01753-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Fuerza Aérea del Perú	15.02.24

x) Proyecto de Ley 7112/2023-CR

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio N° 01841-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Defensa	27.02.24
Oficio N° 01842-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	27.02.24
Oficio N° 01843-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	27.02.24
Oficio N° 01844-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	27.02.24
Oficio N° 01845-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	27.02.24
Oficio N° 01846-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Economía y Finanzas	27.02.24
Oficio N° 01847-2023-2024/CDNOIDALCD-CR	Policía Nacional del Perú	27.02.24

2. Opiniones recibidas:

a. Proyecto de Ley 1783/2021-CR

1) **Del Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° 000544-2022/IN/SG suscrito por el Ministro del Sector, de fecha 01 de julio de 2022, adjuntando el INFORME N° 001044-2022/IN/OGAJ, que concluye señalando que **carece de competencia para emitir opinión**.

2) De **la Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D001450-2022-PCM-SG 15 de junio de 2022, suscrito por la Secretario General de fecha 15 de junio de 2022; adjuntando el Informe N° D000859-2022-PCMOGAJ del 10 de junio de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluyendo con señalar que **no resulta viable**.

3) Del **Ministerio de Educación,** se ha recibido el Oficio N° 448-2022/MINEDU/SG suscrito por el Ministro del Sector, de fecha 16 de agosto de 2022; y adjunta Informe N° 00941-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del 12 de agosto de 2022; que concluye

señalando que **no le corresponde pronunciarse sobre la viabilidad** de la iniciativa legislativo.

4) Del **Ministerio de Defensa,** se ha recibido el Oficio Nº 01216-2023-MINDEF/SG suscrito por su Secretario General, de fecha 21 de marzo de 2023; acompañado del Informe Legal N° 00292-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 24 de febrero de 2023, de la Oficina General de Asesoría Jurídica que concluye señalando que el **proyecto debe ser reevaluado.**

5) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1590-2023-EF/10.01, suscrito por el ministro del sector, de fecha 02 de agosto de 2023 y acompaña el Informe N° 401-2023-EF/50.04 de la Dirección General de Presupuesto Público; que concluye formulando observaciones a la iniciativa bajo análisis.

6) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** remite Oficio N° 4343-2023-JUS/SG del 28 de diciembre de 2023, suscrito por su secretario general; adjuntando el Informe Nº 146-2023-JUS/DGDH-DAIPAN-HTA, del 26 de octubre de 2023, de la Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa; que concluye señalando que, **la iniciativa como no viable.**

Otras opiniones recibidas

7) Los Pacificadores de Sierra y Selva Central del Perú Patrulla Miguel Plan de Operaciones Cerco 99" CIA PM N° 319 DIC – Chilca 31ª Brigada Infantería – SZSNC-7- Huancayo – Julio 1999, presentaron el documento de fecha 19 de abril de 2023, que se encuentra en el enlace siguiente https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTU0MzY=/pdf

8) Opiniones Ciudadanas, se han presentaron dos opiniones ciudadanas que se encuentran en el enlace siguiente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1783

b. Proyecto de Ley 2171/2021-CR

1) De **la Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001495-2022-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 17 de junio de 2022; acompañado del Informe N° D000892-2022-PCM-OGAJ del 16 de junio de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que, **por competencia no le corresponde emitir opinión.**

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 770-2022-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 28 de junio de 2022; acompañado del Informe N° 0504-2022-EF/42.02 del 27 de junio de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que, **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

3) De **la Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 676-2022-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e), de fecha 10 de octubre de 2022; que concluye señalando que, la iniciativa **no guarda relación directa con las líneas temáticas de esa institución.**

4) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 000807-2022/IN/DM suscrito por el Ministro del Sector, del 21 de octubre de 2022; acompañado del Informe N° 001816-2022/IN/OGAJ del 30 de setiembre de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que, que concluye señalando que la iniciativa **debe ser reevaluado**.

5) Del **Ministerio de Defensa,** se ha recibido el Oficio Nº 01064-2022-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector, del 18 de noviembre de 2022; acompañado del Informe Legal N° 01889-2022-MINDEF/SG-OGAJ del 14 de noviembre de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que, la iniciativa **debe ser reevaluada**.

6) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, remitió el Oficio N° 464 - 2024-JUS/SG del 12 de febrero de 2024, suscrito por el secretario general; acompañado del Informe N° 144-2023-JUS/DGDH-DAIPAN-HTA, del 24 de octubre de 2024, de la Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa de la Dirección General de Derechos Humanos del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; que concluye considerando la iniciativa como no viable.

Otras opiniones

7) El ciudadano Fernando Guerrero Espejo ha presentado dos documentos de fechas 05.10.22 y 07.11.22; los mismos que se encuentran en los enlaces siguientes https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTA4NDM=/pdf y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjAwNjE=/pdf

8) **Opinión ciudadana,** se han recibido opiniones ciudadanas, las que se encuentra en el enlace siguiente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2171

c. Proyecto de Ley 2302/2021-CR

1) Del **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación,** se ha recibido el Oficio N.º 002964-2022-MP-FN-SEGFIN, suscrito por su Secretaria General, de fecha 20 de junio de 2022; manifestando que el proyecto **no guarda relación con los objetivos institucionales y la competencia del Ministerio Público**.

2) Del **Poder Judicial,** se ha recibido el Oficio Nº 002872-2022-SG-CS-PJ, suscrito por el Secretario General de la Corte Suprema, de fecha 22 de julio de 2022; acompañado del Informe N° 000220-2022-GA-P-PJ del 21 de julio de 2022 que concluye señalando que, manifestando que **no emitirá opinión.**

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1063-2022-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, del 17 de agosto de 2022; acompañado del Informe N° 0657-2022-EF/42.02 del 16 de agosto de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que, **no resulta competente para emitir opinión**.

4) De **la Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 727-2022-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 27 de octubre de 2022; acompañado del Informe Jurídico Especializado 026-2022-DP/ADHPD del 18 de octubre de 2022 de la Adjuntía de Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad concluye emitiendo **opinión favorable**.

5) Del **Ministerio de Defensa**, se recibió el Oficio Nº 00671-2023-MINDEF/DM suscrito por el Secretario General, de fecha 28 de noviembre de 2023; acompañado del Informe Legal N° 01764-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 26 de octubre de 2023; que concluyó señalando que la iniciativa **es inviable**.

Otras opiniones

6) La Federación Nacional de Defensores de la Patria del Perú – FEDADEPP del 06.03.24, que se encuentra en el enlace https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTY4MjA2/pdf

d. Proyecto de Ley 2628/2021-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D002208-2022-PCM-SG suscrito por su Secretario General del 06 de setiembre de 2022; acompañado del Informe N° D001286-2022-PCM-OGAJ del 6 de setiembre de 2022 de la Oficina General de Asesoría

Jurídica, que concluye señalando que **por competencia no corresponde emitir opinión.**

2) Del **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** se ha recibido el Oficio Nº 2749-2022-JUS/SG, suscrito por su Secretario General de fecha 13 de octubre de 2022; acompañado del Informe Legal N° 280-2022-JUS/DGDNCR del 30 de setiembre de 2022; que concluye que la iniciativa **no es jurídicamente viable.**

3) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 703-2022-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e), del 17 de octubre de 2022, que manifiesta que la iniciativa **no guarda relación con sus líneas temáticas.**

4) Del **Ministerio de Defensa,** se ha recibido el Oficio Nº 01087-2022-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector, de fecha 24 de noviembre de 2022; acompañado del Informe Legal N° 01929-2022-MINDEF/SG-OGAJ del 22 de noviembre de 2022; que concluye considerando la iniciativa como **no viable.**

5) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 001071-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria de General, de fecha 13 de marzo de 2023; acompañado del Informe N° 000518-2023/IN/OGAJ del 6 de marzo de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que la iniciativa debe **ser reevaluado**.

6) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, se ha recibido el Oficio N° 794-2024-EF/10.01 del 23 de abril de 2024, suscrito por el ministro del sector; acompañado del Informe N° 0297-2024-EF/50.04 del 16 de abril de 2024 de la Dirección General de Presupuesto Público; que concluye **formulando observación** a la iniciativa legislativa

e. Proyecto de Ley 2958/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D002344-2022-PCM-SG suscrito por el Secretario General de fecha 16 de setiembre de 2022; acompañado del Informe N° D001344-2022-PCM-OGAJ del 16 de setiembre de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye manifestando que **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) **De la Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 747-2022-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 4 de noviembre de 2022; que manifiesta que **no guarda relación directa con las líneas temáticas de acción** que promueve dicha entidad.

3) **Del Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 00942-2023/IN/SG suscrito por el Ministro del Sector, de fecha 01 de diciembre de 2022; acompañado del Informe N° 002253-2022/IN/OGAJ del 23 de noviembre de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; concluyendo que **carece de competencia para emitir opinión**.

4) **Del Ministerio de Defensa,** se ha recibido el Oficio Nº 00137-2023-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 03 de febrero de 2023;acompañado del Informe Legal N° 00134-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 24 de enero de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta que el proyecto de ley **no es viable**.

5) **Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** se ha recibido el Oficio Nº 669-2023-JUS/SG, suscrito por su Secretario General de fecha 27 de febrero de 2023; acompañado del Informe Legal N° 026-2023-JUS/DGDNCR del 14 de febrero de 2023 de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, concluye considerando que la iniciativa **no resulta viable jurídicamente**.

6) **Del Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 348-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, del 10 de marzo de 2023; acompañado del Informe N° 053-2023-EF/50.04 del 27 de febrero de 2023 de la Dirección General de Presupuesto Público, que concluye **formulando observaciones.**

Otras opiniones

7) **Opinión ciudadana**, se han emitido diversas opiniones de la ciudadanía en relación a este Proyecto de Ley las que se encuentran en el enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2958

8) La Asociación de Veteranos EX BCS324 TC Natalicio Sánchez presentó documentos de fechas 02.03.23, 14.02.23, 06.01.24 y 19.02.24se encuentra en el enlace siguiente https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODE3MDE=/pdf, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NzkwMjc=/pdf, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTYwMjY3/pdf y https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTY0NTA4/pdf

f. Proyecto de Ley 3391/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D002967-2022-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 10 de noviembre de 2022; acompañado del Informe N° D001638-2022-PCM-OGAJ del 9 de noviembre de 2022; que concluye señalando que por **competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 1082-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 01 de junio de 2023; acompañado del Informe N° 0478-2023-EF/42.02 del 31 de mayo de 2023, que concluye considerando **que no resulta competente para emitir opinión**.

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° 002600-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 26 de junio de 2023; acompañado del Informe N° 001354-2023-IN/OGAJ del 23 de junio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que la iniciativa **no es competente para emitir opinión**.

4) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio N° 00416-2023-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 26 de octubre de 2023; acompañado del Informe Legal N° 000934-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 19 de junio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica que concluye considerando que **la propuesta es inviable.**

5) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio N° 0558-2023-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 11 de octubre de 2022; precisa que, no opina **por no ser de su competencia**.

Otras opiniones

6) **Opinión ciudadana**, se han emitido diversas opiniones de la ciudadanía en relación a este Proyecto de Ley las que se encuentran en el enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3391

g. Proyecto de Ley 3500/2022-CR

1) De la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha recibido el Oficio N° D003271-2022-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 7 de diciembre del 2022; acompañado del Informe N° D001808-2022-PCM-OGAJ del 6 de diciembre de 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que **por competencia no corresponde emitir opinión.**

2) **Del Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° 002825-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 10 de julio de

2023; acompañado del Informe N° 001474-2023/IN/OGAJ del 6 de julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando que la iniciativa **no es viable**.

3) **Del Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1743-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 24 de agosto de 2023; acompañado del Informe N° 452-2023-EF/50.04 del 18 de agosto de 2023 de la Dirección General de Presupuesto Público, que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa.

4) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio Nº 00554-2023-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 14 de noviembre de 2023; acompañado del Informe Legal N° 01762-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 26 de octubre de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando la iniciativa como **inviable**.

5) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 0559-2023-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 11 de octubre de 2022, excusándose de emitir opinión por no guardar relación con las líneas temáticas de dicha institución.

Otras opiniones

6) **Opiniones ciudadanas sobre la propuesta legislativa**, la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "Sgto2 EP Robert Delgado Viera", ha remitido la carta N° 031/ASONADED/01.01 del 31 de mayo de 2023, suscrito por el presidente de dicha asociación, asimismo, hay opinión ciudadanas en el enlace siguiente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3500

h. Proyecto de Ley 3645/2022-CR

1) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 000979-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 08 de marzo de 2023;acompañado del Informe N° 000232-2023/IN/OGAJ del 3 de febrero de 2023, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluyendo que considerando que **carece de competencia para emitir opinión**.

2) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 0135-2023-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 09 de marzo de 2023; considera que la iniciativa **no guarda relación con las líneas temáticas de la entidad**.

3) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D000728-2023-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 20

de marzo de 2023; acompañado del Informe N° D000108-2023-PCM-OGAJ del 20 de enero de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluyendo que la iniciativa **es inviable.**

4) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1151-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 12 de junio de 2023; acompañado del Informe N° 257-2023-EF/50.04 del 2 de junio de 2023, de la Dirección General de Presupuesto Público; que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa legislativa.

5) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio Nº 00417-2023-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 26 de octubre de 2023; acompañado del Informe Legal N° 00935-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 19 de junio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando la iniciativa como **inviable**.

i. Proyecto de Ley 4549/2022-CR

1) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 0244-2023-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 17 de mayo de 2023; donde **se excusa de emitir opinión,** por no versar sobre protección de derechos fundamentales.

2) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001445-2023-PCM-SG suscrito por el Secretario General de fecha 25 de mayo de 2023; acompañado del Informe N° D000689-2023-PCM-OGAJ del 22 de mayo de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando que, **por competencia no le corresponde emitir opinión.**

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 002697-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 03 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 001382-2023/IN/OGAJ del 27 de junio de 2023 de la Oficina general de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no es competente** para emitir opinión.

4) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1850-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 08 de setiembre de 2023; acompañado del Informe N° 0359-2023-EF/53.05 el 1 de setiembre de 2023 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, quien concluyó formulando **observaciones** a la iniciativa legislativa.

5) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio Nº 00141-2024-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 7 de febrero de

2024; acompañado del Informe Legal N° 00034-2024-MINDEF/SG-OGAJ del 11 de enero de 2024 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando la iniciativa como **no viable**.

Otras opiniones

6) **Opiniones ciudadanas sobre propuesta legislativa**
se han emitido diversas opiniones de la ciudadanía en relación a este Proyecto de Ley las que se encuentran en el enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4549

j. Proyecto de Ley 4601/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001067-2023-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 20 de abril de 2023; acompañado del Informe N° D000523-2023-PCM-OGAJ del 14 de abril de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando **que por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 994-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 25 de mayo de 2023; acompañado del Informe N°209-2023-EF/50.04 del 15 de mayo de 2023 de la Dirección General de Presupuesto Público, que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa legislativa.

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 002253-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 02 de junio de 2023: acompañado del Informe N° 001129-2023/IN/OGAJ del 30 de mayo de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye señalando que **no es competente para emitir opinión**.

4) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio Nº 00046-2024-MINDEF/DM suscrito por el Ministro del Sector de fecha 20 de enero de 2024; acompañado del Informe Legal N° 02104-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 18 de diciembre de 2023, que concluye considerando que la iniciativa **no resulta viable**.

k. Proyecto de Ley 4602/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001063-2023-PCM-SG suscrito por el Secretario General de fecha 20 de abril de 2023; acompañado del Informe N° D000510-2023-PCM-OGAJ del 13 de abril de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que

concluye considerando que **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 752-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 27 de abril de 2023 acompañado del Informe N° 0136-2023-EF/53.05 del 25 de abril de 2023 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos que concluyó señalando que, la iniciativa se encuentra **fuera de sus competencias**.

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° D000087-2023-IN-SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 07 de agosto de 2023; acompañado del Informe N° 001387-2023/IN/OGAJ del 27 de junio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no es competente** para emitir opinión.

l. Proyecto de Ley 4738/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D001250-2023-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 09 de mayo de 2023; acompañado del Informe N° D000597-2023-PCM-OGAJ del 4 de mayo de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye señalando que, **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) De la **Comandancia General del Ejército del Perú**, se ha recibido el Oficio N° 3280/S-CGE/N-01.1/02.00, suscrito por el Secretario de la Comandancia General del Ejército de fecha 31 de mayo de 2023; acompañado del Oficio N° 1095 DIPERE/A-7,C/02.00 del 5 de mayo de 2023 de la Dirección de Personal del Ejército que concluye considerando la iniciativa como **viable en parte**.

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° 002747-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 05 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 001437-2023/IN/OGAJ del 4 de julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando **que no es competente para emitir opinión**.

Otras opiniones

4) **Opinión ciudadana**, se ha recibido una opinión ciudadana la misma que se encuentra en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4738

m. Proyecto de Ley 4979/2022-CR

1) **De la Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001517-2023-PCM-SG suscrito por el Secretario General de fecha 30 de mayo de 2023; acompañado del Informe N° D000739-2023-PCM-OGAJ del 29 de mayo de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye señalando que **por competencia no le corresponde emitir opinión.**

2) **Del Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 002744-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 05 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 001436-2023/IN/OGAJ del 4 de julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando **que no es competente para emitir opinión**.

3) **Del Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1371-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 05 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 0258-2023-EF/53.05 del 26 de junio de 2023 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que concluye formulando **observaciones**.

4) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 0022-2024-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 8 de enero de 2024, **se excusa de emitir opinión** sobre el fondo del asunto.

Otras opiniones

5) **Opiniones ciudadanas sobre la propuesta legislativa**, la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "Sgto2 EP Robert Delgado Viera", ha remitido la carta N° 031/ASONADED/01.01 del 31 de mayo de 2023, suscrito por el presidente de dicha asociación, asimismo, hay opinión ciudadanas en el enlace siguiente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/4979

n. Proyecto de Ley 5032/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D001807-2023-PCM-SG suscrito por el Secretario General de fecha 23 de junio de 2023; acompañado del Informe N° D000859-2023-PCM-OGAJ del 14 de junio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye señalando que **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 002668-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 28 de junio de 2023; acompañado del Informe N° 001386-2023/IN/OGAJ del 27 de junio

de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no es competente para emitir opinión.**

Mediante el Oficio N° 000505-2024-IN-SG del 16 de enero de 2024 suscrito por su secretario general; acompañado de la Hoja de Estudio y Opinión N° 527-2023-EMG-PNP/EQUAGA del 26 de diciembre de 2023 del Equipo de Asesoramiento en Gestión Administrativa de la Policía Nacional del Perú; que concluye considerando la iniciativa como viable.

3) Del **Ministerio de Educación,** se ha recibido el Oficio N° 02867-2023/MINEDU/SG suscrito por su Secretario General, de fecha 11 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 00866-2023-MINEDU/SG-OGAJ sin fecha, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no le corresponde emitir opinión.**

4) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 1666-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 14 de agosto de 2023; acompañado del Informe N° 431-2023-EF/50.04 del 10 de agosto de 2023 de la Dirección general de Presupuesto Público que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa.

o. Proyecto de Ley 5167/2022-CR

1) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio N° 0313-2023-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 13 de junio de 2024, donde señala que, la iniciativa no versa sobre la protección de un derecho fundamental, por lo que **se excusa de emitir opinión**.

2) Del **Ministerio de Educación,** se ha recibido el Oficio N ° 03063-2023-MINEDU/SG suscrito por su Secretario General, de fecha 25 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 00947-2023-MINEDU/SG-OGAJ del 25 de julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica que concluye señalando que, **no le corresponde emitir opinión**.

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 1633-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 9 de agosto de 2023; acompañado del Informe N°0674-2023-EF/42.02 del 9 de agosto de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye señalando que **no es competente para emitir opinión**.

4) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° D000847-2023-IN-SG suscrito por su Secretaris General, de fecha 5 de setiembre de 2023; acompañado del Informe N° D000045-2023-IN-OGAJ del 4 de agosto de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que la iniciativa **es viable**.

5) Del **Ministerio de Defensa**, que remite el Oficio Nº 04708-2023-MINDEF/SG suscrito por su Secretaria General de fecha 9 de setiembre de 2023; acompañado del Informe Legal N° 01368-2023-MINDEF/SG-OGAJ del 22 de agosto de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica que concluye señalando que la iniciativa **no se encuentra dentro de su ámbito de competencia**.

Otras opiniones

6) **Opinión ciudadana**, se han recibido 267 opiniones ciudadanas las mismas que se encuentra en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5167

p. Proyecto de Ley 5192/2022-CR

1) Del **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación**, se ha recibido el Oficio Nº 002750-2023-MP-FN-SEGFIN, suscrito por su Secretaria General, de fecha 08 de junio de 2023; donde señala que la iniciativa no tiene relación directa con la competencia del Ministerio Público.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 1175-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 13 de junio de 2023; acompañado del Informe N° 284-2023-EF/50.04 del 8 de junio de 2023 de la Dirección General de Presupuesto Público, que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa.

3) **De la Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio Nº D002559-2023-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 11 de setiembre de 2023; acompañado del Informe N° D001240-2023-PCM-OGAJ del 6 de setiembre de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no es viable**.

4) Del **Ministerio de Relaciones Exteriores**, se recibió el OF. RE. (MIN) N° 3.0.A/459, suscrito por el ministro del sector de fecha 10 de noviembre de 2023; acompañado del Informe de opinión técnico-legal del sector Relaciones Exteriores – Proyecto de Ley 5192/2022-CR del 24 de octubre de 2023, de la Oficina General de Asuntos Legales y de la Dirección de Seguridad y Defensa; que concluye considerando la iniciativa como **viable**.

5) Del **Ministerio de Educación,** se ha recibido el Oficio Nº 02953-2023-MINEDU/SG suscrito por su Secretario General, de fecha 20 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 00897-2023-MINEDU-OGAJ del 17 de

julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando que **no le corresponde pronunciarse**.

q. Proyecto de Ley 5224/2022-CR

1) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio N° 002959-2023/IN/SG suscrito por su Secretaria General, de fecha 18 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 001542-2023/IN/OGAJ del 14 de julio de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **no es de competencia emitir opinión**.

2) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D001968-2023-PCM-SG suscrito por su Secretario General de fecha 07 de julio de 2023; acompañado del Informe N° D000967-2023-PCM-OGAJ del 4 de julio de 2023 de la Oficina general de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que **por competencia no le corresponde emitir opinión.**

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 1502-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 20 de julio de 2023; acompañado del Informe N° 0296-2023-EF/53.05 del 17 de julio de 2023 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que concluye considerando que considerando que **la iniciativa está fuera de las competencias, por lo que no puede emitir opinión**.

r. Proyecto de Ley 5721/2023-CR

1) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 2427-2023-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 13 de noviembre de 2023; acompañado del Informe N° 0444-2023-EF/42.03 del 10 de noviembre de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que la iniciativa **no contiene materia de competencia para emitir opinión**.

2) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D003278-2023-PCM-SG, suscrito por su Secretario General de fecha 12 de diciembre de 2023; acompañado del Informe N° D001771-2023-PCM-OGAJ del 11 de diciembre de 2023 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando la iniciativa como **no viable**.

3) Del **Ministerio de Defensa**, se ha recibido el Oficio N° 00477-2024-MINDEF/DM del 16 de abril del 2024, suscrito por el ministro del sector; acompañado del Informe Legal N° 00487-2024-MINDEF/SG-OGAJ del 3 de abril de 2024 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que la iniciativa **no resulta viable**.

s. Proyecto de Ley 5884/2023-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, se ha recibido el Oficio Nº D002770-2023-PCM-SG, suscrito por su Secretario General de fecha 03 de octubre de 2023; acompañado del Informe N° D001354-2023-PCM-OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del 2 de octubre de 2023; que concluye considerando que **por competencia no corresponde emitir opinión**.

   El Oficio Nº D002800-2023-PCM-SG, suscrito por su Secretario General de fecha 09 de octubre de 2023, con el que remite nuevamente el Informe N° D001354-2023-PCMOGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica,. que manifiesta que **por competencia no corresponde emitir opinión**.

2) De la **Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 0020-2024-DP/PAD, suscrito por la Primera Adjunta (e) de fecha 8 de enero de 2024; que señala que la iniciativa no versa sobre la protección de un derecho fundamental, por lo que **se excusa de emitir opinión**.

3) Del **Ministerio del Interior,** se ha recibido el Oficio Nº 000045-2024-IN-DM suscrito por su Secretario General, de fecha 5 de febrero de 2024; acompañado del Informe N° 000119-2024-IN-OGAJ del 26 de enero de 2024 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye considerando la iniciativa **viable**.

Otras opiniones

4) **Opinión ciudadana**, se han recibido 267 opiniones ciudadanas las mismas que se encuentra en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5884

t. Proyecto de Ley 6522/2023-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, se ha recibido el Oficio Nº D000131-2024-PCM-SG, suscrito por su Secretario General de fecha 18 de enero de 2024; acompañado del Informe N° D000086-2024-PCM-OGAJ, del 18 de enero de 2024 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que **por competencia no le corresponde emitir opinión**.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio Nº 423-2024-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 22 de febrero de 2024; acompañado del Informe N° 0038-2024-EF/53.05 del 29 de

enero de 2024 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa.

Otras opiniones

3) Opinión ciudadana, se han recibido 267 opiniones ciudadanas las mismas que se encuentra en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6522

u. Proyecto de Ley 6615/2023-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, se ha recibido el Oficio N° D000042-2024-PCM-SG, suscrito por su Secretario General de fecha 9 de enero de 2024; acompañado del Informe N° D000025-2024-PCM-OGAJ del 8 de enero de 2024 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; que concluye señalando que **por competencia no le corresponde emitir opinión.**

2) Del **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación**, se ha recibido el Oficio N° 000461-2024-MP-FN-SEGFIN, suscrito por su Secretario General, del 03 de febrero de 2024; que señala **la iniciativa no tiene relación directa** con la competencia del Ministerio Público.

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** se ha recibido el Oficio N° 331-2024-EF/10.01, suscrito por el Ministro del sector, de fecha 09 de febrero de 2024; acompañado del Informe N° 0126-2024-EF/50.04 del 2 de febrero de 2024 de la Dirección General de Presupuesto Público, que concluye formulando **observaciones** a la iniciativa.

4) Del **Poder Judicial**, se ha recibido el Oficio N° 001785-2024-SG-CS-PJ del 26 de abril de 2024, suscrito por su Secretaria General; acompañado del Informe N° 000074-2024-GA-P-PJ del 18 de marzo de 2024 de la Jefatura de Gabinete de Asesores, que concluye señalando que la iniciativa no está comprendida dentro de los ocho lineamiento, por lo que **no es de su competencia.**

v. Proyecto de Ley 6773/2023-CR

1) Del **Ministerio Publico**, se ha recibido el Oficio N° 001398-2024-MP-FN-SEGFIN del 22 de marzo 2024, suscrito por encargado de su Secretario General; acompañado del Informe 00063-024-MP-FN-CFSN-DHI del 23 de febrero de 2024 de Coordinación Fiscal Superior Nacional y Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en derechos Humanos e Interculturalidad; que concluye señalando que resulta **inviable jurídicamente**.

2) Del **Poder Judicial**, se ha recibido el Oficio N° 001911-2024-SG-CS-PJ del 8 de mayo del 2024 suscrito su Secretaria General; acompaña del Informe N° 000077-2024-GA-P-PJ del 19 de marzo de 2024 de la Jefatura de Gabinete de Asesores; que concluye señalando que **no le corresponde emitir opinión**.

w. Proyecto de Ley 6955/2023-CR

1) De la **Fuerza Aérea del Perú**, se ha recibido el Oficio Extra FAP N° 000031-2024-COFAP/FAP del 01 de marzo de 2024, suscrito por su Comandante General; que concluye considerando que la iniciativa **no resulta viable.**

2) Del **Ministerio del Interior**, se ha recibido el Oficio N° 004108-2024-IN-SG del 22 de abril del 2024 suscrito su Secretario General; acompañado del Informe N° 000763-2024-IN-OGAJ del 22 de abril de 2024 de la Oficina general de Asesoría Jurídica, que concluye señalando que **no es competente** para emitir opinión.

x. Proyecto de Ley 7112/2023-CR

Hasta el momento de formular el presente dictamen solo se ha recibido una opinión ciudadana, la misma que se encuentra en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7112

III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

1. PROYECTO DE LEY 1783/2021-CR

FUNDAMENTACIÓN

La Captura del DDTT SL Oscar Alberto RAMIREZ DURAND © FELICIANO y sus tres acompañantes El 14 de Julio de 1999, 05:30 am Cochas Chico (Huancayo) se llevó a cabo la Captura del delincuente Terrorista Oscar Alberto RAMIREZ DURAND CAMARADA FELICIANO (Alto Valor)
En dicho operativo cayo como mansa paloma el Camarada feliciano y sus tres acompañantes (Mujeres)

Más allá del éxito Militar del Operativo "Plan Cerco 99", tenemos que hasta la fecha no se les ha entregado un reconcomiendo o beneficio concreto por parte del Estado, sino por el contrario, los Integrantes de la Patrulla "Miguel" han sido olvidados y siendo expuestos a tratamientos injustos cuando por su valioso accionar y poniendo en riesgo sus propias vidas, debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad en la Operación del "Plan Cerco 99".

De otros reconocimientos otorgados luego del Operativo "Plan Cerco 99" Este año conmemoramos 21° Aniversario de¡ Operativo "Plan Cerco 99", por lo que resulta oportuno que el Parlamento Nacional declare como "Héroe de la Democracia" a cada uno de los Integrantes de la Patrulla "Miguel", captores Principales del Camarada Feliciano, tanto por su actitud Heroica de anteponer su vida, como por la trascendencia de la operación Militar que constituyo un gran triunfo sobre el Terrorismo y permitió la pacificación en la Selva y Sierra central del Perú y consolidación de la democracia en nuestro País.

Sobre el particular, debemos recordar que mediante la Ley 26778, se reconoció la calidad de "Héroe de la Patria" al coronel EP Juan Alfonso VALER SANDOVAL y al Capitán EP Raúl JIMENEZ CHAVEZ, quienes fallecieron en el operativo militar del día 22 de abril de 1997. Asimismo, se autorizó al Poder Ejecutivo otorgar por única vez a los deudos de ambos militares una compensación pecuniaria extraordinaria, independientemente de los beneficios que les correspondan a los deudos de los Oficiales del Ejército.

Adicionalmente y en otros casos similares, el Estado también ha procedido a reconocer la calidad de "Héroe de la Democracia" a otros ciudadanos, como en el caso de los ocho periodistas que en la búsqueda de la verdad fallecieron el 26 de enero de 1983, en Uchuraccay Ayacucho

En esta misma línea, fue publicada la Ley N° 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente que en reconocimiento al operativo "Chavín de Huántar" ha establecido el 22 de abril. al igual que el 12 de Setiembre como día para realizar actividades conmemorativas en favor de los defensores de la Democracia rindiéndoles homenaje, guardando un minuto de silencio y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra los Delincuentes Terroristas (MRTA. SL) con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el estado de derecho.

Por otro lado, cabe resaltar que en nuestra legislación encontramos antecedentes de beneficios otorgados por el Estado Peruano tanto a combatientes y al Personal Discapacitado de Nuestras Fuerzas Armadas, así como a sus familiares y/o deudos así tenemos:

- Ley N° 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorga Beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que participaron en el Conflicto con el Ecuador. En ella otorga una indemnización excepcional, bonificación mensual, acceso a una adecuada Educación, adjudicación de viviendas y facilidades para proyectos de micro y pequeña empresa a los combatientes, así como beneficios de salud, Educación y vivienda para sus deudos y/o familiares.

- Ley N° 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en los incidentes Armados del Subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, se otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal Civil, Oficiales Personal Auxiliar y Tropa, en situación de actividad o en retiro, licenciados y jubilados los beneficios establecidos en los artículos 6y 8 de la Ley N° 24053 y en el artículo 4 de la Ley 26511, referentes a atención médica gratuita y medicinas, adjudicación de viviendas y facilidades para proyectos de micro y pequeñas empresa a favor de combatientes, u otros.

- Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Otorga atención medica por cuenta del Estado, ascenso al grado inmediato superior para el personal reclasificado gratuidad de la Educación superior en universidades públicas para el personal con discapacidad. Así como pensión de salud y educación para sus deudos y/o familiares. El personal que pasa al retiro recibe su pensión en el grado inmediato superior.

Entonces y en base a estos antecedentes, es oportuno ahora que el estado reconozca y conmemore debidamente a cada uno de los integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano.

Propuestas para el reconocimiento y homenaje a los Soldados Integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano.

Siguiendo los antecedentes de las leyes 26778, 26779, 28058, 29031 u otras, se propone declarar a cada uno de los integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano, como "Héroes de la Democracia", por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en el proceso de pacificación y defensa de nuestra Democracia. Este reconocimiento del Estado no tiene costo alguno para el Tesoro Público, por el contrario, su realización mediante una Ley implicará el reconocimiento de todo un país hacia estos valerosos soldados.

Asimismo, se propone que conforme a lo señalado en el artículo 3 de la Ley N°29031, se les otorgue a los Integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano, a que se refiere la presente Ley, la "Medalla del Defensor de la democracia", siendo el Ministerio de Defensa el sector encargado de reconocer su condición.

Señalándose, adicionalmente que la aplicación de la presente Ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

De esta manera, consideramos que estaremos cumpliendo con el deber moral que tenemos pendiente con los Integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano, a quienes les debemos las gracias por luchar contra el Terrorismo, consolidar la democracia y Construir la Paz en nuestro País.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE DECLARA "HEROES DE LA DEMOCRACIA" A LOS INTEGRANTES DE LA PATRULLA "MIGUEL" Y MODIFICA LA LEY N° 29031

ARTÍCULO 1°. - OBJETIVO DE LA LEY

La Presente ley tiene por objeto reconocer por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en el proceso de Pacificación y defensa de nuestra democracia, a los integrantes de la denominada Patrulla "Miguel" que participaron en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la Captura del delincuente Terrorista OSCAR ALBERTO RAMIREZ DURAND.

ARTÍCULO 2° DECLARATORIA

Reconózcase y declárese la calidad de "Héroe de la Democracia" a cada uno de los Integrantes de la Patrulla "Miguel " que participaron en el Plan de operaciones Cerco 99.

ARTÍCULO 3° OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA

Otorgase la Medalla al Defensor de la Democracia establecida en el artículo 4 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración, a los comandos que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar.

ARTÍCULO 4° BENEFICIOS

Autorizase al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los Defensores de la Democracia descritos en el artículo 2 de la presente ley, así como a sus hijos y/o cónyuge o concubina.

ARTÍCULO 5° PRESUPUESTO

La aplicación de la Presente Ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA. - *Los beneficios establecidos en la Presente Ley, no se contraponen con otras normas vigentes que otorguen derechos y/o beneficios a los integrantes de la Patrulla 'Miguel", siendo complementarias y aplicables en lo que más les favorezca.*

SEGUNDA. - *El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley en un Plazo de (90) días contados a partir de su vigencia.*

2. PROYECTO DE LEY 2171/2021-CR

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

El terrorismo es conceptualizado como la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.

Que, desde aproximadamente finales del año de 1980, hasta la fecha las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú vienen participando en diversas operaciones militares, con la finalidad de contrarrestar las actividades terroristas.

En dicho periodo, como consecuencia de sus operaciones contra el terrorismo las FFAA, han obtenido enormes logros alcanzando la pacificación nacional.

Actualmente los últimos remanentes se encuentran focalizados en la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), lugares geográficos de muy agreste vegetación.

Como consecuencia de los grandes logros en la obtención de la pacificación nacional el gobierno, promulgo las Leyes y normativas siguientes:

- Ley N° 29031 (02 junio 2007) - Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente.
- Decreto Supremo N° 026-2011-PCM (23 marzo 2011), se aprueba el reglamento de la ley N° 29031. Asimismo, se dispone la Elaboración del Estatuto del Consejo de la Condecoración.
- Ley N° 29960, (12 diciembre 2012), se modifica la Ley 29031, instituyéndose el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año, como Días de los Defensores de la Democracia.
- Resolución Ministerial N° 076-2014-PCM (15 abril 2014), Aprueban Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia".
- Resolución Suprema N° 159-2014-PCM (13 mayo 2014), se otorgó la primera condecoración Medalla al Defensor de la Democracia al personal de la Policía nacional del Perú - PNP fallecidos en acto de servicio o en acción de armas durante la ejecución del Plan de Operaciones "Libertad".
- Ley N° 30554 (22 abril 2017) - Ley que declara héroes de la democracia a los comandos Chavín De Huántar.
- Ley N° 30655 (06 setiembre 2017) - ley que declara héroes de la democracia a los miembros del grupo especial de inteligencia GEIN - DIRCOTE - PNP.
- Ley N° 30758, (22 abril 2018) - Ley que reconoce como Defensores Calificados de la Democracia a los mineros que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar.
- Ley N°31291(20 julio 2021)- Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29031, Ley que Instituye los días de los Defensores de la Democracia y Crea Condecoración.

Las normas que otorgan reconocimiento al Personal Militar y Policial por Acciones Meritorias se tienen las siguientes

Nº	Título	Norma Legal
01		Ley N° 26841 (Reglamento DS N° 049-99-DE/SG) Reconoce el título Honorífico de Héroe Nacional, a las personas que se hagan

	Héroe Nacional	merecedoras a él por calificada y comprobada acción heroica. Se otorga a la persona que ofrenda su vida en forma voluntaria y consciente, lleva a cabo una acción extraordinaria de gran valor, cuya transcendencia e importancia haya sido de magnitud nacional.
02	**Vencedores de la Campaña Militar de 1941**	Ley N° 24053 (Reglamento DS N° 06-85-COFA) Campaña Militar de Reconoce como Vencedor de la Campaña Militar de 1941 los conflictos armados de 1933 y 1941
03	**Vencedores de la Patria**	Ley N° 28796 (Reglamento DS N° 005-08-DE) Patria Reconoce como Defensor de la Patria al personal que participó en el incidente fronterizo de 1978 y en el conflicto armado de 1981.
04	**Vencedores de la Patria**	Ley N° 26511 (Reglamento DS N° 010-99-DE/SG) Patria Reconoce como Defensor de la Patria al personal que participó en el conflicto armado del Alto Cenepa en 1995.
05	**Vencedores de la Democracia**	Ley N° 29031 (Reglamento DS N° 026-2011-PCM) Democracia Declara Defensor de la Democracia a los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el Estado de derecho.
06	**Reconocimiento Meritorio**	Ley N° 29031 (Reglamento DS N° 026-2011-PCM) Democracia Declara Defensor de la Democracia a los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el Estado de derecho.

Con la presente ley, se busca complementar el reconocimiento para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en situación militar de actividad como en retiro que, han tenido una destacada participación en la lucha contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el Estado de derecho.

El Personal al que se hace mención en el párrafo precedente, está referido aquellos que han obtenido la Condecoración en su respectiva Institución o del CCFFAA por haber participado en operaciones contra el terrorismo y donde pusieron en riesgo su integridad física (vida), como enfrentamientos o capturas de mandos

Las Instituciones de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) cuentan con reglamentos donde establecen los requisitos

para poderse hacer acreedor a una condecoración por haber tenido una participación descollante donde se ha puesto en riesgo su integridad física (vida) en operaciones contra el terrorismo, que se detallan a continuación

1. **El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA)**, cuenta con el Reglamento Condecoración "Cruz de Guerra al Valor", mencionándose en su artículo 20lo siguiente:

   "La condecoración "Cruz de Guerra al Valor", es la recompensa que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas otorga al personal de oficiales, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, personal de tropa de las Fuerzas Armadas, así como al personal de la Policía Nacional del Perú, que haya participado en operaciones y acciones militares dispuestas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, demostrando valor, intrepidez y sacrificio superiores a los requeridos para el cumplimiento del deber en defensa de la soberanía nacional y preservación del orden interno; asimismo, es conferida a personas civiles nacionales, así como a militares y civiles extranjeros, que hayan demostrado valor mediante acciones directas o de apoyo a las operaciones militares, contribuyendo a lograr los objetivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas".

2. **El Instituto Ejército del Perú (EP)**, cuenta con el Reglamento del Ejército del Perú RE-672-5. Recompensas y Condecoraciones "Medalla de Combatiente Mariscal Andrés A. Cáceres" para realizar la entrega de la distinción de la Condecoración se menciona en su Sección IV CRITERIOS Y/O REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO párrafo 9 letra a. Del Otorgamiento: lo siguiente:

   "La Medalla del Combatiente Andrés A. Cáceres, se otorgará por acción distinguida en operaciones tanto en Guerra Convencional como en Guerra No Convencional, que demuestre valor, intrepidez y sacrificio superior a los requeridos para el cumplimiento del deber y que implique riesgo de vida. El hecho debe individualizar al autor sobre el resto del personal".

3. **El Instituto Marina de Guerra del Perú (MGP),** cuenta con el Reglamento de la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval - REOCCPMENA-11102 - mencionándose en su Capitulo IV Causales Sección 1 Causales para el otorgamiento 406.Para el Personal de la Marina de Guerra del Perú, letra a. lo siguiente:

   a. Con Distintivo Rojo

      (1) Por Muerte en Acción de Armas

Al haber ofrendado su vida en cumplimiento del deber en enfrentamiento de armas, demostrando excepcional valor y sacrificio

(2) Por Acción de Armas.
Al haber demostrado con riesgo de su vida valor e intrepidez superiores a los requeridos para el cumplimiento del deber.

En los casos mencionados el hecho debe individualizar al autor sobre el resto del personal y será otorgada a juicio del Consejo de la Condecoración, el que podrá inclusive exonerar de los impedimentos establecidos en el art 501°

4. El Instituto Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuenta con el Reglamento que regula la Condecoración "Medalla al Mérito MAG. FAP Armando Revoredo Iglesias", mencionándose en sus artículos 110, 121 y 131 lo siguiente:

ARTÍCULO 11°.- La Condecoración "Medalla al Mérito MAG. FAP Armando Revoredo Iglesias" se otorgará por las causales siguientes:

a. Acción Distinguida.
b. Esfuerzo Intelectual.
c. Servicios Meritorios Prestados; y
d. Esfuerzos Deportivos

ARTÍCULO 12º.- Se considera como Causal de "Acción Distinguida" a todo acto realizado por un militar en servicio, más allá de los límites del cumplimiento estricto del deber, ya sea en hecho de armas, en defensa de la integridad territorial, en defensa de las instituciones tutelares de la República o en el mantenimiento del orden social.

ARTÍCULO 13º.- Se considerará como meritorio para la Causal de "Acción Distinguida" A toda acción en la que se demuestre valor, intrepidez, sacrificio superior, además de que implique riesgo de vida. Este hecho lo debe individualizar sobre el resto del Personal. Asimismo, se considera también como meritorio para la Causal de "Acción Distinguida" la participación en actos colectivos como:

a. Operación Militar de alto valor y alto riesgo: Son aquellas que permiten lograr objetivos de gran importancia (Ejm. captura de mandos terroristas) donde se ha producido enfrentamiento armado, que ponga en riesgo la vida del personal. Esta condición debe ser sustentada con un reporte oficial por el componente aéreo a cargo de la operación.
b. Rescate exitoso de alto valor: Son aquellas "operaciones militares" que permiten lograr la recuperación de personal militar o civil capturado por el

enemigo (grupo hostil), y producto de la planificación y ejecución exitosa de la operación, se consigue el rescate del personal, prestigiando así a la Fuerza Aérea.

5. **La Policía Nacional del Perú (PNP),** cuenta con el Reglamento de la Condecoración de la "Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú", mencionándose en sus artículos 21, y 100 lo siguiente:

   Artículo 2°. - La Condecoración "ORDEN AL MERITO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU", es la máxima distinción que la Nación otorga al Personal de la Policía Nacional, por hechos heroicos y servicios extraordinarios meritorios en beneficio de la Institución y de la Sociedad.

   Artículo 10°. - Se considera ACCION DISTINGUIDA, todo hecho o conjunto de hechos heroicos que se ejecuten demostrando valor, arrojo, intrepidez y sacrificio superiores al cumplimiento del deber y que impliquen riesgos de vida; asimismo se consignará como tal, la invalidez o fallecimiento que provengan de acciones de combate con elementos subversivos o narcotraficantes.

Que, en línea a lo anteriormente expuesto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) así como el Ejército del Perú (EP), Marina de Guerra del Perú (MGP), Fuerza Aérea del Perú (FAP), y Policía Nacional del Perú (PNP),

Actualmente existe personal de las FFAA y PNP en situación de actividad y de retiro que ha sido Condecorado por su institución por haber participado de manera destacada en Operaciones de Guerra No Convencional y/o Operaciones Contra el Terrorismo en lo que debe ser reconocido solo en estos casos como Defensor de la Democracia.

La presente ley, entre otros aspectos está orientado al otorgamiento de un reconocimiento para aquel personal que tuvo una destacada participación en operaciones militares de **Guerra No Convencional** que significo poner en riesgo su propia vida en la lucha contra el terrorismo y que a la fecha no han sido considerados como Defensores de la Democracia. Este reconocimiento abarca al personal militar en situación de actividad, personal militar en situación de retiro, y personal fallecido, con lo cual se alcanzaría el reconocimiento al personal que aún no ha sido considerado con tal distinción.

El reconocimiento como Defensor de la Democracia no requiere de mayor evaluación toda vez que el CCFFA, EP, MGP, FAP y PNP, han otorgado de manera selectiva y mediante un proceso de evaluación condecoraciones por sus respectivas instituciones, aquellos integrantes que calificaron por haber puesto de manifiesto su coraje y valor en acciones y enfrentamientos con delincuentes terroristas que significo poner en riesgo su integridad física, por lo que

considerarlos como Defensores de la Democracia sería un justo reconocimiento a su labor realizada, lo que va a convertirse en un estímulo para muchos militares en situación de actividad por alcanzar tal distinción.

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE RECONOCE COMO DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA AL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, QUE HAN RECIBIDO CONDECORACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE SU RESPECTIVA INSTITUCIÓN, U OTRA INSTITUCIÓN ARMADA O POLICIAL DIFERENTE A LA QUE PERTENECE, POR HABER PUESTO EN RIESGO SU VIDA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

Artículo 1- Reconocimiento como Defensor de la Democracia
Reconózcase la calidad de Defensor de la Democracia al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación militar de actividad y de retiro, que han recibido la Condecoración respectiva del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional del Perú, DE su respectiva institución, u otra institución armada o policial diferente a la que pertenece, por haber puesto en riesgo su vida, en enfrentamientos o en capturas importantes en la lucha contra el terrorismo, durante el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia.
Artículo 2.- Modificase el artículo 1 de la Ley N° 29031, Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración.
Modificase el artículo 1 de la Ley N° 29031, Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración, en los términos siguientes:

"Artículo 1. Objeto de Ley
Institúyase el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos Integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, a los Integrantes de los Comités de Autodefensa y Ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a las Nación.
Así mismo, constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar.
Adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.
Además tienen calidad de Defensor de la Democracia, el personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación militar de actividad y de retiro, que han recibido la Condecoración respectiva por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú,

Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional del Perú, por haber puesto en riesgo su vida, en enfrentamientos o en capturas importantes en la lucha contra el terrorismo, durante el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia."

Artículo 3.- Otórguese la Medalla al Defensor de la Democracia

Otórguese la Medalla al Defensor de la Democracia, establecida en el artículo 40 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente, al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que se ha hecho acreedor o ha recibido condecoración ya sea por el CCFFAA, su institución u otra institución armada o policial diferente a la que pertenece el beneficiario, por haber puesto en riesgo su vida, en enfrentamientos o realizando capturas importantes de mandos en la lucha contra el terrorismo, durante el proceso de pacificación y en defensa de nuestra democracia, por la cual se hicieron merecedores a cualquiera de las condecoraciones siguientes:

- *Condecoración Cruz de Guerra al Valor, otorgada por el CCFFAA. (En cualquiera de sus diferentes grados de la Condecoración).*
- *Condecoración Medalla Andrés A. Cáceres, otorgada por el Ejército del Perú. (En cualquiera de los diferentes grados de la Medalla en la Condecoración).*
- *Condecoración Cruz Peruana al Mérito Naval - Distintivo Rojo, otorgada por la Marina de Guerra del Perú. (En cualquiera de sus diferentes grados de la condecoración).*
- *Condecoración Medalla al Mérito MAG FAP Armando Revoredo Iglesias-Acción Distinguida, otorgada por la Fuerza Aérea del Perú. (En cualquiera de sus diferentes grados de la Condecoración).*
- *Condecoración Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú-Acción Distinguida, otorgada por la Policía Nacional del Perú. (En cualquiera de sus diferentes grados de la Condecoración).*

Artículo 4.- Ceremonia Protocolar de Reconocimiento

Encárguese al Ministerio de Defensa la realización de una Ceremonia Protocolar de Reconocimiento, con presencia física o virtual del personal militar en situación militar de actividad, como en Retiro, que obtuvo pronunciamiento favorable en el marco de la presente ley.

En dicha ceremonia protocolar se entregará la condecoración, diploma y carnet correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

PRIMERA. Implementación

La aplicación de la presente ley es con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

SEGUNDA. Aplicación

Los efectos de la presente Ley no son aplicables a las personas que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos.

TERCERA. - Reglamento

El Poder Ejecutivo aprueba las normas reglamentarias de la presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios siguientes a su publicación.

3. PROYECTO DE LEY 2302/2021-CR:

La Ley Nº 26511, Ley que Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron como combatientes en el conflicto con el Ecuador en el año 1995, como combatientes en la zona del Alto Cenepa Ley en el que se establecen una

serie de beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles, calificados como Defensores de la Patria, así como a aquéllos que a partir del 1 de marzo de 1995, hayan fallecido o se encuentren con invalidez temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa.

El artículo 2 de la precitada ley otorga al personal civil, militar y policial que haya participado como Combatiente en el conflicto con el Ecuador en la zona del Alto Cenepa de 1995 0 a sus deudos, según corresponda, los siguientes beneficios:

a) Una indemnización excepcional no menor de una (01) UIT, en favor del personal que se encuentre con invalidez temporal o permanente o a los deudos según sea el caso.

b) Una bonificación mensual extraordinaria, no menor de tres remuneraciones mínimas (RM), en favor del personal que se encuentre con invalidez temporal o permanente o en favor de los deudos de los fallecidos. Esta bonificación será otorgada sin perjuicio de cualquier otra remuneración, pensión o bonificación que perciban los beneficiarios de esta Ley.

La Ley Nº 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, en el que se establece una serie de beneficios al personal civil, militar y policial.

El artículo 3 de la precitada Ley otorga al personal civil, militar y policial que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, según corresponda, tiene derecho a los siguientes beneficios:

a) Los beneficios establecidos por los artículos 6 y 8 de la Ley Nº 24053.
b) Los beneficios establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 26511.

La Ley Nº 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, precisando que con la mencionada Ley se concede reconocimiento al mérito al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en actividad o en retiro, oficiales, personal auxiliar y tropa, licenciados y jubilados, así como al personal civil que participaron en los conflictos con el Ecuador en los años antes señalados.

Que, mediante la Ley Nº 30874, Ley que establece un nuevo plazo de cinco (5) años para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Policía

Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995 reconocidos en las leyes pertinentes, a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar el efectivo reconocimiento y otorgamiento de beneficios para ex combatientes y el personal militar, policial y civil, de los conflictos con el Ecuador de los mencionados años.

El artículo 2 de la mencionada Ley establece que se aplica para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las siguientes leyes:

a) Ley 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador.
b) Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981.
c) Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Conforme se desprende de la Ley Nº 30874, en el que se establece un nuevo plazo de cinco (5) años para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expida las resoluciones de reconocimiento para el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, reconocidos en las leyes Nº 26511, 28796 y 29562, a la fecha en el procedimiento de expedición de resoluciones de reconocimiento hay una demora excesiva, debiendo expedir las resoluciones correspondientes en un plazo razonable, teniendo en cuenta que en el caso de la Ley N° 26511, vigente desde el año 1995, a la fecha han transcurrido 27 años, sin que cientos de ex combatientes hasta la fecha hayan sido reconocidos mediante las resoluciones correspondientes y así gozar de todos los beneficios establecidos en las leyes antes indicadas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los ex combatientes que en la fecha del conflicto eran jóvenes que prestaban servicio militar, y fueron jóvenes de escasos recursos económicos y en su mayoría vivía en pobreza o extrema pobreza, por lo que es necesario y urgente el reconocimiento como defensores de la patria por parte del Estado y consecuentemente se ayudará a salir de las condiciones paupérrimas en que viven, máxime si se tiene en cuenta que debido a la pandemia mundial del Covid 19 que inició en marzo de 2020 y continua hasta la actualidad, la población peruana en general se ha empobrecido, debido al aislamiento y la falta de trabajo y en muchos casos han sido despedidos de su trabajo.

Si sumamos a la crisis de la pandemia del Covid 19, el conflicto entre los países de Rusia y Ucrania, el cual ha empeorado la crisis económica mundial, no siendo ajeno de la crisis nuestro país, el cual ha generado que el combustible se encuentre elevado, incidiendo el mismo en el encarecimiento de los precios de los productos de consumo básico de la población, el cual ha generado que la inflación haya crecido, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial y si sumamos a los mencionados problemas el encarecimiento de la urea, que sirve para la agricultura, de acuerdo a los expertos han señalado que la producción agrícola siguiente se va reducir considerablemente, consecuentemente habrá escasez de productos, el cual generará la elevación de los precios de los productos agrícolas.

Por lo que es urgente atender sin dilaciones en los tramites de reconocimiento de nuestros ex combatientes defensores de la patria, debiendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitir las resoluciones correspondientes en un plazo razonable y consecuentemente reivindicar los beneficios establecidos en las correspondientes leyes.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

"Es pacífico en la doctrina sostener que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental, sin embargo, los estudios doctrinales se han centrado, más que en lograr una definición, en determinar las características que permiten distinguir cuándo en un proceso concreto, se verifica una dilación indebida y en consecuencia, cuándo se vulnera este derecho fundamental.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el Tribunal Constitucional peruano.

"Como hemos podido apreciar, la mayoría de las disposiciones de los Tratados Internacionales establecen el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como uno que pertenece a quien es parte de un proceso penal y la dilación le causa un perjuicio.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, definiéndolo y dándole un contenido. (Expedientes: 549-2004/HC/TC; 3771-2004/HC/TC; 41242004/HC/TC; 442-2003/ AA/TC).

Así, en la sentencia proveniente del expediente 549-2004/HC/TC, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

«En relación al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, este Tribunal considera pertinente recordar que el derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución. Sin embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto

de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad, que debe guardar la duración de un proceso para ser reconocido como constitucional.

Se trata, propiamente, de una manifestación implícita del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocidos en la Carta Fundamental (artículo 139° 3 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. (...)

Por lo demás, la interpretación que permite a este Tribunal reconocer la existencia implícita del referido derecho en la Constitución, se encuentra plenamente respaldada por su Cuarta Disposición Final y Transitoria, que exige que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú.>> Del primer párrafo trascrito el Tribunal Constitucional establece que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como expresión del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional, es aplicable a todo tipo de proceso judicial, sin embargo, de la justificación trascrita posteriormente en la que se remite a los tratados internacionales, pareciera delimitar el derecho a cuestiones de naturaleza penal.

Una afirmación distinta realiza el Tribunal Constitucional en el expediente 4422003/AA/TC, en donde se afirma categóricamente que todo justiciable tiene derecho a un proceso sin dilaciones:

«Que todo justiciable tiene derecho a un proceso sin dilaciones. La celeridad está íntimamente vinculada con la seguridad jurídica. Es necesario destacar que un derecho que no se realiza no es un derecho o, en términos diferentes, transitar por los tribunales de justicia no es ejercer el derecho a la jurisdicción.

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano en el expediente N° 549-2004/HC/TC ha considerado, siguiendo a la Corte Interamericana (que a su vez a seguido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, estos son: a) la complejidad del asunto, b) el comportamiento del interesado y e) la conducta de las autoridades judiciales."

En la fórmula legal de la presente propuesta de ley se pretende dinamizar sin dilaciones el trámite de solicitudes presentadas por los ex combatientes, para que puedan ser beneficiados con lo establecido en la Ley N° 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, así como para que puedan ser beneficiados con lo establecido en la Ley N° 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los

incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981.

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 30874 Y EL REGLAMENTO 26511 LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA HACER EFECTIVO EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 Y 1995

Articulo 1. Objeto y finalidad de la Ley

La presente Ley, tiene por objeto, modificar la Ley 30874, con la finalidad de dinamizar el trámite de reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, con la finalidad de realizar la atención con celeridad y economía procesal.

Artículo 2. Incorporase un segundo párrafo en el artículo 3, e incorpórese el artículo 5 y 6 en la Ley 30874, cuyo texto en el sucesivo será el siguiente.

"Artículo 3. Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos

(...)

Otorgase al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente norma, para expedir la resolución de reconocimiento, de las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2022, por el personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995. En caso de no emitir la resolución en el plazo señalado se considerará el reconocimiento bajo aprobación automática como Defensores de la Patria, estando obligado a emitir la resolución de reconocimiento en el plazo de diez (10) días hábiles, caso contrario serán denunciados por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Artículo 5. Plazo de propuesta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Otorgase a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente norma, para realizar la propuesta para el reconocimiento como Defensores de la Patria al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995. En caso de no emitir la propuesta en el plazo señalado serán denunciados por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales."

"Artículo 6. Plazo para resolver recurso de apelación

Otorgase al Ministerio de Defensa, el plazo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente norma, para resolver los recursos de apelación y emitir la resolución correspondiente, En caso de no resolver los recursos de apelación en el plazo señalado será denunciado por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. "

Artículo 3. Incorporase el literal s en el artículo 3, en el Reglamento de la Ley 26511, para la Calificación como Defensor de la Patria, Propuesta Ascensos y Otorgamientos de Beneficios a los Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que participaron como combatientes, en la Zona del Alto Cenepa en 1995 que el texto en lo sucesivo será el, siguiente:

(...)

s.- Aprobación automática. - Se sustenta en el principio de presunción de veracidad y el principio de predictibilidad o de confianza legítima, Aprobación desde el momento en que se presenta la solicitud, siempre que se cumpla con los requisitos, salvo plazo establecido para su evaluación.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

Única Disposición Completaria. Adecuación del Reglamento

En el plazo de 30 días hábiles de la publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, adecúa el Reglamento de la Ley 26511 Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador y la Ley 28976 Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978i Conflicto Armado de la Cordillera del Condor de 1981, a las en la presente ley.

4. PROYECTO DE LEY 2628/2021-CR

Antecedentes que presenta se refiere a que, la guerra del Cenepa, también conocida como Conflicto del Alto Cenepa, fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en el valle del río Cenepa, en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor, en el año 1995.

En dicha guerra se enfrentaron: La República del Ecuador: gobernada por el presidente Sixto Durán Ballén, que reclamaba territorios peruanos ubicados en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor y que estableció puestos fronterizos en esa región a fines de 1994 y la República del Perú: al mando del presidente Alberto Fujimori, que rechazó los reclamos territoriales de los ecuatorianos, como resultado del conflicto se tuvo el acceso de Ecuador a la navegación del río Amazonas, sin que eso implicara concederle soberanía alguna así como la concesión a Ecuador de 1 km2 en la localidad de Tiwinza, como propiedad privada y sin soberanía, y solo para recordar a los soldados ecuatorianos caídos allí. Tras dos meses de enfrentamientos con resultados inciertos, ambos países aceptaron firmar un acuerdo de paz que puso fin a la guerra.

El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del estado, tanto en el contenido de las Leyes como en las aplicaciones de las mismas. El trato desigual de los iguales se conoce como discriminación. (García Toma, 2008, pág. 114)

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 1993, señala que: Toda persona tiene derecho: "A la igualdad ante la ley."

El derecho a la igualdad, siempre ha sido un bien tutelado por el estado peruano para evitar la discriminación, desarrollando como un derecho fundamental la protección constitucional que tiene una persona a no ser discriminado por ningún

tipo de los supuestos descritos en el artículo antes citado, dejando abierta la posibilidad a no ser discriminado por cualquier otra índole.

El Tribunal Constitucional nos dice al respecto, en el fundamento 3° de la sentencia del Exp. N° 01604-2009-PA/TC: El derecho a la igualdad, como el conjunto de derechos consagrados en nuestra Constitución, encuentra su fundamento último en la dignidad de la persona. Así, cuando el artículo 1 de la Constitución establece que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del estado", está reconociendo una igualdad esencial de todas las personas, por lo que exige que tanto la sociedad como el Estado deban tener como principal objetivo la vigencia de la dignidad humana. (Tribunal Constitucional, 2009)

Se debe considerar que, al no haber actuado con igualdad al momento de realzar la calificación a los combatientes integrantes del Batallón de Infantería Selva 32, se ha vulnerado lo consagrado por nuestra carta magna.
El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 3 INCISO G DE LA LEY 26511, QUE AMPLIA LA ZONA DE COMBATE DEL ALTO CENEPA DEL AÑO 1995 Y RECONOCE A DEFENSORES DE LA PATRIA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto ampliar la zona de combate del alto Cenepa del año 1995, para incorporar a todo el personal licenciado de las fuerzas armadas integrantes del Batallón de Infantería Selva (BIS) 32, quienes participaron en el conflicto bélico.
Artículo 2. Finalidad.
La presente ley tiene por finalidad otorgarles el reconocimiento, beneficios y derechos como defensores de la patria y así establecer un trato igualitario a todos los participantes del conflicto bélico.
Artículo 3. Modificación del Inciso g del artículo 3 de la Ley que reconoce como defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que participaron en el Conflicto con el Ecuador" - Ley 26511
Modificase el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, el cual queda redactado de la siguiente manera:

> ***"Artículo 3 - Inciso g. Zona de Combate del alto Cenepa**, Espacio terrestre, acuático, y aéreo ubicado dentro la zona del alto Cenepa, comprendido entre los limites siguiente:*
>
> *1) Por el norte : Línea de Frontera*
> *2) Por el este : Pendiente Oeste de la Cordillera del Companquiz*
> *3) Por el Sur : Latitud Sur 3°33'08"*
> *4) Por el Oeste : Línea de Frontera*
> *5) **Por el Nor Oriente : Línea de Frontera, PV 01, PV02, PV Avanzado "Los Buitres", PV La Media, PV Salazar y PV 12**.*

5. PROYECTO DE LEY 2958/2022-CR

En la exposición de motivos considera que:
El inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política, señala que el desarrollo de las políticas, estrategias y acciones del Estado, que orientan la conducta de las personas y garantizan la prestación de servicios públicos, deben hacerse efectivos salvaguardando el derecho de toda persona "a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole", En el marco legal de la presente exposición de motivos se ha detallado aquellos antecedentes normativos que reconocen beneficios a favor del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y ciudadanos que participaron en la lucha contra el terrorismo, incluso aquellas acciones realizadas más allá de los años 1980 al 2000, como parte del proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia, denominándolos en adelante como, Defensores de la Democracia. Con la promulgación la condecoración correspondiente, el reconocimiento consistía en el acceso a la "Medalla al Defensor de la Democracia", como un homenaje moral y simbólico, así como el establecimiento de una fecha conmemorativa. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 31177, el Congreso, aprueba beneficios efectivos destinados a garantizar una reparación cierta de parte del Estado, a las personas que pusieron en riesgo su vida e integridad física en la lucha contra subversiva, en zonas declaradas en emergencia. De esta manera la Ley 31177 incorporó a los excombatientes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, personal civil y los comités de autodefensa que participaron en el proceso de Pacificación Nacional entre los años 1980 al 2000, a los alcances del artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo. Así mismo, modifica el artículo 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, en reconocimiento por sus contribuciones en la pacificación nacional.

La presente iniciativa legislativa guarda concordancia con lo estipulado por el Acuerdo Nacional, el cual establece en su Política de Estado IV: Estado eficiente, transparente y descentralizado, en su objetivo Nº 30 "Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional", lo siguiente: "Nos comprometemos a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la reconciliación nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y concordia el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar. Con ese objetivo el Estado:

a. desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar severamente a los integrantes de las organizaciones terroristas y enfrentar eventuales nuevas formas de este flagelo, especialmente en su relación con el narcotráfico;

b. mantendrá una legislación antiterrorista compatible con el derecho internacional y los tratados suscritos por el Perú en materia de Derechos Humanos;
c. fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la convivencia civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de Derecho y la prevención contra actividades terroristas;
d. propenderá a la atención integral de las secuelas de la violencia y la reparación a las víctimas;
e. desarrollará programas integrales de apoyo al repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista; y
f. promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia.

También se ha observado, que la presente iniciativa legislativa guarda concordancia con lo estipulado por el Acuerdo Nacional, el cual establece en su Política de Estado 1: Democracia y Estado de Derecho, en su objetivo Nº 3 "Afirmación de la identidad nacional", lo siguiente:

"Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Con este objetivo, el Estado:

a. promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país;
b. desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, para la construcción de una auténtica unidad entre todos los peruanos; y
c. promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir un desarrollo nacional armónico y abierto.

La presente ley de aprobarse, representa el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley en el tratamiento de las medidas de resarcimiento del Estado a los combatientes que pusieron en riesgo su integridad y entregaron su vida por el orden interno y la seguridad nacional. Equiparar los beneficios para los Defensores de la Democracia, a los establecidos para los Defensores de la Patria, permite: Cumplir los objetivos y políticas de Estado de un trato justo para hechos de una misma naturaleza, equiparando derechos y oportunidades.

Estimular el espíritu patriótico de las futuras generaciones, en defensa de la integridad territorial y del orden y seguridad interno, convirtiendo un beneficio económico extraordinario, en una inversión que favorece al fortalecimiento de la patria en el largo plazo. Contribuir a una genuina reconciliación nacional, con las víctimas de la violencia terrorista y sus familiares, quienes, con el sacrificio de su

vida y el riesgo de su integridad, han logrado el mantenimiento de la democracia y la integridad de la Nación.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE RECONOCE Y DECLARA HÉROES DE LA DEMOCRACIA A LOS INTEGRANTES DE LA OPERACIÓN MILITAR PACHACUTEC

ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley. –

La presente ley tiene por objeto reconocer a los miembros del Ejército Peruano integrantes de las fuerzas especiales en la lucha contra el Terrorismo (Batallón Contra Subversivo Nro. 324 Teniente Coronel Natalio Sánchez, Batallón de Infantería de Paracaidistas Coronel Narciso de la Colina Nro. 61 y Batallón de Infantería de Paracaidistas Nro. 39) que participaron en la Operación Miliar Pachacútec, llevada a cabo el 28 de abril de 1989, por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia.

Artículo 2.- Modificación del artículo 1 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la Condecoración correspondiente. -

Modificase el artículo 1 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la Condecoración correspondiente, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 1.-** Objeto de la Ley*
> *institúyase el 22 de abril de cada año como Día de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; y a todos aquellos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación".*

Artículo 3.- Modificación del artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941" a los Gloriosos hechos de Arma cumplidos durante el desarrollo de la Operación Militar Pachacútec realizado el 28 de abril de 1989, conforme al siguiente texto:

> ***Artículo 10.-** Los beneficios de la presente ley se harán extensivos a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec, por su participación en el enfrentamiento realizado el 28 de abril de 1989 en la Provincia de Jauja, que permitió la desarticulación militar del grupo terrorista MRTA.*

Artículo 4. Reconocimiento. -

Reconócele la calidad de Héroes de la Democracia a cada uno de los miembros del Ejército Peruano integrantes de las fuerzas especiales en la lucha contra el Terrorismo (Batallón Contra Subversivo Nro. 324 Teniente Coronel Natalio Sánchez, Batallón de Infantería de Paracaidistas Coronel Narciso de la Colina Nro. 61 y Batallón de Infantería de Paracaidistas Nro. 39) que participaron en el Operación Miliar Pachacútec llevada a cabo el 28 de abril de 1989 en la Ciudad de Jauja.

Artículo 5. Otorgamiento de la Medalla al Defensor de la Democracia. -

Otorgase la Medalla al Defensor de la Democracia establecida en el artículo 4 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, a los miembros del Ejército Peruano integrantes de las fuerzas especiales en la lucha por la pacificación de la patria que participaron en el Operación Militar Pachacútec llevada a cabo el 28 de abril de 1989.

Artículo 6. Beneficios. -

Autorizase al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los Defensores de la Democracia descritos en el artículo 2 de la presente ley, así como a sus hijos y/o cónyuge o concubina. Asimismo, en agradecimiento a los servicios prestados a la Nación incorpórese a los combatientes de la Operación Militar Pachacútec a los alcances del artículo 1O de la ley 24053 Ley denominada "Campaña Militar 1941"

Artículo 7. Vigencia. -

La presente Ley tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Implementación. -

La aplicación de la presente ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

6. PROYECTO DE LEY 3391/2022-CR

Fundamenta la propuesta en los siguientes términos:

Desde su nacimiento Perú y Ecuador como repúblicas independientes a principios del Siglo XIX, y hasta el año 1998, mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes.

Los problemas en la delimitación de fronteras entre ambos países tienen su punto de partida cuando la Gran Colombia (estado antecedente de Ecuador, encabezado por Bolívar) exigió a la naciente República del Perú la entrega de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, que eran peruanas de acuerdo con el principio de la libre determinación de pueblos, fundamentalmente.

Disuelta en 1830 la Gran Colombia y nacido el Ecuador a la vida independiente, este país revivió en reiteradas ocasiones el viejo reclamo bolivariano hacia el Perú, llegando a agudizarse la relación entre ambos países en tres ocasiones (1941, 1981 y 1995) y desembocando en guerras generalmente cortas. El conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales peruano-ecuatorianas.

Nuestra historia nos dice que, el 22 de enero de 1981, el gobierno peruano denunciaba el ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia en el río Comaina (territorio peruano). El entonces presidente del Perú, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ordenó la inspección del río Comaina hasta sus nacientes en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, comprobándose la existencia dentro del territorio peruano de tres destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo causó acciones de fuerza, logrando las fuerzas peruanas desalojar los destacamentos ecuatorianos. Cabe señalar que por primera vez se organizó

durante dicho conflicto la primera operación de "envolvimiento vertical" desembarco helitransportado con apoyo de fuego desde helicópteros MI-8.

La posición ecuatoriana señalaba que esos destacamentos correspondían a la base de "Paquisha" establecida en su territorio. Pero, tras la medición de las coordenadas, se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquisha sino, como lo calificó el presidente Belaúnde, a un "falso Paquisha". Tras las escaramuzas, que motivaron la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), el acta Sorrosa-Du Bois fijó las coordenadas de ubicación permitidas para las tropas fronterizas, ratificando la condición de la mencionada cordillera como límite natural entre ambos países.

En 1992, los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto Fujimori Fujimori y Rodrigo Borja Cevallos, suscriben el llamado Pacto de Caballeros, en el que se comprometen a buscar soluciones pacíficas a las diferencias. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1994, después de una declaración oficial por parte del gobierno peruano, que reclamaba como suyos los territorios en disputa, y frecuentes encuentros entre patrullas de ambos países, se empiezan a notar movilizaciones del ejército del Ecuador, que desde 1981 había estado preparándose para enfrentar un conflicto generalizado, desplegando sus sistemas de defensa en el área de la Cordillera del Cóndor.

El Conflicto del Cenepa para Perú, (Guerra del Cenepa para Ecuador), llamada así por el nombre del río en cuya cabecera ocurrió el conflicto fronterizo, tuvo lugar a comienzos de 1995.

La guerra o conflicto (en la casi totalidad de documentos "peruanos" se la menciona corno conflicto dado que nunca hubo declaración oficial de guerra entre ambos países) se inició el 26 de enero de 1995 en la zona del Cenepa.

Ecuador desplegó unos 3000 efectivos en la zona. Perú desplegó alrededor de 2000 efectivos. Algunas aeronaves peruanas fueron abatidas por fuerzas ecuatorianas, aunque hay dos posiciones, por un lado la parte ecuatoriana dice que la Fuerza Aérea Ecuatoriana derribó a tres aeronaves (dos Sukhoi Su-22 "Fitter" y un A-37B) y que las defensas antiaéreas dieron baja a varios helicópteros, la parte peruana dice que todas las aeronaves (2 Sukhoi, 1 A37B y 3 helicópteros) fueron derribadas por la defensa aérea (antiaéreos portátiles usados por el ejército ecuatoriano). Pero fueron las tropas peruanas los que finalmente desalojan a las tropas ecuatorianas de su territorio luego de intensos bombardeos por tierra y aire de las bases Cueva de los Tayos, Base sur y Tiwinza. El 17 de febrero, los países integrantes del Protocolo de Río de Janeiro mediaron un acuerdo de cese al fuego y entrega de posiciones controladas tanto por Perú como por Ecuador, estas posiciones fueron entregadas a la MOMEP para dar inicio a la separación de fuerzas, que debió ser ratificado el 28 de febrero en Montevideo ante la continuación de los combates. Siendo así, los combatientes se habían

retirado de la zona del Cenepa ya para el 5 de mayo de 1995. El 4 de agosto se hizo efectiva una zona desmilitarizada.

En atención a tales conflictos armados, el Poder Legislativo ha emitido diferentes normas legales con el fin de regular el marco de beneficios que corresponden merecidamente al personal militar que intervino en los mismos, por su participación directa en dichos conflictos, o en apoyo del personal que tuvo participación directa en aquellos, así como en favor del personal que fue movilizado a la zona de frontera a propósito de los conflictos en mención.

En ese orden de ideas, se promulgaron en su oportunidad las normas siguientes:

- Ley N° 28796 - Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981;
- Ley N° 26511 - Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador (Conflicto de 1995).
- Ley N° 29562 - Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Asimismo, se emitieron sus respectivas normas reglamentarias para la debida aplicación de las normas en mención.

Identificación de la problemática.
Desde el año 1978 nuestro país se vio inmerso en tres conflictos armados con el vecino país del norte de Perú, concretamente Ecuador, quien premeditadamente infiltro tropas en nuestro territorio patrio, en los años 1978, 1981 y 1995, siendo así, han sido casi los mismos territorios en la disputa en los tres eventos bélicos, no dejando de pasar por alto las operaciones militares con el mismo país en 1941, que dejo secuelas en ambas naciones y como consecuencias surgió el héroe de la FAP Capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, el paradigma de la tropa FAP Sgto. 2do Lázaro Orrego Morales. Y la Marina de Guerra tuvo al Capitán de Fragata, Armando Figueroa Roggero, quien destaco en sus funciones y sobrevivió. El ejército peruano también tiene a su héroe viviente de la campaña del 41 el Cabo EP, (Licenciado) Gilberto Falcon Casas, parte del batallón de Infantería N° 20, quien notoriamente con limitaciones logísticas, supo estar a la altura de las circunstancias con su temple y gallardía para cumplir con la misión.

Por estudios y experiencia compartida por los superiores en aquel entonces, se sabe que ha sido siempre una aspiración del vecino país norteño, tener salida soberana al río Amazonas. En el conflicto de 1995 tenemos12 héroes reconocidos

por el Congreso de la República, entre oficiales y suboficiales dentro de helicópteros de combate, no sabemos del reconocimiento de tropas calificadas como héroes.

Asimismo, en cada evento bélico, se emitieron normas legales que MOVILIZARON TROPAS a la frontera norte y también a la frontera sur, específicamente a Tacna. Por estrategia militar siempre en cada conflicto se ASEGURA LA RETAGUARDIA, obviamente con normas legales de carácter secreto, prueba de ello están los testimonios de cientos de soldados del ejército peruano que participaron de dichas operaciones militares.

El Ministerio de Defensa fue creado por la Ley Nº 24654 con vigencia a partir del 1 de abril de 1987, integrando a los ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, de la secretaria de Defensa Nacional y de los órganos Consultivos, de Asesoramiento, de Planeamiento, de Apoyo y de Control. Desde ahí a la fecha la documentación oficial esta digitalizada para un mejor archivo, no siendo así, lo ocurrido entre 1977 hasta 1987 fecha de su inauguración, esto hace muy difícil la búsqueda y recuperación de documentos que den fe a nuestra versión.

Que en 1978 cuando se suscrito el conflicto con Ecuador, estábamos bajo un régimen de gobierno militar, era presidente de facto el General EP Francisco Morales Bermúdez y su ministro de Guerra el General Guillermo Arbulu Galliani (16107/1976 — 30/01/78). En 1981, fue presidente el Arq. Fernando Belaunde Terry y su ministro de Guerra el General Luis Federico Cisneros Vizquerra (1981-1983). En 1995, fue presidente el Ing. Alberto Fujimori Fujimori y su ministro de Guerra el General Víctor Malca Villanueva.

Para entender mejor la propuesta es necesario saber lo siguiente: Las Junta calificadora para las condecoraciones ha establecido estas fechas claves para considerarse APTO.

1978 - Del 17 al 20 de enero de 1978
1981 - Del 22 de enero al 20 de febrero de 1981
1995 - Del 26 de enero al 17 de febrero de 1995 (ampliado hasta el 28 de febrero de 1995).

De igual forma, en la nómina oficial de beneficiarios del Cenepa hay 3,900 nombres, personal de oficiales y técnicos suboficiales que estando comisionados en TACNA cobran el bono al defensor de la patria, no cuestionamos el hecho, sostenemos la tesis de la existencia de las normas legales de carácter secreto, que ordenan la movilización de tropas a la frontera sur durante los tres conflictos armados con Ecuador.

Con todo lo expresado líneas arriba, se tiene que hay una relación de excombatientes movilizados durante los eventos acontecidos en enero de 1978 por orden del presidente General EP Francisco Morales Bermúdez. Y muy a pesar del abandono del Estado Peruano frente a las promesas de un bienestar después del servicio militar obligatorio, aún mantienen viva la esperanza de ver cumplida la Ley N° 29562 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2011-DE que reconoce como tal, según la ubicación de las unidades ya que unos fueron movilizados a Tacna, otros a la frontera norte por mar hasta Tumbes y Piura, estando de reten hasta nuevas órdenes. Todos debidamente uniformados con equipo de campaña listos para el combate.

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 29562, LEY QUE OTORGA RECONOCIMIENTO AL IVIERITO A EX COMBATIENTES DE LOS CONFLICTOS CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 Y 1995

Artículo 1.-Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar e incorporar normas jurídicas a la Ley N° 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1985 para incorporar a los licenciados de las Fuerzas Armadas que fueron movilizados a la frontera sur.

Artículo 2.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad el reconocimiento al mérito como ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1985.

Artículo 3.- Modificación

Modificase el artículo 1° de la Ley N° 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1985.

"Artículo 1°.- Objeto de la Ley

Concédese reconocimiento al mérito al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en actividad o en retiro, oficiales, personal auxiliar y tropa, licenciados y jubilados, así como al personal civil que participaron en los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

En el presente reconocimiento se incluye a todo el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de las unidades que recibieron la orden de movilizarse a la línea de frontera con el Ecuador, desde el hito Punta Capones en Tumbes hasta el último hito en el departamento de Loreto, con ocasión de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995; ***así como a los licenciados de las Fuerzas Armadas movilizados a la frontera sur, en los años 1978, 1981 y 1995.".***

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Calificación a los beneficiarios de la presente.

Encárguese al Ministerio de Defensa la calificación y entrega a las personas señaladas en el artículo 1° los diplomas al honor y al mérito las medallas y los carnés de reconocimiento.

SEGUNDA. La presente ley no otorga beneficio económico alguno, es únicamente un reconocimiento al mérito.

7. PROYECTO DE LEY 3500/2022-CR

Antecedentes Legislativos

Tenemos propuestas legislativas que han sido actualizadas de Congresos anteriores y que han vuelto a ser presentadas, referidas a la temática que tiene como objetivo la presente propuesta y que plantean soluciones alternas, siendo estas las siguientes:

- Proyecto de Ley N° 347/2021-CR (antes 6819/2020-CR), que propone extender los beneficios de la Ley N°26511, al personal militar, licenciados y personal civil de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto del Cenepa 1995.
- Proyecto de Ley N° 704-2021-CR, que propone la Ley que establece el marco legal referente a los beneficios a otorgarse al personal militar reconocido como combatiente y como movilizado, que participó en los conflictos armados con el ecuador de los años de 1979, 1981 y 1995.
- Proyecto de Ley N° 2302-2021-CR, que propone Ley que modifica la ley 30874 y el reglamento 26511, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.
- Proyecto de Ley N° 2628-2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del alto Cenepa del año 1995 y reconoce a defensores de la patria.

Sobre los excombatientes peruanos en un conflicto con otro país

En las guerras que ha vivido nuestro país los combatientes peruanos se han encontrado a la altura de las circunstancias, bien con su rechazo, victoria y/o heroísmo en la derrota. En la Guerra del Pacífico, nuestros soldados, sin contar muchas veces con el material de guerra correspondiente, y en condiciones adversas dieron lo mejor de sí, llegando a límites insospechados, logrando, muchas veces, revertir batallas, no obstante que la carencia militar fuera agudizada por malos gobernantes que huyeron con el dinero destinado para la compra de pertrechos militares o bien comprando dolosamente armas y municiones defectuosas.

Conforme a lo señalado, se puede afirmar que en las guerras con otros países el combatiente peruano ha sido un actor participante, esforzado y heroico, llegando muchas veces al sacrificio en condiciones realmente adversas.

Durante el siglo XX los combatientes peruanos enfrentaron a los militares ecuatorianos, en diversos conflictos armados, como el del año 41 y otros posteriores que fueron los siguientes:

1. Incidente Armado Fronterizo del Subsector del Alto Cenepa en 1978
2. Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 (22 de enero al 20 de febrero)
3. Conflicto del Alto Cenepa de 1995

Los Defensores de la Patria

Como un reconocimiento a su patriotismo en la defensa del territorio nacional el Estado peruano decidió designar formalmente a los excombatientes del año 95, como Defensores de la Patria, luego de su evaluación por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y conforme a las leyes que se dieron al efecto. Así se estableció en el artículo primero de la Ley N° 26511 del 20 de julio de 1995, circunscribiendo sus beneficios estrictamente a los combatientes que hayan participado en la zona del Alto Cenepa durante el último conflicto con el Ecuador en 1995.

Con posterioridad, mediante Ley N° 28796, del 21 de julio de 2006, se reconoce también la calidad de "Defensores de la Patria" a los ex combatientes que participaron en los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978 y los de la Cordillera del Cóndor de 1981.

Planteamiento del Problema

Las normas legales que regulan las condiciones para ser considerado "Defensor de la Patria" no hacían una diferenciación entre los ex combatientes que hubieran participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida en las operaciones realizadas en la zona de Combate o que hubieran podido quedar discapacitados; sin embargo, el Decreto Supremo N° 010-DE-SG, que reglamentó la Ley N°26511, dispuso que la calidad legal de "Defensores de la Patria" la tenían los ex combatientes que hubieran participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en las operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa.

En concordancia con el Reglamento antes señalado, el 18 de julio de 2010 se promulga la Ley N° 29562, donde se dispone un reconocimiento al mérito a los excombatientes que no tenían la condición de Defensores de la Patria, pero que estuvieron en la zona de combate y a pesar que no tuvieron una participación activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida o quedaron en una situación de discapacidad, se les otorgó este reconocimiento.

Surgen de esta manera dos tipos de excombatientes; un primer grupo, aglutinados a partir del Reglamento de la Ley N°26511 (D.S. N° 010-DE-SG), que lo integran quienes han participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa, lo que incluye también a ex combatientes que no hayan hecho uso de las armas pero que se encontraban dentro de un determinado espacio geográfico señalado en el Reglamento de la Ley N°26511 (promulgado mediante D.S. 010-DE-SG 1999, art. 3°, lit. g).

Un segundo grupo de ex combatientes estructurados sobre la base de quienes no cumplen los requisitos del reglamento de Ley N°26511, es decir no llegan a ser

calificables como "Defensores de la Patria", pero que a través de la Ley N°29562 se convierten en "combatientes al mérito".

La Ley N°26511 no hace ningún tipo de distinción entre excombatientes o sugiere que haya una clasificación distinta en su Reglamento, pero éste último ha ido más allá de lo legislado en la propia Ley N°26511, afectando la racionalidad del procedimiento y la propia calificación legal de "Defensores de la Patria", ya que, al no haber una distinción en la ley general no debió distinguir el Reglamento, habiendo excluido a quienes no estuvieron en combate o en una determinada zona geográfica, como lo señala.

Esta situación de abuso reglamentario y de distinción extralegal generada por el Reglamento, de la Ley N°26511, se fortaleció con la dación de la Ley N° 29562 ya que esta norma se da para los combatientes al mérito, es decir aquellos que no llegaban a ser calificados como Defensores de la Patria.

De acuerdo a lo expuesto, vemos que se contraviene la pirámide kelseniana donde "la Constitución prima sobre la ley, la ley sobre los reglamentos y entre estos, los de más jerarquía priman sobre los de menos jerarquía". La doctrina comparada también precisa que, "Siempre se entendió que el reglamento era un ordenamiento subordinado a la ley que se justificaba en ella misma".

Cabe indicar que estudiosos del tema, han indicado que en este caso en particular se está vulnerando también la Constitución dado que "Nuestra Carta Magna, protege el derecho a la igualdad, indicando que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole; sin embargo, al promulgarse la Ley N° 29562 se infringió este artículo de la Constitución. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993, art. 2, inc. 2)"

Asimismo, se habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley, y el Tribunal Constitucional considera como el conjunto de derechos consagrados en nuestra Constitución y que encuentra su fundamento último en la dignidad de la persona. Así, cuando el artículo 10 de la Constitución establece que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del estado", está reconociendo una igualdad esencial de todas las personas, por lo que exige que tanto la sociedad como el Estado deban tener como principal objetivo la vigencia de la dignidad humana (fundamento 30 de la sentencia del Exp. N° 01604-2009-PA/TC)

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE PRECISA EL ACCESO DE LOS EXCOMBATIENTES EN SU CALIFICACIÓN COMO DEFENSORES DE LA PATRIA Y COMO DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA

Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto precisar los documentos que son necesarios, para que los excombatientes puedan acceder a la calificación como Defensores de la Patria y Defensores de la Democracia, lo que va a garantizar el reconocimiento por sus contribuciones a la defensa y la pacificación nacional.

Artículo 2.- Modificación de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo

Modificase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, el mismo que quedará redactado en los términos siguientes:

***"Artículo 10.** Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas **que cuenten con parte de guerra, libreta de licenciamiento u otro medio probatorio** y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de **patrulla, reporte de patrulla libreta de licenciamiento, constancia del servicio militar en una unidad de operaciones en zona declarada de emergencia u otro medio probatorio**, y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda.*

Los beneficios otorgados en la presente ley a los Defensores de la Patria, comprende también a aquellos que se encontraron en el teatro de operaciones, aun cuando no combatieron, no resultaron heridos ni con ninguna discapacidad."

rtículo 3.- Modificación de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha Contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar

Modificase la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31117, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha Contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Milita, la misma que quedará redactada de la siguiente manera:

"PRIMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley

*Encargase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración, la calificación como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista, que cuenten con **parte de patrulla, reporte de patrulla libreta de licenciamiento, constancia del servicio militar en una unidad de operaciones en zona declarada de emergencia u otro medio probatorio"***

Artículo 4.- Modificación de la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995

Modificase el artículo 3 de la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 3. Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos

Otorgase al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de ***siete*** *años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente norma, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el artículo 2 de la presente ley."*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Derogatoria segundo párrafo artículo 2 de la Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Deróguese el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

SEGUNDA. Continuación del trámite

Los excombatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, a los que se les ha entregado diplomas al honor y al mérito, medallas y los carnés de reconocimiento, podrán continuar el trámite para su reconocimiento como Defensores de la Patria.

TERCERA. Bonificaciones Excepcionales

Los Defensores de la Patria que hayan sido calificados como tales posterior al 06 de diciembre de 2018, sus bonificaciones excepcionales son atendidas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. De igual manera acceden a todos los demás beneficios que por ley les corresponde.

8. PROYECTO DE LEY 3645/2022-CR

LOS DATOS CENTRALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile -los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación.

Si bien la CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas.

Con esta metodología estadística, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el

departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340,000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima Metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina, Así, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Y es que la violencia impactó desigualmente distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población. Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninca, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como propia.

EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. En nuestro país no se repite el esquema clásico latinoamericano de agentes del Estado como perpetradores casi exclusivos enfrentados a grupos subversivos con un uso restringido de fa violencia y, sobre todo, a civiles desarmados. Por un lado, la violencia armada en contra de la población civil la inicia el principal grupo subversivo, el PCP Sendero Luminoso, utilizando de manera sistemática y masiva métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto a normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos. Por otro lado, dicha violencia subversiva estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del «antiguo orden» en las áreas iniciales del conflicto armado (Ayacucho, Apurímac) por lo que la mayor parte de víctimas de las acciones senderistas estuvieron entre campesinos o pequeñas autoridades locales y no entre miembros de las elites políticas o económicas del país. Desde entonces fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto por las normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, convirtiéndose así en el primer perpetrador.

Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tuvo el derecho y el deber de defenderse, siempre garantizando la defensa y vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, la Comisión constata que, paradójicamente, las etapas más duras del conflicto en lo que a violaciones de los derechos humanos se refiere, transcurrieron en democracia. El mayor número de víctimas, muertes y desapariciones forzadas, incluyendo los tres picos de 1984, 1989 y 1990, ocurrieron cuando el país tenía gobiernos democráticos, surgidos de elecciones libres, sin exclusión de partidos ni fraudes electorales, por lo menos antes del autogolpe del 5 de abril de 1992. Asimismo, entre 1980 y 1990, se dio una de las etapas con mayor número de procesos electorales democráticos a nivel

nacional, regional y municipal de toda la historia republicana, con la excepción puntual de las áreas directamente afectadas por la violencia que atravesaron por circunstancias particulares.

El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada, que se expandió en unos años a casi todo el país.3 Los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto. 54 abandonando sus fueros y prerrogativas para dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En relación a este punto, los gobiernos elaboraron hipótesis equivocadas sobre las organizaciones subversivas y procedieron a dar una respuesta fundamentalmente militar que terminó por agravar el conflicto, propiciando su escalada tal como el PCP-SL buscaba. Si bien, dada la gravedad de los hechos, era inevitable que el Estado utilizara a sus fuerzas armadas para hacerle frente, declarando además los estados de excepción, los gobiernos lo hicieron sin tomar las previsiones del caso para impedir atropellos a los derechos fundamentales de la población. Peor aún, a la abdicación de la autoridad civil en la conducción de la respuesta estatal contrasubversiva se sumó la desatención a las denuncias de violación de los derechos humanos e incluso, en varios casos, la garantía de impunidad que se facilitó a los responsables de las mismas. Según los casos reportados a la CVR, los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos, especialmente miembros de las fuerzas armadas escalaron la violencia iniciada por el PCP-SL, resultandos responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Si bien en nuestro país no se repite el esquema clásico latinoamericano, ello no exime la responsabilidad por la acumulación de graves denuncias sobre sus agentes que, incluso investigadas, no fueron sancionadas.

El efecto, otra de las peculiaridades del conflicto armado interno es que hubo importante información, denuncias e investigación sobre los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos. A diferencia de lo acontecido en otros lugares, el país contó con una cobertura amplia de los hechos y con libertad de prensa hasta para las organizaciones subversivas. En las áreas de conflicto, sin embargo, hubo hostigamiento a la prensa y hasta asesinatos de periodistas. Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron numerosas denuncias específicas y acopiaron información sobre la guerra interna.

Hubo, también, investigaciones periodísticas, parlamentarias y, en menor medida, judiciales que lamentablemente tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva de los responsables. Sin embargo, la Comisión constata, con sus resultados, que hubo también un sesgo en el recojo de dicha información y realización de investigaciones y denuncias, pues no se hizo el mismo esfuerzo por recoger denuncias que apuntaban a la responsabilidad de los grupos subversivos. Debido a ello, estimaciones realizadas anteriormente por otras instituciones, oficiales o particulares, situaban la responsabilidad del PCP-SL en menos del 10% mientras elevaban las atribuidas a los agentes del Estado a más del 80%.

A pesar de esta constatación, la Comisión no puede dejar de señalar que la respuesta de los organismos del Estado a la violencia subversiva alcanzó también márgenes extremos que rompieron con un patrón singular de las FFAA peruanas. Durante la dictadura que dirigieron entre 1968-1980, años sombríos para los derechos humanos en América Latina, los militares peruanos registraron pocas violaciones de este tipo, toleraron la existencia de organizaciones y de 55 propaganda izquierdista y, más aún, cumplieron ellos mismos reformas reclamadas tradicionalmente por las izquierdas. Si bien en los últimos años de la década del setenta, el gobierno militar endureció sus acciones contra las fuerzas de izquierda mediante la severa represión policial de las protestas sociales y el incremento de las deportaciones de opositores, quedó lejos del nivel de violencia desplegado a partir de 1983, cuando ingresaron al combate directo contra Sendero Luminoso.

Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto peruano como parte de un proceso en el que las acciones de violencia transcurrieron a lo largo de varios años, con incrementos graduales de intensidad y extensión geográfica, afectando principalmente a zonas marginales al poder político y económico y dejando a los campesinos indígenas como símbolos por excelencia de las víctimas. En varios de estos lugares, una vez controlada la amenaza subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por extensos períodos. La aparente lejanía del poder y de los núcleos de decisión, en un país fuertemente centralizado, permitió que el «problema de la violencia», crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, se mantuviese como un tema secundario para las agendas pública y privada del país por varios años.

La gravedad de la situación peruana, sin embargo, no se limitó a un conflicto no convencional entre organizaciones subversivas armadas y agentes del estado, sino que incluyó en el mismo período 1980-2000 la peor crisis económica del siglo que desembocó en un proceso hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa crisis política que incluyeron el debilitamiento del sistema de partidos y la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe de Estado y hasta el abandono de la Presidencia de la República en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia peruana; el fenómeno del narcotráfico coincidió tanto con el surgimiento y expansión del fenómeno subversivo armado como con su represión. El crecimiento de las áreas de cultivo de coca destinadas al narcotráfico, principalmente en la ceja de selva, facilitó la aparición de espacios muy particulares en los que había retrocedido la presencia estatal mientras crecía la de grupos armados irregulares vinculados a dicha actividad ilícita. De esta manera, la zona del Alto Huallaga se convertiría, desde mediados de los ochenta, en uno de los escenarios de mayores enfrentamientos de todo el conflicto interno, quedando convertido el río Huallaga en la fosa de restos humanos más grande del país. En tales circunstancias, todos los actores que intervinieron en la zona terminaron siendo afectados por el narcotráfico y la corrupción que de éste se deriva. Por último, el conflicto armado interno coincidió también con una coyuntura

de relaciones exteriores delicada, dado que el país enfrentó dos conflictos bélicos externos contra Ecuador en 1981 y 1995.

LOS PERÍODOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Ante la complejidad del escenario en el que se desarrolló la violencia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha estudiado los veinte años y seis meses del conflicto armado interno peruano (mayo de 1980-noviembre de 2000) a partir de la lógica interna de los acontecimientos y siguiendo las estrategias de los actores directos implicados en el proceso, así como las diversas posiciones frente al mismo asumidas por otros actores políticos y sociales. En dicha explicación, se reconstruyen los contextos de las principales acciones y decisiones, viendo las distintas opciones al alcance de los actores para evitar anacronismos al interpretar hechos del pasado a partir de conocimiento no disponible en el momento de su ocurrencia.

Para ello, la CVR optó por establecer una periodización propia que divide al conflicto armado interno en cinco etapas definidas por puntos de quiebre que no coinciden con las fechas de inicio y culminación de los gobiernos que tuvo el país entre mayo de 1980 y noviembre del 20004 porque el proceso analizado no siempre sufrió modificaciones sustanciales al producirse los relevos presidenciales y, en varias oportunidades, las decisiones adoptadas por alguna administración en materia de contrasubversión tuvieron consecuencias que abarcaron a los siguientes períodos presidenciales.

Asimismo, al tratarse de un conflicto armado no convencional, las principales acciones estudiadas por la CVR en función de su mandato, transcurrieron usualmente fuera de los escenarios públicos del país y sin un seguimiento continuo por los medios de comunicación nacionales. Por ello, al utilizar una periodización original del proceso 1980-2000, la CVR ofrece una interpretación del conflicto mismo, de las estrategias de los actores, de las víctimas y las consecuencias, tomando siempre en cuenta el contexto en que el que se desenvolvieron las acciones. Al obrar de esta manera, la CVR ha buscado apartarse de las historias oficiales de la guerra interna, como las construidas por el PCP SL para justificar su guerra popular o por el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori para afirmar su agenda política en contra de lo que denominaba «partidos tradicionales».

Si bien todo esfuerzo de organización temporal supone un margen de arbitrariedad en la selección de los criterios para definir las etapas, la CVR ha optado por construir una periodización que refleje lo ocurrido como parte de un proceso nacional y recupere la secuencia de acontecimientos basados en sus propios hallazgos e investigaciones. De esta manera, se han establecido los siguientes períodos:

1. El inicio de la violencia armada (mayo 1980-diciembre 1982) Comprende desde la primera acción cometida por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 hasta la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 que dispone el ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contrasubversiva en Ayacucho.
2. La militarización del conflicto (enero 1983-junio 1986) Aparca desde la instalación el 1 de enero de 1983 del Comando Político-Militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral, hasta la matanza de los penales del 18-19 de junio de 1986.
3. El despliegue nacional de la violencia (junio 1986-marzo 1989) Es la etapa que va desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, con apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín.
4. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo 1989-setiembre de 1992) Se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza y culmina el 12 de setiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán Reynoso y algunos de los principales dirigentes de su organización realizada por el GEIN.
5. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (setiembre 1992-noviembre 2000) Este último periodo comienza con la captura de Guzmán y otros líderes senderistas y se extiende hasta el abandono del país del ingeniero Alberto Fujimori.

Primer período: el inicio de la violencia armada (mayo de 1980-diciembre de 1982)

El conflicto armado interno que padeció el Perú se inicia con la decisión del PCPSL. de declarar la guerra al Estado peruano que deseaba destruir. La acción simbólica que caracteriza este comienzo de la lucha armada fue la quema pública de las ánforas electorales en el distrito de Chuschi (Cangallo-Ayacucho) el 17 de mayo de 1980, con ocasión de las elecciones generales. Con ello, el P 'OP-SL se automarginó del proceso democrático abierto con los comicios celebrados ese día, luego de diecisiete años, y dio inicio a una violenta campaña para destruir el Estado peruano y someter a la sociedad peruana a un régimen autoritario y totalitario bajo su conducción. Esta etapa finalizará cuando, a fines de 1982, entren a tallar en el conflicto las FFAA.

En un principio, Sendero Luminoso realizó atentados aislados contra la propiedad pública y privada y acciones de propaganda armada. La gravedad de sus actos fue aumentando progresivamente, llegando al asesinato sistemático y a los ataques contra las fuerzas policiales, buscando provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su contra, hasta lograr que se definiese una situación de conflicto armado interno.
El conflicto armado interno fue percibido inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinación de subestimación y desconcierto que permitió el

crecimiento de la presencia senderista, en ciertas áreas del departamento de Ayacucho y Huancavelica. El PCP SL no apareció de inmediato en los medios de comunicación nacional como el único responsable de las acciones sino recién cuando se le atribuyó directamente la actoría de las mismas. Aun así, se trataba de una agrupación muy pequeña dentro de un conglomerado de organizaciones radicales izquierdistas difíciles de identificar por alguien que no estuviese familiarizado con ellas. Los temas vinculados a la transferencia de poder a los civiles después de doce años de dictadura militar atrajeron mayor atención de la opinión pública, pero, al mismo tiempo, despertaron suspicacias entre los círculos izquierdistas que atribuyeron a las fuerzas del orden la autoría de los atentados, al igual que en otros países de América Latina.

Si en años anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de algunos grupos radicales de izquierda, el fenómeno particular iniciado por el PCP-SL desconcierta a las fuerzas del orden. En general, éstas hubieran esperado más bien la repetición de un proceso guerrillero similar al ocurrido en 1965. La formación contrasubversiva que habían recibido distintas unidades las preparaba únicamente para fenómenos de este tipo o, en el mejor de los casos, para enfrentar a grupos armados semejantes a los que por esos años actuaban en otros países de América Latina. Al tener muchas dificultades para definir con claridad a qué tipo de adversario se enfrentaban, los trabajos de inteligencia del período previo e inicial estuvieron erróneamente dirigidos. Las posibilidades de evitar el curso de los acontecimientos a partir del trabajo de este tipo fueron escasas debido al muy reducido tamaño de la organización, a su similitud con muchas otras agrupaciones de izquierda radical que postulaban la lucha armada y a su mínimo equipamiento militar antes de 1980. Sin embargo, las posiciones frente al problema inicial de la «falta de inteligencia» son todavía fuertes. Para representantes del entonces gobierno de Acción Popular, la responsabilidad mayor recae en el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez que lo antecedió:

Lo grave es que no solamente se sustraen de la responsabilidad de haber descubierto y combatido con anterioridad a este movimiento, sino que en la hora crítica del problema tampoco lo afrontan. Dejan desmantelado al Ministerio del Interior. No sé si al interior de las Fuerzas Armadas reservaron documentación. Creo que si por la cuestión ésta de espíritu de cuerpo, pero cuando llega el gobierno constitucional no se le encuentra nada [...]».

Fundamentos Frente a los conflictos externos con el país de Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

En la frontera Norte se han desarrollado cronológicamente los siguientes conflictos armados con el Ecuador:

- Campaña Militar de 1941, hechos de armas en Zarumilla y en la frontera Nor Oriental.

- Incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa, en el año 1978.
- Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor, en la Frontera Nor Oriental en 1981.
- Conflicto Armado en la Zona del Alto Cenepa, en el año 1995.

Haciendo una breve reseña sobre los incidentes armados fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, en vista que están relacionados no sólo en la secuencia de las acciones de armas sino porque los ex combatientes licenciados de 1978, en su mayoría también combatieron en 1981.

Incidentes Armados Fronterizos de 1978.-
Los incidentes armados fronterizos en el sub-sector del Alto Cenepa de 1978 se llevaron a cabo del 17 al 20 de enero de dicho año.

En los primeros días de dicho mes, la patrulla del Batallón de Infantería de Selva NI' 25 descubrió en territorio peruano, aproximadamente a 5 kilómetros al NorEste de la Guarnición Jiménez Banda, en faldas orientales de la Cordillera del Cóndor, un campamento construido con material de monte y un helipuerto. Ante este hecho, el Comando de la Quinta Región Militar ordenó la ocupación de estas instalaciones, hecho cumplido el 12 de enero de 1978. Suscitándose enfrentamiento armado al atacar las tropas ecuatorianas apoyadas con un helicóptero, resistiendo y repeliendo el ataque las tropas peruanas.

Ante la gravedad que podría alcanzar este incidente los gobiernos de Perú y Ecuador convinieron en llegar a un acuerdo. El 20 de enero de 1978 se realizó una reunión entre los jefes de ambos Ejércitos, poniendo fin al incidente producido.

Conflicto Armado de 1981.
Del 22 de enero al 20 de febrero de 1981 se produjo el conflicto armado de la Cordillera del Cóndor.

Ecuador, obstinado en desconocer la existencia de una frontera de 78 kilómetros sin demarcar en la Cordillera, elaboró un Plan de penetración en territorio peruano, a través de las pendientes. Con dicho propósito y en forma subrepticia, sus tropas empezaron a abrir trochas y transportar equipos y armamento.

Ecuador instaló tres puestos militares en tres quebradas peruanas, que le dieron dominio del Alto Cenepa y del Alto Comaina: el Machinaza, el Paquisha y el Mayaico. Dichos puestos militares 'ecuatorianos" tenían iguales nombres de otros tres puestos militares instalados en su territorio. Con este ardid de doble toponimia, Ecuador pensó que sería fácil denunciar una agresión del Perú en su "territorio".

Conflicto del Alto Cenepa de 1995.

Se desarrolló entre el 26 de enero y el 17 de febrero de 1995. Hubo infiltración ecuatoriana en nuestro territorio a través de la zona nor oriental de nuestro país.

La primera ofensiva en la guerra fue a través de los puntos de infiltración: Falsa Cueva de los Tayos, falsa Base Sur y falsa Tiwinza. Luego de una situación que permite que las Fuerzas Armadas peruanas recuperasen el territorio patrio, hubo una declaración bilateral de alto al fuego, la cual es rota el día 14 de febrero por Ecuador, pero inmediatamente vuelta a fojas cero.

Con las bases recuperadas, se firma la Declaración de Paz de Itamaraty entre ambos países el 17 de febrero, donde se obliga a las fuerzas ecuatorianas de nuestro territorio.

En este conflicto se lograron los objetivos trazados, puesto que la misión de desalojar al enemigo invasor se cumplió a cabildada, reafirmándose nuestra soberanía e integridad territorial. Se ejecutaron operaciones rápidas y violentas, además de ser la primera vez en la historia de América Latina que se realizó una operación helitransportada. Es decir, la calidad del soldado selvático se puso de manifiesto, demostrando otra vez su temple.

El Perú ha reconocido el sacrificio y la acción heroica, demostrada por los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y el personal civil participante en la Batalla de Zarumilla de 1941 y en el Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995, al promulgarse, a saber, las siguientes Leyes N° 2324, 23495, 24053, 24373, 24916, 25413, 25511 y 27124, que otorgan diversos beneficios a los excombatientes calificados que actuaron en dichas acciones de armas. Lamentablemente en el caso de los incidentes armados fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 no se ha dado un tratamiento similar.

Efectivamente las leyes y decretos supremos promulgados, en beneficio de los vencedores de la Campaña militar de 1941, otorgan beneficios a los que sufrieron invalidez temporal, permanente y a los familiares de los fallecidos, y a todos los ex combatientes que participaron y resultaron ilesos, sin excepción.

Por su parte, los dispositivos dictados a favor de los ex combatientes del conflicto armado del Alto Cenepa de 1995, consideran beneficios solamente para aquellos que han sufrido invalidez temporal, permanente, así corno a los familiares de los fallecidos en acción bélica.

Como se observa en las normas, cronológicamente dictadas, los beneficios y privilegios merecidamente otorgados a los ex combatientes de la Batalla de Zarumilla de 1941 y Conflicto del Alto Cenepa de 1995, no alcanzan a los ex combatientes de los Incidentes Armados Fronterizos de 1978 y del Conflicto

Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, lo cual constituye una iniquidad a ser corregida, considerando el principio de igualdad señalado constitucionalmente. Los hombres y mujeres que combatieron exitosamente en defensa de la soberanía e integridad territorial en los incidentes armados de 1978 y 1981, por equidad y justicia, merecen el mismo trato y honores, debiendo recibir los mismos beneficios que los demás combatientes de 1941 y 1995. A igual razón igual derecho.

Como un acto de camaradería y solidaridad, para no dejar desamparados y marginados a los ex combatientes de los incidentes armados fronterizos de 1978, se ha considerado en el artículo 4 0 del presente proyecto de Ley, que los beneficios considerados para los ex combatientes del conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, sean extensivos a dichos ex combatientes y aquellos combatientes del Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE RECONOCE COMO "DEFENSOR DE LA PATRIA" A LOS EX MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Articulo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene el objeto reconocer como "Defensor de la Patria" a los ex miembros combatientes de las fuerzas armadas que participaron en los conflictos internos contra el terrorismo en los años 1980 al 2000, y los conflictos externos con el país de Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Articulo 2.- Finalidad del Ley

La presente ley tiene la finalidad de establecer los mecanismos y procedimientos para que los ex miembros combatientes de las fuerzas armadas que participaron en los conflictos internos y los conflictos externos conforme al artículo precedente sean reconocidos como defensores de la Patria.

Artículo 3.- Alcance de la Ley.

La presente Ley reconoce y alcanza a los combatientes en la lucha contrasubversiva y el terrorismo comprendidos entre 1980 al 2000, y ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Artículo 4.- - De la Calificación como Defensor de la Patria.

Las Fuerzas Armadas del Perú en coordinación con el Defensor del Pueblo instalan una ***Comisión Especial de Calificación del Defensor de la Patria (CEC-DEP)*** *conformada de la siguiente manera:*

- *Dos (2) representantes del Ejército Peruano.*
- *Dos (2) representantes de la Marina de Guerra del Perú.*
- *Dos (2) representantes de las Fuerzas Áreas del Perú; y,*
- *Dos representas [sic] de la Defensoría del Pueblo.*

Articulo 5.- Instalación de la CEC-DEP

Instálese la Comisión Especial de Calificación del Defensor de la Patria (CEC-DEP) a través de Decreto Supremo por un periodo de dos (2) años.

Articulo 6.- De los informes finales de la CEC-DEC

La Comisión Especial de Calificación del Defensor de la Patria (CEC-DEP) emite los informes finales en un plazo máximo de seis meses de iniciada la calificación de los solicitantes que ingresen la solicitud de reconocimiento como Defensor de la Patria a través de los órganos competentes de las Fuerzas Armadas del Perú.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ÚNICA. - *La Presidencia del Consejo de Ministros — PCM, en coordinación con las Fuerzas Armadas del Perú, implementan las acciones necesarias para la reglamentación en un plazo de 60 días.*

9. PROYECTO DE LEY 4549/2022-CR

Estado situacional de la bonificación mensual otorgada a los Calificados Defensores de la Patria — CDP

Entre los métodos de interpretación de la Ley que dispone el operador jurídico para establecer el sentido y alcance de la ley interpretada, está el método gramatical, que consiste en dar el significado al término y frase de la Ley para expresar y comunicar su pensamiento; el método lógico, que consiste en realizar el análisis intelectual de las conexiones de las normas de la Ley que guardan entre sí o con otras sobre la misma materia; y, el método teleológico, que consiste en definir los elementos objetivos de la normativa de la Ley, entre otros.

Esos métodos permiten realizar acciones de interpretación, precisión de términos y aclaración de conceptos del texto de la normativa legal.

El Congreso de la República aprobó la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, publicada el 6 de enero de 1985; la Ley 25208, Otorgan beneficios a los ex combatientes vencedores de la Campaña Militar de 1941, publicada el 3 de mayo de 1990; la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, publicada el 23 de julio de 1995; la Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de/a Cordillera del Cóndor de 1981, publicada el 21 de julio de 2006; la Ley 30461, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, publicada el 16 de junio de 2016; la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y /995, publicada el 29 de noviembre de 2018; y, la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, publicada el 27 de abril de 2021, referidas a una bonificación económica mensual a los Calificados Defensores de la Patria — CDP de las campañas militares de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995.

Con el correr del tiempo se han presentado controversias, en torno a la aplicación de estas normas, por parte de las entidades públicas involucradas en hacer efectivo ese reconocimiento.

Al respecto, la aplicación y puesta en vigencia efectiva de esas leyes requieren que se interprete, precise y aclare la bonificación mensual que deben percibir los Calificados Defensores de la Patria - CDP que participaron en las campañas militares de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995 y que se deje sin efecto las normas que se opongan al otorgamiento de esa prestación económica.

Efectivamente, el cumplimiento de esa normativa legal debe realizarse en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a la igualdad ante la ley, derecho fundamental al que se le aplica el aforismo jurídico a igual razón igual derecho.

Así, se habrían presentado dos niveles de dificultades o controversias en relación a la aplicación y puesta en vigencia efectiva del derecho a percibir esa bonificación mensual que reciben los Calificados Defensores de la Patria — CDP en el marco de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, sus modificatorias y normativa vinculada, que tiene el carácter de extraordinario, permanente e intransferible.

El primero es a nivel del Poder Ejecutivo, por cuanto el Ministerio de Economía y Finanzas — MEF, mediante Oficio 4516-2018-EF/53.01 de 12 de diciembre de 20181, emitido por la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, considera que con la vigencia de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicada el 8 de diciembre de 2004, se derogó todo mecanismo de indexación o reajuste de esa bonificación, recalcando que a partir de enero de 2005 ningún beneficio económico puede ser reajustado, salvo que una norma con rango de Ley lo autorice expresamente.

También se menciona en ese Oficio 4516-2018-EF/53.01 que, a pesar de lo dispuesto en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, desde enero de 2005 se ha registrado 8 reajustes en la bonificación mensual que se otorga a los Calificados Defensores de la Patria — CDP como consecuencia del incremento del monto económico de la remuneración mínima vital — RMV, señalando que desde abril de 2018 en adelante no se permitirá otro reajuste.

El segundo es a nivel del Poder Legislativo, al aprobarse la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, publicada el 6 de diciembre de 2018, que dispone que los Calificados Defensores de la Patria —

CDP percibirán una bonificación equivalente a S/ 2,550.00 con carácter vitalicio e intransferible y que no es reajustable o indexable.

En ese sentido, se modifica el derecho al reajuste de la bonificación mensual que consiste en un monto económico equivalente a 3 remuneraciones mínimas vitales - RMV, establecida en la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en /a Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, y varía el monto de S/. 2,790.003, que deberían de recibir los Calificados Defensores de la Patria — CDP, a un monto económico fijo que consiste en S/ 2,550.00.

Tratándose de un derecho adquirido, correspondería una aplicación retroactiva de los beneficios dejados de percibir desde la fecha de vigencia de la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

El Congreso de la República, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales de interpretar, modificar y derogar normas legales, puede corregir esa anomalía y establecer los alcances de la aplicación de esa normativa legal mediante una Ley interpretativa a fin de aclarar, precisar y restituir los derechos que establece la normativa legal vigente a favor de los Calificados Defensores de la Patria — CDP.

Necesidad de precisar términos y frases de las normas que regulan la bonificación mensual de los Calificados Defensores de la Patria — CDP

La Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo; la Ley 25208, Otorgan beneficios a los ex combatientes vencedores de la Campaña Militar de 1941; la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, la Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981; la Ley 30461, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo; y, la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, han utilizado diversos términos y frases vinculados a los Calificados Defensores de la Patria - CDP que

es necesario precisar con la finalidad de uniformizar el sentido y alcances, de modo que no se genere controversias en su aplicación.

En efecto, en el artículo único de la Ley 25208, Otorgan beneficios a los ex combatientes vencedores de la Campaña Militar de 1941, se menciona como beneficiario de esa bonificación mensual al.....calificado como vencedor, lo cual, obviamente se debe entender como Calificado Defensor de la Patria - CDP; y que cuando se refiere a.... tres ingresos mínimos legales, debe entenderse como tres remuneraciones mínimas vitales - RMV.

En el literal b) del artículo 25 de la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, la frase ... no menor de tres remuneraciones mínimas (RM), entiéndase como referido a tres remuneraciones mínimas vitales; y, la frase .., en favor de los deudos de los fallecidos, se entiende como referido a los deudos de los fallecidos en combate, es decir de quienes dieron su vida en acción de armas o a consecuencia de acción de armas en las campañas militares de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, y no de quienes con posterioridad hayan fallecido por otras circunstancias.

Asimismo, en el artículo único de la Ley 30461, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, la frase ... igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995 calificados como Defensores de la Patria, entiéndase como ... igual derecho les asiste a los calificados como Defensores de la Patria de las campañas militares de los años 1978, 1981 y 1995.

Entonces, se interpreta que la ley cuando menciona a quienes participaron en esas campañas militares, al usar términos que difieren porque han sido dados en distintos tiempos, se está refiriendo en la actualidad a los Calificados Defensores de la Patria — CDP; cuando menciona a las remuneraciones mínimas se está refiriendo a las remuneraciones mínima vitales — RMV; y cuando menciona a los deudos de los fallecidos se está refiriendo a los fallecidos en combate, conforme corresponda y de manera independiente a cómo se los denomine.

Por otro lado, también se entiende que esa bonificación se otorga a los Calificados Defensores de la Patria — CDP que han participado en las campañas militares de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, sin que cada una sea excluyente de la otra, pues las denominaciones usan una conjunción que es inclusiva y no exclusiva, siendo claro que cada Calificado Defensor de la Patria — CDP ha podido participar en más de una de las campañas militares mencionadas, pudiendo recibir, entonces, más de una bonificación mensual.

Ello en el lineamiento de que la Ley tiene el alcance de otorgar más beneficios a quienes tuvieron mayor participación y sacrificio en la defensa de la integridad territorial. Entendiéndose, entonces, que igual derecho les asiste a los Calificados Defensores de la Patria — CDP como Defensores de la Patria por cada campaña militar en el que calificaron y participaron, por ser tiempo y espacio diferente.

Calidad de Ley Especial de las normas que regulan la bonificación mensual de los Calificados Defensores de la Patria — CDP

Tomando como criterio la pirámide del catedrático austriaco Hans Kelsen, referida para representar la jerarquía de las normas jurídicas, la Constitución Política del Perú, en el artículo 51, establece que: La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.

En ese sentido, la Constitución tiene supremacía sobre las Leyes, y éstas a su vez sobre las de menor jerarquía. En este punto, hay que distinguir las leyes orgánicas6 que regulan las estructuras y el funcionamiento de las entidades del Estado mencionadas por la Constitución, que tienen aplicación general. Luego están las leyes especiales' que se refieren únicamente a determinada categoría de personas o cosas, es decir a lo particular, singular o privativo de una materia, como es el caso de las leyes dadas para los Calificados Defensores de la Patria — CDP.

Así, se tiene que la Ley especial prevalece o prima sobre ley general en el ámbito jurídico que regula, y que su derogación, en caso de darse por ley general, debe ser expresa.

En esos lineamientos, la Constitución Política del Perú, en su artículo 103, establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas y ese es el caso de las citadas Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo; Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador; la Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, y demás conexas.

Al respecto, se debe tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0018-2003-AI/TC de 26 abril 2004 que dice que: En ese contexto, cuando el artículo 103° de la Constitución estipula que "pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la razón de la diferencia de las personas", no hace sino reclamar la objetividad,

la razonabilidad, la proporcionalidad y la racionalidad que deben fundamentar toda ley especial. Así, la Ley especial para su expedición debe cumplir con esos requisitos de objetividad, razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad, de lo contrario estarían transgrediendo el sistema jurídico y sería ilegal.

Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0010-2002- Al de 3 de enero de 2003 también trata las leyes especiales, en el sentido que éstas pueden establecer límites en el marco de aplicación de la ley general pero que éstos deben de deberse a una necesidad para llegar a una armonía para el ejercicio de otros derechos, aplicándose, además, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, su Fundamento 150 dice a la letra: Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan establecerse otra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizarse su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Si se aplica el test de razonabilidad y el test de proporcionalidad en cuanto a la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, se puede observar que cumple los requisitos para ser considerada una ley especial, al igual que la normativa legal vinculada.

Necesidad de aclarar lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria y la Sétima Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

El Decreto Legislativo 847, Disponen que las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del sector público se aprueben en montos de dinero, publicado el 25 de septiembre de 1996, establece en el artículo 1 que: Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente.

Ello se interpreta, en el caso aplicado a los Calificados Defensores de la Patria-CDP, en el sentido por el cual el beneficio económico que les corresponde por la normativa legal mencionada consiste en las tres remuneraciones mínimas vitales.

Al respecto, la Cuarta Disposición Transitoria y la Sétima Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señalan:

CUARTA.- Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público

1. Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

(...)

SÉTIMA.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y mecanismos de indexación

(...)

3. Déjase sin efecto todas las disposiciones legales o administrativas que establezcan mecanismos de referencia o indexación, percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente, las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones, dietas y en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y Entidades del Sector Público.

Al respecto, se observa que Sétima Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, recoge y repite lo dispuesto en el Decreto Legislativo 847, Disponen que las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del sector público se aprueben en montos de dinero.

Ante ello, es necesario aclarar que la bonificación mensual otorgada a los Calificados Defensores de la Patria — CDP pertenece a un régimen remunerativo no contributivo, por lo que no corresponde que el Ministerio de Economía y Finanzas — MEE aplique lo dispuesto por esa disposición transitoria a esa situación y que, más bien, debe proceder a autorizar, de conformidad con lo establecido en la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, los incrementos de la bonificación en función del aumento de las remuneraciones mínimas vitales — RMV que aprueba el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo o decreto de urgencia.

En esos lineamientos, cabe aclarar que la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, está referida a las remuneraciones económicas del sector público en general y que la Séptima

Disposición Transitoria está referida a los trabajadores y pensionistas de los órganos y entidades del sector público que pertenecen al régimen económico contributivo.

Así, lo dispuesto por Sétima Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, no es aplicable a la bonificación mensual otorgada a los Calificados Defensores de la Patria — CDP, ya que pertenecen al régimen económico no contributivo.

Empero, mediante Oficio 4516-2018-EF/53.018, el Ministerio de Economía y Finanzas — MEF, hace de conocimiento que con la vigencia de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se derogó todo mecanismo de indexación o reajuste, recalcando que a partir de enero de 2005 ningún beneficio o bonificación puede ser reajustado, salvo que una norma con rango de Ley lo autorice expresamente.

Pero ese punto de vista no puede aplicarse a la bonificación mensual otorgado a los Calificados Defensores de la Patria — CDP, pues se entiende que la indexación o reajuste de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, está referida a la remuneración y pensión del sector público perteneciente al régimen económico contributivo.

Es decir, la postura del Ministerio de Economía y Finanzas — MEF estaría violando el principio del derecho adquirido y la estabilidad jurídica que debe primar en todo Estado de derecho, por lo que se estaría incurriendo en nulidad absoluta al contravenir la Constitución Política del Perú en cuanto al derecho fundamental de la igualdad ante la Ley9 y a la regulación constitucional de la leyes especiales como es el caso de aquellas que otorgan el derecho la bonificación mensual a los Calificados Defensores de la Patria — CDP.

Necesidad de interpretar la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019

La Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, publicada el 6 de diciembre de 2018, dispone lo siguiente:

> **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA**
>
> Precisase que el personal calificado a que se hace referencia en la Ley 24053, Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, percibe una única bonificación equivalente a S/ 2 550,00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100

SOLES), mensuales, con carácter vitalicio e intransferible; monto que no es reajustable o indexable.

Los únicos beneficiarios son los registrados en el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas a la fecha de publicación de la presente Ley.

La implementación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

Al respecto, la resolución del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes 0003- 2013-PITTC, 0004-2013-PIfTC y 0023-2013-PIfTC de 3 de setiembre de 2015, señala en sus fundamentos 25, 28 y 29 lo siguiente:

Fundamento 25

Como antes se ha dicho, la ley presupuestaria no debe regular materias ajenas a las estrictamente presupuestales. Detrás de esta exigencia subyace el principio de especialidad al que está sujeta la Ley del Presupuesto. Al respecto, el Tribunal considera que se afecta el principio de especialidad y, por tanto, se incurre en un supuesto de inconstitucionalidad por anidar vicios de competencia cuando alguna disposición de la ley presupuestaria regula cuestiones que son ajenas a la materia presupuestaria, concretamente, extrañas al contenido normativo señalado supra, por lo que de presentarse este supuesto queda habilitada la posibilidad de que el Tribunal declare su inconstitucionalidad.

Fundamento 28

Por lo anterior, al tener vigencia solo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal respectivo (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre), cesa la vigencia de la Ley del Presupuesto al concluir dicho ejercicio presupuestal. En la misma línea, el artículo IX del Título Preliminar de la Ley 28411, General del Sistema Nacional de Presupuesto, precisa que "El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera [que] sea la fecha en la que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal".

Fundamento 29

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como igualmente es

inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia estrictamente presupuestaria.

Asimismo, la resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 02132- 2008-PA/TC de 9 de mayo de 2011, señala en su fundamento 17 lo siguiente:

> **Fundamento 17**
>
> Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138° de la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente aplicable.
> (...)

En ese sentido, la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, estaría incurriendo en vicio de inconstitucionalidad, y cualquier órgano jurisdiccional podría declararlo inaplicable en determinados casos en ejercicio del control difuso.

Necesidad de aprobar una norma que interprete el artículo 10 de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo

El Congreso de la República ha expedido leyes modificatorias y normativa legal vinculada a la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, y por los lineamientos expuestos, se torna de necesidad primordial realizar las precisiones y aclaraciones en una norma de rango de ley a fin de interpretar el texto de esa Ley, sus modificatorias y aquellas con las que tiene vinculación para su plena puesta en vigencia, conforme al Derecho y a la intención del legislador al momento de otorgar la bonificación mensual a los Calificados Defensores de la Patria — CDP.

En efecto, el artículo 10 de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, modificado por la Ley 31177,

Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, publicada el 27 de abril de 2021, dice a la letra:

> **Artículo 10**. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda.

El texto antes de esa modificación, decía:

> **Artículo 10**. Los beneficios de la presente Ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acreditó como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda.

Se observa que la última modificatoria de ese artículo 10, realizado por la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, agrega un nuevo grupo de beneficiarios de esa bonificación que son los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia.

Sin perjuicio de ello, se entiende que el artículo 10 de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, también extiende el beneficio de percibir la bonificación mensual a los excombatientes de los conflictos bélicos de 1933, 1978, 1981 y 1995 considerados Calificados Defensores de la Patria — CDP, además de aquellos que participaron en la campaña militar de 1941.

Por el principio de causalidad eficiente Causa causae est causa causati, debemos aceptar que subyace un nexo preciso entre dos causas, una inmediata y otra

mediata, que origina una controversia. Si se aplica a la problemática descrita, en torno a la bonificación mensual de los Calificados Defensores de la Patria — CDP, se puede decir que la causa inmediata es la interpretación errónea o insuficiente de las normas por parte de los funcionarios públicos y órganos jurisdiccionales; y, la causa mediata es el texto mismo de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo y sus modificatorias leyes y vinculantes, de la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019; y, de la Centésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del sector

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE INTERPRETA LA LEY 24053, DENOMINA "CAMPAÑA MILITAR DE 1941", A LOS GLORIOSOS HECHOS DE ARMAS CUMPLIDOS EN ZARUMILLA Y EN LA FRONTERA NOR ORIENTE Y DECLARAN EL 31 DE JULIO DÍA CENTRAL CONMEMORATIVO, SOBRE LA BONIFICACIÓN MENSUAL DE LOS CALIFICADOS DEFENSORES DE LA PATRIA

Artículo 1. Objeto de la Ley

Interpretase que los Calificados Defensores de la Patria (CDP), a quienes se refiere la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, perciben una bonificación mensual equivalente a tres (3) remuneraciones mínimas vitales (RMV) por cada campaña militar en la que participaron; y, que el monto de la remuneración mínima vital (RMV) es el vigente al momento del mes de pago, reajustándose a las variaciones que se den.

Ello sin perjuicio de cualquier otra remuneración, pensión o bonificación que perciban los beneficiarios.

Artículo 2. Implementación

Autorizase al Ministerio de Defensa (Mindef), sin demandar recursos adicionales al tesoro público, a realizar modificaciones en el nivel funcional y programático, de conformidad con sus competencias, a fin de atender el diferencial del pago de devengados y la bonificación mensual recibida de los Calificados Defensores de la Patria (CDP), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo.

Artículo 3.- Precisión de términos

Precisase que toda mención en la normativa legal sobre la bonificación mensual que trata el artículo 1 sobre los "calificados como vencedores", "personal calificado como Defensor de la Patria", "ex combatientes" u otros similares, entiéndase como referida a los Calificados Defensores de la Patria (CDP); toda mención referida a los "deudos de los fallecidos" u otros similares, entiéndase como referida a los deudos de los fallecidos en combate; y, toda mención sobre "tres ingresos mínimos legales" u otros similares, entiéndase como referida a "tres remuneraciones mínimas vitales (RMV)".

Artículo 4. Aclaración

Aclarase que lo dispuesto por la Cuarta Disposición Transitoria y Sétima Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

corresponde a las remuneraciones y pensiones pertenecientes al régimen contributivo del sector público y no es aplicable a la bonificación mensual otorgado a los Calificados Defensores de la Patria (CDP) por la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, por pertenecer al régimen no contributivo.

Artículo 5. Personal con invalidez y deudos de los fallecidos en combate

El beneficio del personal con invalidez permanente y los deudos de los fallecidos en combate, dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, se extiende a las campañas militares que hace referencia la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, siendo independiente de cualquier otra remuneración, pensión o bonificación que perciban los beneficiarios.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Medidas correspondientes

El Poder Ejecutivo dicta las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente de su vigencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación

Deróguese la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; y, la Centésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2022.

10. PROYECTO DE LEY 4601/2022-CR

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA NORMATIVA

Antecedentes

Desde el nacimiento de Perú y Ecuador como repúblicas independientes a principios del siglo XIX, y hasta el año 1998, ambos países mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes. Los problemas en la delimitación de fronteras entre ambos países tienen su punto de partida cuando la Gran Colombia (estado antecedente de Ecuador, encabezado por Bolívar) exigió a la naciente República del Perú la entrega de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, que eran peruanas de acuerdo con el principio de la libre determinación de pueblos, fundamentalmente. Disuelta en 1830 la Gran Colombia y nacido el Ecuador a la vida independiente, este país revivió en reiteradas ocasiones el viejo reclamo bolivariano hacia el Perú, llegando a agudizarse la relación entre ambos países en tres ocasiones (1941, 1981 y 1995) y desembocando en guerras generalmente cortas. El conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales peruano-ecuatorianas.

Durante los gobiernos del presidente peruano Augusto B. Leguía, el Perú definió los límites con casi todos sus países limítrofes: el Tratado Polo-Bustamante (con Bolivia) y el Tratado Velarde-Río Branco (con Brasil) en 1909; el Tratado Salomón Lozano (con Colombia) en 1922; y el Tratado de Lima (con Chile) en 1929.

Quedaba pendiente el arreglo limítrofe con Ecuador, país con el que, desde fines del siglo XIX, se habían visto frustradas diversas tentativas de solución ante la intransigencia ecuatoriana en reclamar para sí territorios peruanos. Pese a que en un principio el Ecuador aceptó someter el litigio al arbitraje del rey de España, en 1910 se rebeló contra el laudo que este monarca estaba a punto de dar, porque aparentemente iría contra sus intereses, ocasionando una grave tensión con el Perú que casi provoca un conflicto armado. Gracias a la mediación de la Argentina, Brasil y Estados Unidos, se evitó la guerra, pero el rey español se inhibió de pronunciar su sentencia, fracasando así la fórmula del arbitraje. En los años siguientes, el asunto permaneció estancado, debido a las diferencias insalvables entre ambas partes: el Perú insistía en el arbitraje internacional, mientras que Ecuador quería las negociaciones directas.

Es así que, los casi ciento setenta años que discurren entre 1830 y 1998, fueron testigos de escaramuzas armadas, guerras no declaradas y largos períodos de tensa paz; hechos que estuvieron causados en un problema de límites territoriales que permaneció sin solución durante ese lapso.

En la frontera Norte se han desarrollado cronológicamente los siguientes conflictos armados con el Ecuador:

- Campaña Militar de 1941, hechos de armas en Zarumilla y en la frontera Nor Oriental.
- Incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa, en el año 1978.
- Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor, en la Frontera Nor Oriental en 1981.
- Conflicto Armado en la Zona del Alto Cenepa, en el año 1995.

Haciendo una breve reseña sobre los incidentes armados fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, en vista que están relacionados no sólo en la secuencia de las acciones de armas sino porque los ex combatientes licenciados de 1978, en su mayoría también combatieron en 1981.

Incidentes Armados Fronterizos de 1978

Los incidentes armados fronterizos en el sub-sector del Alto Cenepa de 1978 se llevaron a cabo del 17 al 20 de enero de dicho año.

En los primeros días de dicho mes, la patrulla del Batallón de Infantería de Selva N° 25 descubrió en territorio peruano, aproximadamente a 5 kilómetros al Nor-Este de la Guarnición Jiménez Banda, en faldas orientales de la Cordillera del Cóndor, un campamento construido con material de monte y un helipuerto. Ante este hecho, el Comando de la Quinta Región Militar ordenó la ocupación de estas instalaciones, hecho cumplido el 12 de enero de 1978. Suscitándose enfrentamiento armado al atacar las tropas ecuatorianas apoyadas con un helicóptero, resistiendo y repeliendo el ataque las tropas peruanas.

Ante la gravedad que podría alcanzar este incidente los gobiernos de Perú y Ecuador convinieron en llegar a un acuerdo. El 20 de enero de 1978 se realizó una reunión entre los jefes de ambos Ejércitos, poniendo fin al incidente producido.

Conflicto Armado de 1981

Del 22 de enero al 20 de febrero de 1981 se produjo el conflicto armado de la Cordillera del Cóndor.

Ecuador, obstinado en desconocer la existencia de una frontera de 78 kilómetros sin demarcar en la Cordillera, elaboró un Plan de penetración en territorio peruano, a través de las pendientes. Con dicho propósito y en forma subrepticia, sus tropas empezaron a abrir trochas y transportar equipos y armamento.

Ecuador instaló tres puestos militares en tres quebradas peruanas, que le dieron dominio del Alto Cenepa y del Alto Comaina: el Machinaza, el Paquisha y el Mayaico. Dichos puestos militares "ecuatorianos" tenían iguales nombres de otros tres puestos militares instalados en su territorio. Con este ardid de doble toponimia, Ecuador pensó que sería fácil denunciar una agresión del Perú en su "territorio".

Las operaciones militares se desarrollaron desde el 22 de enero al 20 de febrero de 1981, incluyendo las amenazas y agresiones ecuatorianas al descubierto, pasando por las siguientes etapas:

Etapa del 22 de enero al 1 de febrero:

a) La conquista del PV-22 o Falsa Paquisha
b) La recuperación del PV-3
c) La recuperación del PV-4 Nuevo

Etapa del 2 al 18 de febrero:

a) Batalla diplomática entre los gobiernos peruano y ecuatoriano
b) Actividades de las fuerzas peruanas
c) Actividades de las fuerzas ecuatorianas Etapa del 19 al 20 de febrero:

d) Conquista del JB2
e) La captura del PV-4 A
f) Recuperación del PV-4 Antiguo

Conflicto del Alto Cenepa de 1995

Se desarrolló entre el 26 de enero y el 17 de febrero de 1995. Hubo infiltración ecuatoriana en nuestro territorio a través de la zona nor oriental de nuestro país.

La primera ofensiva en la guerra fue a través de los puntos de infiltración: Falsa Cueva de los Tayos, falsa Base Sur y falsa Tiwinza. Luego de una situación que permite que las Fuerzas Armadas peruanas recuperasen el territorio patrio, hubo una declaración bilateral de alto al fuego, la cual es rota el día 14 de febrero por Ecuador, pero inmediatamente vuelta a fojas cero.

Con las bases recuperadas, se firma la Declaración de Paz de Itamaraty entre ambos países el 17 de febrero, donde se obliga a las fuerzas ecuatorianas de nuestro territorio.

En este conflicto se lograron los objetivos trazados, puesto que la misión de desalojar al enemigo invasor se cumplió a cabildada, reafirmándose nuestra soberanía e integridad territorial. Se ejecutaron operaciones rápidas y violentas, además de ser la primera vez en la historia de América Latina que se realizó una operación helitransportada. Es decir, la calidad del soldado selvático se puso de manifiesto, demostrando otra vez su temple

El Perú ha reconocido el sacrificio y la acción heroica, demostrada por los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y el personal civil participante en la Batalla de Zarumilla de 1941 y en el Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995, al promulgarse, a saber, las siguientes Leyes N° 2324, 23495, 24053, 24373, 24916, 25413, 25511 y 27124, que otorgan diversos beneficios a los excombatientes calificados que actuaron en dichas acciones de armas. Lamentablemente en el caso de los incidentes armados fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 no se ha dado un tratamiento similar.

Efectivamente las leyes y decretos supremos promulgados, en beneficio de los vencedores de la Campaña militar de 1941, otorgan beneficios a los que sufrieron invalidez temporal, permanente y a los familiares de los fallecidos, y a todos los ex combatientes que participaron y resultaron ilesos, sin excepción.

Por su parte, los dispositivos dictados a favor de los ex combatientes del conflicto armado del Alto Cenepa de 1995, consideran beneficios solamente para aquellos que han sufrido invalidez temporal, permanente, así como a los familiares de los fallecidos en acción bélica.

Como se observa en las normas, cronológicamente dictadas, los beneficios y privilegios merecidamente otorgados a los ex combatientes de la Batalla de Zarumilla de 1941 y Conflicto del Alto Cenepa de 1995, no alcanzan a los ex combatientes de los Incidentes Armados Fronterizos de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, lo cual constituye una iniquidad a ser corregida, considerando el principio de igualdad señalado constitucionalmente. Los hombres y mujeres que combatieron exitosamente en defensa de la soberanía e integridad territorial en los incidentes armados de 1978 y 1981, por equidad y justicia, merecen el mismo trato y honores, debiendo recibir los mismos beneficios que los demás combatientes de 1941 y 1995. A igual razón igual derecho.

Como un acto de camaradería y solidaridad, para no dejar desamparados y marginados a los ex combatientes de los incidentes armados fronterizos de 1978, se ha considerado en el artículo 4° del presente proyecto de Ley, que los beneficios considerados para los ex combatientes del conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981, sean extensivos a dichos ex combatientes y aquellos combatientes del Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995.

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE LOS BENEFICIOS DE LA LEY N° 24053, AL PERSONAL MILITAR, LICENCIADOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE PARTICIPARON EN EL CONFLICTO CON EL ECUADOR DEL AÑO 1978, 1981 Y 1995

Artículo 1.-Objeto

La presente ley tiene por objeto extender los beneficios de la Ley N° 24053 al personal militar, licenciados y personal civil de las fuerzas armadas que participaron en los incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa del año 1978, en el conflicto de la cordillera del Condor del año 1981 y en el conflicto del Cenepa del año 1995.

Artículo 2.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad el reconocimiento social a los ex combatientes que participaron en los incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa del año 1978, en el conflicto de la cordillera del Condor del año 1981 y en el conflicto del Cenepa del año 1995 y el acceso a los beneficios establecidos en la Ley N° 24053.

Artículo 3.- Acceso a beneficios

El personal militar, licenciados y personal civil de las fuerzas armadas, comprendidos en el objeto de la presente ley, acceden a los beneficios económicos establecidos en la Ley N° 24053, sus normas modificatorias y ampliatorias, debiendo cumplir con los mismos requisitos y plazos determinados para su reconocimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA: Adecuación al Reglamento.

El Poder Ejecutivo, debe adecuar el Reglamento de la Ley N° 24053, en lo referente al otorgamiento de beneficios económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa del año 1978, en el conflicto de la cordillera del Condor del año 1981 y en el conflicto del Cenepa del año 1995, en el plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA: Exclusión
Los alcances de la presente excluyen al personal militar, licenciados y personal civil de las fuerzas armadas, que hayan recibido algún beneficio económico en el marco de la Ley N° 24053.
TERCERA: Derogatorias
Deróguense o modifíquense las normas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

11. PROYECTO DE LEY 4602/2022-CR

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA NORMATIVA

Antecedentes históricos

Las relaciones entre Perú y Ecuador estuvieron marcadas por el signo de la confrontación militar y diplomática, prácticamente desde el momento mismo de sus respectivas fundaciones como estados independientes hasta el año 1998, donde se mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes.

Los casi ciento setenta años que discurren entre 1830 y 1998, fueron testigos de escaramuzas armadas, guerras no declaradas y largos períodos de tensa paz; hechos que estuvieron causados en un problema de límites territoriales que permaneció sin solución durante ese lapso.

Los problemas en la delimitación de fronteras entre ambos países tienen su punto de partida cuando la Gran Colombia (estado antecedente de Ecuador, encabezado por Bolívar) exigió a la naciente República del Perú la entrega de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, que eran peruanas de acuerdo con el principio de la libre determinación de pueblos, fundamentalmente.

Disuelta en 1830 la Gran Colombia y nacido el Ecuador a la vida independiente, este país revivió en reiteradas ocasiones el viejo reclamo bolivariano hacia el Perú, llegando a agudizarse la relación entre ambos países en tres ocasiones (1941, 1981 y 1995) y desembocando en guerras generalmente cortas. El conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales peruano-ecuatorianas.

El Perú en el 1942 firmo el Protocolo de Río de Janeiro, tras sufrir una derrota militar el año anterior, se le impusieron a Ecuador las líneas que debían servir para demarcar la frontera con su triunfante vecino. No obstante, en el curso de los trabajos de demarcación que luego empezaron a realizarse, un importante accidente geográfico, aparentemente no descubierto hasta entonces, detuvo la tarea de fijación de los hitos fronterizos por parte de Ecuador bajo el argumento de la imposibilidad de ejecutar lo convenido por la existencia de un error sustancial. A partir de este momento, la conducción política del estado ecuatoriano en sucesivos gobiernos fijó como objetivo lograr una salida soberana al río Amazonas.

En 1995, entre los meses de enero y febrero, se produjo el conflicto del Alto Cenepa entre Perú y Ecuador, en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano (previamente disputado por ambos países hasta el protocolo de Río), que fue ocupado por el ejército del Ecuador desde 1994. El conflicto enfrentó a las fuerzas armadas del Perú y Ecuador. Nunca hubo declaración formal de guerra entre ambos países ni llegó a generalizarse por toda la frontera común.

El conflicto se resolvió con la intervención de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos —países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942—, lográndose terminar el proceso de demarcación de la frontera en los dos tramos pendientes: entre los hitos Cunhime Sur y 20 de noviembre, y entre los de Cuzumaza—Bumbuiza y Yaupi—Santiago. Esta demarcación fue hecha de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo arbitral de Braz Días de Aguiar.

Identificación de la problemática

Que, la Ley Nro. 26511 modificado por la Ley 27124, que reconoce la calidad de Defensor de la Patria a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y civiles que participaron como Combatientes en la Zona del Alto Cenepa durante el último conflicto con el Ecuador en el año 1995, establece un tratamiento legal discriminatorio en cuanto al otorgamiento de beneficios por igual sacrificio en esta Campaña Militar, concediendo mayores beneficios a aquéllos que como consecuencia de este Conflicto fallecieron o se encuentren con invalidez temporal o permanente, mientras que a los que felizmente quedaron en estado de ileso, se encuentran en desventaja y atravesando una difícil situación económica.

Que, el Decreto Supremo Nro. 010-DE-SG, que reglamenta la Ley Nro. 26511, modificada por la Ley N° 27124, además de consagrar el trato diferencial al personal militar, policial y civil que participó en la Campaña Militar del Alto Cenepa, hace una distinción innecesaria y confusa, entre combatientes, combatientes en la zona del Alto Cenepa y Defensores de la Patria, definiéndoles como tal, en este último caso, como combatientes de la Zona de Combate del Alto Cenepa, denominaciones que dificultan una debida aplicación de la Ley N° 26511, para un oportuno otorgamiento de beneficios.

Que, del texto de las citadas leyes, se tiene que dichos beneficios en su mayoría están dadas a favor de los deudos o familiares de los Defensores de la Patria que fallecieron; a los que resultaron con invalidez temporal o permanente y familiares directos de éstos; y, en forma restringida, a los demás Defensores de la Patria que participaron en forma directa en los acontecimientos bélicos antes referido, conforme se desprende de la última parte del Art. 07, así como del Art. 08 de la Ley Nro. 26511.

Es preciso indicar que la ley Nro 24053, brinda beneficios a los veteranos de guerra de la Campaña Militar de 1941, asimismo la ley Nro 30461, extiende el beneficio a los combatientes la campaña militar de 1933, 1978, 1981, 1995, calificados como defensores de la patria, pero este a su vez vulnera el principio de igualdad, ya que este principio demanda un trato similar para todas las personas que participan en un mismo hecho con el aforismo latino de eodem facto, aequo iure es decir a igual hecho, igual derecho y siendo excluidos de los beneficios que se otorga a un grupo y a otro no, vulnerado el principio de igualdad ante la ley, cabe señalar que este se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política del Perú en el numeral 2 del artículo 2.

Asimismo cabe mencionar, al separar a estos combatientes en tres grupos: Defensores de la patria, Combatientes del Cenepa y Combatientes movilizados, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, ya que la participación de todo el personal en el Teatro de Operación fue de vital importancia para el resultado final, ya que no hubieron grupos de mayor ni de menor importancia o valor, si bien es cierto el presupuesto necesario es insuficiente para otorgar los mismos beneficios a todos los combatientes, no por ello se puede vulnerar el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación o a la dignidad de los combatientes haciéndoles pensar que su presencia en la zona de frontera fue de menor importancia, siendo preciso señalar que en la estrategia de guerra convencional, el éxito radica en el buen empleo de sus fuerzas militares ya que todos cumplen una misión tal cual lo cumplieron las tropas peruanas con una participación activa habiendo cumplido su deber como lo fue la defensa de su área de responsabilidad, por ende deben ser calificados como defensores de la patria.

Que, es necesario dar un tratamiento legal equitativo, así como sucedió con los que participaron en la Campaña Militar en el Conflicto también con el Ecuador durante el año 1941. El Artículo Único de la Ley Nro. 25208, modificando los Arts. 5 y 7 de la Ley Nro. 24053, dispone que el personal calificado como vencedor de la "Campaña Militar de 1941" recibirá sin excepciones a través del Sector en el que prestó servicios durante el conflicto, una bonificación mensual equivalente a tres ingresos mínimos legales.

la propuesta de reforma es la siguiente:

MATA PALOS	03°40'57" = S	80°11'58" =0
PUERTO PIZARRO	03°30'07" = S	80°23'33" = O
PUNTA CAPONE	03°24'14" = S	80°18'38" = O
ISLA DEL AMOR	11°08'08" = S	77°33'22" = O
HITO GRAU	03°26'22" = S	80°13'18" = O
MATA MONOS	03°24'20" = S	80°18'16" = O
ZORRITOS	03°40'50" = S	80°40'41" = O
LA CRUZ	80°33'07.35" = N	80°36'09.87" = S

EL BENDITO	03°26'40" = S	80°20'06" = O
ISLA RONCAL	03°25'38" = S	80°17'28" = O
PUERTO GRAU	03°26'25.1" = S	80°13'26.1" = O
ALGARROBO	Latitud -3.43333	Longitud -80.2667
CHACRA GONZALES	Latitud -3.45889	Longitud -80.2414
PAPAYAL	03°34'18" = Sur	80°14'5" = Oeste
CANAL INTERNACIONAL	Latitud -3.43333	Longitud -80.233

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE LAS AREAS DE DELIMITACIÓN QUE CORRESPONDE A LA ZONA DE COMBATE DEL ALTO CENEPA QUE PARTICIPARON LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL Y CIVILES EN EL CONFLICTO CON EL ECUADOR DEL AÑO 1995

Artículo 1.-Objeto

La presente ley tiene por objeto extender y ampliar las áreas de delimitación que corresponde a la Zona de Combate del Alto Cenepa que participaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles en el conflicto con el Ecuador del año 1995.

Artículo 2.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad el reconocimiento a su alto valor patriótico por mantener incólume la soberanía de nuestro sagrado territorio y al mérito como ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en el año 1995, así como el otorgamiento de beneficios y derechos como defensores de la patria, que están previstos en la Ley N°26511.

Artículo 3.- De las áreas de delimitación

El espacio terrestre, acuático y aéreo que se ubica dentro de la Zona de Combate del Alto Cenepa, comprende los siguientes límites:

- *Por el Norte : Línea de frontera*
- *Por el Este : Pendientes Oeste de la cordillera de Campanquiz*
- *Por el Sur : Latitud Sur 3°33'08"*
- *Por el Oeste : Línea de frontera*
- *Por el Nor Oeste:*
  - *<u>Área de Posiciones Defensivas</u>*
    Zorritos, La Cruz, Puerto Pizarro, El Bendito, Punta Capone, Isla Roncal, Tres Marías, Puerto Grau, Mata Palos, Algarrobo, Chacra Gonzales, Papayal, Aguas Verdes, Chacra Colorada, Puerto Fasning, Canal Internacional Frontera Neutral aguas internacionales.
  - *<u>Conflicto con el Ecuador 1995</u>*
    Línea de Defensa la unidad de tarea 16.7.1 comprendida como base el Salto.
    Primera Línea de Defensa
    Mata monos, Mata Palo, Langostinera, Punta capone.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Adecuación al Reglamento.

El Poder Ejecutivo, debe adecuar el Reglamento de la Ley N° 26511, que reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador en la Zona del Alto Cenepa en 1995, en el plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

Segunda. Derogatoria

Deróguense o modifíquense las normas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

12. PROYECTO DE LEY 4738/2022-CR

ANTECEDENTES

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación — CVR, entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno por la "decisión del PCP-SL de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano", aplicando la metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR estima que cerca de 1.2 millones de peruanos fueron víctimas de este conflicto.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, presenta en su informe una cronología de los hechos ocurridos en 20 años de conflicto y define cinco etapas de este periodo de guerra interna que presentamos a continuación:

"1. El inicio de la violencia armada (mayo 1980-diciembre 1982)
Comprende desde la primera acción cometida por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso en Chuschi, Cangalla, el 17 de mayo de 1980 hasta la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 que dispone el ingreso de las fuerzas armadas a la lucha contrasubversiva en Ayacucho.

2 La militarización de/conflicto (enero 1983-junio 1986)
Abarca desde la instalación el 1 de enero de 1983 del Comando Político-Militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral, hasta la matanza de los penales del 18-19 de junio de 1986.

4. El despliegue nacional de la violencia (junio 1986-marzo 1989)
Es la etapa que va desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, con apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín.

5. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo 1989-setiembre de 1992)
Se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza y culmina el 12 de setiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán Reinoso y algunos de los principales dirigentes de su organización realizada por el GE/N.
6. Declive de la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (setiembre 1992-noviembre 2000)
Este último periodo comienza con la captura de Guzmán y otros líderes senderistas y se extiende hasta el abandono del país del ingeniero Alberto Fujimori".

Las acciones de Sendero Luminoso se centraron en el uso del terror, como señala la CVR en su informe Sendero Luminoso "No se proponían, pues, corregir algunas prácticas, leyes o instituciones, sino abolir por la fuerza todo el horizonte político dentro del cual los peruanos buscaban nuevas perspectivas.

No era su propósito principal vencer a las Fuerzas Armadas. ¡Su objetivo era destruir y reemplazare! sistema político democrático que estaba por retomar'.

"Respecto a la forma de combatir, el PCP-SL se mostró decidido a violar todas las leyes de la guerra desde el inicio de sus acciones. Por no hacer identificables a sus combatientes mediante un uniforme, no designar líderes públicos ni personeros para posibles negociaciones ni dejar abierta ninguna perspectiva de negociación de paz, llevó adelante una guerra sin respeto a la población civil ni cuartel para los policías o militares que eventualmente quedasen bajo su poder, una guerra que tenía por único objeto la derrota incondicional, la sumisión total o el exterminio de quienes se les opusieran, según el lema «salvo el poder, todo es ilusión». En efecto, realizó sistemáticamente actos infames como asesinatos, masacres y atentados terroristas. Por estas razones, no es posible reconocer al PCP-SL como «guerrilla» en el sentido de fuerza beligerante que dan a esta palabra las instituciones internacionales".

Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, fueron uno de los sectores de la sociedad que se vieron afectados de manera directa por las acciones terroristas de Sendero Luminoso, que como lo señala la CVR "llevó adelante una guerra sin respeto a la población civil ni cuartel para los policías o militares que eventualmente quedasen bajo su poder, una guerra que tenía por único objeto la derrota incondicional, la sumisión total o el exterminio de quienes se les opusieran".

De la consulta realizada al programa de inteligencia artificial chat GPT-4 5, sobre el personal militar y policial víctima del terrorismo entre los años 1980 al 2000, la información proporcionada señala que fueron 4 505 los efectivos que sufrieron algún tipo de violencia entre los integrantes de la Policía Nacional del Perú y las fuerzas armadas.

DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

El conflicto interno ha dejado profundas secuelas en la sociedad peruana y afectó a miles de personas que participaron en él, ya sea como combatientes, víctimas o testigos.

En el caso de los licenciados de las fuerzas armadas, estuvieron expuestos a la violencia, la violación de derechos humanos, la pérdida de vidas humanas y la destrucción de comunidades enteras. Los militares y policías vivieron en

condiciones adversas, expuestos a peligros constantes y enfrentando situaciones traumáticas en el campo de batalla.

Después de lograr la pacificación de nuestro país los licenciados de las fuerzas armadas han enfrentado dificultades para reintegrarse en la sociedad, muchos de ellos enfrentan estigmatización, discriminación y rechazo por una parte de la sociedad y han sufrido o sufren de traumas psicológicos y físicos como consecuencia de su participación en el conflicto, lo que dificulta su capacidad para reintegrarse plenamente en la vida civil y llevar una vida normal.

En este sentido las normas que se dictaron para beneficiar a los ex licenciados de las fuerzas armadas se dieron como una medida para contribuir a su proceso de reintegración y reconciliación con la sociedad. Proporcionarles apoyo económico, acceso a servicios de salud, programas de educación y capacitación laboral, entre otros beneficios, era con el objetivo de ayudarles a reconstruir sus vidas y superar las barreras que enfrentan en su reintegración social después de haber participado en el proceso de pacificación nacional.

A pesar de haberse dictado diversas normar para ayudarlos en su integración en la sociedad y permitir una vida digna para ellos y sus familias al finalizar la pacificación del país, hasta la fecha tienen problemas y dificultades para poder acceder a los beneficios que las normas les han asignado.

Uno de estos problemas se refiere a los requisitos que les solicita la Ley N°24053, que les asigna una remuneración mensual, debido a que para poder obtener este beneficio tienen que acreditar su condición de excombatientes de la lucha contra el terrorismo a través de un parte de guerra documento que no es posible que acrediten porque el conflicto armado interno no es considerado una guerra interna por parte del Estado.

El artículo 10 de la Ley N°24053, "Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo", que otorga beneficios a los excombatientes del conflicto de 1933, ha venido siendo ampliado en lo que corresponde a los beneficiarios, así se incluyó primero a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria en los conflictos armados con el vecino país del Ecuador y posteriormente a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031.

En los primeros casos los excombatientes corresponden a conflictos armados externos, donde corresponde emitir un parte de guerra, sin embargo, en el caso de los excombatientes de la lucha contra el terrorismo no se tiene registro de un documento con esa denominación, lo que hace que los beneficios de la Ley no puedan ser ejecutados en la práctica.

Por este motivo se presenta la propuesta normativa que tiene como objetivo en el artículo 10 lo siguiente:

> **"Articulo 1. Objetivo**
> La presente norma tiene como objetivo precisar los requisitos establecidos en el artículo 10° de la Ley 24053, Ley que denominan "Campaña Militar de 19412, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo".

La norma busca modificar el artículo 10 de la Ley 24053 para incorporar una aclaración que destrabe el cuello de botella que significa el solicitar parte de guerra a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo.

La finalidad de esta propuesta es viabilizar la ejecución de los beneficios que les asisten a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo lo que se indica en el artículo 2°.

> ***"Artículo 2.- Finalidad***
> *Hacer viable los beneficios otorgados a los excombatientes de las FFAA de 1980 al 2000 de la lucha contra el terrorismo".*

La norma fue publicada el año 2017 pero desde esa fecha no ha podido ser ejecutada por tener como requisito la presentación de un parte de guerra, en este sentido se hace necesaria la presente norma para viabilizar el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley 24503.

En este sentido se propone la modificación del artículo 10 de la Ley 24053, señalando con claridad que ex militares deben acreditar parte de guerra y quienes no de tal manera que pueda ser efectiva la asignación del beneficio que establece la norma.

> ***"Artículo 3. De la modificación***
> *Modificase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, con el siguiente texto:*
> *Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de/os años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,* ***que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad*** *y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo,* ***que acrediten su condición con una constancia de haber cumplido el Servicio Militar en Unidades, Bases, Dependencias de las Instituciones Armadas antisubversivas así como las unidades no antisubversivas que fueron***

movilizadas a zonas declarada en Estado de Emergencia o las que hayan hechos sus veces, así mismo que *hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración y sus modificatorias; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda"*

Han pasado seis años desde que se publicó la norma y hasta la fecha no hay ningún excombatiente de la lucha contra el terrorismo que haya sido beneficiado con la asignación mensual que dispone esta norma, por eso se requiere modificar la ley para hacerla viable.

Se está planteando que la oficina Central de Registro Militar emita una constancia que acredite la condición de excombatiente de los beneficiarios de la Ley N°24503, esto en virtud de lo que establece el artículo 16 de la Ley N°29248, Ley del Servicio Militar:

"Artículo 16.- De la Oficina Central de Registro Militar
La Oficina Central de Registro Militar depende del Ministerio de Defensa. Tiene a su cargo unificar la información generada por los órganos señalados en los literales b), o) y d) del artículo 15; y, asimismo, organizar y mantener el Archivo Central del Registro de Inscripción Militar. También consolida la información que le remita el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Está integrada por representantes de cada una de las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores."

Esta oficina tiene información que le remiten los Organismos de Reserva y Movilización de cada Institución de las Fuerzas Armadas, las Oficinas de Registro Militar de las Fuerzas Armadas y las Oficinas de Registro Militar de las Oficinas Consulares del Perú en el exterior.

Esto en concordancia con lo que señala una de las conclusiones del Informe N°013-2012-DP/ADHPD, denominado "Beneficios del personal militar y policial fallecido o que resultó con invalidez en el cumplimiento de su deber. Análisis normativo y problemas en su aplicación"

"*Las instituciones policial y militar exigen la presentación de diversos requisitos para el trámite de pensiones y otros beneficios, muchos de los cuales se encuentran en poder de las propias instituciones. Asimismo, hay requisitos que podrían obtenerse a partir de la suscripción de convenios interinstitucionales. La PNP y Fuerzas Armadas deberían facilitar a sus integrantes el acceso a sus derechos y beneficios a través de la exigencia de documentos que sean indispensables y necesarios para el mismo i".*

"Articulo 4. De la constancia de haber cumplido el Servicio Militar

La Oficina Central de Registro Militar emitirá una Constancia que acredite que el excombatiente de la lucha contra el terrorismo se encuentra inscrito en el Archivo Central del Registro de Inscripción Militar como licenciado".

En este sentido se plantea la presentación de la constancia de haber cumplido el servicio militar que debe emitir la Oficina Central de Registro Militar

También incluye la propuesta normativa un artículo para establecer prioridades de atención en el pago de lo que establece el artículo 5 de la Ley N°24503 que señala:

*"**Artículo 5.-** El personal calificado como vencedor de la "Campaña Militar de 1941" recibirá sin excepciones, a través del Sector en el que prestó servicios durante el conflicto, **una bonificación mensual equivalente a tres ingresos mínimos legales**, que se reajustará de acuerdo con las variaciones que experimente en el futuro." (negritas y subrayado nuestro)*

Siendo necesario que el sector defensa disponga de recursos, se propone establecer prioridades como se indica en el artículo 5:

Artículo 5. De las prioridades para la atención del beneficio a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo

Para efectos de otorgar el beneficio, al que se refiere el artículo 5° de la Ley 24053, a los excombatientes calificados como Defensores de la Democracia, de conformidad con la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en orden de prelación:

1.- Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a las clases de los años 1980 al 1989.
2.- Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a las clases de los años 1990 al 1999.
3.-: Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a la clase del año 2000.

Para el criterio de atención del pago de la bonificación mensual equivalente a tres ingresos mínimos legales a cada excombatiente de la lucha contra el terrorismo, se ha planteado que este se haga empezando con los licenciados que pertenecen a clases más antiguas, el tiempo que se disponga para esta atención será incorporado en el reglamento de la norma.

Los recursos para atender lo que señala el artículo 5 de la Ley N°24503 es con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda como lo establece el artículo 10 de la misma Ley.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE PRECISA LOS REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FFAA DE 1980 AL 2000 DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS QUE SE LES HA OTORGADO

Artículo 1°. Objetivo

La presente norma tiene como objetivo precisar los requisitos establecidos en el artículo 10° de la Ley 24053, Ley que denominan "Campaña Militar de 19412, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo.

Artículo 2.- Finalidad

Hacer viable los beneficios otorgados a los excombatientes de las FFAA de 1980 al 2000 de la lucha contra el terrorismo.

Artículo 3. De la modificación

Modificase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, con el siguiente texto:

> *"**Artículo 10**. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, **que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad** y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, **que acrediten su condición con una constancia de haber cumplido el Servicio Militar en Unidades, Bases, Dependencias de las Instituciones Armadas antisubversivas así como las unidades no antisubversivas que fueron movilizadas a zonas declarada en Estado de Emergencia o las que hayan hechos sus veces, así mismo que** hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración **y sus modificatorias**; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda"*

Artículo 4. De la constancia de haber cumplido el Servicio Militar

La Oficina Central de Registro Militar emitirá una Constancia que acredite que el excombatiente de la lucha contra el terrorismo se encuentra inscrito en el Archivo Central del Registro de Inscripción Militar como licenciado.

Artículo 5. De las prioridades para la atención del beneficio a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo

Para efectos de otorgar el beneficio, al que se refiere el artículo 5 0 de la Ley 24053, a los excombatientes calificados como Defensores de la Democracia, de conformidad con la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en orden de prelación:

1.- *Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a las clases de los años 1980 al 1989.*
2.- *Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a las clases de los años 1990 al 1999.*
3.-: *Excombatientes calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031 que pertenecen a la clase del año 2000.*

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - *El Ministerio de Defensa emite el reglamento respectivo para la implementación de la presente norma en un plazo no mayor a 60 días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el diario oficial El Peruano.*

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. - *Derogase o déjese sin efecto las normas que se opongan a la presente Ley.*

13. PROYECTO DE LEY 4979/2022-CR

Antecedentes al proyecto de ley

El 27 de abril de 2021 se publica en el diario oficial el peruano la Ley N°31177, Ley que otorga beneficios a los Excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha Contraterrorista, modificando la Ley N° 24053, ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nororiente; y que declara el 31 de julio día central conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, contemplando en su artículo primero, la incorporación a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista que participaron en el proceso de pacificación Nacional entre los años 1980-2000 a los alcances del artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nororiente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo. Así mismo, modificar el artículo 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, en reconocimiento por sus contribuciones en la pacificación nacional,

Y en su Artículo 2. Modifica el artículo 10 de la Ley N° 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio día central conmemorativo, modificándose con el siguiente texto: "Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados.

Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".

Es importante precisar que en los años que los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista prestaron el servicio militar, era obligatorio; y a pesar de su obligatoriedad, solo prestaban servicio militar, esa población más postergada, el de poca oportunidad para superarse en la vida, los más pobres, en su gran mayoría de nuestra selva, sierra y en mínima proporción, de la costa, es decir, estos jóvenes ubicados dentro una población vulnerable de sus derechos fundamentales, estaban obligados a luchar contra el terrorismo para devolvernos la paz y tranquilidad a los peruanos, cumpliendo muchas veces funciones más allá de la defensa nacional; y lo lograron, pero el Estado es indiferente con ellos al reconocerlos sus derechos ganados.

Mucho es la diferencia frente los países desarrollados, donde el servicio militar gozaba de derecho y salvaguardas inherentes al verdadero sentido de ciudadano, mientras en el Perú, el servicio militar se sometió a la exclusión social y política de aquellos años, al privarles de su libre desarrollo y bienestar, vulnerando el artículo 2, literal 1 y 2. de la Constitución Política del Perú; Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

El conflicto armado interno en nuestro país entre los años 1980-2000, que, actualmente existe los aún rezagos, se manifestó a través de la violencia ejercida por el Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso (PCP- SL) y posteriormente por la agrupación terrorista Túpac Amaru - MRTA, agrupaciones políticas y terroristas que declararon su lucha contra el Estado Peruano.

Frente a esto, el Estado respondió bajo un singular criterio de regulación, generándose la autorización de la intervención de las Fuerzas del Orden, inicialmente intervino la Policía Nacional, para posteriormente debido a que se rebasó su capacidad, preparación y logística, se dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, a través del Ejército del Perú y la Marina de Guerra, mediante el empleo de la fuerza, esto es, mediante operaciones militares que se materializan con cierto grado de represión y violencia contra estos grupos subversivos.

Estos grupos subversivos sembraren el terror y la violencia en las zonas de intervención, especialmente en la región de la sierra y selva, para finalmente tomar por asalto la capital del país (Lima), desatándose de esta manera lo que sería el periodo de mayor violencia de nuestra historia.

Este enfrentamiento afectó a miles de peruanos, siendo los más perjudicados aquellos pobladores de zonas rurales, andinas, campesinas, viéndose aquejados indiscriminadamente por parte de estas organizaciones subversivas que tenían como finalidad, tomar el poder a través de la lucha armada "del campo a la ciudad' y "reemplazar el viejo Estado", con el empleo de una doctrina desfasada y autoritaria; y por otro lado teníamos a las fuerzas del orden, este conflicto armado, género en la poblaciones una violencia prolongada y sistemática.

Los subversivos, en su afán de controlar e intentar "implantar un nuevo sistema" cometieron excesos en contra de la población civil, generando daños significativos a la propiedad, y especialmente en muchas víctimas inocentes, pérdidas de vidas humanas, recibiendo ataques a su integridad física, social y psicológica.

Ante esta situación de violencia y conflicto, fue lo que motivó a miles de personas a desplazarse de manera forzada hacia nuevos territorios en búsqueda de seguridad, los hogares, ya no contenía el sentido de seguridad necesario para vivir, en este contexto surge un fenómeno social denominado "desplazamiento' de ésta población especialmente a la capital del país, siendo esto una respuesta psicosocial de los pobladores de nuestro territorio andino, sobre todo de aquellas localidades como Ayacucho, Junín y Huancavelica, zonas de la selva y otros lugares.

Los hechos del conflicto armado en el Perú durante 1980 y 2000, fue un conflicto interno de mayor duración e impacto más extenso sobre el territorio nacional, además de haber cobrado la mayor cantidad de víctimas humanas, costos económicos y perjuicios sociales.

Cabe resaltar que las víctimas pertenecerían a la zona más afectada, aquella parte de nuestro territorio rural, andino, selvático, campesino, con poca presencia del estado, alejado, olvidado y poco educado.

La conjunción narco terrorista tuvo un aliado importante para conseguir las finanzas necesarias, para seguir con su demencial tarea de desestabilizar la nación, no existía, una decisión política firme por la consideración de las ONGs y los grupos de derechos humanos quienes eran la fachada política de las hueste subversivas, se tuvo que tomar acciones decididas entre el Comando conjunto y el gobierno del Presidente Fujimori, mediante el cierre del Congreso de la República, pudieron llevar a cabo certeras ofensivas donde fue importante el servicio de inteligencia para tomar las medidas necesarias y focalizar el blanco, de modo tal en el año 1992 cayó el líder de la insania Abimael Guzmán y de allí se inició la pacificación y la restauración de un estado de derecho solido que permitió al país insertarse al concierto internación de la economía y ser país elegible y con capacidad de que lleguen inversionistas de todas partes del mundo.

Ante esta situación finalmente con la intervención del Estado, mediante el empleo de las Fuerzas Armadas y con ella la implementación de acertadas estrategias de empleo de la fuerza, se logró pacificar el país; sin embargo, aún existen rezagos o remantes de terrorismo, o como se le denomine en su versión mutada de narcoterrorismo, es esta situación actual la que tiene que mejorar.

Estas actividades abarcaron casi la totalidad del país ocasionando alrededor de 70 mil muertes, además de enormes pérdidas materiales y destrucción de diversas infraestructuras, y afectándose a los sectores agrícolas, mineras, agroindustriales, comerciales, y especialmente se afectó la vida de miles de connacionales. Según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el 79% de los fallecidos fueron poblaciones campesinas.

Es necesario conocer el efecto destructivo que tiene el terrorismo sobre los derechos humanos y la seguridad para entender en su real dimensión el esfuerzo de quienes le hicieron frente. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha determinado que el terrorismo: Amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partes, pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que destruye el derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro las libertades fundamentales y tiene por objeto destruir los derechos humanos;

Tiene efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley, socava la sociedad civil pluralista, procura la destrucción de las bases democráticas de la sociedad y desestabiliza gobiernos legítimamente constituidos;

Tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas, así como con el transporte ilegal de material nuclear, químico o biológico, y también está relacionado con la posterior comisión de delitos graves como asesinatos, extorsiones, secuestros, agresiones, tomas de rehenes y robos;

Tiene consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los Estados, pone en peligro las relaciones de amistad entre los Estados, y tiene efectos perniciosos sobre las relaciones de cooperación entre los Estados, incluida la cooperación para el desarrollo, y

Amenaza la integridad territorial y la seguridad de los Estados, constituye una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

"El terrorismo es un problema de enorme magnitud con vertientes políticas, sociales, ideológicas e incluso económicas. Sus consecuencias humanitarias son desastrosas a causa de la naturaleza misma de las acciones terroristas cuya

finalidad es sembrar terror y para ello, por regla general, no selecciona sus 'blancos': cualquier persona puede resultar víctima de una acción terrorista".

Asimismo, toda esta barbarie terrorista, causó miles de muertes tanto en la población civil como en las instituciones policiales y armadas. "Según la CVR, el conflicto armado interno en su conjunto, entre 1980 y 200, dejó un saldo aproximado de 69,300 víctimas fatales, siendo unos 55 mil 440 varones y 13 mil 860 mujeres. La CVR también identificó que 891 asesinados eran niños y que Sendero Luminoso fue autor en 49.72% de esos casos".

Ante ese escenario, hubo miles de peruanos que se enrolaron al Servicio Militar Obligatorio, quienes junto a sus oficiales y suboficiales hicieron frente a esta amenaza y muchos de ellos perdieron la vida y otros quedaron con secuelas físicas y psicológicas para toda su vida, por la cual es digno de valorar sus sacrificios y esfuerzos y otorgarles reconocimiento como recibieron los excombatientes que lucharon en los conflictos armados de la guerra convencional (GC) de 1933,1941,1978, 1981 y 1995, toda vez que a lo largo de los últimos años, hubo un abandono sistemático por parte del Estado a los excombatientes de la lucha contraterrorista que pacificaron al país de las hordas terroristas entre los años del 80-2000, por lo cual, se hace necesario asistir sus beneficios en las leyes antes mencionadas.

Las disposiciones complementarias finales primera Calificación de los beneficiarios de la ley 31177, no puede atribuir como requisitos para ser beneficiarios de la presente ley a los excombatientes de la lucha contraterrorista, porque los mencionados excombatientes no lucharon en una guerra convencional (GC), si no, en una Guerra No Convencional (GNC), es decir, en una guerra interna.

Por tal motivo, no podrían adquirir un parte de guerra, por ser inexistente, dado a las circunstancias del teatro de operaciones en que lucharon los excombatientes de la lucha contraterrorista, por lo que, se debe obviar el mencionado requisito para el otorgamiento de los beneficios que la mencionada ley les asiste.

Es importante mencionar que, los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, cumplieron sus funciones de acuerdo a lo prescrito en los siguientes reglamentos:

a) Subversión (ME 41-7-A);
b) Del reglamento de servicio general en guarnición (ría 04-32), sección i, servicio general, ítems a), b), c), d), e), f) y g); sección ii del servicio en la plaza, literal a), b), c) y d);

c) Del reglamento general del servicio interior, tercera parte, funcionamiento del servicio de la unidad, capítulo 7, sección i (organización del servicio); sección ii

(servicio de día); sección iii. La sub unidad (compañía, batería o escuadrón de servicio).

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 2 Y LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 31177, LEY QUE OTORGA BENEFICIOS A LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA LUCHA CONTRATERRORISTA, MODIFICANDO LA LEY 24053.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 2 y la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley N° 24053.

Artículo 2. Modificación de la Ley N°31177

Se modifica el artículo 2 y la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N°31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley N° 24053, Ley que denomina "campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nororiente; y que declara el 31 de julio día central conmemorativo; y la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, en los siguientes términos:

> ***"Articulo 10.-*** *Los Beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los Ex Combatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los Ex Combatientes de los años 1978, 1981 y 1995 calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y a los Ex-Combatientes de la de las Fuerzas Armadas de la Lucha Contraterrorista, que hayan sido calificados como Defensores de la Democracia mediante la Ley N° 31291, Ley que modifica el artículo 1 de la Ley N°29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".*
>
> ***"Para el otorgamiento de los beneficios****, a los Ex-Combatientes de las Fuerzas Armadas de la Lucha Contraterrorista, no es necesario que cuenten con parte de guerra".*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley.

"Encargase al consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley N° 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración, ***la calificación, reconocimiento como Defensores de la Democracia a los Excombatientes de las Fuerzas Armadas de la Lucha Contraterrorista; Para el otorgamiento de los beneficios****, a los Ex-Combatientes de las Fuerzas Armadas de la Lucha Contraterrorista,* ***no es necesario que cuenten con parte de guerra".***

14. PROYECTO DE LEY 5032/2022-CR

Antecedentes

La Ley N°24053, "Ley que denomina «Campaña Militar de 1941», a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo', establece una serie de

beneficios para el Personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y otros al servicio del estado, calificados como "Vencedores de la Campaña de 1941" y a los excombatientes del conflicto de 1995 que el Comando Conjunto acreditó como "Defensores Calificados".

El artículo 5 de la precitada Ley, modificado por la ley N° 252082, establece que el personal calificado como "Vencedor de la 'Campaña Militar de 1941" debe recibir sin excepciones, a través del Sector en el que prestó servicios durante el conflicto, una bonificación mensual equivalente a tres (03) "Ingresos Mínimos Legales', que se reajustará de acuerdo con las variaciones que experimente en el futuro.

Actualmente el "Ingreso Mínimo Legal recibe la denominación de «Remuneración Mínima Vital', que asciende a la suma de S/930.00 (Novecientos Treinta y 00/100 Soles), dispuesta mediante DS N° 004-2018-TR.

La Ley N° 30461, modificó el artículo 10 de la Ley N° 24053, haciendo extensivos los beneficios de la Ley N° 24053 a los a los excombatientes a los de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como **"Defensores de la Patria"** por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La Ley N°26511, modificada por la Ley 27124, reconoce como "Defensores de la Patria" a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policia Nacional del Perú y civiles que hayan participado como combatientes en la zona del Alto Cenepa durante el último conflicto con el Ecuador en 1995, así como a aquéllos que a partir deli de marzo de 1995, hayan fallecido o se encuentren con invalidez temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa.

La Ley N° 28796, solo reconoce la calidad de Defensores de la Patria al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y Conflicto Armado de la cordillera del Cóndor de 1981.

DESIGUALDAD INCONSTITUCIONAL:

Se puede apreciar de los antecedentes normativos que, los beneficios establecidos en la Ley N° 30461, que modificó el artículo 10 de la Ley N° 24053, haciendo extensivos sus beneficios a los excombatientes a los de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como "Defensores de la Patria" por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no comprenden a los denominados 'Combatientes en la Zona del Alto Cenepa", generando una situación inequitativa, desigual e inconstitucional, ya que excluye a estos últimos, pese a estar en las misma condiciones que los anteriores.

Asimismo, dicha Ley dejó intacta la diferencia injustificada que hace el DS N° 010-DE-SG, Reglamento de la Ley 26511, que, en su artículo 3 0 , incisos f) y h), arbitrariamente, clasifica a los `Combatientes", en dos grupos: "Combatientes en la Zona del Alto Cenepa" y 'Defensores de la Patria":

> ***"Inciso f).*** *"Combatiente en la Zona del Alto Cenepa': Se considera como tal a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles, que participaron en forma activa en apoyo a las operaciones que se desarrollaron durante el Conflicto en la Zona del Alto Cenepa, propuesto por su instituto y calificado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas"*
>
> ***"Inciso h).*** *'Defensores de la Patria': Son los miembros de las Fuerzas Armadas. Policía Nacional y Civiles, combatientes de Zona de Combate del Atto Cenepa o que cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento, propuestos por los Institutos Armados y calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.*

Dicha diferencia entre los conceptos de 'Defensor de la Patria" y "Combatiente", genera una situación inconstitucional de inequidad y discriminación en el trato, al mismo tiempo que una inconsistencia jurídica, por cuanto el Reglamento de la Ley no puede limitar ni restringir los derechos y reconocimientos establecidos en la Ley reglamentada ni en otras conexas.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha referido en el fundamento 4° de la sentencia del 30 de noviembre del 2011, Expediente EXP, N,° 03525-2011-PA/TC.

> *4. "Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha ocupado del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad. Al respecto ha señalado que*
>
> *[...] **La igualdad como derecho fundamental** está consagrada por el artículo 20 de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: • (...) toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación,*
>
> *Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que **la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma**: mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe*

apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

Por otro lado, no resiste la menor consideración social, política e histórica, que se deje de lado y discrimine de la forma en que se ha venido haciendo, por más de 25 años, al amparo de dicho reglamento y normas anteriores, a los combatientes en la Zona del Alto Cenepa, que fueron determinantes en el logro de la paz con el vecino país del Ecuador y cuyo conflicto culminó con la Declaración de Paz de Itamaraty.

Es de tenerse presente que el propio Poder Ejecutivo, a través de las palabras del hoy Premier, entonces Ministro de Defensa, General Welter Martos, durante la ceremonia de homenaje, del 2 de febrero del presente año, dirigiéndose a los veteranos combatientes, afirmó: 'Ese Perú decidido y frontal son ustedes, señores gigantes del Cenepa. Son los que, a su paso, sembrado de minas, acosados por la sinrazón y la naturaleza, trazaron el limite final de una larga historia de incomprensiones, de ambiciones, que no tenían cabida en la legalidad". Sin embargo, de una otra forma, se les viene escatimando los mínimos reconocimientos de orden material y de subsistencia que les corresponde.

El texto legal se detalla a continuación:

Ley que incorpora a los excombatientes de la zona del Alto Cenepa durante el conflicto con el Ecuador en 1995, calificados como combatientes en la zona del alto Cenepa, dentro de los alcances del artículo 10 de la ley N° 24053, "Ley que denomina «Campaña Militar de 1941», a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor oriente; y declaran el 31 de julio Día Central conmemorativo".

Artículo 1.- Objeto de la Ley.
La presente ley tiene por objeto incorporar a los excombatientes de la Zona del Alto Cenepa durante el conflicto con el Ecuador en 1995, calificados como Combatientes en la Zona del Alto Cenepa, dentro de los alcances del artículo 10 de la Ley N°24053, "Ley que denomina «Campaña Militar de 1941», a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo"; en reconocimiento a su contribución a la defensa de la soberanía nacional.

Artículo 2°.- Modificación del artículo 10 de la Ley 24053, "Ley que denomina «Campaña Militar de 1941», a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de julio Día Central Conmemorativo".
Modificase el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Ley que denomina «Campaña Militar de 1941», a los gloriosos hechos de armas cumplidos en

Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declara el 31 de julio Dia Central Conmemorativo', conforme al siguiente texto:

> **"Artículo 10. Los beneficios de la presente**
> Ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados, Igual derecho asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria **o Combatientes en la Zona del Alto Cenepa**, por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".

Artículo 3.- Cumplimiento.
El cumplimiento de la presente Ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público

Artículo 4.- Exclusión.
La presente ley no es de aplicación a quienes tengan sentencia condenatoria firme por delito doloso,

Artículo 5.- Derogatoria.
Deróguese o déjese sin efecto cualquier otra norma que se oponga a la presente.
Lima, 04 de noviembre de 2020.

15. PROYECTO DE LEY 5167/2022-CR
FUNDAMENTOS

Desde 1980 hasta 1992 el Estado peruano y la población peruana fueron víctimas de inhumanas acciones que provocaron muerte, daños y destrucción de la propiedad pública y privada producida por actos violentos de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que adoptaron como parte de sus acciones la utilización de artefactos explosivos contra militares y población civil.
La colocación y explosión de artefactos explosivos, así como también la amenaza de cometer tal acto delictivo por parte de las organizaciones terroristas mencionadas, creó en el Estado la necesidad de contar con una Unidad Policial especializada y capacitada para realizar las labores de búsqueda, localización, desactivación, neutralización y desbaratamiento de artefactos explosivos o incendiarios terroristas, creándose inicialmente la Especialidad Policial de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX). Su riesgosa misión se refleja en su lema "El primer error es el último".
La Unidad de Desactivación de Explosivos — UDEX, inicia sus actividades en el año 1981, época en que los grupos terroristas Sendero Luminoso (PCP SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), colocaban artefactos explosivos (trapos rojos con explosivos o paquetes sospechosos, artefactos explosivos y/o

incendiarios, material de guerra, granadas, coches bomba, cazabobos, trampas anti movimiento, etc.), realizaban agitación y propaganda armada, sabotaje y aniquilamientos utilizando explosivos en todo el país, especialmente en la Capital de la República, con la intención de desequilibrar el sistema democrático del país y tomar el poder por la vía de las armas para suplantarlo por otro sistema, de acuerdo a la ideología que propugnaron. La unidad fue creada mediante Resolución Directoral Nº 909-2009 DIRGEN—PNP, instaurándose como fecha de creación el 26 de agosto 1981.

Dichas acciones terroristas trajeron como consecuencia la pérdida de más de 30 mil vidas, casi 70,000 víctimas y daños a la propiedad por más de 22 mil millones de dólares. Es importante hacer mención que los ataques terroristas, indiscriminados y desproporcionados contra la población y bienes civiles, estuvieron dirigidos principalmente a infundir terror en la población civil.

La Unidad de Desactivación de Explosivos — UDEX tiene como misión la búsqueda, localización, desactivación, neutralización y/o desbaratamiento de artefactos de naturaleza explosiva e incendiaria, así como las amenazas de tipo nuclear, radiológica, bacteriológica o química (NRBQ), contando con hombres y mujeres que contrajeron un compromiso con la Sociedad asumiendo esta arriesgada, intensa y sacrificada labor que puede desarrollar un Policía: realizar su trabajo donde la entrega y la responsabilidad son totales y la profesionalidad y nivel potencial de riesgo son un reto sin parangón del personal que ha prestado, y presta servicios en ésta unidad policial.

Desde su creación, la UDEX se ha ganado el reconocimiento de la ciudadanía y de unidades similares en el extranjero, por la labor impecable y profesional que ha realizado en todas sus intervenciones siendo considerada como una de las unidades policiales con un alto grado de aceptación ciudadana. Posicionamiento social realizado con el esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo de sus efectivos que, incluso, pusieron en riesgo su integridad física, en vista de que muchas veces el personal de TEDAX actuó sin el equipamiento ni herramientas requeridas.

La Unidad de Desactivación de Explosivos — UDEX salvó gran cantidad de vidas humanas en los años duros del terrorismo por la capacidad de cada uno de sus hombres, teniendo como consecuencia que muchos de sus integrantes resultaron con serias lesiones (ciegos, mutilados, grave daño a los oídos, traumas sicológicos, entre otros) y la consiguiente pérdida de sus vidas, para lograr la pacificación y proteger a la sociedad de la insania de los terroristas. Más de diez mil intervenciones desactivando artefactos explosivos terroristas (coches bomba, material de guerra, artefactos explosivos e incendiarios); entre los cuales se encuentran más de 20 coches bomba, proyectiles o municiones militares, así como la destrucción de diversos explosivos de uso civil, son el resultado de más de 30 años de duro trabajo. En la ciudad de Lima, en la época del terrorismo las intervenciones de desactivación de explosivos muchas veces llegaban a más de 20 por día.

Es deber del Estado resaltar y reconocer la labor del personal policial, por haber demostrado excelente capacidad profesional, abnegación, arrojo y valor a toda

prueba, a riesgo de su integridad física, para que sirva de ejemplo y estímulo a los integrantes de la PNP, por lo que se debe reconocer labor silenciosa pero valiente de los policías de la UDEX PNP que se enfrentaron a diario al terrorismo, y continúan haciéndolo, con explosivos, que involucran desde llamadas anónimas amenazantes, paquetes y vehículos sospechosos, hasta artefactos explosivos e incendiarios reales, coches bomba, entre otros, a pesar de que no siempre contaron con el equipo de protección adecuado, lo que hizo que sus intervenciones sean más valoradas.

Reconocer al personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos — UDEX que combatió y prestó sus servicios durante los años de 1981 hasta 1992, por su demostrado profesionalismo y capacidad como expertos Técnicos en Desactivación de artefactos explosivos en claro combate al terrorismo.

Cuando se trata de amenazas de colocación de artefactos explosivos, éstas se consideran reales hasta culminar el registro de la instalación y descartar la presencia de explosivos. En los casos de Artefactos Simulados, éstos son sospechosos de ser artefactos explosivos reales hasta que no se realice la apertura del paquete, mientras tanto se consideran artefactos explosivos reales.

Se debe tener en consideración que no se pudo llevar un registro real de las intervenciones debido a que no se contaban con los medios tecnológicos actuales y porque se incrementaron en tal magnitud que era muy difícil llevar un registro completo y detallado.

Es importante resaltar que, debido a la incertidumbre y constantes amenazas de colocación de AEI en las diferentes instituciones y organizaciones del sector público y privado, la UDEX era solicitada para dictar charlas y conferencias acerca de las medidas de seguridad y prevención para evitar daños contra el personal que laboraba en dichas entidades.

Presentan la siguiente propuesta Legislativa:

LEY QUE DECLARA HÉROES DE LA DEMOCRACIA A LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS - UDEX - PNP

Articulo1. Objeto de la Ley.

El objeto de la Ley es modificar el primer párrafo del Artículo 1° de la Ley NP 29031, "Ley que Instituye el Día de/os Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente."

Artículo 2. Finalidad

La finalidad de la ley es reconocer a los miembros policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo con explosivos, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia.

Artículo 3. Modificación del Artículo 1° de la Ley N° 29031.

Modifíquese el primer párrafo del artículo 1° de la Ley 29031, "Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente", bajo los términos siguientes:

> ***"Artículo 1°. Objeto de la Ley***
>
> *Institúyanse el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo*

Militar Chavín de Huántar, ***a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, a los miembros policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo con explosivos, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia****, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.*

(...)

Artículo 4°. Reconocimiento

Reconócese la calidad de Héroes de la Democracia al personal y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, creado el 26 de agosto de 1981, quienes han participado en la lucha contrasubversiva desactivando artefactos explosivos, cartas y coches bomba, así como atendiendo múltiples amenazas de colocación de artefactos explosivos, colaborando con riesgo de sus propias vidas e integridad física en la pacificación nacional.

Artículo 5°. Otorgamiento de la Medalla al Defensor de la Democracia

Otorgase a los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, reconocidos como Héroes de la Democracia, la Medalla al Defensor de la Democracia establecida en el artículo 4 de la Ley N* 30655, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración.

Artículo 6°. Beneficios

Otorgar a los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, reconocidos como Héroes de la Democracia, así como a sus hijos, cónyuge o concubina, por igualdad, los derechos contemplados en el artículo 5 de la Ley N° 30655.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación de los parámetros técnicos.

La aplicación de la presente ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

16. PROYECTO DE LEY 5192/2022-CR

En esta propuesta legislativa, se pretende honrar el valioso compromiso de servicio a la patria por los soldados de nuestra nación. Para lograrlo, es fundamental explorar la secuencia histórica de los enfrentamientos bélicos que han tenido lugar en nuestra frontera norte con Ecuador, reconociendo su importancia hasta la actualidad en el fortalecimiento de la democracia con la lucha contra el terrorismo en momentos de estado de emergencia.

- Campaña Militar de 1941, hechos de armas en Zarumilla y en la frontera Nor Oriental.
- Incidentes fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa, en el año 1978.

- Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor, en la Frontera Nor Oriental en 1981.
- Conflicto Armado en la Zona del Alto Cenepa, en el año 1995.

Al realizar un resumen conciso de los enfrentamientos armados en la región fronteriza del Sub Sector del Alto Cenepa en 1978 y el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor en 1981, se evidencia que estos incidentes están vinculados tanto en la secuencia de los eventos militares como en la participación de ex combatientes licenciados. En su mayoría, aquellos que participaron en los combates de 1978 también estuvieron involucrados en los acontecimientos de 1981.

Incidentes Armados Fronterizos de 1978.

Los conflictos armados en la frontera del sub-sector del Alto Cenepa en 1978 tuvieron lugar del 17 al 20 de enero de ese año.

A principios de ese mes, la patrulla del Batallón de Infantería de Selva 25 descubrió un campamento y un helipuerto construidos en territorio peruano, aproximadamente a 5 kilómetros al noroeste de la Guarnición Jiménez Banda, en las laderas orientales de la Cordillera del Cóndor. En respuesta a este descubrimiento, el Comando de la Quinta Región Militar ordenó la ocupación de estas instalaciones el 12 de enero de 1978. Durante esta ocupación, se produjeron enfrentamientos armados cuando las tropas ecuatorianas atacaron con el apoyo de un helicóptero, y las tropas peruanas resistieron y repelieron el ataque. Dada la gravedad del incidente, los gobiernos de Perú y Ecuador acordaron buscar una solución. El 20 de enero de 1978, los líderes de ambos ejércitos se reunieron, poniendo fin al incidente.

Conflicto Armado de 1981.

Desde el 22 de enero hasta el 20 de febrero de 1981, tuvo lugar el conflicto armado en la Cordillera del Cóndor.

Ecuador, persistente en su negativa de reconocer una frontera de 78 kilómetros sin demarcar en la Cordillera, elaboró un plan para infiltrarse en territorio peruano a través de las pendientes. Con este propósito, de manera encubierta, sus tropas comenzaron a abrir senderos y transportar equipos y armamento.

Ecuador estableció tres puestos militares en tres quebradas peruanas, conocidos como Machinaza, Paquisha y Mayaico. Estos puestos militares "ecuatorianos" compartían los nombres de otros tres puestos militares ubicados en su propio territorio. Con este engaño de topónimos duplicados, Ecuador esperaba que fuera fácil acusar a Perú de una agresión en su supuesto "territorio". Las operaciones militares se desarrollaron desde el 22 de enero hasta el 20 de febrero de 1981, y

abarcaron tanto amenazas como agresiones ecuatorianas a plena vista, atravesando las siguientes etapas:

Etapa del 22 de enero al 1 de febrero:

a) La conquista del PV-22 o Falsa Paquisha
b) La recuperación del PV-3
c) La recuperación del PV-4 Nuevo

Etapa del 2 al 18 de febrero:

a) Batalla diplomática entre los gobiernos peruano y ecuatoriano
b) Actividades de las fuerzas peruanas
c) Actividades de las fuerzas ecuatorianas

Etapa del 19 al 20 de febrero:

a) Conquista del JB2
b) La captura del PV-4 A
c) Recuperación del PV-4 Antiguo

Conflicto del Alto Cenepa de 1995.

El conflicto armado tuvo lugar desde el 26 de enero hasta el 17 de febrero de 1995, cuando hubo una infiltración ecuatoriana en nuestro territorio a través de la zona nororiental del país. La primera ofensiva en esta guerra se llevó a cabo mediante la infiltración en puntos estratégicos, como la Falsa Cueva de los Tayos, la falsa Base Sur y la falsa Tiwinza, Sin embargo, las Fuerzas Armadas peruanas lograron recuperar el territorio nacional después de una situación que lo permitió. Posteriormente, se declaró un alto al fuego bilateral, que fue violado por Ecuador el 14 de febrero, pero rápidamente se volvió a la situación anterior.

Una vez que se recuperaron las bases, se firmó la Declaración de Paz de Itamaraty el 17 de febrero, en la cual se obligó a las fuerzas ecuatorianas a retirarse de nuestro territorio. En este conflicto, se lograron los objetivos establecidos, ya que se cumplió con éxito la misión de expulsar al enemigo invasor, reafirmando así nuestra soberanía e integridad territorial. Se llevaron a cabo operaciones rápidas y contundentes, destacando el hecho de que se realizó la primera operación helitransportada en la historia de América Latina. Esto puso de manifiesto la calidad y el valor de nuestros soldados de la selva, demostrando una vez más su determinación y fortaleza. Se reconoce el sacrificio y heroísmo de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en la Batalla de Zarumilla de 1941 y en el Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995. Para ello, se promulgaron diversas leyes y decretos, como las Leyes 2324, 23495, 24053, 24373, 24916, 25413, 25511 y 27124, que otorgan

diferentes beneficios a los excombatientes calificados que estuvieron involucrados en dichos eventos bélicos. Lamentablemente, los incidentes armados fronterizos en el Sub Sector del Alto Cenepa de 1978 y el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 no han recibido un tratamiento similar. En efecto, las leyes y decretos supremos promulgados en beneficio de los vencedores de la Campaña militar de 1941 ofrecen beneficios a aquellos que sufrieron invalidez temporal o permanente, así como a los familiares de los fallecidos. Además, se otorgan beneficios a todos los excombatientes que participaron en dichos eventos y resultaron ilesos, sin excepción.

Por su parte, las disposiciones establecidas en favor de los excombatientes del Conflicto Armado del Alto Cenepa de 1995 únicamente contemplan beneficios para aquellos que han sufrido invalidez temporal o permanente, así como para los familiares de los fallecidos en combate. Al analizar las normativas emitidas en orden cronológico, se observa que los beneficios y privilegios otorgados merecidamente a los excombatientes de la Batalla de Zarumilla de 1941 y del Conflicto del Alto Cenepa de 1995 no se extienden a los excombatientes de los Incidentes Armados Fronterizos de 1978 y del Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981. Esta situación constituye una injusticia que debe ser corregida, en consonancia con el principio de igualdad consagrado constitucionalmente. Los hombres y mujeres que lucharon exitosamente en defensa de la soberanía y la integridad territorial durante los incidentes armados de 1978 y 1981 merecen recibir el mismo trato y honores, así como los mismos beneficios que los demás combatientes de 1941 y 1995. Es una cuestión de equidad y justicia, donde a igual motivo debe corresponder igual derecho.

FUNDAMENTACIÓN

El presente proyecto de ley que se presenta, tiene como objetivo reconocer el alto espíritu de servicio a la patria por los ciudadanos que prestaron el servicio militar obligatorio en la lucha contra el terrorismo a fin de lograr la pacificación nacional y fortalecer la democracia en nuestro país.

La historia nos señala las guerras que ha vivido nuestro país Los soldados peruanos han demostrado estar a la altura de las circunstancias, ya sea a través de su valiente rechazo al enemigo, sus victorias en el campo de batalla o su heroísmo incluso en la derrota. Durante la Guerra del Pacífico, nuestros soldados enfrentaron condiciones adversas y muchas veces tuvieron que lidiar con la falta de equipamiento adecuado. A pesar de estas dificultades, dieron lo mejor de sí mismos, superando límites insospechados. En numerosas ocasiones lograron revertir el curso de las batallas, a pesar de la escasez de recursos militares, que fue agravada por gobernantes corruptos que desviaron los fondos destinados a la adquisición de armamento o que adquirieron de manera fraudulenta armas y municiones defectuosas.

LOS DEFENSORES DE LA PATRIA

En reconocimiento a su patriotismo y defensa del territorio nacional, el Estado peruano decidió oficialmente designar a los excombatientes del conflicto del año 1995 como "Defensores de la Patria". Esta designación se realizó después de una evaluación por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las leyes establecidas para tal fin. En el artículo primero de la Ley 26511, promulgada el 20 de julio de 1995, se estableció que los beneficios estarían restringidos exclusivamente a los combatientes que participaron en la zona del Alto Cenepa durante el último conflicto con Ecuador en 1995. Después, mediante la promulgación de la Ley 28796 el 21 de julio de 2006, se otorgó también el reconocimiento de "Defensores de la Patria" a los excombatientes que estuvieron involucrados en los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978 y en el Conflicto de la Cordillera del Cóndor de 1981.

Las leyes que establecían las condiciones para ser considerado "Defensor de la Patria" no hacían distinciones entre los excombatientes que participaron activa y directamente en misiones de combate o similares con riesgo para sus vidas en las operaciones llevadas a cabo en la Zona de Combate, ni aquellos que pudieron haber quedado discapacitados. Sin embargo, el Decreto Supremo 010-DE-SG, que reglamentó la Ley 26511, estableció que la condición legal de "Defensor de la Patria" sería otorgada a aquellos excombatientes que participaron activa y directamente en misiones de combate o similares con riesgo para sus vidas en las operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa.

En consonancia con el reglamento mencionado anteriormente, el 18 de julio de 2010 se promulgó la Ley 29562, que dispuso un reconocimiento al mérito para aquellos excombatientes que no cumplían con la condición de "Defensores de la Patria", pero que estuvieron presentes en la zona de combate. A pesar de no haber tenido una participación activa y directa en misiones de combate o similares con riesgo para sus vidas, o de haber quedado en una situación de discapacidad, se les otorgó este reconocimiento. Como resultado, surgen dos categorías de excombatientes. El primer grupo está compuesto por aquellos que participaron activa y directamente en misiones de combate o similares, arriesgando sus vidas en operaciones llevadas a cabo en la Zona de Combate del Alto Cenepa. Esto también incluye a excombatientes que no hicieron uso de las armas, pero que se encontraban dentro de un área geográfica específica establecida en el Reglamento de la Ley 26511, promulgado mediante el Decreto Supremo 010-DE-SG en 1999, artículo 3 0 , literal g.

El segundo grupo de excombatientes está conformado por aquellos que no cumplen los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley 26511 y, por lo tanto, no pueden ser considerados "Defensores de la Patria". Sin embargo, a través de la Ley 29562, se les otorga el reconocimiento de "combatientes al mérito".

Es importante destacar que la Ley 26511 no establece ninguna distinción entre los excombatientes ni sugiere una clasificación diferente en su reglamento. Sin embargo, el reglamento ha ido más allá de lo establecido en la ley, lo que genera incoherencia en el procedimiento y en la calificación legal de los "Defensores de la Patria". Al no existir una distinción en la ley general, el reglamento no debería haber excluido a aquellos que no participaron en combate o que no estuvieron en una zona geográfica específica, tal como se menciona. Esta situación de abuso reglamentario y de distinción extralegal se ha fortalecido con la promulgación de la Ley 29562, que establece el reconocimiento de los "combatientes al mérito" para aquellos que no cumplen los requisitos para ser considerados "Defensores de la Patria". De acuerdo con lo expuesto, se está contraviniendo la jerarquía normativa establecida por la pirámide kelseniana, en la cual la Constitución prima sobre la ley, la ley sobre los reglamentos y, entre los reglamentos, los de mayor jerarquía priman sobre los de menor jerarquía. La doctrina comparada también precisa que el reglamento es un ordenamiento subordinado a la ley y se justifica en ella misma. Es importante destacar que expertos en el tema han señalado que en este caso en particular también se está vulnerando la Constitución, ya que nuestra Carta Magna protege el derecho a la igualdad, estableciendo que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por su origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otro motivo. Sin embargo, la promulgación de la Ley 29562 ha infringido este artículo de la Constitución (Constitución Política del Perú, 1993, artículo 2, inciso 2).(3). Además, se ha violado el principio de igualdad ante la ley, el cual el Tribunal Constitucional define como el conjunto de derechos consagrados en nuestra Constitución y que se fundamenta en la dignidad de la persona. Cuando el artículo 1° de la Constitución establece que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado", reconoce la igualdad esencial de todas las personas y exige que tanto la sociedad como el Estado tengan como objetivo principal la protección de la dignidad humana (fundamento 3° de la sentencia del Exp. 01604-2009- PA/TC).

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA.

Durante las décadas de 1980 a 2000, el Perú experimentó la crisis política, social y económica más profunda de su historia, como resultado de un conflicto fratricida cuyas secuelas aún no han sido superadas, dejando cicatrices imborrables en términos de pérdida de vidas y el empobrecimiento persistente en muchas comunidades y ciudadanos como los licenciados de las fuerzas armadas. Este enfrentamiento implicó la movilización nacional de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los ronderos organizados a través de los comités de autodefensa y ciudadanos que no dudaron en arriesgar sus propias vidas y las de sus familias para hacer frente a los grupos terroristas en diversas áreas del país que fueron declaradas en estado de emergencia.

En consecuencia, el 4 de junio de 2001, durante el gobierno del presidente provisional Valentín Paniagua Corazao, se estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) mediante el Decreto Supremo 065-2001-PCM. Esta comisión tenía la responsabilidad de elaborar un informe sobre la violencia política y el conflicto armado que el país enfrentó con las organizaciones terroristas entre los años 1980 y 2000. La comisión fue presidida por Salomón Lerner Febres y permitió llegar a importantes conclusiones y lograr un acercamiento más documentado sobre lo sucedido en el Perú, las cuales se presentaron en el Informe Final el 28 de agosto de 2003. El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) está disponible en el sitio web: https://www.cverdad.oro.pe/ifinal/index.oho Sin embargo, para los fines de este proyecto de ley, a continuación, se presentan las conclusiones relacionadas con las Dimensiones del Conflicto. Entre los datos más relevantes, destacan:

1. Según la CVR, el conflicto armado interno que tuvo lugar en Perú entre 1980 y 2000 fue el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado en toda la historia del país. Además, fue un conflicto que reveló divisiones y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas mortales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de vidas perdidas por Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.
3. La CVR sostiene que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro conflicto, provocando enormes pérdidas económicas en términos de destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población. Además, llegó a afectar a toda la sociedad en su conjunto.
4. La CVR ha constatado una notable relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. El departamento andino de Ayacucho concentra más del 40% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Si se suman las víctimas registradas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, se alcanza el 85% de las victimas registradas por la CVR.
5. Según la CVR, se ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. Del total de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% se dedicaba a actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con los datos del censo de 1993, que indicaba que el 29% de las personas vivían en zonas rurales y el 28% de la población económicamente activa nacional estaba empleada en el sector agropecuario.
6. La CVR ha observado que, junto con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia evidenció las profundas desigualdades de naturaleza étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos, se desprende que el 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta significativamente con el hecho de que la

población que comparte esta característica constituye solo el 16% de la población peruana, según el censo nacional de 1993.

7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los fallecidos y desaparecidos tenían niveles educativos considerablemente inferiores al promedio nacional. Mientras que el censo nacional de 1993 indica que solo el 40% de la población tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68% de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.
8. La CVR concluye que la violencia afectó de manera desigual a diferentes ámbitos geográficos y estratos sociales en el país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR en relación con la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia habría ocasionado 1 millón 200 mil muertes y desapariciones. De esa cantidad, 340 mil habrían ocurrido en la ciudad de Lima.
9. La CVR ha constatado que la tragedia sufrida por las poblaciones rurales, andinas y amazónicas del Perú, quechua y ashaninka, campesinas, pobres y con escasa educación, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. Esto revela, según la CVR, el persistente racismo encubierto y las actitudes de desprecio en la sociedad peruana, casi dos siglos después de la fundación de la República.
10. La CVR ha descubierto que el conflicto puso de manifiesto graves limitaciones del Estado en su capacidad para garantizar el orden público, la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático.
11. Asimismo, la CVR ha encontrado una precaria vigencia del orden constitucional y del Estado de Derecho, los cuales fueron vulnerados durante aquellos tiempos de crisis.

En este sentido, la conclusión del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala que "la reparación tiene profundas implicaciones éticas y políticas y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional, Dado que la abrumadora mayoría de las víctimas del conflicto eran campesinos pobres, indígenas y tradicionalmente discriminados y excluidos, son ellos quienes deben recibir atención prioritaria por parte del Estado". El mismo informe indica que estas reparaciones deben combinar formas individuales y colectivas, simbólicas, materiales y económicas de compensación que restauren la memoria y la dignidad de las víctimas, e incluir programas de reconstrucción institucional, desarrollo comunitario, servicios básicos y generación de ingresos. Las peores consecuencias de la lucha contra el terrorismo fueron sufridas por los jóvenes de diversos departamentos del país que sirvieron a la patria en las Fuerzas Armadas durante los años 1980 y 2000. Enfrentaron y sufrieron la crueldad de los terroristas en zonas declaradas en emergencia, donde muchos de ellos perdieron la vida o quedaron con secuelas, abandonando sus proyectos de vida y los de sus familias, sin haber solicitado nada a cambio, solo el rescate del Estado de la amenaza terrorista más sangrienta de nuestra historia.

Nos referimos a jóvenes y compatriotas que, hoy, 20 años después, en muchos casos, no han encontrado reconciliación ni oportunidades para construir sus proyectos de vida. Después de la lucha contra el terrorismo, fueron abandonados a su suerte y expuestos a la indiferencia de un sistema político al que apoyaron en favor de la democracia, pero que no les ofrece ningún bienestar. Han iniciado otra guerra, esta vez contra la indiferencia del Estado. También es importante tener en cuenta que los defensores de la democracia mostraron el mismo heroísmo y patriotismo que nuestros combatientes defensores de la patria demostraron en conflictos armados para proteger nuestra soberanía frente a países extranjeros, como en el conflicto con Ecuador. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido incentivos o beneficios económicos similares a los otorgados a los ex combatientes defensores de la patria. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado reconocer a los defensores de la democracia como sujetos dignos de una protección específica de sus derechos humanos fundamentales, garantizándoles igualdad de trato en comparación con los defensores de la patria.

Por lo tanto, existen justificaciones históricas, técnicas y de reconciliación nacional que obligan al Estado a establecer beneficios a favor de las víctimas de la violencia terrorista desarrollada desde 1980. Estas víctimas no solo son aquellos que perdieron la vida, sino lo más lamentable, aquellos que sobrevivieron y no han recibido ningún reconocimiento por parte del Estado. Estamos hablando de víctimas de la sociedad civil, pero aún más de los compatriotas que formaron parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las rondas campesinas organizadas en Comités de Autodefensa y los ciudadanos que sirvieron valientemente al Estado en la lucha contra los terroristas, y que están debidamente identificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

LA PROPUESTA MODIFICATORIA.

En la nueva disposición modificatoria se presenta en lo referido la Ley 31177:

Ley 31177	Propuesta de Modificación
"Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la	"Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad o haber prestado servicio militar obligatorio en zona de emergencia decretado por el estado y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye

Democracia y crea la condecoración; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".	el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente o sus modificatorias; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio de/Interior, según corresponda".

Así mismo la primera disposición complementaria de la Ley 31177 se presenta:

Ley 31177	Propuesta de Modificación
PRIMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley. Encárgase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración, la calificación como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad, para ser beneficiarios de la presente ley.	"PRIMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley Encargase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente; la calificación para el reconocimiento como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista, para ser beneficiarios de la presente ley, se acredita con la sola presentación de la libreta militar o la constancia expedida válidamente por la Oficina de Inscripción del Registro Militar de la jurisdicción que prestó el servicio militar o la que haga sus veces. Y serán tramitadas por intermedio de estas oficinas a nivel nacional". Los plazos para su calificación de las solicitudes para el reconocimiento como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista se rigen estrictamente en los alcances de Ley 27444, su omisión o inercia acarrea responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos a cargo, indistintamente de su régimen laboral.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 31177, LEY QUE OTORGA BENEFICIOS A LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA LUCHA CONTRATERRORISTA, MODIFICANDO LA LEY 24053, LEY QUE DENOMINA "CAMPAÑA MILITAR DE 1941", A LOS GLORIOSOS HECHOS DE ARMAS CUMPLIDOS EN ZARUMILLA Y EN LA FRONTERA NOR ORIENTE; Y QUE DECLARA EL 31 DE JULIO DÍA CENTRAL CONMEMORATIVO; Y LA LEY 29248, LEY DEL SERVICIO MILITAR

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto reconocer el alto espíritu de servicio a la patria por los ciudadanos que prestaron el servicio militar obligatorio en la lucha contra el terrorismo a fin de lograr la pacificación nacional y fortalecer la democracia en nuestro país.

Artículo 2.- Modificación al Artículo 2, de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y

que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

Se modifica el Artículo 2 de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar; los mismos que quedaran redactados de la siguiente manera:

> ***"Artículo 10.*** *Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su* ***oportunidad o haber prestado servicio militar obligatorio en zona de emergencia decretado por el estado*** *y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031. Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente o sus modificatorias; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".*

Artículo 3.- Modificación de la primera disposición complementaria y final de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

Se modifica la primera disposición complementaria y final de la Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo; y la Ley 29248, Ley del Servicio Militar; los mismos que quedaran redactados de la siguiente manera:

> ***"PRIMERA. Calificación de los beneficiarios de la presente ley***
>
> *Encárgase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente; la calificación* ***para el reconocimiento como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista, para ser beneficiarios de la presente ley, se acredita con la sola presentación de la libreta militar o la constancia expedida válidamente por la Oficina de Inscripción del Registro Militar de la jurisdicción que prestó el servicio militar o la que haga sus veces. Y serán tramitadas por intermedio de estas oficinas a nivel nacional". Los plazos para su calificación de las solicitudes para el reconocimiento como Defensores de la Democracia a los excombatientes de la lucha contraterrorista se rigen estrictamente en los alcances de Ley 27444, su omisión o inercia acarrea responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos a cargo, Indistintamente de su régimen laboral.***

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. - Reglamentación

El Ministerio de Defensa bajo responsabilidad funcional reglamenta la presente ley en el término de sesenta (60) días contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano.

SEGUNDA. -Vigencia

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

17. PROYECTO DE LEY 5224/2022-CR

Fundamenta su propuesta en lo siguiente:

Nuestro ordenamiento legal, no contempla el reconocimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y civiles que participaron en el planeamiento, elaboración y seguimiento de los planes de guerra, que llevaron a cabo los combatientes durante el conflicto con el Ecuador en el año 1995; tal es caso de las operaciones militares llevadas a cabo por el personal militar de la Fuerza Aérea del Perú - FAP del Escalón Logístico del Grupo Aéreo Nº 51 del Dispositivo de Combate- DISCOM-ANDOAS de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto, debidamente inscritos en el Parte de Guerra FAP, clasificado como "Estrictamente Secreto", al haber ejecutado una operación de ataque de bombardeo a la Base Militar Logística Ecuatoriana Banderas, ubicado dentro del territorio ecuatoriano durante el conflicto del Alto Cenepa en el año 1995, operación que fue de vital importancia, que contribuyó de manera determinante en el éxito de las operaciones de guerra de las Fuerzas Armadas peruanas en la zona de conflicto. Por consiguiente, se requiere de la modificación del artículo 1º de la Ley 26511, modificado por Ley 27124, a efectos de que se le reconozca como Defensores de la Patria al personal militar de las Fuerzas Armadas, y miembros de la Policía Nacional, que elaboraron y ejecutaron los planes de guerras, específicamente del **personal militar de la Fuerza Aérea del Perú - FAP, que hayan participado de forma activa y directa en las misiones relacionadas con la implementación y ejecución de los planes de guerra, que se encuentren debidamente inscritos en el Parte de las Fuerzas Armadas del Conflicto del Alto Cenepa de 1995**, que no fueron considerados a la fecha como Defensores de la Patria, a pesar de haber participado en el planeamiento de inteligencia; dado que este personal se trasladó a la zona de conflicto del Alto Cenepa, exponiendo en grave riesgo su integridad física.

Esta omisión, ha sido reflejada en el momento de publicarse el Decreto Supremo N° 010-DE-SG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 26511 y en sus anexos, donde se ha establecido los requisitos para acceder al reconocimiento de la condición de Defensor de la Patria, pese a que estos miembros de las Fuerzas Armadas, se encuentran debidamente inscritos en el Parte de Guerra como es el caso de la Fuerza Aérea del Perú del conflicto del Alto Cenepa de 1995, y participaron de manera directa en la implementación de los planes de guerra que han sido ejecutados con la finalidad de derrotar al enemigo, en defensa de la soberanía territorial, y evitar mayor de cantidad de pérdida de vidas humanas.

En el literal d) del artículo 3° del Anexo del Decreto Supremo N° 010-DE-SG, se considera como "Combatientes" a todos los miembros de la Fuerzas Armadas, Policía nacional y Civiles, que participaron en forma activa en las operaciones, incluyendo a quienes las dirigieron, condujeron y/o cooperaron en su preparación y desarrollo, compartiendo sus vicisitudes y riesgos. En el literal g) del anexo, se ha considerado como Zona de Combate del Alto Cenepa, al espacio terrestre, acuático y aéreo comprendido por el Norte a la línea de frontera; por el Este, pendiente Oeste de la Cordillera de Campanquiz; por el Sur, Latitud Sur 3°33'08"; y por el Oeste, Línea de frontera. Esta delimitación establecida en el anexo del Decreto Supremo N° 010 -DE-SG, excluye de manera directa al personal militar de las Fuerzas Armadas como es la Aérea del Perú - FAP, que hayan participado de forma activa y directa en las misiones relacionadas con la implementación y ejecución de los planes de guerra, que se encuentren debidamente inscritos en el Parte de Guerra las Fuerzas Armadas del Conflicto del Alto Cenepa de 1995, que no fueron considerados a la fecha como Defensores de la Patria, a pesar de haber participado de manera activa y directa en las misiones, siendo necesario realizar las modificaciones pertinentes de la Ley.

La defensa de la integridad de la soberanía territorial del Perú, cuando se veo amenazado e invadido por Ecuador, los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles, con la convicción de amor a la patria sin temor de poner en riesgo sus vidas, participaron en defensa de la soberanía nacional, la cual ha sido demostrado históricamente desde la Campaña de 1941, 1978, 1981 y 1995, donde el personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y personal civil han participado con valentía, las mismas que han sido reconocidos por las diferentes leyes.

En ese sentido, con la presente iniciativa de ley, se propone ampliar un plazo razonable de un año adicional para la culminación del reconocimiento como Defensor de la Patria a quienes han coadyuvado de manera directa en el conflicto con el Ecuador y el otorgamiento de las compensaciones, que debe desarrollar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; entre el personal militar FAP se tiene identificado a un grupo de cuarenta y uno (41) miembros de la Fuerza Aérea del Perú, que ha participado en el conflicto, que no ha sido reconocido por el Estado como Defensores de la Patria, debido a que gran parte no han sido calificados como tales, entre estos miembros se encuentran 41 miembros de la Fuerza Aérea del Perú, un Oficial (Capitán), y 40 Sub Oficiales, entre ellos dos Técnicos Inspectores (TIP), dos Técnicos de Primera (TC1), cinco Técnicos de Segunda (TC2), diez Técnicos de Tercera (TC3), diecisiete Sub Oficiales de Primera (SO1), cuatro Sub Oficiales de Segunda (SO2).

El reconocimiento a los participantes en el conflicto, debe realizarse sin distinción ni discriminación por la naturaleza de las labores realizadas o el lugar geográfico en que se ejecutaron las operaciones militares; lo cual es contradictoria a lo

señalado en el numeral 2 del artículo 2° de la Constitución Política, que consagra que toda persona tiene a la igualdad ante la ley.
En la presente iniciativa de ley, se propone dictar normas complementarias finales, para modificar el Artículo 3° de la Ley N° 30874, respecto al plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos, estableciéndose como fecha límite de la aplicación de la Ley hasta el 30 de noviembre del 2024, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador; además de que el Poder Ejecutivo en el plazo de 30 días calendario, modifique y adecue el Reglamento de la Ley N° 26511, aprobado por D.S. N° 010-DE-SG, con el propósito de dar solución final de la interpretación de las normas aprobadas, que han afectado a los valerosos miembros de las Fuerzas Armadas, que no han sido considerados como Defensores de la Patria, pese a encontrarse en el Parte de Guerra.

La norma propuesta, permitirá adecuar y modificar las disposiciones del artículo 5° del D.S. N° 010-DE-SG, que aprueba el reglamento de la Ley 26511, que establece los requisitos para que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y Civiles sean reconocidos como Defensores de la Patria, durante el Conflicto con el Ecuador en el año 1995.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY 26511, QUE RECONOCEN COMO DEFENSORES DE LA PATRIA Y OTORGAN BENEFICIOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICÍA NACIONAL Y CIVILES QUE PARTICIPARON EN EL CONFLICTO CON EL ECUADOR, MODIFICADO POR LEY 27124

Artículo 1.- Modificación del Artículo 1° de la Ley N°26511, modificado por Ley 27124
Modifíquese el Artículo 1 ° de la Ley 26511, modificado por Ley N° 27124, con el siguiente texto:

> *"**Artículo 1°** .- Reconózcase la calidad de Defensor de la Patria a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y civiles que hayan participado como combatientes en la zona del Alto Cenepa**, o hayan participado de forma activa y directa en las misiones relacionadas en la implementación y ejecución de los planes de guerra** durante el último conflicto con el Ecuador en 1995, así como a aquéllos que a partir del 1 de marzo de 1995, hayan fallecido o se encuentren con invalidez temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa.*
> *Corresponderá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas calificar los casos que se presenten de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley, así como proponer el ascenso al grado inmediato superior del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que se encuentren dentro de los supuestos referidos en el párrafo precedente."*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Modificación del artículo 3 de la Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995

Modifíquese el Artículo 3° de la Ley N° 30874, en los siguientes términos:

"Artículo 3°.- Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos

*Otórguese al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de **seis años**, contados a partir de la fecha de publicación de la presente norma, **esto es hasta el 30 de noviembre del 2024**, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el artículo 2 de la presente ley.".*

***SEGUNDA.-** El Poder Ejecutivo en el plazo de 30 días calendario, modifica y adecua a la presente Ley, el Reglamento de la Ley N° 26511 por la cual se reconoce como Defensores de la Patria a combatientes que participaron en el conflicto en la Zona del Alto Cenepa, aprobado por Decreto Supremo N° 010-DE-SG.*

18. PROYECTO DE LEY 5721/2022-CR

Fundamentos de la propuesta Legislativa:

Sobre la implementación de una política de estado para el reconocimiento de los diversos actores que participaron durante la lucha antiterrorista

El Estado peruano a través del Poder Legislativo, ha promovido de forma constante y como parte de una suerte de política de estado que data desde el año 2007, la expedición de leyes para que busquen brindar un merecido reconocimiento por parte del aparato estatal, a todos aquellos peruanos que fueron partícipes en la lucha contra el terrorismo acaecida en nuestro país, en las décadas de 1980 y 1990, y que coadyuvaron a la finalización de uno de los episodios más cruentos de nuestra historia, el cual tuvo como consecuencia directa, el quebrantamiento del Estado de Derecho y el orden interno.

Es[sic] normas que se han expedido, han buscado ampliar el ámbito de peruanos merecedores del reconocimiento por sus servicios a favor de la nación, es así que desde la primera Ley que creo la condecoración, hasta la fecha, se han incorporado -merecidamente- a todos aquellos peruanos que directa o indirectamente lucharon contra el terrorismo, y que se resumen de la siguiente forma:

1. **El 03 de junio del 2007 se publica en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 29031**, Ley que instituye el día de los Defensores de la Democracia y crea la Condecoración correspondiente; la cual tuvo como objeto -en un principio- rendir un merecido homenaje a los miembros de la Fuerza Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la

lucha contra el terrorismo y, a todos aquellos que durante la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.
Asimismo como parte de este homenaje, se dispuso la realización de actividades conmemorativas de forma anual, con la finalidad de que todas las instituciones realicen actividades conmemorativas, rindiendo homenaje y resaltando las virtudes de aquellos peruanos que lucharon contra el terrorismo, con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el estado de derecho, para lo cual se creó la Condecoración "MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA", la misma que sería otorgada mediante Resolución Suprema.

2. **Con fecha 12 de diciembre de 2012, se publica en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 29960**, Ley que modifica la Ley N° 29031, Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente ante la ausencia de una fecha en específica, en la cual se celebraría el denominado día de los "Defensores de la Democracia" y los consecuentes homenajes y actividades conmemorativas.

3. **Con fecha 20 de abril de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 30554**, Ley que declara héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar, **Ley que dio inicio a una serie de modificaciones al artículo 1° de la Ley N° 29031. para ampliar su base e ir incluyendo dentro del homenaje impuesto por Ley. una serie de actores y partícipes claves en la lucha contra el terrorismo**; en el presente caso la Ley N° 30554, incorporó a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar dentro del ámbito de la Ley N° 30554; asimismo, se instauraron una serie de beneficios (referidos a becas y/o "facilidades económicas") para que estos denominados héroes y sus familiares directos, puedan continuar sus estudios superiores.
4. **Con fecha 06 de setiembre de 2017, hizo lo propio la Ley N° 30655**, Ley que declara héroes de la democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (en adelante GEIN DIRCOTE), publicada en el diario oficial El Peruano; la cual -tal como su nombre lo sugiere y como se adelantó precedentemente-, modificó el artículo 10 de la Ley N° 29031, incluyendo dentro de su ámbito de aplicación o ampliando el reconocimiento como Defensores de la Democracia, a los miembros del GEIN DIRCOTE.
5. **Con fecha 22 de abril de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 30758,** Ley que declara defensores calificados de la democracia a los mineros que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar; Ley que modificó el artículo 10 de la Ley N° 29031, ampliando el reconocimiento como "Defensores Calificados de la

Democracia", a los mineros que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como a los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar.

6. **Por último, con fecha 20 de julio del 2021 se publica en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 31291**, Ley que del mismo modo modificó el artículo 1° de la Ley N° 29031, ampliando aún más el reconocimiento como Defensores de la Democracia, puesto que se incluyeron a las fuerzas armadas, fuerzas policiales, licenciados de las fuerzas armadas y ciudadanos que en la lucha antiterrorista prestaron eminentes servicios a la Nación.

Como logramos advertir, durante el transcurso del tiempo se ha hecho cada vez más amplia la base para el reconocimiento como Defensor de la Democracia, puesto que las leyes expedidas dentro de su composición normativa no contemplaron a la totalidad de actores en la lucha antiterrorista (tales como: los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa, ciudadanos y mineros que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar); no obstante, aún queda pendiente el reconocimiento de muchos más actores de esta lucha, la misma que no solo se realizó de forma frontal en el frente de batalla o zona de conflicto, sino también, desde distintos frentes, lo que contribuyó indudablemente a la preservación de la paz y la seguridad del país.

La labor de los licenciados de las fuerzas armadas en la preservación de la paz y la seguridad del país

Es innegable la lucha frontal en la zona de conflicto, que realizaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú, los integrantes de los comités de autodefensa, los ciudadanos y mineros que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar, contra la violencia ejercida por los grupos terroristas en las décadas de los 80's y 90's, puesto que estos actores se apostaron en el frente de batalla para dar fin a una de las épocas más cruentas de nuestro país, y que en muchos casos, cobraron las vidas de estos héroes de la nación, o, se generaron lesiones en su integridad física y mental.

Dentro de este grupo de miembros de las fuerzas militares, se encuentran los licenciados de las fuerzas armadas, quienes, en resumidas cuentas, son aquel personal civil que, en el marco de la realización de su servicio militar obligatorio

contemplado en la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar, se enlistaron o fueron reclutados en las distintas bases militares repartidas a lo largo del país, para pasar a formar parte de la línea de defensa y de ataque frontal contra el terrorismo, de la mano del personal militar de carrera que componen las instituciones armadas y que dirigió su despliegue. Sin embargo, cabe señalar, que no todos los licenciados de las fuerzas armadas realizaron una lucha frontal (en el campo de batalla o zona de conflicto) contra los grupos terroristas, puesto que un contingente de este personal de las fuerzas armadas, en estricto y cabal cumplimiento de su deber de defender al Perú frente a las amenazas suscitadas en medio de la lucha contra el terrorismo, y, por órdenes de los altos comandos militares de las fuerzas armadas, se designó su permanencia en las bases militares para la protección de estos activos estratégicos, así como de las poblaciones aledañas.

Con la presencia de los licenciados de las fuerzas armadas en las bases militares para su resguardo, se contribuyó con la pacificación y protección de la nación, puesto que su sola presencia fungió como disuasivo para que los grupos terroristas perpetren ataques ya sea a la propia base militar o las poblaciones colindantes a la zona geográfica en la cual se encontraba ubicada; ello evidencia que la lucha contra los grupos terroristas, no solo se realizó frontalmente en la zona de conflicto, sino también, fue realizada a lo largo del Perú de forma indirecta, preservando así la paz y la seguridad dentro del territorio nacional.

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE REVALORIZA LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA LA PRESERVACIÓN LA PAZ Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN, DURANTE LA ÉPOCA DE LA LUCHA ANTITERRORISTA

Artículo 1. - Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 1° de la Ley N° 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, modificada por la Ley N' 31291, a fin de revalorizar los servicios prestados por los licenciados de las fuerzas armadas que resguardaron y protegieron las unidades militares en las cuales realizaron su servicio militar obligatorio durante la lucha contra el terrorismo, contribuyendo así con la preservación de la paz y seguridad dentro del territorio nacional.

Artículo 2.- Modificación de la Ley N° 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente

Se modifica el artículo 1° de la Ley N° 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, modificada por la Ley N°31291, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 1.- Objeto de la Ley***
>
> *Institúyanse el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron,*

quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.

Así mismo, constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados ***o que sin necesidad de haber participado directamente en la lucha contra el terrorismo, resguardaron y protegieron las unidades militares a nivel nacional contribuyendo así con la preservación de la paz y seguridad en el país".***

Artículo 3. - Extensión de Beneficios

Los beneficios establecidos mediante el artículo 3° de la Ley N° 31291, son de aplicación a los licenciados de las fuerzas armadas que, durante la lucha contrasubversiva, resguardaron y protegieron las unidades militares en las cuales realizaron su servicio militar obligatorio y así contribuir con la preservación de la paz y seguridad dentro del territorio nacional, que son reconocidos como defensores de la democracia en mérito de la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. — Adecuación normativa

Se encarga al Poder Ejecutivo, realizar las adecuaciones pertinentes en el Decreto Supremo N' 026-2011-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 062-2022- PCM, a efectos de armonizar la normativa a su cargo con las disposiciones señaladas en la presente Ley, en un plazo no mayor a treinta días calendario, contados a partir de su promulgación.

SEGUNDA. — Excepción en su aplicación

No son aplicables las disposiciones previstas en la presente Ley, a las personas que tengan sentencia condenatoria firme por la comisión de delitos

19. PROYECTO DE LEY 5884/2022-CR

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Antecedentes.

Conviene subrayar que con la promulgación de la ley 26511 ley que reconoce como defensores de la patria y otorga beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civil que participaron en el conflicto del Alto Cenepa con el vecino país del ecuador.

Así mismo, es pertinente resaltar que el Estado a través de la Ley 26511, otorga un beneficio económico al personal militar, policial y civil que participó directa, activa y con riesgo de su vida en dichas operaciones tácticas, por lo que este personal no incluido en los partes de guerra, no se hace acreedor a dicho beneficio

por el solo hecho de no estar incluido en el Parte de Guerra, pero que si demuestran fehacientemente con documentos bibliográficos, declaraciones juradas de sus superiores y con otras evidencias, su activa participación en dichos conflictos armados.

La Constitución Política del Perú, señala textualmente en su Artículo 165°. Señala:

"Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el Artículo 137 de la Constitución".

Declaración Universal de Derechos Humanos
Art. 23(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Convención Americana de Derechos Humanos

Art. 24 Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

El máximo intérprete de la Constitución que es el Tribunal Constitucional, en sus múltiples sentencias dice: (Sentencia 01153-2013-PA), que dicha condición se ha generado en cumplimiento del deber estatal de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 165 de la Constitución.

¡A IGUAL HECHO SE DEBE DE APLICAR IGUAL DERECHO!!

Problemática.

Actualmente existe personal militar, policial y civil que, habiendo participado de forma activa, directa y poniendo en riesgo su vida, en las operaciones militares con el Ecuador durante los años 1978, 1981 y 1995, se han quedado sin ser calificado como Defensor de la Patria, por el solo hecho de no contar con el requisito de estar registrado en el documento denominado "Parte de Guerra". Empero en la realidad existen otros registros, documentos administrativos contemporáneos (legajos) que dan fe y pueden acreditar, que aquellos ex — combatientes que si participaron activamente en las operaciones tácticas en la guerra con el vecino país del ecuador.

Que, al negarles un derecho reconocido, (derechos adquiridos) por el solo hecho de no encontrarse registrados su nombre en los partes de guerra, esto sean por el paso de los años dicho documento han desaparecido o porque no fueron incluidos oportunamente dentro de dicho documento, traspapelarse o desaparecido por la

falta de su conservación en su área de archivos. Pues dicha acción u omisión no debe de perjudicar a aquellos combatientes que si fueron a la guerra a la frontera del alto Cenepa con el vecino país de ecuador. Pues a la fecha al no ser calificado dentro de los alcances de la Ley 26511, a aquellos hombres combatientes que dieron su vida por la patria se les deja una sensación de frustración e injusticia, al ser excluidos dentro de los beneficiarios del apoyo económico que el Estado les otorga, por sus valiosos servicios prestados a la Nación y que les corresponde por ley. Con ello cometiéndose una injusticia al personal militar policial que, por causa ajenas a su voluntad, no cuenten con el documento que el comando conjunto de las fuerzas armadas les exige como requisito su registro en el parte de guerra.

Existen cerca de seiscientos cincuenta combatientes que participaron en las guerras con el ecuador en 1978, 1981 y 1995, que no pueden percibir el beneficio que les otorga la Ley N° 25611, por el solo hecho de haberse extraviado, desparecido una o más hojas del parte de guerra, justo en dichas hojas desaparecidas estaban los nombres, de aquellos combatientes que hoy piden ser reconocidos con ello dejándoles en un desamparo y negándoles los beneficios que, por ley se les ha reconocido combatientes del conflicto Alto Cenepa.
Otros aspectos se encuentran en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTI3NDc1/pdf

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO JUSTO AL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y CIVIL QUE PARTICIPO EN LAS OPERACIONES MILITARES EN EL CONFLICTO DEL CENEPA 1995.

Articulo 1.- Objeto de la Ley.
La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 3 del Decreto Supremo N° 010- DE-SG del Reglamento de la Ley N° 26511, para la Calificación como Defensor de la Patria, Propuesta de Ascensos y Otorgamiento de Beneficios a los Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que Participaron como Combatientes, en la Zona del Alto Cenepa en 1995.

Artículo 2.- Finalidad de la Ley
La presente ley su finalidad es reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policial y Civiles, que, habiendo participado en las Operaciones Militares con el Ecuador durante los años 1978, 1981 y 1995, en forma activa, directa y con riesgo de su vida, no se les ha reconocido como Defensores de la Patria, por no hallarse su nombre en el documento denominado "Parte de Guerra".

Artículo 3.- Derogatoria
Déjese sin efecto las disposiciones que se le opongan a la presente ley.

Artículo 5.- Vigencia de la norma
La presente Ley entrará en vigencia Oficial El Peruano.

20. PROYECTO DE LEY 6522/2023-CR

Fundamenta la propuesta Legislativa con lo siguiente:

Problemática existente

Durante los días 30 de octubre de 2023 y 08 de noviembre de 2023, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en la sala de reunión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas [CCFF.AA], En esta reunión de trabajo participaron los funcionarios del Ministerio de Defensa, el Jefe del CC.FFAA, entre otros altos funcionarios de dicha institución. En las precitadas reuniones de trabajo se abordaron la problemática general de los ex combatientes del Alto Cenepa de 1995, dentro de los puntos de agenda fue el próximo vencimiento de la **Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.** Dicha norma legal tiene un plazo de vigencia hasta el 30 de noviembre de 2023; y, en cuanto a la presentación de solicitudes y calificación como defensores de la patria, esta ley habría sido retrotraído al 31 de julio de 2023, a consecuencia de la aplicación de la **Ley 31728, Ley que tiene por objeto aprobar medidas que permitan financiar los mayores gastos de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el marco de la reactivación económica, así como aprobar otras medidas.**

De la información recibidas en ambas reuniones de trabajo los funcionarios presentes manifestaron que a la fecha existen aproximadamente dos (2) mil ex combatientes para ser calificados y atendidos; por lo que analizando esta situación se necesita legislar con urgencia en esta materia; proponiendo una última ampliación de la Ley 26511 y sus modificatorias, hasta el 28 de noviembre de 2025, con la finalidad de atender toda la problemática de los ex combatientes y se puedan acoger a los alcances de ley y sus beneficios que esta trae consigo.

La Ley 30874, habría sido modificada su plazo de vigencia por la Ley 31728, norma legal que adelanta el plazo de vencimiento al 31.JUL.2023, a pesar que legalmente tiene vigencia hasta el 30.11.2023, y estando a pocos días del vencimiento legal resulta legislar con urgencia sobre esta materia; con la finalidad de restablecer los derechos fundamentales de los ex combatientes, tanto en su calificación, así como los beneficios que les corresponde por ley.

Por su parte los representantes de los ex combatientes presentes en las reuniones de trabajo los días 30 de octubre y el 08 de noviembre de 2023, solicitaron la ampliación de la Ley 26511 y sus modificatorias, para acogerse a los beneficios de la misma y entre otras normas concordantes, considerándola que es necesaria y justa. Asimismo, como es de cocimiento público que la ciudadanía viene aseverando que debería ampliarse las normas mencionadas, considerando la razonabilidad y la equidad, con la finalidad de atender a todos los beneficiarios.

Otros aspectos de la propuesta legislativa se encuentran en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6522

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY DE RESTABLECIMIENTO, ACTUALIZACION Y NIVELACIÓN DE LA BONIFICACION MENSUAL DE LOS EX COMBATIENTES, SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL VIGENTE EN CADA EJERCICIO FISCAL, EN EL

MARCO DE LA LEY 24053 Y SU MODIFICATORIA Y LA LEY 26511 Y SUS MODIFICATORIAS.

Artículo 1. Objeto de la Ley

El presente proyecto de Ley tiene por objetivo reestablecer, actualizar y nivelar la bonificación mensual de los ex combatientes calificados como Defensores de la Patria (CDP) y en algunos casos a sus deudos de los defensores de la patria que fueron fallecidos, sobre la base de la remuneración mínima vital (RMV) vigente en cada ejercicio fiscal, a quienes se refiere la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, la Ley 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador de 1995.

Artículo 2. Finalidad:

La presente Ley, tiene por finalidad atender las demandas de los ex combatientes calificados como Defensores de la Patria (CDP), en el marco de la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo y sus modificatorias, la Ley 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador de 1995 y sus modificatorias.

Artículo 3. Personal con invalidez y deudos de los fallecidos en combate calificados como defensores de la patria.

El beneficio del personal con invalidez permanente y los deudos de los fallecidos en combate calificados como defensores de la patria, dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador de 1995, se extiende a las campañas militares que hace referencia la Ley 24053, Denomina "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo.

Artículo 4. Control y registro de los beneficiarios.

El control y supervisión de los beneficiarios será de manera mensual, cuya función está a cargo del Área Contable del Ministerio de Economía y Finanzas, además del Órgano de Control Interno (ÓCI), quienes deben publicar el informe de los beneficiarios calificados como defensores de la patria, en la página web institucional del MEE, tomando en cuenta los registrados en el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que se encuentren considerados en la normatividad legal vigente. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA: Implementación

Autorizase al Ministerio de Defensa (MINDEF) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, dicten las medidas necesarias sin demandar recursos adicionales al tesoro público, a realizar modificaciones en el nivel funcional y programático, de conformidad con sus competencias, a fin de atender los devengados y la bonificación mensual que perciben sobre la base de la remuneración mínima vital (RMV) vigente en cada ejercicio fiscal, a los ex combatientes calificados como Defensores de la Patria (CDP), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24053 y su modificatoria, denominada "Campaña militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en

Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo, la Ley 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policia Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador de 1995.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MOFICATORIAS Y DEROGATORIA

PRIMERA. Modificase el artículo 3 de la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Modificase el artículo 3 de la Ley 30874, cuyo texto será el siguiente:

> ***"Artículo 3. Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos:***
>
> ***Ampliese el plazo de vigencia de la Ley 30874, por última vez hasta el 30 de noviembre de 2025. Este entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación de la presente norma, autorizándose al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, establezca las prioridades y las acciones necesarias****, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el* ***artículo 2 de la Ley N°30874".***

SEGUNDA: Derogación

Deróguese la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; y, la Centésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2022

21. PROYECTO DE LEY 6615/2023-CR

Fundamenta su propuesta con lo siguiente:

El Perú posee una larga historia de enfrentamientos y conflictos fronterizos con sus países vecinos por territorios no delimitados. Ecuador es el principal país que hemos enfrentado en el último siglo, ya que, al no haber definido claramente nuestras fronteras, ese país siempre encontró el pretexto perfecto para invadir suelo peruano.

El Ejército del Perú, en conjunto con las Fuerzas Armadas, siempre han estado prestos a resolver los problemas, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Perú.

En cuanto a los derechos que se reconoce a los excombatientes de las FFAA, están contemplados en la Carta Magna, la cual señala en su artículo segundo, inciso 2) establece como derecho fundamental de la persona el de "la igualdad ante la ley". En tal sentido, la Corte interamericana de Derechos Humanos en el Fundamento 55 de la Opinión Consultiva OC-4/84, desarrolló la noción de igualdad, en los siguientes términos:

"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza".

Asimismo, en la misma opinión consultiva, la Corte interamericana de Derechos Humanos precisó en su Fundamento 56, que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, sin embargo, cuando la norma carece de justificación objetiva y razonable para generar dicha distinción, sí se estaría ante una evidente afectación a dicho derecho fundamental, tal como se cita a continuación:

"Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose "en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos" definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva y razonable".

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento 3.2.2 de la sentencia del 08 de agosto de 2014, recaída en el Expediente N° 01008-2013-PA/TC, desarrolla el contenido esencial del derecho de igualdad, en los términos siguientes:

"Cabe resaltar que el contenido esencial del derecho a la igualdad tiene dos fases: Igualdad en la ley e igualdad ante la ley. La igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable".

En cuanto a la igualdad ante la ley, la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable.

Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico deberá garantizar que, salvo existan justificaciones objetivas y razonables, las normas sean aplicables por igual a todas las personas que se encuentren en una misma situación o condición, teniendo en cuenta la doble faceta del contenido esencial del derecho a la igualdad desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada.

Ahora bien, el 20 de julio de 1995, fue promulgada la Ley N° 26511, la cual estableció disposiciones generales en relación al reconocimiento como Defensores de la Patria al personal que participó como combatiente en la zona del Alto Cenepa en el conflicto con el Ecuador que, tuvo lugar en el año 1995, reconociendo como tales asimismo, a "aquellos que a partir del 01 de marzo de 1995 hayan fallecido o se encuentren con invalidez temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa".

Cabe indicar que dicha norma contempló beneficios económicos a favor del personal reconocido como Defensor de la Patria, encargándose al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento.

Si bien esta norma contemplaba como plazo de calificación inicial 180 días, dicho plazo fue materia de ampliación mediante los Decretos Supremos N° 025-2004-DE-CCFFAA, y N° 023-2006-DE-CCFFAA-D1-PERS, así como las Resoluciones Ministeriales N° 333- 2007-DE-CCFFAA, del 15 de mayo de 2007, Resolución Ministerial N° 898-2008-DESG, del 29 de agosto de 2008, Resolución Ministerial N° 1098-2010-DE-SG del 08 de octubre de 2010 y Resolución Ministerial N° 479-2012-DE-CCFFAA, del 09 de mayo de 2012. Este último dispositivo normativo amplió el plazo a 08 meses.

Posteriormente, el 21 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 28796, la cual contiene disposiciones referidas al reconocimiento de Defensores de la Patria al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981.

Finalmente, el 18 de julio de 2010, se publica la Ley N°29562, la cual otorga reconocimiento al mérito a los ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995. Si bien esta norma contemplaba como plazo de calificación cinco años, dicho plazo fue materia de ampliación mediante Ley N° 30874 del 29 de noviembre del 2018; Este último dispositivo normativo amplió el plazo a 05 años.

A pesar de este marco normativo, han existido múltiples inconvenientes para el reconocimiento de los excombatientes que participaron en los conflictos antes mencionados, resultando insuficiente el plazo establecido por las Leyes N° 30874, N° 26511, 28796 y 29562, y sus respectivas ampliaciones otorgadas mediante Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales, para el proceso de calificación y reconocimiento respectivo, existiendo aún muchas solicitudes que no han sido objeto de evaluación, ocasionándose en consecuencia, un grave perjuicio a los ex combatientes quienes a pesar de haber participado activa, hidalga y valientemente en defensa de nuestra patria, no han sido reconocidos como tales, privándoseles de los beneficios económicos y meritorios contemplados por Ley.

La pandemia afecto el proceso de evaluación y calificación

La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del C0VID19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea.

En el Perú, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA — del 11 marzo 2020; se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID19.

Con fecha 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio por la cuarentena.

Mediante DS N° 045-2020-PCM 17 marzo 2020; DS N° 046-2020-PCM 18 marzo 2020; DS N° 0572020-PCM 02 abril 2020; DS N° 058-2020-PCM 02 abril 2020; DS N° 061- 2020-PCM que modifica el artículo 3° del DS N° 051-2020-PCM; que prorroga el Estado de Emergencia Nacional; DS 070-2020 del 16 abril 2020; DS 072-2020- PCM que modifica el art 4 del 044-2022 PCM dichas medidas, se aprecia la necesidad que el Estado adopte medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población.

Es en este contexto que la presente iniciativa legislativa propone establecer un nuevo plazo de dos años, por las extremas medidas y prorrogas del Estado de Emergencia Nacional para evitar la propagación del COVID-19; restituir el tiempo dado por los Estados de Emergencia de inmovilización social obligatoria; a fin que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los institutos armados (Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú y La Marina de Guerra del Perú) evalúe, califique, formule actas y expida las resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentren amparados en las Leyes N° 26511, 28796 y 29562, Reconózcase a la Asociación "Excombatientes del Conflicto de la Cordillera del Cóndor 1981" como la institución que a nivel nacional agrupa y representa a los excombatientes de estos conflictos 1978, 1981 y 1995 de conformidad a su Estatuto y Reglamento Interno y, de esta manera nuestro ordenamiento jurídico garantice la igualdad de tratamiento entre quienes a la fecha han sido reconocidos como Defensores de la Patria y vienen percibiendo los beneficios económicos establecidos por las normas de la materia, y aquellos ex combatientes que pese a haber participado en los conflictos antes mencionados, aún no han sido reconocidos como tales.

Ley N° 30874

La ley N° 30874, cuya denominación es LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA HACER EFECTIVO EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y CIVIL QUE PARTICIPO EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 Y 1995, fue promulgado y publicado en el diario oficial El Peruano, el 29 de noviembre del 2018.

La mencionada ley otorgó, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el plazo de cinco años para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con Ecuador en los años 1978, 1987 y 1995.

La norma establece nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1987 y 1995.

La referida norma se aplica para el personal militar, policial y civil que participó en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las siguientes leyes:

a) Ley N° 26511, norma que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las FF.AA, PNP y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador;

b) Ley N° 28796, que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al personal de la FF.AA, PNP y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981; y

c) Ley N° 29562, que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Además, se señala que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe impulsar de oficio la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento.

Mayores detalles de la propuesta en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6615

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE AMPLÍA EL PLAZO DE LA LEY N° 30874 - PARA CONTINUAR CON LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, FORMULACIÓN DE ACTAS Y EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, POLICÍA NACIONAL Y CIVILES QUE PARTICIPARON EN LOS CONFLICTOS ARMADOS CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 Y 1995

Artículo 1° Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto ampliar el plazo de la Ley N°30874, a dos años, para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Artículo 2° Finalidad de la ley.

La finalidad de la ley, es ampliar el plazo a dos años de la Ley N°30874, para continuar con los procesos de evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento, a la entrada de la vigencia de la presente ley.

Artículo 3. Modificación del artículo 3 de la Ley 30874

Se modifica el artículo. 3 de la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978,1981 y 1995.

"Artículo 3. Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos

Se otorga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo adicional de ***dos*** *(años),* ***que vencerá el 29 de noviembre del 2025****, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el artículo 2 de la presente ley.*

Artículo 5°- Derogatoria y publicación.

Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley, la que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" y su portal electrónico.

Para mayores detalles en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6615

22. PROYECTO DE LEY 6773/2023-CR

La propuesta legislativa de fundamenta en:

Introducción

Conforme es de conocimiento público, nuestro país ha atravesado -quizás- los veinte años más sangrientos y violentos que fuera registrado en toda su historia (1980-2000) a causa de los esbirros de grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); pero además de los excesos ejercidos por las Fuerzas Armadas', dejando como saldo alrededor de setenta mil personas asesinadas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, etc.) causando inclusive daños económicos que bordean los 26,000 millones de dólares a raíz de la destrucción de infraestructura tanto estatal como privada, ello en mérito a lo resuelto por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación — CVR, creada mediante decreto supremo en el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ratificado por el gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo Manrique.

En esta época de terror, la población más humilde del país se vio principalmente perjudicada, sobre todo la del campo, puesto que se enfrentaban prácticamente contra ambos bandos, la subversión y los excesos de las fuerzas del orden -con sus honorables excepciones claro está- en ese sentido, dicha población no tuvo más remedio que organizarse integrando comités de diferente naturaleza, como los licenciados de las Fuerzas Armadas, que con su experiencia en el campo militar y en el manejo de armamento, pudieron capacitar a la población civil para su defensa frente a los actos terroristas de la subversión; del mismo modo, se organizaron formando comités de autodefensa -como acto autocompositivo-puesto que muchos de sus integrantes habían realizado servicio militar y se tenía suficiente conocimiento para la defensa y ataque frente a un hecho bélico; por último, la población venía siendo organizada en rondas campesinas, creadas no

para el combate, sino para la participación en soluciones frente a problemas sociales de su sector, básicamente de naturaleza agrícola -históricamente recogida por las costumbres de las culturas pre incas e incas Es decir, la población civil organizada en estas asociaciones -cada una entrelazada entre ellas- pudo participar en la lucha frontal contra el terrorismo garantizando la pacificación del país, arriesgando sus vidas y muchas veces perdiéndolas, hoy anónimos para nuestra historia; sin su participación en estos veinte años de conflicto armado interno, no se hubiese podido vencer a los esbirros de estos grupos terroristas y genocidas, lacayos de fundamentalismos sin norte, de ideas mal aprendidas, lejanas a la comprensión de los principios de la dialéctica y de la filosofía política.

Una vez más ha quedado demostrado que el pueblo organizado, puede dar las batallas que la historia reclama y necesita, conforme ha ocurrido con estos gremios asociados, por lo que es nuestro deber no sólo honrarlos como héroes de la pacificación nacional, sino que sus esfuerzos tienen que ser retribuidos por nuestro Estado, conforme a los argumentos desarrollados en el presente Proyecto de Ley.

Sobre la necesidad de una justa asignación

Uno de los mandatos que le fueran encomendado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue el de elaborar propuestas de reparaciones para las víctimas y sus deudos, es así que el Informe Final de la CVR estableció el "Plan Integral de Reparaciones - PIR", cuyo objetivo general era el de "reparar y compensar la violación de los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno.

Efectivamente, cuando existe un daño probado y acreditado indubitablemente, tiene que ser resarcido en favor de la víctima o de sus familiares; ese es un principio general que nuestra legislación viene aplicando respecto a este tipo de casos; del mismo modo, es nuestra posición que se debería equiparar este principio con el derecho que se tiene al reconocimiento por las labores realizadas por haber contribuido en la pacificación del país y la lucha frontal contra el terrorismo; así como el de reparar y compensar la violación de los derechos humanos fue el objetivo principal del Plan Integral de Reparaciones de la CVR, la asignación a una pensión justa de manera mensual en favor de los que participaron en dicha pacificación de la nación y lucha contra el terrorismo, debe ser el objetivo fundamental del Estado peruano. Una pensión digna para nuestros héroes anónimos.

Identificación del problema

La mayoría de la población peruana que participó en la pacificación del país y que luchó contra el flagelo del terrorismo, esto es los licenciados de las Fuerzas Armadas así como los comités de autodefensa y las rondas campesinas, ha sido de la clase más humilde y olvidada por cada gobierno que hemos tenido las últimas décadas, que hasta la fecha no se les ha reconocido ningún tipo de retribución por las labores que realizaron en beneficio de la paz y de la democracia de nuestro país desde el inicio y término del conflicto armado interno (1980- 2000); dicho reconocimiento debe ser a través de la designación de una asignación

mensual equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales -RMV- atendiendo el costo de vida y el valor que presenta poder cubrir la canasta familiar.

Un gran porcentaje de estos ciudadanos -héroes anónimos del país- son desempleados, no tienen un seguro de vida, no son pensionistas ni aportantes en algún seguro de pensión mucho menos. Son parte de ese casi 80% de personas que viven en la informalidad económica, son los que trabajan día a día para poder sobrevivir y nuestro Estado a la fecha los tiene en un absoluto e injusto abandono.

El asumir una pensión y el resto de beneficios precitados, denotará un interés para con ellos, puesto que gracias a su actividad y su participación en la nefasta década de los 80°, tenemos la tranquilidad que hoy gozamos.

El ejército y la Policía Nacional del Perú realizan labores de seguridad ciudadana en las zonas declaradas en emergencia y existen cuerpos de seguridad no policiales, como las rondas campesinas, que abundan en las zonas rurales y los comités de autodefensa (CAD).

Como se explicó precedentemente, estas asociaciones surgieron en la década de los 800 como mecanismo de defensa de las comunidades más aisladas del país contra las incursiones criminales de las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA; los CAD a la fecha siguen operativos principalmente en las zonas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro — VRAEM.

Tras la derrota de los subversivos pasaron a un papel secundario, siendo absolutamente descuidados por las instituciones del país, a pesar de la enorme contribución que estas agrupaciones han dado en la década de los 80°, participando activamente en la lucha frontal contra las agrupaciones terroristas.

Luego de la derrota de estos grupos subversivos, iniciándose el año dos mil, el Estado retiró todo tipo de apoyo a las CAD e inició su desmovilización, dejando a las comunidades más alejadas de cualquier presencia policial o militar en la indefensión ante los remanentes terroristas y el narcotráfico.

Hoy dichos remanentes continúan presentes en las zonas del VRAEM, liderados por los hermanos Quispe Palomino, quienes más allá de fomentar posiciones políticas, se dedican al narcotráfico, al crimen organizado, secuestro, asesinatos, entre otros delitos, de los cuales son los propios CAD quienes continúan luchando contra este flagelo, apoyando siempre a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú; más aún en un país en que la delincuencia viene ganando batalla y el gobierno actual no parece capaz de encontrar una senda clara para combatir estos esbirros.

Otras informaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTU2NTgw/pdf

El texto legal se detalla a continuación:

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA MENSUAL PARA LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, COMITÉS DE AUTODEFENSA Y RONDAS CAMPESINAS QUE LUCHARON CONTRA EL TERRORISMO Y CONTRIBUYERON A LA PACIFICACIÓN NACIONAL

Artículo 1.- Objeto de la ley

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto asignar una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (RMV) para los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional.

Artículo 2.- Finalidad

Reconocer y subsidiar con una pensión equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (RMV) la enorme labor histórica y desprendida que tuvieron los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional desde los años 1980 al 2000.

Artículo 3.- Beneficios

los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional desde los años 1980 al 2000, tienen los siguientes beneficios:

- *Acceso a las becas y/u otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior.*
- *Adjudicación de bienes inmuebles por parte de las entidades del Estado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por los mismos.*
- *Acreedores a perpetuidad a título gratuito de un nicho en cualquiera de los cementerios de propiedad del Estado.*
- *Atención médica gratuita y acceso a medicamentos en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud — ESSALUD.*
- *Derecho a la rehabilitación física, terapia psicológica y capacitación laboral.*
- *Apoyo económico y facilidades para acceder a estudios de nivel primaria, secundaria, técnico superior y superior.*
- *Asesoramiento gratuito en proyectos de micro y pequeña empresa, así como en los de colonización, comunidades nativas y fronteras.*
- *Apoyo técnico agropecuario y ganadero promovido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.*

***Artículo 4.- Autoridades públicas de empadronamiento, registro y administración**. Desígnese a los ministerios de Defensa e Interior para que, en mérito a sus atribuciones, procedan con la creación de la oficina administrativa de empadronamiento y registro de los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación nacional, o en su defecto a sus deudos acreditados conforme a ley, cuya administración del dinero destinado para el cumplimiento del objeto de la presente iniciativa legislativa estarán a cargo de estas carteras ministeriales.*

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

PRIMERA. - Reglamentación

En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, el Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento de la presente Ley, que será aprobado mediante Decreto Supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

En ese sentido y para estos fines modifíquese las normas que resulten necesarias y pertinentes para la ejecución de la presente ley

SEGUNDA. - Vigencia

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial el peruano.

23. PROYECTO DE LEY 6955/2023-CR

La propuesta Legislativa se fundamenta en:

Antecedentes

Uno de los últimos conflictos bélicos que afrontó el Perú, donde se demostró el coraje, valentía y heroísmo de los soldados peruanos, ocurrió entre los meses de enero y febrero del año 1995, donde tropas peruanas tuvieron que enfrentarse a soldados del Ecuador que habían ingresado a territorio nacional, los cuales fueron expulsados, dejando en su huida pérdidas humanas y material bélico. El teatro de operaciones fue la cuenca del río Cenepa, en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor, enfrentamiento conocido como "Guerra del Cenepa", tensión que se mantuvo hasta diciembre de 1995.

Según el Capitán de Corbeta MGP Marcos Gálvez Bernuyl, a inicios de 1995, patrullas peruanas detectaron movimiento de tropas ecuatorianas en la cuenca del do Cenepa, cuyo objetivo era derrotar militarmente al Perú en un área focalizada preparada por ellos, para así tener una salida soberana hacia las márgenes del rio Marañón. Inmediatamente se desplegaron tropas militares para reforzar las zonas, pero las tropas ecuatorianas emboscaron a la patrulla peruana, desencadenando el conflicto.

Los altos mandos de los tres institutos armados peruanos, escribe Gálvez Bernuy, empezaron a movilizar sus fuerzas, a pesar de los problemas de contar con fusiles FAL, armamento obsoleto para la época, unos cuantos RPG, apoyo de fuego de morteros, artillería, apoyo aéreo e inteligencia, las tropas peruanas se enfrentaron a una fuerza que si estaba preparada para el momento. Las acciones militares lograron la recuperación de los puestos de vigilancia de Cueva de los Tayos y Base Sur, llegando hasta Tiwinza, aunque no se pudo mantener la posición, pues la logística era insuficiente y la línea de abastecimiento era larga y desgastadora.

Los soldados vivieron situaciones muy difíciles, detalló el militar. La linea de abastecimiento que ingresaba al terreno ocupado por el enemigo, se veía atacada con la emboscada de las patrullas ecuatorianas, dejando a nuestras tropas aisladas. Las minas y los sistemas antiaéreos enemigos cobraron la vida de muchos soldados y pilotos peruanos, así como la pérdida de aeronaves. La Declaración de Paz de Itamaraty para cesar las hostilidades en todo el frente, fue firmada el 17 de febrero de 1995, pero, a pesar del alto al fuego, el enemigo continuaba bombardeando las posiciones peruanas; los arteros ataques ecuatorianos no quedarían impunes.

El Ejército del Perú lanzó un violento ataque sobre las últimas posiciones enemigas en territorio nacional, desarticulando todo el dispositivo defensivo enemigo en el área de Tiwinza, encontrando abundante material bélico que fue abandonado por los ecuatorianos en su huida. El rotundo fracaso ecuatoriano de infiltración en el Cenepa colocó a su país ante el inminente riesgo de una guerra total. El 22 de febrero de 1995 los ecuatorianos lo reconocieron como el Miércoles Negro, debido a la gran cantidad de bajas que sufrieron tras el embate de los soldados peruanos. Durante el tiempo del conflicto, las Fuerzas Armadas del Perú reforzaron su línea fronteriza, incluso el área de 78 km no delimitada, fue declarada "inejecutable".

El conflicto tuvo a los países de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos como garantes de las negociaciones ya que ellos también lo fueron en la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942. Perú y Ecuador, gracias a la firma del acta de Brasilia, aceptaron la culminación del proceso de demarcación fronteriza en el tramo de 78 kilómetros que se encontraban pendientes. Así fue como se ratificó el protocolo firmado en Río de Janeiro, en 1942.

La demarcación de la frontera sobre las cumbres de la cordillera del Cóndor zanjó todo conflicto, ratificando la posesión peruana de la zona del Cenepa, incluyendo Tiwinza. Perú otorgaba a Ecuador, en condición de propiedad privada y sin perjuicio de la soberanía peruana, un kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinza, donde están sepultados 14 soldados ecuatorianos que perdieron la vida en el lugar, concluye en su artículo el Capitán de Corbeta MGP, Gálvez Bernuy.

LA LEY DE DEFENSORES DE LA PATRIA

En pleno conflicto, desde febrero del año 1995, en el Congreso de la República se empezaron a promover proyectos de Ley a favor de los combatientes, en especial para los fallecidos, los heridos y sus herederos, así como el reconocimiento a quienes quedaban con vida. El 6 de febrero de 1995, el congresista Pedro Cáceres Velásquez del FRENATRACA, promovió el proyecto de Ley 2542/95-CCD titulado "Otorgase a los familiares de los que mueran en defensa de la Soberanía Nacional en general, como son la esposa, hijos menores de edad y padres de 60 años de edad, una pensión equivalente a tres (3) Sueldos Mínimos Vitales o Legales, reajustándose de acuerdo a las variaciones de Ley.

El 10 de febrero de 1995, el congresista de Alianza Nueva Mayoría— Cambio 90, Andrés Reggiardo Sayán, presentó el PL 255/95-CCD, "Autorizase al Poder Ejecutivo a aprobar mediante Resolución Suprema, el otorgamiento de una bonificación mensual y permanente en favor de los herederos que dependían económicamente de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y civiles que fallezcan o hayan fallecido con ocasión del conflicto bélico fronterizo con el Ecuador de 1995, el mismo que no deberá ser menor a tres remuneraciones mínimas vitales".

El 14 de febrero de 1995, el congresista Jorge Figueroa Vizcarra, presentó el PL 2558/95-CCD, titulado "Reconózcase como héroes de la Patria a los peruanos fallecidos en acciones de combate durante el Conflicto con el Ecuador de 1995". El 20 de febrero de 1995, el congresista, Jorge Velásquez Gonzales del FRENATRACA, presentó el PL 2573/95-CCD, titulado "Las Madres que vivan solas y hayan perdido su único hijo en el Conflicto con el Ecuador, recibirán una Pensión Mensual Vitalicia equivalente a TRES SUELDOS MÍNIMOS".

Asimismo, el 21 de febrero de 1995, el congresista Roger Cáceres Velásquez del FRENATRACA, presentó el PL 2577/95-CCD, denominado "Háganse extensivos los beneficios de la Ley N° 24053, así como de sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, a los combatientes que participaron en los conflictos fronterizos acontecidos en la zona Nor-Oriental del país, en los años de 1.981 y 1,995, en los lugares denominados "Falso Paquisha' y "Alto Cenepa", respectivamente".

El 22 de febrero de 1995, el congresista Willy Serrato Puse, presentó el PL 02581/95- CCD titulado "Incrementar y extender los beneficios indicados en las Leyes 24053 y 25202, a los sobrevivientes, así como a las madres, viudas o hijos de los combatientes de 1981 y 1995, debidamente calificados por el Comando Conjunto de las FF.AA. hasta el 30% de la U.I.T.".

El 22 de febrero de 1995, el congresista del Movimiento Democrático de Izquierda, Julio Castro Gámez, presentó el PL 02582/95-CCD, titulado Reconózcase la calidad de Defensor de la Patria en la Cordillera del Cóndor' al personal militar que combatió en el frente de la Cordillera del Cóndor entre el 9 de enero y el 21 de febrero de 1995".

El 22 de febrero de 1995, el congresista Antero Flores Araoz del PPC, presentó el PL 02583, "Compréndase en los alcances del Art. 5 0 de la Ley 24053, modificado por la Ley N° 25208, a los descendientes, ascendientes, o cónyuges, según corresponda, de los combatientes fallecidos en los conflictos de 1,981 y 1.995 en la frontera con Ecuador; calificados como defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas".

El 23 de febrero de 1995, el congresista Manuel Moreyra Loredo, de Solidaridad y Democracia, presentó el PL 2587/95-CCD, "Autorizase al Poder Ejecutivo a otorgar ascenso póstumo correspondiente a tres grados inmediatos superiores a los señores Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales de nuestras Fuerzas Armadas acreditados por el Comando Conjunto, que al participar en el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador por Acción de Armas han fallecido á fallecieran. Dicho ascenso extraordinario se hace extensivo a los que por la misma Acción han devenido en incapacidad invalidez".

La Comisión de Defensa del Congreso, acumuló los proyectos de Ley con texto sustitutorio, el cual aprobó el 16 de marzo de 1995 con el título "Ley a favor de las víctimas en los sucesos de enero 1995 en la Cordillera del Cóndor'. El dictamen fue aprobado por el Pleno del CCD y fue observado por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Defensa insistió en la Autógrafa, siendo publicada la Ley N° 26511, el 23 de julio de 1995, con el título "Reconocen como Defensores de/a Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador".

El objetivo de todos los proyectos de ley, era reconocer el patriotismo de nuestros soldados, por defender el territorio nacional. Por ejemplo, el primer considerando del PL 2587/95-CCD de Manuel Moreyra, señalaba "Que, es deber del Estado Peruano reconocer el coraje, valentía y sentimiento patriótico dando un tratamiento especial tanto a los familiares sobrevivientes de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que han fallecido como al personal que ha devenido en invalidez o incapacidad en Acción de Armas al participar en defensa de los sagrados intereses de la patria en la confrontación bélica con el Ecuador, cuyas tropas incursionaron y se posesionaron en territorio peruano - Base Sur, Cueva de los Tayos, Tiwinza - página triste y muy lamentable de nuestra historia republicana".

Con la publicación del Reglamento de la Ley N° 26511, aprobado por el D.S. N' 010- DE-SG, publicado el 12 de febrero de 1999, el artículo 3 de la referida norma, extendió el tiempo del área de Conflicto en la Zona del Alto Cenepa, en su inciso

c), señalando como "Acciones de armas desarrolladas entre las Fuerzas Peruanas y Fuerzas Ecuatorianas en la Zona del Alto Cenepa, en el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995, incluye los acontecimientos ocurridos en dicha zona hasta el 31 de diciembre del mismo año, y que no pueden ser referidos a otra causa".

Es decir, para ser considerado Defensores de la Patria, no bastaba haber participado como combatiente del 26 de enero al 28 de febrero de 1995, sino que este beneficio se extendió a los demás combatientes, que no sólo participaron en acciones de armas necesariamente, sino "incluye los acontecimientos ocurridos en dicha zona" hasta el 31 de diciembre de 1995.

LEYES POSTERIORES

El 10 de mayo de 1999, se publica la Ley N° 27124, con el título "Ley que modifica la Ley N° 26511, que reconoce como defensores de la patria y otorga beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador". Esta modificación permitió incluir como Defensores de la Patria, a los que hayan fallecido o se encuentren con invalidez temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa.

El 21 de julio de 2006 se publicó la Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de defensores de la patria al personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto armado de/a Cordillera del Cóndor de 1981. El Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso respecto al PL, tuvo como sustento fundamental la aplicación del Principio de Igualdad, citando el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución, al sostener que "Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole", norma que implica que ante una misma situación jurídica deben reconocerse los mismos derechos que se hayan otorgado a aquellas personas que obtuvieron dichos derechos.

La dación de la Ley N° 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, publicada el 18 de julio de 2010 no otorgó beneficio económico alguno, sólo fue un reconocimiento al mérito, con diplomas de honor, medallas y carnés de reconocimiento.

Finalmente, con la Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, publicada el 29 de noviembre de 2018, se otorgó un plazo de cinco años, a partir de la publicación de la Ley, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador. La Ley señaló al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien impulse de oficio, la evaluación y calificación de los casos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Conforme a lo expuesto precedentemente, a pesar de tener más de 28 años de publicada la Ley 26511, hasta la fecha no se ha podido solucionar los problemas suscitados para su aplicación, respecto a la interpretación de la misma y por no haberse logrado canalizar el espíritu de la Ley en el reglamento, sin generar discrepancias entre los potenciales beneficiarios, algunos de los cuales todavía no logran su reconocimiento.

Considerando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada12, corresponde al Poder Legislativo revertir las condiciones de desigualdad que se aprecien en una norma vigente, a través de un proyecto de ley, que permita reponer las condiciones de igualdad que la ley primigenia establecía, es decir la Ley 26511, la misma que fue parte de un sentimiento nacional de gratitud hacia todos los combatientes del Alto Cenepa, por el patriotismo demostrado.

La aplicación de la Ley, tal como ocurre hasta la fecha, se ha desvinculado de la realidad social. Ese derecho a las aspiraciones constitucionales, manifestada a través de las diversas asociaciones de excombatientes y acciones legales personales por la discriminación sufrida, conforme a sus propias expresiones, son necesarias superarlas por la imagen del Estado que debe reconocer el derecho de sus combatientes, sin ningún tipo de discriminación.

Frente a las situaciones expuestas, corresponde al legislador adoptar acciones positivas para revertir el estado de cosas existentes y de la cual no se puede sustraer, por ser parte de los objetivos del Acuerdo Nacional y estar vinculado a la Agenda Legislativa 2022-2023, promoviendo un proyecto de ley, que logre la igualdad entre los pares combatientes del Alto Cenepa del año 1995, permitiendo además que el reconocimiento de Defensores de la Patria, sea por igual para todos los que estuvieron en la Zona de Combate.

Fundamentando la propuesta legislativa, sobre la modificación del estado de cosas, debemos precisar que el artículo 1 de la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el cont7icto con el Ecuador, publicada el 20 de julio de 1995 no estableció ninguna distinción para ese reconocimiento, no discriminó entre Combatientes, Combatientes en la Zona del Cenepa y Defensores de la Patria. Solo dispuso que la calificación respectiva correspondiera al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Con la dación de la Ley 27124, del 27 de mayo de 1999, que modificó el artículo 1 de la Ley 26511, se amplió la calidad de Defensor de la Patria, a los fallecidos, inválidos temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en dicha zona o fuera de ella, a partir del 1 de marzo de 1995, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no puedan ser referidos a otra causa. Tampoco se hizo distinción alguna entre combatientes.

Todo evidencia, que durante más de cuatro años, la Ley 26511 no se logró ejecutar, debido a que en su texto no dispuso su reglamentación. Fue la Ley 27124, quien en su artículo 3, referido a normas reglamentarias estableció que el Ministerio de Defensa mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendada por el Ministro de Defensa, expedirá las normas

reglamentarias complementarias que se requieran para la correcta aplicación de la Ley, dentro de los 30 días naturales contados a partir de su vigencia.

Con la dación del Reglamento de la Ley 26511, aprobado por Decreto Supremo N° 010- DE-SG, publicado el 12 de febrero de 1999, en sus definiciones contenidas en su artículo 3, recién se discriminó al Combatiente, del Combatiente en la Zona del Alto Cenepa y Defensores de la Patria, calificaciones que se debían realizar a propuesta de sus instituto y calificado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin posibilidad a que la solicitud sea de parte, es decir a quien se consideraba con derecho, pero que no había sido considerado por la autoridad, no podía peticionar su inclusión.

Lo que se debe precisar, es que el espíritu del legislador, con la Ley 26511 y su modificatoria la Ley 27124, era que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron como COMBATIENTES EN LA ZONA DEL ALTO CENEPA el año 1995, debían ser RECONOCIDOS CON LA CALIDAD DE DEFENSORES DE LA PATRIA, definición del conflicto que por el Reglamento se extendió hasta el 31 de diciembre de 1995.

Entonces el objetivo de la Ley, era distinguir a TODOS LOS MILITARES, POLICÍAS Y CIVILES que estuvieron en la ZONA DEL ALTO CENEPA. Lamentablemente el Reglamento estableció requisitos adicionales para la calificación de Defensores de la Patria, como el haber participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en las operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa, creando la desigualdad, pero además condicionaba a ser propuesto por un instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y calificado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En los tiempos del conflicto, el sentir nacional era reconocer el patriotismo de los soldados, policías y civiles peruanos que se encontraban en la Zona del Alto Cenepa, en la defensa de la integridad del territorio nacional, participando en acciones de combate para repeler a las fuerzas extranjeras y otros resguardando las fronteras ante posible arremetida de unidades enemigas. Es por ello que la desigualdad establecida por los institutos armados, fue el generador de problemas.

Algunos combatientes pretendieron hacer valer sus derechos, por haber estado en la Zona de Alto Cenepa, pero los mismos fueron rechazados, teniendo que acudir ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, no siendo atendido en sus demandas, debido a que los requisitos estaban establecidos por Ley, como es el de ser propuesto por una institución armada y calificada por el CCFFAA.

Es decir, el primer problema a solucionar con la iniciativa legislativa, es que las personas que no han sido propuestos por los institutos armados, a pesar de haber participado en la Zona de conflicto armado, tengan la posibilidad de presentar sus solicitudes de parte. Además, que la calificación del Comando Conjunto, tenga en cuenta el principio y derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, considerando que el artículo 1 de la Ley 26511, no es discriminatorio, ni tampoco su modificatoria.

En segundo lugar, la iniciativa legislativa tiene que prorrogar el plazo para hacer efectivo el reconocimiento, el mismo que fue establecido en 5 años, por la Ley 30874, publicada el 29 de noviembre de 2018, el cual vence el 30 de noviembre de 2023. El ámbito de aplicación de la norma, es para los amparados en las leyes 26511, 28796 y 29562. El plazo de prórroga propuesto es de dos años, a partir de la publicación de la Ley.

En tercer lugar, la iniciativa legislativa, debe incorporar la iniciativa de parte para la calificación que realice el Comando CCFFAA de los Defensores de la Patria. La Ley 30874, en su artículo 4, al referirse al Impulso de Oficio, señala que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas impulsa de oficio la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador.

En cuarto lugar la iniciativa legislativa tiene que hacer precisiones, respecto a la frontera norte de la zona de conflicto, señalando que en las mismas se incluyan los lugares de los Puestos de Vigilancia fronterizos, denominados PV 01, PV 02, PV Avanzado "Los Buitres", PV La Media, PV Salazar y PV 12, a efectos de que quienes sirvieron a la patria en tales lugares se acojan a los beneficios de la Ley, no sólo del BIS 32, el RCB-13- Piura, citados en la exposición de motivos, sino de todo combatiente que se hayan sentido discriminados.

En quinto lugar, algunos combatientes que se enfrentaron a las tropas ecuatorianas, fuera de la zona del Alto Cenepa, tampoco han sido considerados, como el Batallón de Infantería de Selva (BIS) N° 53 "Teniente EP César López Rojas", acantonados en la línea de frontera norte con el Ecuador. El 2 de febrero de 1995, un enfrentamiento armado en el hito ubicado en la confluencia del río Cunambo y Pintoyacu, donde fueron capturados dos soldados peruanos del BIS N° 53, que motivó a la vez una reacción de nuestro ejército para rescatarlos con apoyo de unidades civiles. De igual forma, el día 27 de diciembre de 1995, se produjo un combate en el hito Boca Río Bobonaza, margen izquierda, entre soldados peruanos del PV Bobonaza con tropas ecuatorianas en donde el CCFFAA emitió un comunicado oficial el 28 de diciembre de 1995.

El D.S. N° 010-DE-SG, publicado el 12 de febrero de 1999, que reglamentó la Ley N° 26511, lo hizo considerando el artículo 1 de la referida ley como fue aprobado, sin considerar su modificatoria establecida por la Ley N' 27124, publicada el 27 de mayo de 1999, que reconocía la calidad de Defensor de la Patria, a los fallecidos o inválidos temporal o permanente como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en la zona de Alto Cenepa o FUERA DE ELLA, siempre que guarden relación de causalidad con dicho conflicto y no pueden ser referidos a otra causa. Lo que no se interpretó, es que el reconocimiento no era solo a los soldados víctimas del conflicto fuera de la zona del Cenepa, sino también a los que participaron y sobrevivieron a las acciones de armas. odo combatiente que se hayan sentido discriminados.

Mas detalles de otras informaciones en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/6955

La propuesta Legislativa es la siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA CALIFICACIÓN A INSTANCIA DE PARTE EL RECONOCIMIENTO DE DEFENSORES DE LA PATRIA AL PERSONAL QUE *PARTICIPÓ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS CON EL ECUADOR Y PRORROGA LA VIGENCIA DE LA LEY 30874*

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer la calificación a instancia de parte para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador el año 1995 y establece la prórroga del plazo de vigencia de la Ley 30874.

Articulo 2.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad otorgarles el reconocimiento, beneficios y derechos como Defensores de la Patria, al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador, instaurando un trato igualitario a quienes se encuentran amparados en las leyes 26511 y 28796, en aplicación del principio y derecho constitucional a la igualdad ante la Ley.

Artículo 3.- Prórroga

Se prorroga por el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, la vigencia de la Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Artículo 4.- Incorporación del artículo 5 a la Ley N° 30874

Se incorpora el artículo 5 a la Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, en los términos siguientes:

> ***"Artículo 5.- Petición de parte***
>
> *En los supuestos que exista personal que se considere con derecho y que no ha sido comprendido en la citada evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento, establecidas en el artículo 4 de la presente Ley, se podrá solicitar la evaluación a petición de parte, acompañando los documentos sustentatorios".*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. - Incorporación de la tercera, cuarta y quinta disposición final a la Ley N° 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador

Se incorpora la tercera, cuarta y quinta disposición final a la Ley N° 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, en los términos siguientes:

DISPOSICIONES FINALES

[...]

TERCERA. - *Para ser reconocido como Defensor de la Patria, debe ser propuesto por un instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y calificado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De existir personal que se considere con derecho y que no ha sido propuesto ni calificado, se podrá solicitar evaluación a instancia de parte.*

CUARTA. - *Para los beneficios de la presente Ley, se considerará como Zona de Combate del Alto Cenepa, el espacio terrestre, acuático y aéreo ubicado dentro de la zona del Alto Cenepa, comprendido entre los límites siguientes:*

1) Por el Norte: Línea de frontera, PV 01, PV 02, PV Avanzado "Los Buitres", PV La Media, PV Salazar y PV 12.
2) Por el Este: Pendiente Oeste de la Cordillera del Campanquiz
3) Por el Sur: Latitud Sur 3°33'08"
4) Por el Oeste: Línea de frontera.

QUINTA.- *La calidad de Defensores de la Patria, también es aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y civiles que participaron como combatientes fuera de la Zona de Alto Cenepa, siempre que los acontecimientos ocurridos, guarden relación de causalidad con el con el conflicto con el Ecuador el año 1995 y no puedan ser referidos a otra causa.*

DISPOSICIÓN FINAL

Única. - *El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Defensa, reglamenta la presente Ley en el plazo máximo de sesenta (60) días.*

24. PROYECTO DE LEY 7112/2023-CR

Fundamenta su propuesta en lo siguiente:
La iniciativa legislativa pretende la modificación de Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente, e incorporar el reconocimiento como defensores de la democracia a los integrantes de la patrulla "Miguel" que tuvieron participación en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand (alias Camarada Feliciano), en el año 1999, con su participación y accionar aportaron y pusieron en parte la final de la violencia política terrorista que atravesaba el país.
Habiéndose incorporado y modificado en varias oportunidades la ley 29031 Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, y Habiendo incorporado a los Defensores Calificados de la Democracia a los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.
Los integrantes de la patrulla "Miguel" que participaron en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand (alias Camarada Feliciano), en el año 1999, No fueron reconocidos como defensores de la democracia, quienes, si participaron activamente arriesgando sus vidas en los operativos para la captura del líder de los terroristas del Sendero Luminoso, que en aquella fecha fue el numero uno luego de la captura de Abimael Guzmán. Teniendo opiniones favorables para su reconocimiento como defensores de la democracia.
Por otro lado, cabe resaltar que en nuestra legislación encontramos antecedentes de beneficios otorgados por el Estado Peruano tanto a combatientes y al Personal

Discapacitado de Nuestras Fuerzas Armadas, así como a sus familiares y/o deudos así tenemos:
Ley 26778, se reconoció la calidad de "Héroe de la Patria" al coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval y al Capitán EP Raúl Jiménez Chávez, quienes fallecieron en el operativo militar del día 22 de abril de 1997. Asimismo, se autorizó al Poder Ejecutivo otorgar por única vez a los deudos de ambos militares una compensación pecuniaria extraordinaria, independientemente de los beneficios que les correspondan a los deudos de los Oficiales del Ejército.
Adicionalmente y en otros casos similares, el Estado también ha procedido a reconocer la calidad de "Héroe de la Democracia" a otros ciudadanos, como en el caso de los ocho periodistas que en la búsqueda de la verdad fallecieron el 26 de enero de 1983, en Uchuraccay Ayacucho.
En esta misma línea, fue publicada la Ley N° 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente que en reconocimiento al operativo "Chavín de Huántar" ha establecido el 22 de abril. al igual que el 12 de Setiembre como día para realizar actividades conmemorativas en favor de los defensores de la Democracia rindiéndoles homenaje, guardando un minuto de silencio y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra los Delincuentes Terroristas (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso) con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el estado de derecho.

Como se tiene los antecedentes, es oportuno que el estado reconozca y conmemore debidamente a cada uno de los integrantes de la Patrulla "Miguel" captores Principales del Camarada Feliciano, y participando en distintos operativos, se encargó de la captura de diversos cabecillas y rezagos de Sendero Luminoso. Mediante la presente iniciativa legislativa se plantea su revaloración y declaración de héroes de la democracia a todos los partícipes de la caída del camarada Feliciano en el año 1999 en Cochas Chico, Huancayo, el 14 de Julio de 1999, 05:30 am Cochas Chico (Huancayo) habiéndose llevado a cabo la Captura del camarada Feliciano.
En el Diario la Exitosa, edición del 11 de octubre 2020, titulada ¡Olvidados! Entregaron sus vidas para luchar contra el terrorismo, pero siguen sin ser reconocidos, han pasado más de 21 años desde aquella operación de inteligencia que permitió derrumbar a Sendero Luminoso, Organización subversiva, que por décadas desangro a nuestro país. Éxito Perú ubico en el Parque de los héroes del distrito de Chilca, a dos integrantes de la patrulla Miguel, que formo parte del Plan Operativo Cerco 99, del Ejército Peruano en Huancayo, como de Oswaldo Bruno Huamán ex Sargento Primero del Ejército Peruano, quien hizo un pedido a las autoridades para exigir el reconocimiento correspondiente, podríamos haber muerto en ese entonces, pero hay estamos vivos por suerte. Ninguna autoridad no nos reconoce ni se acuerda de nosotros.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, en fecha 22 de noviembre de 199, mediante acta N° 001-99/Comisión evaluadora para el

otorgamiento de distinciones al personal que participó en el planeamiento, conducción, ejecución y control de las operaciones que permitieron la captura del DT-SL Oscar Ramírez Durand (C) Feliciano, donde concluyeron en realizar las recomendaciones de:

- ✓ Felicitar en la orden general de cada instituto Condecorar con la Medalla de Combatiente Mariscal Andrés Cáceres, en el grado de honor y considerar un incremento del 10% en su nota final y se inscriba en el Cuadro de Méritos para el ascenso al grado inmediato superior al personal militar Oficial del Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú, Técnicos y Sub Oficiales del Ejército Peruano, Técnicos y Sub Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú.
- ✓ Felicitar en la OGE y Condecorar con la Medalla de Combatiente Mariscal Andrés A. Cáceres, en el grado de Distinguido a los Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales, Tropa SM.
- ✓ Felicitar en la OGE al personal Oficial, Técnicos y Sub Oficiales. Y se incluya en el proceso de captación para Sub Oficiales de 3ra. De Reserva del presente año, por haber tenido una participación directa en la captura del DT-SL (C) Feliciano al personal de clases Tropa SM, siguiente:
  SGT01° Ree Oswaldo Bruno Huamani (31°DI)
  SGT01° Ree Javier Ruiz Limache (31°DI)
  CABO Saa Melder Lavado Contreras (1° Div. FFEE)
  CABO Saa Ever Paucar Ruiz (2° DI)

Al finalizar la sesión la Comisión Evaluadora, acordaron: Que la 1ra. DIEMFFAA formule la Resolución de Felicitación del Presidente del COMANDO Conjunto de las Fuerzas Armadas del personal militar indicados en los subpárrafos a. (1). (2). (3). (4). (5). (6) y (7), del párrafo anterior y la remita a los respectivos Institutos de las FFAA, para su publicación e inclusión en los Legajos respectivos. Y entre otros acuerdos para ser reconocidos, no se cumplió.

Sin embargo, el General Brigadier [sic] Juan Javier Lira Torres, en su condición de Comandante General de la 31a. Y Jefe Político Militar de la S-ZSNC-7. otorgo a los integrantes de la Patrulla Miguel, Diploma de Honor por su destacada participación en las operaciones contraterroristas, realizadas entre abril y julio de 1999, que permitieron logros importantes en la pacificación de la sierra y central central. En fecha 01 de setiembre de 1999.

Mediante Oficio N° 2995-CCFFAA/D-1/DCP de fecha 22 de octubre de 2022, emite opinión positiva el Jefe de la División de Personal de Estado Mayor de Conjunto de las Fuerzas Armadas, para el otorgamiento de la condecoración con la Medalla de "Defensor de la Democracia" en el Grado de "Comendador" al personal Militar integrantes de la patrulla Miguel quienes participaron en la captura de DT-SL Oscar Ramírez Durand alias Camarada Feliciano, a los siguientes integrantes del Ejercito del Perú:

1. Capitán Miguel VALDEAVELLANO VENTO
2. Suboficial de Segunda Ciro CONTRERAS LEON
3. Suboficial de Segunda José VELEZ CACERES
4. Sargento 1ro. REE Javier RUIZ LIMACHE

5. Sargento 1ro. REE Oswaldo BRUNO HUAMANÍ
6. Sargento 2do. SM Abdón CUBA GARCIA
7. Sargento 2do. SM Romel TELLO MUSIA
8. Sargento 2do. SM Alfredo SOLANO CUICAPUSA
9. Sargento 2do. SM Juan RUIZ PALOMARES
10. Cabo SM Juan PAUCAR QUISPE
11. Cabo SM Edson PALACIOS VICENTE
12. Cabo SM Orlando PALOMINO GÓMEZ
13. Cabo SM Arturo GABRIEL SOLIER
14. Cabo SM Héctor ROJAS SOLANO
15. Cabo SM Walter ALARCON CUSI
16. Soldado SM Giovanni GOMEZ VERGARA
17. Soldado SM Zósimo APARCO TAIPE

Más allá del éxito Militar del Operativo "Plan Cerco 99", tenemos que hasta la fecha no se les ha entregado un reconcomiendo o beneficio concreto por parte del Estado conforme lo dispone la Ley 29031, sino por el contrario, los Integrantes de la Patrulla "Miguel" han sido olvidados y siendo expuestos a tratamientos injustos cuando por su valioso accionar y poniendo en riesgo sus propias vidas, debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad en la Operación del "Plan Cerco 99".

Este año 2024 conmemoramos 25° Aniversario del Operativo "Plan Cerco 99", por lo que resulta oportuno que el Parlamento Nacional declare como "Héroe de la Democracia" a cada uno de los Integrantes de la Patrulla "Miguel", captores Principales del Camarada Feliciano, tanto por su actitud Heroica de anteponer su vida, como por la trascendencia de la operación Militar que constituyo un gran triunfo sobre el Terrorismo y permitió la pacificación en la Selva y Sierra central del Perú y consolidación de la democracia en nuestro País.

Mayores detalles de la propuesta en el enlace siguiente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7112

El texto legal se detalla a continuación:

LEY QUE MODIFICA LA EY 29031 LEY QUE INSTITUYE EL DIA DE LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA Y CREA LA CONDECORACION CORRESPONDIENTE

Artículo 1°. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 1° la Ley 29031 ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente, con la finalidad de incorpora en el segundo párrafo y sean reconocidos a los integrantes de la denominada Patrulla "Miguel" que tuvieron participación en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, alias Camarada Feliciano.

Artículo 2°. Modificación

Modifíquese el artículo 1° de la Ley 29031 Ley que instituye el dia de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente, quedando redactado con texto siguiente:

Artículo 1. Objeto de la Ley

[...]

Así mismo, constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar ***y los integrantes de la denominada Patrulla "Miguel" que participaron en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, alias Camarada Feliciano***

Adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados

Artículo 3. Reconocimiento

Reconózcase la calidad de "Defensores de la Democracia" a cada uno de los integrantes de la Patrulla "Miguel" que participaron en el Plan de Operaciones Cerco 99, captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, alias Camarada Feliciano, realizado el 14 de Julio de 1999.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA. Reglamentación

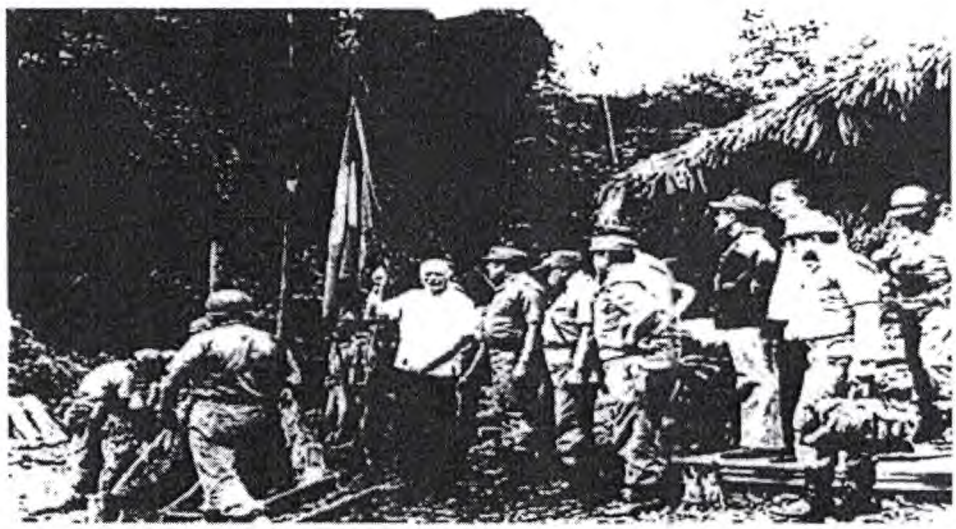
El Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior, reglamentara la presente ley en un plazo de 30 días.

25. Proyecto de Ley 7992/2023-CR

La exposición de motivos señala que:

El conflicto armado de 1978 entre Perú y Ecuador, conocido como el conflicto del Falso Paquisha, se desarrolló a finales de enero de ese año. Surgió debido a las disputas fronterizas en la región amazónica, específicamente en la Cordillera del Cóndor. Las hostilidades comenzaron el 22 de enero de 1978 y continuaron hasta principios de febrero. Durante este período, las Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional del Perú y personal civil desempeñaron roles cruciales en la defensa del territorio nacional, contrarrestando las incursiones ecuatorianas y manteniendo la soberanía del país.

Fig. 1. Conflicto armado de 1978 entre Perú y Ecuador



El conflicto de Paquisha en 1981 fue otro enfrentamiento significativo entre Perú y Ecuador, ocurriendo entre enero y febrero de ese año. Este conflicto también se centró en la Cordillera del Cóndor y se originó debido a la ocupación ecuatoriana de puestos peruanos en la zona fronteriza con el Ecuador. Las Fuerzas Armadas del Perú, junto con la Policía Nacional y civiles, nuevamente defendieron la integridad territorial del país. Este conflicto concluyó con la intervención de organizaciones internacionales que ayudaron a restablecer la paz y la seguridad en la zona de frontera con el vecino país del Ecuador.

El conflicto del Cenepa, ocurrido entre enero y febrero de 1995, fue uno de los enfrentamientos más intensos y prolongados entre Perú y Ecuador. La zona de conflicto se localizó en el valle del río Cenepa, en el departamento de Loreto, en la amazonia CORDILLERA DEL CONDOR. Las operaciones militares involucraron a un gran número de personal de las Fuerzas Armadas del Perú, a Policía Nacional del Perú y civiles, quienes participaron en combates y misiones de apoyo logístico por un periodo de tres años en distintos momentos. Este conflicto culminó con la firma del Acta de Brasilia en octubre de 1998, que estableció un acuerdo definitivo sobre la delimitación fronteriza entre ambos países

Fig. 2. El conflicto del Cenepa.



La Ley 30874, promulgada en 2018, tiene como objetivo reconocer y honrar al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con Ecuador. Esta ley establece un marco normativo para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento, asegurando que el personal que brindó su servicio durante estos conflictos reciba el reconocimiento y los beneficios correspondientes. A través de esta ley, se han realizado esfuerzos significativos para valorar el sacrificio y la dedicación de estos individuos.

Además de la Ley 30874, existen otras normativas que complementan el reconocimiento del personal participante en los conflictos armados. Estas incluyen decretos y resoluciones que detallan los procesos de evaluación y reconocimiento, así como los beneficios adicionales para el personal y sus familias. Aunque estas leyes y normativas han buscado garantizar que los esfuerzos y sacrificios del personal sean debidamente valorados y recompensados, la implementación ha enfrentado diversos desafíos

Fig. 3. Ubicación de la base militar en la frontera con Ecuador



A pesar de los esfuerzos realizados bajo la Ley 30874 y otras normativas, el proceso de reconocimiento aún enfrenta varios desafíos, hasta la fecha, se han reconocido a militares, policías y personal civil, empero todavía queda una cantidad significativa de personal militar, policial y civil aún espera recibir su reconocimiento. Según las estadísticas disponibles, un porcentaje considerable de las solicitudes de reconocimiento no ha sido procesado debido a problemas administrativos y burocráticos. Las dificultades para completar el proceso de reconocimiento incluyen la falta de recursos humanos y deficiencias en acervos documentarios de los partes de guerra y/o documentos oficiales, así como la complejidad administrativa y logística. Las instituciones responsables del proceso han enfrentado limitaciones en su capacidad para llevar a cabo las evaluaciones y calificaciones de manera eficiente.

Además, como consecuencia de la paralización mundial de actividades desde el año 2020 a causa de la pandemia por la COVID-19 ha inmovilizado al país entero y que no se ha podido continuar con la calificación de los tramites de los ex combatientes en el conflicto armado con el vecino país del Ecuador; estos problemas a causando retrasos adicionales y complicaciones en la administración del proceso. Para superar estos obstáculos y asegurar que todo el

personal que participó en los conflictos armados reciba el reconocimiento adecuado, a efectos cerrar las brechas de desigualdad y no discriminación en los beneficios y derechos de los ex combatientes en el conflicto armado con el país del Ecuador, ello conforme a la Constitución Política del Estado en su numeral 2) del artículo 2° de Señala: toda persona tiene derecho "A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole"

Bajo esa premisa, es esencial establecer un nuevo plazo, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador del año 1995. La extensión del plazo permitirá a las instituciones responsables completar las evaluaciones y calificaciones pendientes, garantizando que se cumplan los derechos de los beneficiarios conforme a las leyes antes descrita. Esta medida es crucial para asegurar la justicia y equidad en el reconocimiento del servicio y sacrificio del personal involucrado en los conflictos armados con Ecuador

Fig. 4. Conmemorar el esfuerzo realizado durante los conflictos armados.



Reconocer adecuadamente el servicio y sacrificio del personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con Ecuador es de suma importancia

tanto desde una perspectiva moral como social. El reconocimiento oficial no solo valora el coraje y la dedicación de estos individuos, sino que también fortalece la identidad y el orgullo nacional. Este reconocimiento actúa como un homenaje a quienes arriesgaron sus vidas por la patria, reafirmando el compromiso del Estado con sus defensores. Socialmente, el reconocimiento contribuye a la cohesión y unidad nacional, al recordar y honrar los sacrificios realizados en defensa de la soberanía y la integridad territorial del país. Además, provee un sentido de justicia y equidad, asegurando que los esfuerzos de estos héroes no queden en el olvido y sean debidamente apreciados por las futuras generaciones.

Fig. 5. El servicio y sacrificio del personal militar.



El establecimiento de un nuevo plazo garantiza que se cumplan los derechos de reconocimiento de los beneficiarios conforme a las leyes vigentes. Al extender el tiempo disponible para la evaluación y calificación del personal involucrado en los conflictos armados, se asegura que todos los individuos que cumplieron con su deber patriótico reciban el reconocimiento oficial y los beneficios que les corresponden por ley. Esto es fundamental para asegurar que ningún veterano de guerra, quede sin su merecido reconocimiento debido a retrasos o dificultades administrativas

Asimismo, la extensión del plazo, fortalece el compromiso del Estado con sus fuerzas armadas, la policía y los ciudadanos que han servido al país en situaciones de conflicto. Al demostrar una voluntad firme de reconocer y valorar el sacrificio de los veteranos de guerra, que el Estado reafirma su responsabilidad y su aprecio por aquellos que defendieron la soberanía y la integridad territorial del Perú. Esta deuda se traduce en una relación más sólida y de mayor confianza entre el Estado y sus defensores de la patria.

Por otro lado, uno de los beneficios más significativos de extender el plazo es el potencial incremento en la moral y cohesión institucional dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Cuando el personal ve que sus esfuerzos y sacrificios son reconocidos y valorados, se genera un sentido de orgullo y lealtad hacia la institución. Esto no solo mejora la moral individual, sino que también fomenta un ambiente de unidad y cohesión dentro de las fuerzas, fortaleciendo su capacidad operativa y su compromiso con la defensa del país.

El impacto social de reconocer oficialmente el servicio de aquellos que participaron en los conflictos armados es inmensamente positivo. Al otorgar el debido reconocimiento, se valida y honra el sacrificio de los veteranos, lo que a su vez promueve la cohesión social y el respeto por las fuerzas de defensa. Este acto de reconocimiento contribuye a la memoria histórica y al respeto por aquellos que han protegido la nación, reforzando los lazos entre la sociedad civil y las fuerzas armadas y policiales.

La modificación propuesta a la Ley 30874 cumple con los marcos normativos existentes para que no contravenga otras disposiciones legales. Este análisis legal debe considerar tanto la legislación nacional como los compromisos internacionales asumidos por el Perú, garantizando que el nuevo plazo se implemente de manera justa y equitativa. La viabilidad legal también implica asegurar que los procedimientos y criterios de evaluación y calificación se mantengan claros y consistentes, protegiendo los derechos de todos los beneficiarios.

II. ANTECEDENTES

Para comprender mejor la importancia y necesidad de este proyecto de ley, es esencial examinar el contexto histórico de los conflictos armados entre Perú y Ecuador. En 1978, las tensiones fronterizas llevaron a un conflicto armado conocido como la Guerra del Paquisha. Este conflicto, aunque breve, implicó combates aéreos y terrestres en la región fronteriza, con una significativa participación de las Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional y algunos civiles. Aunque el conflicto concluyó con una tregua temporal, las disputas territoriales persistieron, dejando una relación tensa entre los dos países.

Unos años más tarde, en enero de 1981, estalló otro conflicto armado conocido como la Guerra de Falso Paquisha. Este enfrentamiento también se centró en disputas fronterizas, con combates significativos en la región del Cenepa. Las Fuerzas Armadas del Perú, apoyadas por la Policía Nacional y civiles voluntarios, llevaron a cabo operaciones de defensa y recuperación de territorio. El conflicto de 1981 terminó con la intervención de la comunidad internacional y la firma de un acuerdo de paz temporal, pero las tensiones persistieron, influyendo en la política nacional y regional.

El conflicto más significativo fue el del Cenepa en 1995, el cual comenzó en enero y se prolongó hasta febrero del mismo año, con intensos combates en la región del Cenepa. Las Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional y numerosos civiles participaron activamente en las operaciones, enfrentando riesgos considerables. Este conflicto concluyó con la intervención de varios países mediadores y la firma del Acta de Brasilia en 1998, que estableció la demarcación definitiva de la frontera entre ambos países.

La Ley 30874 fue promulgada para ampliar el reconocimiento del personal militar, policial y civil que participó en estos conflictos armados, específicamente en el conflicto de 1995. Esta ley estableció procedimientos claros para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento, buscando asegurar que todo el personal participante recibiera el reconocimiento adecuado por sus servicios. Sin embargo, la implementación de esta ley ha enfrentado desafíos administrativos y logísticos, dificultando el pleno reconocimiento y compensación del personal.

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

El problema central que aborda este proyecto de ley es la insuficiencia del plazo establecido por la Ley 30874 para el reconocimiento del personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con Ecuador, en los años 1978, 1981 y 1995. A pesar de los esfuerzos realizados para calificar y reconocer a los participantes, un número significativo de ellos aún no ha sido formalmente reconocido debido a diversas limitaciones y obstáculos administrativos. Pese al período de ampliación concluyó el 28 de noviembre de 2023. Sin embargo, existe personal que, habiendo participado de manera activa y directa, y arriesgando sus vidas en dichas operaciones militares, aún no ha sido calificado por la junta calificadora. Esta situación se debe tanto a falta de acervo documentario como consecuencia de los requisitos establecidos y/o exigidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

El espíritu de las leyes emitidas para tal fin es asegurar que todo el personal militar, policial y civil que participó activamente en dichas operaciones sea reconocido por sus valiosos servicios prestados a la Nación. Es una cuestión de justicia que este personal, que puso en riesgo sus vidas, reciba un beneficio

económico sin desigualdades y sin discriminación conforme a la norma Constitucional.

Actualmente, se estima que aproximadamente seiscientos cincuenta (650) combatientes de diferentes instituciones se encuentran en la situación de no haber sido reconocidos formalmente. Esto afecta a seiscientas cincuenta familias, representando un total de alrededor de dos mil cuatrocientos ciudadanos que no están recibiendo los beneficios que les corresponden. Por dificultades administrativas, burocráticas y logísticas han retrasado el proceso de evaluación y calificación

Uno de los principales problemas identificados es la falta de conocimiento o información adecuada por parte de muchos de los participantes sobre los procedimientos necesarios para obtener su reconocimiento. Esto ha resultado en que muchos combatientes no hayan iniciado o completado el proceso de evaluación y calificación. Además, los requisitos exigidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) han sido una barrera para algunos, quienes, a pesar de su participación activa y directa en las operaciones militares, en los conflictos armados con el Ecuador.

Adicionalmente, el proceso de reconocimiento ha enfrentado desafíos administrativos y logísticos. La capacidad del CCFFAA y otras instituciones responsables se ha visto limitada por la disponibilidad de recursos humanos o documentarios, lo que ha retrasado considerablemente la evaluación y calificación de los participantes. Estos retrasos han generado frustración y descontento entre los involucrados, quienes sienten que su contribución y sacrificio no han sido debidamente valorados y reconocidos.

IV. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA.

El impacto de esta falta de reconocimiento es significativo, lo que afecta directamente a seiscientas cincuenta familias, y en total, a unos dos mil cuatrocientos ciudadanos. Estas familias se ven privadas de los beneficios económicos y el reconocimiento que legítimamente les corresponden por los servicios y sacrificios prestados.

El reconocimiento adecuado del personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con Ecuador es esencial para honrar su sacrificio y servicio. A pesar de los esfuerzos realizados bajo la Ley 30874, muchos participantes no han sido reconocidos debido a barreras administrativas y logísticas. Es fundamental ampliar el plazo para garantizar que todos los participantes sean debidamente evaluados y reciban el reconocimiento merecido, mejorando así la moral y cohesión dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La ampliación de un nuevo plazo tendrá un impacto positivo directo en los beneficiarios de los excombatientes y sus familias; Al proporcionar más tiempo para la evaluación y calificación, y de esa forma se garantiza que todos los ex combatientes puedan recibir el reconocimiento oficial por su servicio efectivo prestado en defensa de la patria. Este reconocimiento no solo reafirma el valor de sus contribuciones, sino que también puede incluir beneficios adicionales como pensiones, compensaciones y otros apoyos sociales, que son esenciales para mejorar su calidad de vida.

Para las familias, el reconocimiento de sus seres queridos representa un acto de justicia y gratitud, asegurando que los sacrificios realizados no sean olvidados y que sus derechos sean plenamente cumplidos conforme a lo establecido por la ley. En última instancia, la extensión del plazo asegura un proceso inclusivo y exhaustivo que honra debidamente a todos los participantes de los conflictos armados, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y promoviendo la justicia social.

Por lo tanto, la necesidad de extender el plazo para completar el proceso de reconocimiento es evidente. Esta esta ampliación de plazo, permitirá que las instituciones responsables cuenten con el tiempo necesario para abordar y superar las barreras administrativas, logísticas y de recursos que han impedido el pleno cumplimiento de la Ley 30874. Asimismo, garantizará que todos los participantes reciban el reconocimiento y los beneficios económicos que se les deben, honrando su servicio y sacrificio en defensa de la Nación.

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente propuesta legislativa no implica costos adicionales para el Estado, dado su carácter ya se encuentra dispuesto en el Ministerio de Defensa, con el reconocimiento de beneficios tanto para el personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador, como para la sociedad en general. Entre estos beneficios se destacan:

La ampliación del plazo para el reconocimiento del personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, promoverá la equidad y justicia, cumpliendo con los principios constitucionales y asegurando el bienestar económico de los ex combatientes, como de sus familias y fomenta el respeto y la dignidad hacia quienes defendieron la nación, contribuyendo así al desarrollo social y familiar.

La fórmula legal es la siguiente:

LEY QUE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 Y 1995

Artículo 1. Objetivo de la ley.

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 30874, "Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el ecuador en los años 1978, 1981 y 1995", para establecer un nuevo plazo para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Artículo 2. Finalidad de la ley.

La finalidad de esta ley es asegurar el adecuado y oportuno reconocimiento del servicio y sacrificio del personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años mencionados, mediante la extensión del plazo necesario para completar los procesos de evaluación y calificación, garantizando así el cumplimiento de los derechos otorgados por las leyes vigentes.

Artículo 3. Modificación del Artículo 3 de la Ley N° 30874.

Se modifica el artículo 3 de la Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978,1981 y 1995, en los siguientes términos:

> ***"Artículo 3. Plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos.***
>
> *Se otorga, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo hasta el 28 de noviembre del año 2026, para continuar con la evaluación, calificación. formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el artículo 2 de la presente ley."*

IV. MARCO NORMATIVO

1. Marco Nacional

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Reglamento del Congreso.
- Ley N° 24053 - Ley que denomina "Campaña Militar de 1941" a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nororiente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo.
- Ley 25208, Otorgan beneficios a los ex combatientes vencedores de la Campaña Militar de 1941;
- Ley N° 26511 - Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador (Conflicto de 1995).

- Ley N° 27124 - Ley que modifica la Ley 26511, que reconoce como Defensores de la Patria y otorga beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el Conflicto con el Ecuador.
- Ley N° 28796 - Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al Personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y Personal Civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981;
- Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley 29248, Ley del Servicio Militar.
- Ley N° 29562 - Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.
- Ley N° 30461 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor oriente; y que declara el 31 de julio día central conmemorativo
- La Ley 30554, Ley que declara Héroes de la Democracia a los Comandos Chavín de Huántar.
- La Ley 30655, Ley que declara Héroes de la Democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN OIRCOTE - PNP.
- La Ley 30758, Ley que declara Defensores calificados de la Democracia a los mineros que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar.
- Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995
- Ley 31177, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo;
- Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.
- Decreto Legislativo 1136, Ley del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
- Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército del Perú
- Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú
- Decreto Legislativo 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú.
- Decreto Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y modificatorias.
- Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
- Decreto Supremo Nº 010-DE-SG, Reglamento de la Ley Nº 26511, para la Calificación como Defensor de la Patria, Propuesta de Ascensos y Otorgamiento de Beneficios a los Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles que Participaron como Combatientes, en la Zona del Alto Cenepa en 1995,

- Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
- OFICIO Nº 1409- 2021-2022/CDNOIDALCD/CR del 18 mayo 2022.

2. Marco Internacional

- Corte Interamericana de los Derechos Humanos
- Declaración Universal de Derechos Humano
- Convención Americana de Derechos Humanos

V. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

1. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

La Constitución Política del Perú en su artículo 1, señala que: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", lo cual se logra con una gestión pública que desarrolla políticas, estrategias, acciones, que orientan la conducta de las personas y garantizan la prestación de servicios públicos, para alcanzar el bien común. El acceso a estos roles del Estado, conforme al artículo 2° inciso 2 de la carta magna, se deben hacer efectivos, salvaguardando el derecho de toda persona "A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole".

En atención a tal precepto constitucional mencionado, el Derecho a la Igualdad implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del Estado.

Así también, de acuerdo con el artículo 165 de la Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.

Asimismo, el artículo 166 de la Constitución Política, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

El articulo N° 7 de la **Declaración Universal de los Derechos Humanos** (DUDH), reconoce que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación, por lo que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la

ley para resolver una situación de desigualdad, establecida por una norma discriminatoria durante muchos años hasta la fecha, que ha perjudicado a los excombatientes que no calificaron como defensores de la patria y quienes tuvieron una importante participación en el conflicto armado con el Ecuador. En consecuencia, todo trato diferente está prohibido. Este trato desigual de los iguales se conoce como discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra que existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material).

Asimismo, el artículo 23 **Declaración Universal de los Derechos Humanos**, establece que 1) toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; 2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual 3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. y 4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

De acuerdo con el artículo 1 de la **Convención Americana de Derechos Humanos**, establece que los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano

El artículo 1 de la **Convención la Corte Interamericana de los Derechos Humanos**, establece que los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 2 de la Ley 24053, Ley denomina "Campaña Militar de 1941", a los Gloriosos hechos de Armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor-Oriente; y declara el 31 de julio día central conmemorativo, establece que se reconózca a la Asociación "Vencedores de la Campaña Militar de 1941" como la institución que a nivel nacional agrupa y representa a los ex-combatientes de este conflicto de conformidad a su Estatuto y Reglamento Interno

La **Ley 24053** (4 enero 1985), Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, brindo inicialmente, entre otros beneficios, el económico consistente en una bonificación mensual equivalente a un sueldo mínimo legal; posteriormente mediante la Ley 25208 (3 mayo 1990) se modifica los artículos 5 y 7 de la Ley 24053, otorgándoles una bonificación equivalente a tres ingresos mínimos legales, el 16 de junio del 2016 se publica la Ley N° 30461, que extiende el beneficio a los excombatientes de los años 1978, 1981, 1995, calificados como defensores de la patria. El 27 abril del 2021 se publica la Ley 31177 que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia, mediante la Ley 29031- Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente.

El artículo 2 de la **Ley 26511**, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar al personal civil, militar y policial que haya participado como Combatiente en el conflicto con el Ecuador en la zona del Alto Cenepa de 1995 o a sus deudos, según corresponda, los siguientes beneficios. a) Una indemnización excepcional no menor de una (01) UIT, en favor del personal que se encuentre con invalidez temporal o permanente o a los deudos según sea el caso. b) Una bonificación mensual extraordinaria, no menor de tres remuneraciones mínimas (RM), en favor del personal que se encuentre con invalidez temporal o permanente o en favor de los deudos de los fallecidos. Esta bonificación será otorgada sin perjuicio de cualquier otra remuneración, pensión o bonificación que perciban los beneficiarios de esta Ley. El monto de estos beneficios será fijado por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, del mismo modo que el reajuste periódico de la bonificación mensual extraordinaria.

Las leyes 30461, 30554, 30655, 30758, 30874 y 31177 han modificado las leyes 24053, 26511 y otras, así tenemos:

La Ley N° 30461 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 24053, ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor oriente; y que declara el 31 de julio día central conmemorativo

La mencionada Ley modifica el artículo 10 de la Ley 24053, Ley denomina "Campaña Militar de 1941", a los Gloriosos hechos de Armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor-Oriente; y declara el 31 de julio día central

conmemorativo, extiende los beneficios a los excombatientes del conflictos de 1933.

La Ley 30554, Ley que declara Héroes de la Democracia a los Comandos Chavín de Huántar, reconocer a los comandos que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar, por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia y autoriza al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los Defensores de la Democracia

La **Ley 30655**, Ley que declara Héroes de la Democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN DIRCOTE - PNP. El artículo 1 menciona que la presente Ley tiene por objeto reconocer a los miembros policiales de la Primera División de Inteligencia contra el Terrorismo, conocido como el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), de la Policía Nacional del Perú, por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia.

El artículo 3 reconoce la calidad de Héroes de la Democracia a cada uno de los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, creado el 5 de marzo de 1990, quienes han participado en diversas operaciones contraterroristas, y que el 12 de setiembre de 1992 ejecutaron la operación Victoria que dio como resultado la captura del cabecilla Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso y la cúpula dirigencial de la organización criminal terrorista Sendero Luminoso, lo que permitió dar inicio a la pacificación del país.

Y el artículo 5 otorga beneficios a los Defensores de la Democracia descritos en el artículo 2 de la presente ley, así como a sus hijos, cónyuge o concubina el acceso a becas y el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior. El Ministerio del Interior otorga los beneficios de la presente ley y suscribe los convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el otorgamiento de becas o facilidades económicas.

La **Ley 30758**, Ley que declara Defensores calificados de la Democracia a los mineros que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar.

El artículo 3 reconoce la calidad de Defensores Calificados de la Democracia a los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los cuatro túneles que utilizaron los comandos en el Operativo Militar Chavín de Huántar, realizado el 22 de abril de 1997; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar.

Mientras que el artículo 4 otorga beneficios a los Defensores Calificados de la Democracia descritos en el artículo 3 de la presente ley, así como a sus hijos, cónyuge o concubina el acceso a becas y facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior y autoriza al Ministerio de Defensa otorga los beneficios de la presente ley y suscribe los convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el otorgamiento de becas o facilidades económicas.

La **Ley 30874**, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y /995.

El artículo 1 establece un nuevo plazo para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995 reconocidos en las leyes pertinentes.

El artículo 2 establece el ámbito de aplicación para los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las siguientes leyes:
a) Ley 26511, Ley que reconoce como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador.
b) Ley 28796, Ley que reconoce la calidad de Defensores de la Patria al personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú y personal civil que participaron en los incidentes armados fronterizos del subsector del Alto Cenepa de 1978, conflicto armado de la Cordillera del Cóndor de 1981.
c) Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Mientras que el artículo 3 establece el plazo para las actividades de otorgamiento de beneficios y reconocimientos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente norma, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las leyes reguladas en el artículo 2 de la presente ley.

La **Ley 31177**, Ley que otorga beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en

Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo;

El artículo 2 de la Ley modifica el artículo 10 de la Ley 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, conforme al siguiente texto:
"Artículo 10. Los beneficios de la presente ley, se harán extensivos a los excombatientes del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados. Igual derecho les asiste a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración; con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda".

Se han presentado Proyectos de Ley proponen modificar el artículo 10 de la Ley 24053, Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo con el propósito de acceder a los beneficios económico que otorga esta Ley.

Los Proyectos de Ley que proponen modificar la Ley 26511, Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, de igual manera, a efectos de acceder a los beneficios económicos que otorga la ley.

Los Proyectos de Ley que proponen modificar la Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, en el sentido de que no sea al mérito, sino que otorgue beneficios económicos al igual que las leyes 24053 y 26511.
Los Proyectos de Ley que proponen modificar la ley 30864, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, proponen ampliar los plazos de presentación de las solicitudes para acceder a la calificación de Defensor de la Patria, Combatientes o movilizados.

2. Análisis técnico de las opiniones

a. Proyecto de Ley 1783/2021-CR

1) El **Ministerio del Interior,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 1783/2021-CR, manifestando que **carece de competencia para emitir opinión** respecto del Proyecto de Ley N° 1783/2021-CR, por lo que no se analiza.

2) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** emite opinión del Proyecto de Ley 1783/2021-CR, considera que el Proyecto de Ley **no resulta viable**, por las siguientes consideraciones:

   a) Falta de sustento en la Exposición de Motivos, sobre el particular, el artículo 2 de la Ley N° 26889, Ley marco para la producción y sistematización legislativa, establece que los proyectos normativos deben **estar debidamente sustentados en una exposición de motivos**. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la Ley marco para la producción y sistematización legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, precisa que la exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta normativa con una explicación de los aspectos más relevantes.
   b) El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución.
   c) El artículo 1 de la Ley Nº 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración, modificado por la Ley N° 31291, se instituyen el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.
   d) Asimismo, el precitado artículo precisa que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar; así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, señala que la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha

contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.

e) El artículo 4 de la Ley Nº 29031, crea la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", la que se concederá mediante resolución suprema, en la que constará el nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo; quienes serán designados de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se determinen en el correspondiente Estatuto, el que será aprobado por el Consejo de la Condecoración.
f) En esta línea, mediante Resolución Ministerial N° 076-2014-PCM se aprueba el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia"; en cuyo artículo 125 se establecen los requisitos para calificar como Defensor de la Democracia; y en el artículo 2 se establece que se otorga dicha condecoración, entre otros, a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; y a todos aquellos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación, en el grado de Gran Cruz, para quienes participaron directamente en la captura de altos mandos terroristas; y en el grado de Gran Oficial a quienes participaron en la planificación de la captura de altos mandos terroristas.
g) En tal sentido, la propuesta contenida en el artículo 2 del Proyecto de Ley, que establece el reconocimiento y declaración de "Héroe de la Democracia" de cada uno de los Integrantes de la Patrulla "Miguel "que participaron en el Plan de operaciones Cerco 99, que dio lugar a la Captura del delincuente Terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, sería innecesario, teniendo en consideración que de conformidad con el marco legal citado precedentemente, los participantes en la captura de altos mandos terroristas ya pueden ser calificados como Defensores de la Democracia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada Ley N° 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración y el Estatuto aprobado con Resolución Ministerial N° 076-2014-PCM, marco legal que no ha sido considerado en el análisis de la Exposición de Motivos que acompaña a la propuesta legislativa.
h) Asimismo, la propuesta contenida en el artículo 3 del Proyecto de Ley, que establece el otorgamiento de la Medalla al Defensor de la Democracia establecida en el artículo 4 de la Ley 29031, a los comandos que participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar, sería innecesario, en la medida que dichas personas ya estarían comprendidas dentro de los alcances de dicha Ley, aspecto que tampoco se analiza en la exposición de motivos de la propuesta legislativa.

i) Por su parte, el artículo 36 de la Ley N° 31291, Ley que modifica el citado artículo 1 de la Ley N° 29031, dispone que se otorgue a los defensores de la democracia, a sus hijos, cónyuges o concubinos el acceso a becas de estudio, precisando que para el otorgamiento de dichas becas el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios con instituciones educativas públicas o privadas, indicando que los gastos que se irroguen serán cubiertos por los presupuestos de los ministerios de Defensa o del Interior, según corresponda.

j) En tal sentido, el artículo 4 del Proyecto de Ley, que autoriza al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los Defensores de la Democracia descritos en el artículo 2 de dicha propuesta, así como a sus hijos y/o cónyuge o concubina, sería también innecesario, teniendo en consideración que conforme a la vigente Ley N° 31291, Ley que modifica el citado artículo 1 de la Ley N° 29031, ya se establecen beneficios similares; aspecto que no ha sido materia de análisis en la exposición de motivos que acompaña a la propuesta legislativa.

k) En tal sentido, la exposición de motivos que sustenta la propuesta legislativa no cuenta con una adecuada fundamentación, conforme a lo dispuesto en la normativa citada.

l) Conforme a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, le corresponde al Presidente de la República "Administrar la Hacienda Pública". Asimismo, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 79 que:

> *"Restricciones en el Gasto Público Artículo 79.- Los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. (...)".*

m) Lo señalado, respecto a la restricción de los Congresistas de la República en la generación de gasto público, se encuentra regulado además en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, que les prohíbe la presentación de proposiciones de ley que involucren creación o aumento de gasto público:

> *"Requisitos especiales*
> *Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales:*
> *(...)*
> *2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a través del Grupo Parlamentario y requieren del respaldo:*
> *(...) Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa:*

***a) No pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público**. Esta regla no afecta el derecho de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del Presupuesto. (...)"*
(Énfasis agregado)

n) Siendo ello así, se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso de la República **no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público**, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la administración de la hacienda pública le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En ambos casos, ningún acto de los poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos.

o) Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ha emitido opinión señalando que "(...) no puede desatenderse que el artículo 79° de la Constitución, establece que "el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" . Ello es sistemáticamente coherente con el artículo 118°, inciso 17, de la Constitución que dispone que es competencia del Poder Ejecutivo, "administrar la hacienda pública", tal y como ya se encuentra previamente señalado líneas arriba.

p) Asimismo, señala "contrario sensu, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el procedimiento legislativo del que emanó la ley de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno autorizó o consintió su dación."; "en tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos que escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno. (...)."

q) Dicho de otra manera, el Congreso de la República necesita de la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto público en general.

r) En este orden, corresponde señalar que si bien en el Análisis Costo Beneficio se precisa que este Proyecto de Ley no genera gastos adicionales para el Estado y en el artículo 5 se indica que la aplicación de la Ley es exclusivamente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los demás sectores involucrados; el artículo 4 establece que se otorgarán facilidades económicas a los integrantes de la Patrulla "Miguel", los hijos y/o cónyuge o concubina para continuar estudios de educación superior; lo cual, podría generar gasto público, vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política, que establece que el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

s) En atención a las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 01783/2021-CR, Ley que declara "Héroes de la Democracia" a los integrantes de la patrulla "Miguel" y modifica la Ley N° 29031, **no resulta viable**, al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

3) El **Ministerio de Educación,** ha emitido opinión que concluye que no corresponde al Ministerio de Educación pronunciarse sobre la viabilidad del Proyecto de Ley por las siguientes consideraciones:

a) Con base en lo precisado por la DIGEBR y el PRONABEC en los Informes N° 347-2022- MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI y 317-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC, se concluye que no corresponde al Ministerio de Educación pronunciarse sobre la viabilidad del Proyecto de Ley, dado que:
   En lo referido al reconocimiento como "Héroes de la democracia", toda vez que conforme la Ley N° 26841, Crean el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, la competencia para calificar y proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional, está a cargo del Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, presidido por el Ministerio de Defensa.
   Respecto al otorgamiento de becas, conforme el texto de la propuesta, el Ministerio de Defensa suscribirá convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas a la población beneficiaria para que puedan continuar con estudios de educación superior. Por tanto, no es necesaria la participación del Ministerio de Educación para que los sectores involucrados suscriban estos convenios de manera directa con instituciones de educación superior; más aún cuando las entidades educativas gozan de autonomía para el otorgamiento de becas y gestión de convenios, materia en la cual este Ministerio no interviene.

b) Que en lo referido al reconocimiento como "Héroes de la democracia", conforme la Ley N° 26841, Crean el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, la competencia para calificar y proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional, está a cargo del Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, presidido por el Ministerio de Defensa.

c) Respecto al otorgamiento de becas, conforme el texto de la propuesta, el Ministerio de Defensa suscribirá convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas a la población beneficiaria

para que puedan continuar con estudios de educación superior. Por tanto, no es necesaria la participación del Ministerio de Educación para que los sectores involucrados suscriban estos convenios de manera directa con instituciones de educación superior; más aún cuando las entidades educativas gozan de autonomía para el otorgamiento de becas y gestión de convenios, materia en la cual este Ministerio no interviene.

4) El **Ministerio de Defensa,** emite opinión concluyendo que la iniciativa **debe ser reevaluado,** en mérito a los argumentos siguientes:
   a) La **Marina de Guerra del Perú**, reitera las recomendaciones siguientes:
   - Se recomienda que el promotor de la norma precise en el objeto del proyecto de ley, en qué consisten los cambios que la citada iniciativa legal efectuaría en la Ley N° 29031.
   - Se recomienda que el promotor amplíe el texto del artículo 2 de dicha iniciativa legislativa, precisando la fecha de conmemoración o día de ejecución del plan cerco.
   - El proyecto de Ley contraviene el artículo 4 de la Ley N° 29031, el cual establece que para el otorgamiento de la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia" deben verificarse los requisitos establecidos en el Estatuto del Consejo de la Condecoración
   - Debe modificarse el artículo 3 del referido proyecto de ley, en tanto se hace referencia al Operativo Militar Chavín de Huántar.
   - En la exposición de motivos no se ha hecho un análisis costo beneficio del proyecto normativo, específicamente en lo que concierne al gasto público.
   - No se ha tenido en cuenta que el otorgamiento de la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia" no es un proceso automático, en tanto debe seguirse el procedimiento previsto en la Ley N° 29031 y el Estatuto del Consejo de la Condecoración.

   b) Por parte del **Ejercito del Perú**, señala lo siguiente:
   Que la captura del delincuente terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, "camarada Feliciano", en el interior de un vehículo de transporte público, hecho ocurrido el 14 de julio de 1999 aproximadamente a las 05:30 horas en el sector de Cochas Chico de la provincia de Huancayo, habiéndose advertido que en dicho **accionar no se produjo un enfrentamiento armado**, ni mucho menos como consecuencia de dicha intervención militar hubo derramamiento de sangre (no hubo herido o muertos), **por lo cual no constituye una acción heroica.**

   c) La **Fuerza Aérea del Perú**, señala principalmente que el propósito de dicha norma busca un reconocimiento para el personal que realizó una

exitosa operación militar para capturar a delincuentes terroristas en beneficio de la paz interna.

d) La **Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa**, considera que:
   - La a referida propuesta normativa tendría primero que especificarse o desarrollarse la forma en que sería financiados los beneficios descritos en tales proyectos normativos, teniendo en cuenta que dicha iniciativa legislativa en su exposición de motivos únicamente establece que su aprobación no generará gastos adicionales al Sector Público, sin ahondar en mayores detalles. Ello, a fin de no verse vulnerado el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público.
   - Cabe indicar que la terminología de "Héroes de la Democracia" no ha tenido en el ordenamiento jurídico un desarrollo normativo o procedimiento específico para su calificación; sin embargo, ello no obsta a que por Ley pudiera otorgarse dicha nomenclatura a nuevos grupos de excombatientes que hayan participado en algún evento militar de importancia. Ahora bien, el otorgamiento de dicha denominación no debe confundirse con la calificación de "Defensor de la Democracia", la cual es otorgada a aquellos excombatientes a los que se les ha otorgado la condecoración de la "Medalla al Defensor de la Democracia", en el marco del procedimiento previsto en la Ley N° 29031 y el Estatuto del Consejo de la Condecoración, no siendo su otorgamiento de forma automática.
   - Por consiguiente, **únicamente los excombatientes que cumplan los requisitos previstos** en el artículo 12 del Estatuto del Consejo de la Condecoración y hayan seguido el procedimiento previsto en dicho cuerpo reglamentario, **podrán ser condecorados** con la referida medalla, y consecuentemente, ser reconocidos como Defensores de la Democracia. Por otro lado, debe precisarse que el reconocimiento como "Héroe Nacional" está reservado a aquellos que, ofrendando su vida en forma voluntaria y consciente, hayan llevado a cabo una acción extraordinaria de gran valor cuya trascendencia e importancia haya sido de magnitud nacional.
   - Finalmente, en relación al reconocimiento previsto con la "Medalla al Defensor de la Democracia" a los integrantes de la Patrulla "Miguel" (consignado en el artículo 5 del proyecto de ley en análisis) cabe indicar que, a fin de que los mismos sean condecorados con dicha medalla, estos deberán presentar sus solicitudes correspondientes al Ejército del Perú, en el marco del procedimiento señalado en el Estatuto del Consejo de la Condecoración.

e) La **Oficina General de Asesoría Jurídica**, considera pertinente señalar:

- El Reglamento del Congreso de la República, en su artículo 75 prescribe que las proposiciones de ley deben contener una **exposición de motivos** donde se exprese el problema que se pretende resolver y los fundamentos de la propuesta; **los antecedentes legislativos**; **el efecto de la vigencia de la norma** que se propone sobre la legislación nacional, precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar; **el análisis costo-beneficio** de la futura norma legal que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental.
- En esa línea, el numeral X del Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-2020-2021/MESA-CR, establece que la estructura del proyecto de ley contiene, entre otros, la exposición de motivos, el cual incluye: (i) **Fundamentos de la propuesta**. Contiene la identificación del problema, análisis del estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones sobre la propuesta; (ii) **El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional**; (iii) **El análisis costo beneficio.**
- En relación a la fundamentación de la propuesta, se evidencia que la exposición de motivos se sustenta en la necesidad de reconocer como héroes de la democracia y disponer el otorgamiento de medallas a los integrantes de la patrulla "Miguel", que tuvieron participación en el Plan Cerco 99, que dio lugar a la captura del terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand (alias camarada Feliciano), en el año 1999, con lo cual aportaron y coadyuvaron en parte a la finalización de la violencia política terrorista que atravesaba el país.

  En adición a ello, en el referido análisis se señala que "más allá del éxito militar del Operativo 'Plan Cerco 99', tenemos que hasta la fecha no se le ha entregado un reconocimiento o beneficio concreto por parte del Estado, sino por el contrario, los integrantes de la Patrulla 'Miguel' han sido olvidados y siendo expuestos a tratamientos injustos cuando por su valioso accionar y poniendo en riesgo sus propias vidas, debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad en la Operación del 'Plan Cerco 99'".

  Ahora bien, cabe traer a colación el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que pueden expedirse leyes

especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas.

Siendo así, resulta oportuno advertir que el artículo 1 de la Ley Nº 29031, que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, considera dentro de los alcances de dicha norma, entre otros, (i) a los miembros de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; (ii) a los militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación, así como (iii) a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.

En tal virtud, se puede advertir que la propuesta de reconocimiento a los integrantes de la Patrulla "Miguel", recogida en el artículo 2 del proyecto de ley, a fin de otorgárseles la condición de Héroe de la Democracia, **se subsume dentro de los supuestos recogidos en la Ley Nº 29031 en relación a los sujetos que se encuentran inmersos bajo su alcance,** tal como se verifica de la disposición citada en el párrafo precedente; por lo que, no se evidencia un adecuado sustento que justifique la necesidad de aprobar una norma especial para dicho fin, en concordancia con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú.

- De la revisión de la sustentación del proyecto de ley, apreciamos que en el Análisis costo beneficio, se indica lo siguiente: "el reconocimiento a los integrantes de la Patrulla 'Miguel', captores principales del Camarada Feliciano, no genera gastos para el Estado ya que los beneficios y/o prerrogativas de la presente ley serán con cargo exclusivamente al presupuesto de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público."

Ahora bien, resulta oportuno tener en cuenta que no se ha previsto los gastos que supondría la implementación de la norma propuesta, en tanto se ha considerado en el artículo 4 del proyecto de ley bajo comentario, autorizar al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a beneficios y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los defensores de la democracia descritos en el artículo 2 de la propuesta de ley, así como a sus hijos y/o cónyuge o concubina.

Al respecto, el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que: "Los representantes ante el Congreso no tienen

iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto".

Las limitaciones aplicables al Congreso de la República para crear gasto público han sido desarrolladas por el Tribunal Constitucional en los fundamentos 30 y 32 de la Sentencia 0007-2012-PI/TC, en los términos siguientes:

"(...) no puede desatenderse que el artículo 79° de la Constitución, establece que "[e]l Congreso no tiene [] iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto". Ello significa que el Parlamento, motu propio, salvo en lo atinente a su propio presupuesto, no tiene competencia para, ex novo, crear fuentes que originen gasto para la hacienda pública. Ello es sistemáticamente coherente con el artículo 118°, inciso 17, de la Constitución que dispone que es competencia del Poder Ejecutivo, "[a]dministrar la hacienda pública".

Contrario sensu, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el procedimiento legislativo del que emanó la ley de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno autorizó o consintió su dación.

En tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos que escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno. (...).

32. Por otra parte, incluso si una ley generadora de gasto público es avalada previamente por el Poder Ejecutivo, también resulta inconstitucional si, por vía de tal ley, la habilitación de dicho gasto pretende ser imputada a la ya vigente Ley de Presupuesto, escapando de su balance general de cifras de ingresos y egresos. (...)."

En esa línea, a modo de conclusión, el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, señala que "el Congreso de la República necesita de la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto público en general, que no podrá ser imputado a una Ley de Presupuesto ya vigente. De lo contrario, las leyes que emita creando gasto público serán inconstitucionales.".

Por consiguiente, queda evidenciado que el proyecto de ley bajo comentario proviene de una iniciativa del Congreso de la República que generaría gasto al presupuesto público, sin que haya sido promovida ni cuente con la conformidad previa del Poder Ejecutivo; razón por la cual, es pertinente considerar que su eventual aprobación estaría colisionando con el precepto constitucional recogido en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, resulta pertinente indicar que en el Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional se señala que "la presente iniciativa no modifica ninguna norma del ordenamiento

jurídico vigente y no colisiona con el marco institucional vigente"; no obstante, consideramos que dicho análisis debería ser profundizado con el propósito de desarrollar expresamente los efectos de la vigencia de la ley, con mención expresa de la creación de nuevas disposiciones o de la modificación o derogación de normas vigentes, en la medida que ha quedado evidenciado su incidencia en los alcances de la Ley N° 29031, Ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Por lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica opina que el Proyecto de Ley N° 1783/2021-CR, Ley que declara Héroes de la Democracia a los integrantes de la Patrulla Miguel y modifica la Ley N° 29031, **debe ser reevaluado**, en mérito a los argumentos señalados en los numerales 2.13, 2.14, 2.16 y 2.17 del presente informe legal; por lo que, recomendamos que el presente documento sea puesto en conocimiento de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, con copia a la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines pertinentes.

5) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** ha emitido opinión, formulando observaciones en el sentido siguiente:
   a) La Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de sus competencias, que no cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
   b) Contraviene el principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
   c) Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
   d) Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer acciones a cargo de las entidades públicas.

6) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** emite opinión considerando que esta iniciativa no resulta viable, por las siguientes consideraciones:
   a) Que el otorgamiento de la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", no constituye una atribución discrecional del Congreso

de la República, sino que tal condecoración es resultado de un proceso reglado, con diversos filtros, donde la Institución Armada o Policial postula a aquella persona que considera merecedora de la condecoración, y donde la decisión final de su otorgamiento corresponde al/ a la Presidente/a de la República. En consecuencia, otorgar dicha condecoración por ley, tal como propone el proyecto de ley, en estudio, contraviene el marco normativo que regula tal condecoración, así como las competencias del Poder Ejecutivo sobre la materia

b) Resulta inobjetable que la propuesta legislativa, al pretender incorporar por ley a un nuevo conjunto de personas como "Defensores de la Democracia", importaría la creación o aumento de gasto público, por cuanto tales nuevos/as condecorados/as serían pasibles de recibir los beneficios previstos en la citada Ley N° 24053 -con cargo a cumplir con el requisito de contar "con parte de guerra", en los términos del artículo 10 de dicha norma legal, que fue modificada por la Ley N° 31177 que los incorpora, con el condicionante del "parte de guerra formulado oportunamente".

c) Finalmente, considera una intromisión en el manejo de la hacienda pública, que conforme al mandato del artículo 118°, inciso 17) de la Constitución, es una facultad reservada al Poder Ejecutivo, la cual ha sido reconocida como tal por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constante. En la misma línea, el máximo intérprete de la Constitución ha enfatizado que en casos como el presente, debe observarse adecuadamente el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria.

b. Proyecto de Ley 2171/2021-CR

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** remite la opinión del Proyecto de Ley 2171/2021-CR, manifestando que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** emite opinión en el sentido que no resulta competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2171/2021-CR.

3) La **Defensoría del Pueblo,** manifiesta que es necesario precisar que el propósito del proyecto de ley en mención no guarda relación directa con las líneas temáticas que promueve nuestra institución en materia de derechos humanos, ni con grupos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, y sobre los cuales se orienta principalmente la labor defensorial, como son, mujeres, adultos mayores; niños, niñas y adolescentes, población migrante, pueblos indígenas, población LGBTI, etc.

Que por la naturaleza misma de esta propuesta normativa, es necesario que las principales opiniones técnico-jurídicas y argumentos recaigan en las instituciones rectoras al respecto, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

4) El **Ministerio del Interior,** ha emitido opinión en el sentido que el Proyecto de Ley 2171/2021-CR, debe ser revaluado por las siguientes consideraciones:
   a) Que, mediante la Ley N° 29031, se crea la "Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia", la cual se concede mediante resolución suprema, en la que constará el nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo; precisando que las personas que serán designadas como "Defensor de la Democracia", de **acuerdo a los requisitos y procedimientos** que se determinen en el Estatuto del Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia"
   b) Que el **Estatuto** del Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", aprobado por Resolución Ministerial N° 076-2014-PCM, **señala que son requisitos** para calificar como Defensor de la Democracia.
   c) Que corresponde indicar que la calificación como Defensor de la Democracia, está a cargo del Comité Evaluador del Consejo de Condecoración.
   d) Que el marco legal vigente establece que el reconocimiento y el otorgamiento de la Medalla al Defensor de la Democracia, está sujeto a una evaluación por parte del Consejo de Condecoración; por lo que el reconocimiento y condecoración del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación militar de actividad y de retiro, que han recibido la Condecoración respectiva por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional del Perú, por haber puesto en riesgo su vida, en enfrentamientos o en capturas importantes en la lucha contra el terrorismo, durante el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia, propuesto en el proyecto de Ley N° 2171/2021- CR, debe realizarse bajo las de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 29031, su Reglamento y el Estatuto del Consejo de la Condecoración.

5) El **Ministerio de Defensa,** emite opinión en el sentido que el Proyecto de Ley 2171/2021-CR, debe ser **reevaluado**, por las siguientes consideraciones:
   a) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que este reconocimiento estaría redundando lo establecido en la norma legal vigente.

b) El Ejercito del Perú considera que, se advierte que cada condecoración cuenta con un procedimiento particular, no coincidente con lo establecido en el artículo 12 de la RM N° 076-2014-PCM, que aprueba el Estatuto del Consejo de la Medalla "Defensor de la Democracia", por lo que lo considera no viable.
c) La Fuerza Aérea del Perú, considera viable, en razón que resulta un acto legitimo del Estado reconocer de forma particular la labor realizada por los miembros de las FFAA y PNP, poniendo en riesgo su vida.
d) La Oficina general de asesoría jurídica, considera que debe ser reevaluada, básicamente por aspecto de generación de gastos.

e) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, emite opinión considerando la propuesta como no viable, por las siguientes consideraciones:
   1) Que resulta inobjetable que la propuesta legislativa sub examine, al pretender incorporar por ley a un nuevo conjunto de personas como "Defensores de la Democracia" -esto es, bajo los alcances del Art. 1 de la Ley N° 29031-, importaría la creación o aumento de gasto público, por cuanto tales nuevos/as condecorados/as serían pasibles de recibir los beneficios previstos en la citada Ley N° 24053 -con cargo a cumplir con el requisito de contar "con parte de guerra", en los términos del artículo 10 de dicha norma legal-. Cabe resaltar, además, que tal ampliación de beneficiarios, no ha sido cuantificada ni justificada adecuadamente en la Exposición de Motivos del proyecto de ley analizado.
   2) La situación antes descrita cobra relevancia constitucional en lo que respecta al relevante incremento del gasto público que la propuesta legislativa conllevaría.

6) Opiniones de los ciudadanos en el siguiente enlace:
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2171

c. Proyecto de Ley 2302/2021-CR

1) El **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 2302/2021-CR; mencionando que el proyecto de ley no tiene relación directa con los objetivos institucionales y la competencia del Ministerio Público; por lo que no corresponde emitir opinión.
2) El **Poder Judicial**, emite opinión, en el sentido que no se emitirá opinión al no encontrarse comprendido dentro de las temáticas de esa entidad.

3) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** hace de conocimiento que no emite opinión en el sentido que no resulta competente.

4) La **Defensoría del Pueblo,** emite opinión en el sentido que consideran importante que, las propias instituciones vinculadas en el proyecto puedan pronunciarse sobre los requisitos y plazos procedimentales, de tal manera evitar futuras afectaciones o indebidos reconocimientos de derechos al personal al cual se pretende beneficiar con el proyecto

5) **El Ministerio de Defensa**, considera que Proyecto de Ley 2302/2021-CR; en los términos propuestos es inviable por las siguientes consideraciones:
   a) El Proyecto Normativo en análisis refiere que, de no emitirse la resolución de reconocimiento en el plazo de noventa (90) días hábiles, se considerará el reconocimiento bajo aprobación automática como Defensores de la Patria, estando obligado el CCFFAA a emitir la resolución de reconocimiento en el plazo de diez (10) días hábiles. Respecto a dicho extremo, debe tenerse en consideración que el establecimiento del procedimiento de reconocimiento como Defensor de la Patria como uno de aprobación automática, vulneraría la regulación sobre procedimientos de aprobación automática, contenida en el TUO de la Ley N° 27444, la cual conforme a su artículo 33.
   b) El Proyecto de Ley en análisis señala que, ante el incumplimiento del plazo propuesto, se ha contemplado como una necesaria consecuencia la "denuncia por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales"; consecuencia jurídica que consideramos excesiva pues no correspondería que ello se encuentre previsto como efecto ineludible u obligatorio en la demora del procedimiento de reconocimiento como "Defensor de la Patria", en la medida en que las acciones a adoptarse deben estar sujetas a la valoración de las circunstancias y la razonabilidad de plazos, atendiendo además a la intencionalidad y/o gravedad del acto; sin que, necesariamente ello conlleve a denuncias de carácter penal (como se advierte del tenor de los artículos 3, 5 y 6 del Proyecto en Análisis), debiendo quedar supeditadas las acciones legales respecto a cada caso en particular.
   c) Sobre la incorporación del artículo 5 en la Ley 30874, se advierte que la incorporación de dicho plazo no tiene un sustento adecuado, no habiéndose evidenciado tampoco el análisis correspondiente en la Exposición de Motivos de la propuesta normativa bajo comentario. De este modo, esta Dirección de Bienestar considera que el proyecto de ley en cuestión no resulta atendible por considerar condiciones de evaluación que ya se encuentran reguladas, incluyendo emplazamientos de carácter penal sobre los órganos que evalúan, proponen y califican la condición de Defensor de la Patria, sin tomar en cuenta el tiempo que demanda la revisión minuciosa de las condiciones establecidas por ley sobre dicha calificación, lo cual resulta nítidamente necesario, más aun si esta genera derechos de carácter patrimonial, como es el otorgamiento de la bonificación prevista en la Ley N° 24053.

d) En relación a la incorporación del artículo 6, dicha incorporación resultaría inoficiosa, en tanto que la regulación para la resolución de recursos impugnativos de apelación se encuentra ya contemplada en el artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444, el cual establece que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. Por consiguiente, establecer plazos máximos de resolución de los recursos de apelación presentados al Ministerio de Defensa, vulneraría lo establecido en la Ley N° 27444, según los términos antes precisados.

e) Sobre la incorporación del literal "s" al artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 26511, aprobado por Decreto Supremo N° 010-DE-SG, es potestad del Congreso de la República el dar leyes, así como interpretarlas, modificarlas y/o derogarlas, **mas no el reglamentarlas, puesto que ello le corresponde al Poder Ejecutivo.**

7) **Opiniones de ciudadanos de la propuesta legislativa**:
La FENADEPP, remite sobre esta propuesta que es para ampliar el plazo de calificación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un petitorio referido a la ampliación de las zonas geográficas determinadas en los reglamentos para ser calificado como Defensor de la Patria o Combatiente o Movilizados.
Los fundamentos son válidos respecto a que se deben revisar los reglamentos de las Leyes, en lo referente a: definición de términos, teatro de guerra, teatro de operaciones, unidades desplegadas, modificación de documentos que sirven de requisitos, límites de la zona de combate del alto Cenepa, Zona del Alto Cenepa, de combatiente y defensor de la patria, así como, variaciones de los requisitos, validez de las declaraciones juradas de los Comandantes de Batallón, compañía y jefes de patrulla, no calificación a compañías que se organizaron de manera funcional.
Por lo que es necesario que se revisen los requisitos para las calificaciones correspondientes.

d. Proyecto de Ley 2628/2021-CR

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros**, manifiesta que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, emite opinión en el sentido que jurídicamente no es viable, por las siguientes consideraciones:
a) El Proyecto de Ley Nº 2628/2021-CR, "Proyecto de Ley que modifica el artículo 3 inciso "g" de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y reconoce a Defensores de la Patria", no es jurídicamente viable en el sentido planteado en la fórmula normativa, toda vez que plantea una modificación de una norma reglamentaria a través de una norma con rango de ley, lo cual resulta contrario a las

competencias constitucionalmente asignadas por la Constitución al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, concretamente al inciso 8 del artículo 118 de la Constitución.

Por lo que, no resulta viable jurídicamente que, a través de un proyecto de ley, cuya emisión en este caso, corresponde al Congreso de la República, se pretenda modificar una norma de rango inferior como es el caso del literal g) del artículo 3 del reglamento de la Ley N° 26511. Ello es así, no solo en base al principio de jerarquía normativa, puesto que como se indicó supra, una norma con rango de ley es superior a una norma de rango reglamentario, sino también, debido a que se contravendría las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es decir, se vulneraría lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución

b) Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta la especial relevancia de la finalidad y objeto de la propuesta normativa, de manera general se advierte que el objeto del proyecto de ley, el cual como se precisó supra tendría que plantear la ampliación de los alcances de la Ley N° 26511, resulta viable jurídicamente con las siguientes observaciones:
   - Sobre el extremo que busca adicionar un límite territorial de los ya reconocidos en la zona de combate del Alto Cenepa: a fin de determinar la viabilidad de la propuesta, por tratarse de una delimitación territorial, que implicaría la extensión de la zona de combate que en su momento fue debidamente definida en atención a los acontecimientos de guerra sucedidos y otros criterios relacionados, es necesario que la propuesta normativa cuente con la opinión técnica del Ministerio de Defensa, al ser el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el órgano adscrito a dicho sector, encargado de la calificación y procedencia del personal militar, policial y civil como combatientes o defensores de la patria según el artículo 1 de la Ley N°26511.
   - Sobre el extremo que propone reconocer como Defensores de la Patria a los integrantes del Batallón de Infantería Selva (BIS) 32: se debe tomar en cuenta dos aspectos: i) es necesario contar la opinión técnica del Ministerio de Defensa, al ser el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el órgano adscrito a dicho sector, encargado de la calificación y procedencia del personal militar, policial y civil como combatientes o defensores de la patria según el artículo 1 de la Ley N°26511; y ii) corresponde que la Exposición de Motivos desarrolle los fundamentos por los cuales considera que la no inclusión de los integrantes del Batallón de Infantería (BIS 32) implica un trato discriminatorio respecto de los demás beneficiarios, toda vez que no les reconoce los mismos beneficios pese a que los miembros de este grupo se encuentran en la misma situación o cumplen las mismas condiciones o requisitos que los demás beneficiarios; o en otros términos que, la no inclusión de los integrantes del Batallón de

Infantería (BIS 32) entre los beneficiarios de la Ley N° 26511, no se encuentra sustentada en causas objetivas y razonables.

- Sobre el extremo que propone conceder los beneficios y derechos como Defensores de la Patria a los integrantes del Batallón de Infantería Selva (BIS) 32: a efectos de no violar la prohibición prevista en el artículo 79 de la Constitución, se debe evaluar si se cuenta o no con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento del fin propuesto, toda vez que, si bien es posible que se incluyan nuevos beneficiarios, tiene que hacerse en estricto respeto de la Constitución, como lo es, solicitar previamente la opinión técnica financiera del Ministerio de Economía y Finanzas.

3) **La Defensoría del Pueblo,** emite opinión del Proyecto de Ley 2628/2021-CR; mencionando que el propósito del proyecto de ley en mención no guarda relación directa con las líneas temáticas que promueve nuestra institución en materia de derechos humanos, ni con grupos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, y sobre los cuales se orienta principalmente la labor defensorial, como son, mujeres, adultos mayores; niños, niñas y adolescentes, población migrante, pueblos indígenas, población LGBTI, etc.

4) Del **Ministerio de Defensa**, que emite opinión en el sentido que no es viable, por las siguientes consideraciones:
   a) **El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas**, señala lo siguiente:
      - La modificación La modificación a la que se refiere no debe ser al artículo 3ª de la Ley, sino al artículo 3º del reglamento de la Ley.
      - El presente proyecto de ley favorecerá exclusivamente al personal del Batallón de Infantería de Selva N° 32, lo que se contradice con la finalidad de "establecer un trato Igualitario a todos los participantes del Conflicto Armado", ya que fueron más unidades las que participaron en el conflicto y que los requisitos de ley vigentes, imposibilita que su personal sea reconocida como Defensor de la Patria.
      - Esta situación, estaría motivando que el personal de las unidades que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley N° 26511, generen la necesidad de nuevas normas legales que los beneficie en forma particular y exclusiva, causando DESIGUALDAD en el reconocimiento.
      - El presente proyecto de Ley, de aprobarse cambiaría las disposiciones establecidas, con las que se ha venido calificando a los administrados, ya que atentaría contra los derechos del personal del BIS-32, que ya fueron calificados con anterioridad como COMBATIENTE y por ley yo no les asistiría el derecho de una nueva calificación para ser reconocida como DEFENSOR DE LA PATRIA.

- Haciendo referencia a la Exposición de Motivos, se observa una imprecisión al referirse que la Ley 26511 excluyó inhumanamente a los que participaron en los Puestos de Vigilancia como los PV 12, PV LA MEDIA Y PV SALAZAR, cuyos integrantes pertenecían al B15-32; ya que como se indicó en los párrafos anteriores, son muchos lugares que participaron en este Conflicto Armado, pero se tiene que precisar que no se encuentran dentro de la Zona de Combate dispuesta por el reglamento de la Ley 26511.
- Es importante resaltar que a la fecha **existe personal del BIS 32, que ha sido reconocido como Defensor de la Patria, por haber cumplido con los requisitos del reglamento de la Ley vigente**, según lo contenido en el respectivo Parte de Guerra de la Unidad y en forma especial el personal que conformo la sección morteros del BIS-32.

b) La **Marina de Guerra del Perú**, señala lo siguiente:
- La iniciativa legislativa comprende específicamente Unidades y Dependencias del Ejercito del Perú, bajo el mando operativo de la sexta Región Militar, que habrían participado durante el conflicto con el Ecuador de 1995, por lo que la evaluación sobre sus implicancias y viabilidad corresponde a la citada Institución.
- Esta Institución Armada se abstiene de emitir opinión y recomienda que el Ejército del Perú, emita la opinión correspondiente.

c) La **Fuerza Aérea del Perú**, señala lo siguiente:
- La modificación que se plantea con el Proyecto de Ley 2628. Corresponde a una modificación no de la Ley, sino de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-DE-DG del 11 de febrero de 1999, proponiendo ampliar la definición de la "zona de Combate del Alto Cenepa", adicionando el inciso g. – de su artículo 3, el numeral 5), con lo cual se ampliaría el espacio terrestre, acuático y aéreo de esa zona de Combate por el limite Nor Oriente.
- En el sentido que teniendo en consideración la competencia que tiene asignada el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la normatividad antes señalada, se recomienda considerar la opinión técnica legal que deberá emitir dicha Entidad.
- Debe repararse en los aspectos formales de jerarquía normativa, ya que dicha iniciativa legal persigue modificar un Reglamento aprobado por Decreto Supremo y no la propia Ley N° 26511.
- El proyecto de ley contiene disposiciones que ocasionan egresos del Tesoro Público, como son los beneficios económicos que percibiría el personal que se comprenderla en sus alcances, en virtud de que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, conforme a Ley.

d) El **Ejército del Perú**, mediante documentos de la referencia d) y el, el Secretario de la Comandancia General del Ejército remite la opinión del EP sobre el proyecto de ley, señalando que el proyecto de ley sería viable siempre que se modifique su denominación por cuanto no se propone la modificación de la Ley, sino de su Reglamento.

e) La **Dirección de Políticas y Estrategias** del Ministerio de Defensa, señala lo siguiente:
   - La modificación que se plantea no es respecto al inciso (g) del artículo 3 de la Ley N° 26511, sino es con relación al Inciso (g) del artículo 3" del reglamento de dicha ley, que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-DE-SG.
   - No obstante, el Comando Conjunto de las Fuerzas ha manifestado su posición contraria al citado proyecto de Ley, en virtud que la Zona de Combate está claramente delimitado por la Ley vigente, y que su modificación acarrearía una problemática mayor, como que sólo se beneficiaría al personal que sea propuesto a partir de la entrada en vigencia del proyecto de Ley, lo cual motivaría que se presenten nuevos proyectos para beneficiar en forma particular a personal de otras Unidades.

Sobre el proyecto bajo análisis

f) La Ley N° 26511, dispone en su artículo 1 que se efectúe el reconocimiento de la calidad de Defensor de la Patria a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y civiles que hayan participado como combatientes en la zona del Alto Cenepa durante el último conflicto con el Ecuador en 1995, autorizándose a través de su artículo 2, al Poder Ejecutivo a otorgar

g) En ese sentido, mediante el DS N° 010- DE-SG, se aprobó el reglamento de la Ley N° 26511, el cual señala en sus artículos 3 y 5 lo siguiente:

*"**Articulo 3.-** Para efectos de este reglamento se debe tener presente las definiciones siguientes:*

b. Conflicto en la zona del Alto Cenepa,-Acciones de armas desarrolladas entre las fuerzas peruanas y fuerzas ecuatorianas en la zona del Alto Cenepa, en el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995, incluye los acontecimientos ocurridos en dicha zona hasta el 31 de diciembre del mismo año, y que no pueden ser referidos a otra causa.

(...)

e. Zona del Alto Cenepa.- Entiéndase como tal al espacio terrestre, acuático y aéreo comprendido entre los límites siguientes:

(1) Por el Norte: Línea de frontera.

(2) Por el Este: Límite entre el departamento de Loreto y departamento de Amazonas (pendiente Oeste de la cordillera Campanquiz).

(3) Por el Sur: Oleoducto Nor-peruano exclusive en el departamento de Cajamarca y límite Sur de las provincias de Bagua y Condorcanqui del departamento de Amazonas.

(4) Por el Oeste: Límite Oeste de las provincias de San Ignacio y Jaén del departamento de Cajamarca.

***Artículo 5.-** Los requisitos para que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y Civiles sean reconocidos como Defensores de la Patria, durante el Conflicto en la Zona del Alto Cenepa, son:*

a. Haber participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida, en las operaciones realizadas en la Zona de Combate del Alto Cenepa, o

h) A través de la Directiva Nº 022 CCFFAA/DAN/UAM, Directiva para normar criterios y procedimientos de evaluación para atender los recursos de reconsideración de Combatiente a Defensor de la Patria (Conflicto del 95), (en adelante la Directiva), se desarrollan criterios determinados en el reglamento antes referido, que se deben adoptar en la evaluación del personal que pretende ser calificado como Defensor de la Patria.

i) Conforme a la normativa antes señalada, para ser considerado como Defensor de la Patria, es imprescindible que el combatiente haya acreditado fehacientemente su participación activa y directa en las misiones de combate o que las misiones consideradas como similares al combate, hayan puesto en riesgo la vida del combatiente, en los límites allí señalados,

j) En tal sentido, la norma legal vigente, establece los requisitos para ser reconocido como Defensor de la Patria del conflicto armado de 1993, siendo uno de ellos el haber participado dentro de la Zona de Combate, claramente delimitada.

k) Desde la entrada en vigencia de la Ley, el personal propuesto por las Instituciones Armadas y la Policía Nacional del Perú ha sido calificado, según el cumplimiento de los requisitos establecidos por el reglamento de la Ley, haciéndose acreedor en algunos casos al reconocimiento como Defensor de la Patria y/o Combatiente, y rechazada la propuesta en otros, quedando la imposibilidad de ser nuevamente propuesto.

l) El proyecto de Ley pretende cambiar los límites de la Zona de Combate, lo cual entraría en conflicto con las calificaciones y reconocimiento anteriormente realizados, perjudicando al personal del B15-32 que fueron reconocidos como combatientes y que su propuesta como defensor de la patria fue denegada, de manera que solo se puede beneficiar el personal que sea propuesto a partir de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley.

m) El presente proyecto de Ley al favorecer exclusivamente al personal del Batallón de Infanteria de Selva N° 32, se contradice con su finalidad de "establecer un trato igualitario a todos los participantes del Conflicto Armado", ya que fueron más las unidades que participaron en el

Conflicto Armado de 1995 pero que no han sido reconocidos para la ser calificados como defensores de la patria.

n) De aprobarse el presente proyecto de Ley, motivaría para que el personal de las Unidades que participaron en el Conflicto Armado de 1995; que no cumplen con los requisitos del reglamento de la Ley para ser reconocidos como Defensor de la Patria; promuevan la necesidad de generar nuevas normas legales que tendrías[sic] que ser aprobadas por el Congreso de la República, que los beneficie en forma particular, ocasionando una problemática en las instituciones Armadas y en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas.
o) En tal sentido y sin perjuicio de lo señalado, respecto del contenida del proyecto de ley, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, según el cual "Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto."
p) Cabe señalar a su vez que la propuesta materia de análisis no resultaría acorde con las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como las leyes de equilibrio financiero del presupuesto de cada año, en la medida que la estabilidad de la ejecución del presupuesto del sector público se sustenta en la observancia de las disposiciones que regulan el manejo presupuestal y dentro del crédito presupuestal autorizado.
q) Sobre el particular, la Ley N° 31366, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal 2022, en el literal b) del numeral 5, del articulo 1, fija el monto de las contribuciones a fondos, y en los sub numerales 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la citada Ley, establecen lo siguiente

"***Articulo 2. Estabilidad presupuestaria***

(...)

2.2 Durante el Año Fiscal 2022, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativa 1440, Decreto Legislativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deben cumplir con los siguientes reglas:

(...)

3. En todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se debe especificar el financiamiento, bojo sanción de ineficacia de las octos que se deriven de la aplicación de los dispositivos legales.

4. Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación presupuesto que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, y un análisis de costo- beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis costo-beneficio del

proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario respectivo"

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto , esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 2628/2021-CR, Ley que modifica el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y reconoce a defensores de la patria **no resulta viable**; por lo que, recomienda dar respuesta en ese sentido a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros.

5) Del **Ministerio del Interior**, concluyendo que el Proyecto de Ley Nº 2628/2021-CR," Ley que modifica el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y Reconoce a Defensores de la Patria", **debe ser reevaluado**, entre otros aspectos por los siguientes:

- El contenido del Proyecto de Ley se advierte que, si bien se señala en el artículo 3 que este dispone modificar el inciso g del artículo 3 de la Ley N° 26511, el texto consignando corresponde al inciso g del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 26511, aprobado por Decreto Supremo N° 010-DE-SG, para que se amplíe la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y con eso se consiga el Reconocimiento como Defensores de la patria, a los militares, policías y civiles que no obstante haber combatido en una zona de conflicto bélico, no fueron comprendidos en la Ley vigente y cuya exclusión representa la postergación de derechos que les corresponden como a los actualmente beneficiarios.
- Sin entrar en detalle y a manera de comentario, parece justificado que se pretenda reivindicar derechos, de quienes no han sido considerados con reconocimientos y beneficios declarados para Defensores de la Patria, previa identificación de los que conformaron el batallón de Infantería Selva 32, al mando del Comandante del Ejército Peruano Walter Aceijas Pajares, quien fue reconocido como Defensor Calificado de la Patria 1995, con los beneficios respectivos.
- No obstante, es importante precisar que los numerales 3 y 17 del artículo 118 de la Constitución Política, disponen que le corresponde al Presidente de la República dirigir la política general del Gobierno y la hacienda pública, asimismo, el artículo 79 de la Carta Magna establece que *"los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (...)"*.
- En ese sentido, el Proyecto de Ley trasgrede lo dispuesto en el párrafo 4 del numeral 2.2 del artículo 2 (Estabilidad presupuestaria) de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, el cual señala que durante el Año Fiscal 2023, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1440,

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deben cumplir con las siguientes reglas: *"Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y un análisis de costo-beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis costo -beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario respectivo." (subrayado nuestro).*

- Además, el Proyecto de Ley bajo análisis no contienen el sustento técnico que fundamente los mecanismos de financiamiento, o la existencia de disponibilidad de los créditos presupuestarios suficientes en el presupuesto institucional para su financiamiento, así como el impacto que generará en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y los subsiguientes.

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley Nº 2628/2021-CR," Ley que modifica el artículo 3 inciso g de la Ley 26511, que amplía la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 y Reconoce a Defensores de la Patria", debe ser reevaluado considerando lo señalado en el presente Informe.

6) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, desde el punto de vista estrictamente presupuestario se formula observación al Proyecto de Ley por lo siguiente:
   a) En el Análisis Costo - Beneficio de la Exposición de Motivos de la propuesta normativa se afirma que "(...) la propuesta de ley no genera gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público (...) se gestiona dentro del marco presupuestal de cada entidad o ministerio, correspondiente, sin demandar mayores recursos del tesoro público"; no obstante, no se presenta un análisis costo-beneficio debidamente cuantificado que evidencie dicha afirmación, indicando los costos que estarían asociados a reconocer como Defensores de la Patria a todo el personal licenciado de las Fuerzas Armadas integrantes del Batallón de Infantería Selva (BIS) 32, participantes del conflicto armando del año 1995, ampliando la zona de combate del Alto Cenepa; y presentando una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios para financiar su implementación en el presente año fiscal, así como para su sostenibilidad en los años subsiguientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
   En consecuencia, la propuesta normativa **no cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024,** que establece que todo proyecto normativo debe contar con una

evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un análisis de costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos.

b) Asimismo, considerando que ampliar la zona de combate del Alto Cenepa del año 1995 para comprender a otro grupo de beneficiarios implicaría gasto público y que el Proyecto de Ley no presenta una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación en el presente año fiscal, no se evidencia la posibilidad de su implementación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; por lo que contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario recogido por el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y por el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440.
c) Adicionalmente, teniendo en cuenta que la propuesta legislativa es de iniciativa congresal es pertinente mencionar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que "Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (...)"

CONCLUSIONES:

La Dirección General de Presupuesto Público formula observación desde el ámbito estrictamente presupuestario al Proyecto de Ley N° 2628/2021-CR, por lo siguiente:

- No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

e. Proyecto de Ley 2958/2022-CR

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 2958/2022-CR; concluyendo que por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión.

2) La **Defensoría del Pueblo,** emite opinión del Proyecto de Ley 2958/2022-CR; mencionando que el propósito del proyecto de ley en mención no guarda relación directa con las líneas temáticas de acción que promueve la Defensoría del Pueblo en materia de protección de los derechos humanos,

especialmente, en favor de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, y sobre los cuales se orienta primordialmente la labor defensorial, como es, mujeres, adultos mayores; niños, niñas y adolescentes, población migrante, pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ, entre otros

3) El **Ministerio del Interior,** emite opinión concluyendo que el Ministerio del Interior carece de competencia para emitir opinión respecto del Proyecto de Ley N° 2958/2022-CR.

4) El **Ministerio de Defensa,** emite opinión concluyendo que **no resulta viable**, por las siguientes consideraciones:
   a) El **Ejército del Perú**, señala lo siguiente:
      - No se observa que los integrantes de la operación militar Pachacútec hayan realizado acciones heroicas extraordinarias de gran valor, cuya trascendencia e importancia haya sido de magnitud nacional; por tanto, si no reúne las condiciones no podrían calificar como héroes.
      - Al modificarse el articulo 10 de la Ley 24053, se mutila el concepto inicial eliminando los derechos que les corresponden a los excombatientes del conflicto de 1933, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acredito como Defensores calificados, así como a los excombatientes del año 1978, 1981 y 1995.
      - La Ley 29031 y el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", comprende a todo el personal de las FFAA, miembros de la Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo; por tanto, los integrantes de la operación militar Pachacútec deberán solicitar su reconocimiento al Consejo precisando que la iniciativa **no** resulta viable.
   b) La **DIBIEN-DGRRHH**, manifiesta lo siguiente:
      - Respecto al artículo 4 del proyecto normativo en análisis, este reconoce como "Héroes de la Democracia a los miembros de la Operación Militar Pachacútec. Sobre el particular, cabe indicar que la terminología de "Héroes de la Democracia no ha tenido en el ordenamiento jurídico un desarrollo normativo o procedimiento específico para su calificación; sin embargo, ello no costa a que por Ley pudiera otorgarse dicha nomenclatura a nuevos grupos de excombatientes que hayan participado en algún evento militar de importancia. Ahora bien, el otorgamiento de dicha denominación no debe confundirse con la calificación de "Defensor de la Democracia", la cual es otorgada a aquellos excombatientes a quienes se les ha otorgado la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", en el marco del procedimiento previsto en is Ley N° 29031 y el Estatuto del Consejo de la Condecoración, no siendo su otorgamiento de forma automática.

- Por consiguiente, únicamente los excombatientes que cumplan los requisitos previstos en el artículo 12 del Estatuto del Consejo de la Condecoración y hayan seguido el procedimiento previsto en dicho cuerpo reglamentario, podrán ser condecorados con la referida medalla, y consecuentemente, ser reconocidos como Defensores de la Democracia. Por otro lado, debe precisarse que el reconocimiento como "Héroe Nacional" está reservado a aquellos que, ofrendando su vida en forma voluntaria y consciente, hayan llevado a cabo una acción extraordinaria de gran valor cuya trascendencia e importancia haya sido de magnitud nacional
- Finalmente, en relación al reconocimiento previsto con la "Medalla al Defensor de la Democracia a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec (consignado en el artículo 5 del proyecto de ley en análisis) cabe indicar que, a fin de que los mismos sean condecorados con dicha medalla, estos deberán presentar sus solicitudes correspondientes al Ejército del Perú, en el marco del procedimiento señalado en el Estatuto del Consejo de la Condecoración.

c) En tal sentido, de la revisión de la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, se puede advertir que, la misma solo desarrolla el marco normativo y algunos antecedentes históricos, sin justificar técnica ni legalmente las razones por las cuales correspondería ser reconocidos como Defensores de la Democracia a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec.
d) Sobre el particular, y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Congreso de la República, la exposición de motivos debe contener el fundamento de la iniciativa, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal. Cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en su artículo 75, dichos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales, lo cual no se aprecia del expediente virtual
e) Asimismo, el artículo 7 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa aprobado por Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, establece que la exposición de motivos describe el contenido de la propuesta normativa, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes, marco jurídico y las habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta, **así como su justificación de manera detallada, operando como sustento de su elaboración y aprobación**. La exposición de motivos fundamenta la propuesta normativa **e incluye necesariamente el fundamento técnico que justifica la necesidad de aprobación de la norma, el análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la misma y el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional**. Ello debe tener consistencia con el análisis de impacto regulatorio, cuando corresponda.

f) Ahora bien, cabe señalar que el título de la iniciativa legislativa no guarda concordancia con las disposiciones que pretende regular, toda vez que la Ley pretende reconocer y declarar héroes de la democracia a los integrantes de la operación militar Pachacútec; sin embargo, se establece que se les haga entrega de la medalla al Defensor de la Democracia, de acuerdo a lo previsto en la Ley 29031; y, a su vez, que se les haga extensivos los beneficios contemplados en el articulo 10 de la Ley 24053.

g) En esa medida, debemos señalar que la Ley N° 29031, Ley que instituye el Dia de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, el 22 de abril y el 12 de septiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DERCOTE) de la Policía Nacional del Peni, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.

   Asimismo, constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar, así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar.

   Adicionalmente, **la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo**, que pusieron en riesgo su propia Integridad física **aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.**

h) De otro lado, la referida normal crea la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", que se otorga con Resolución Suprema a nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo, los cuales **serán designados de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se determinen en el estatuto.**

i) Por consiguiente, se puede evidenciar que, como ha sido señalado por el Ejército del Perú, La Ley N 29031, comprende a todo el personal de las FFAA que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, siendo así, los integrantes de la Operación Militar Pachacútec pueden solicitar su reconocimiento al Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia".

j) Cabe señalar que, en similar sentido a la iniciativa legislativa bajo análisis, la Ley N° 30554, declara Héroes de la Democracia a los

Comandos Chavín de Huántar, disponiendo se reconozca la calidad de Héroes de la Democracia a cada uno de los comandos que participaron en el mencionado Operativo y que se les otorgue la Medalla señalada en el numeral precedente. Asimismo, se autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir convenios con instituciones educativas públicas y privadas para el acceso a becas y/o el otorgamiento de facilidades económicas que permitan continuar estudios de educación superior a los Defensores de la Democracia, así como a sus hijos y/o cónyuge o concubina.

k) Sin embargo, la citada norma legal no dispuso hacer extensivo a quienes participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar los beneficios previstos en el artículo 30 de la Ley N° 24053. los cuales se encuentran referidos, entre otros, a recibir una bonificación mensual equivalente a tres ingresos mínimos legales, que se reajustará de acuerdo con las variaciones que experimente en el futuro. Siendo que, mediante la Centésima Cuadragésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto de Sector Público para el Año Fiscal 2019, se precisa que dicho personal percibe una única bonificación equivalente a 5/2 550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), mensuales, con carácter vitalicio e intransferible; monto que no es reajustable o indexable.
l) Siendo así, puede apreciarse que entre los beneficios que se han venido otorgando hasta la fecha a quienes participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar no se contempla uno de carácter económico de forma directa, como es el caso del beneficio previsto en la Ley N° 24053. Por lo que no se aprecia una justificación de forma clara y concreta respecto a que se otorgue dicho beneficio a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec, más aún cuando la iniciativa legislativa se basa en lo previsto en la Ley N° 30554.
m) Al respecto, resulta necesario traer a colación que el articulo 6 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, establece, entre otros, la prohibición para aprobar nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, Incentivas, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.
n) Por consiguiente coincidimos con las opiniones emitidas por el Ejército del Perú y la DIBIEN DGRRHH respecta de la iniciativa legislativa, siendo necesario contar con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que se tendría que incorporar el presupuesto necesario al Ministerio de Defensa, a efectos que pueda dar cumplimiento a la iniciativa legislativa en caso se aprobara, previa incorporación de una disposición que exonere al Ministerio de Defensa de la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 31638.
o) En consecuencia, sobre este aspecto se considera necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas se pronuncie, pues de no contarse

con los recursos necesarios por parte del Poder Ejecutivo, se estaría transgrediendo el articulo 79 de la Constitución Política el Perú, que establece: "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", vulnerando el principio de equilibrio presupuestario.

CONCLUSION:

Conforme a lo expuesto, este órgano de asesoramiento coincide con las opiniones emitidas por la DIBIEN-DGRRHH y el Ejercito del Perú, considerando que el proyecto de Ley 2958/2021-CR, Ley que reconoce y declara héroes de la democracia a los integrantes de la operación militar Pachacútec, **no resulta viable**.

5) Del **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,** emite opinión concluyendo que la iniciativa es **no viable**, entre otras, por las siguientes consideraciones:
   a) En virtud del principio de separación de poderes, cada poder del Estado (y naturalmente cada organismo constitucionalmente autónomo) debe ejercer sus funciones y competencias sin interponerse en las funciones y competencias de los demás poderes u organismos. En efecto, tenemos que, al referirse al principio de separación de poderes, el Tribunal Constitucional ha señalado que aquel "hace referencia a la autonomía funcional y a las diferentes competencias que cada poder estatal (y también cada órgano constitucional autónomo) tiene".
   b) En el marco de la preparación y conducción de las operaciones y acciones militares, las fuerzas armadas integrantes del Comando Conjunto están en condiciones de determinar quiénes son o han sido efectivamente combatientes en conflictos armados; atribución que, encontrándose dentro de la materia de Defensa Nacional, recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República y el Ministerio de Defensa.
   c) Se precisa que el artículo 79 de la Constitución es, desde un punto de vista sistemático, coherente con el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución, que establece como una de las atribuciones del Presidente de la República el "administrar la hacienda pública". Asimismo, en concordancia con el mandato constitucional, el Reglamento del Congreso de la República señala en el literal a) del numeral 2 del artículo 76 que las proposiciones legislativas de los congresistas "no pueden contener propuestas de creación, ni aumento de gasto público". Se especifica, además, que "esta regla no afecta el derecho de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido, durante el debate del Presupuesto (...)".
   d) En la modificación del artículo 10 de la Ley 24053, se advierte que el Proyecto de Ley excluye del ámbito de aplicación de la Ley N° 24053, sin sustento ni análisis de viabilidad técnica y jurídica, en la respectiva Exposición de Motivos, a los excombatientes: i) del conflicto de 1933 que

el Comando Conjunto acredite como defensores calificados, ii) de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, iii) de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031. En efecto, la propuesta normativa plantea incluir dentro de los alcances de los beneficios de la Ley N° 24053, únicamente a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec, sin considerar la calificación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como requisito para acceder a dichos beneficios; aspecto último que tampoco se ha sustentado.

e) Respecto al artículo 4 del Proyecto de Ley, que propone reconocer a los miembros del ejército peruano que participaron en la Operación Militar Pachacútec como "Héroes de la Democracia"; resulta oportuno observar que el otorgamiento de dicho título honorífico no se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico peruano; sin embargo, corresponde acotar que mediante la Ley N° 26841, se creó el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, dependiente del Ministerio de Defensa, encargado de calificar y de proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento del título honorífico de "Héroe Nacional", que será otorgado por Ley expresa.
f) se advierte en el artículo 2 del Proyecto de Ley que propone modificar el primer párrafo del artículo 1 de la Ley N° 29031; suprimiendo, sin sustento alguno en la Exposición de Motivos, el segundo y el tercer párrafo de dicho artículo; en ese sentido, los cambios que se efectuarían en la Ley N° 29031, son los siguientes:
   - Se elimina la fecha del 12 de setiembre de cada año como uno de los Días de los Defensores de la Democracia.
   - Se elimina a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú como grupo a favor de quien se instaura el Día de los Defensores de la Democracia.
   - Se elimina el extremo normativo que señala que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar.
   - Se elimina el extremo normativo que señala que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar.
   - Se elimina del ámbito de aplicación de la norma a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo

su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni con alguna discapacidad.

g) Se advierte que el Proyecto de Ley excluye del ámbito de aplicación de la Ley N° 24053, sin sustento ni análisis de viabilidad técnica y jurídica, en la respectiva Exposición de Motivos, a los excombatientes: i) del conflicto de 1933 que el Comando Conjunto acredite como defensores calificados, ii) de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, iii) de la lucha contra el terrorismo, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad y hayan calificado como Defensores de la Democracia mediante la Ley 29031. En efecto, la propuesta normativa plantea incluir dentro de los alcances de los beneficios de la Ley N° 24053, únicamente a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec, **sin considerar la calificación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como requisito para acceder a dichos beneficios; aspecto último que tampoco se ha sustentado**.
h) se aprecia que el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional a aquellas personas cuya acción es considerada como heroica, **es una competencia del Poder Ejecutivo**, de acuerdo a la normatividad anteriormente expuesta. Las propuestas de reconocimiento de acciones heroicas en circunstancias relacionadas a operaciones militares, deben ser elevadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ante el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, instancia competente para calificar y proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional.
i) Finalmente se aprecia que conforme a la Ley N° 29031, es competencia del Poder Ejecutivo, otorgar mediante resolución suprema la Condecoración "MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA"; razón por la cual, esta Dirección General, considera que el artículo 4 de la propuesta normativa no resulta jurídicamente viable, en tanto no es congruente con el principio de separación de Poderes, previsto en el artículo 43 de la Constitución.

CONCLUSIONES:

Estando a las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye lo siguiente:

- El Proyecto de Ley N° 2958/2022-CR, "Proyecto de ley que reconoce y declara héroes de la democracia a los integrantes de la operación militar Pachacútec" es una propuesta que **no resulta viable jurídicamente**; en virtud a que no resulta congruente con el principio de separación de establecido en el artículo 43 de la Constitución, ni con la prohibición de gasto establecida en el artículo 79 de la Constitución, en virtud a las consideraciones siguientes:

  - El artículo 3, propone: i) considerar como beneficiarios de la Ley N° 24053 a los integrantes de la Operación Militar Pachacútec, sin la

acreditación previa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pretendiendo ejercer con ello una **atribución que le corresponde al Poder Ejecutivo**, en el marco de sus atribuciones en materia de Defensa Nacional; y, ii) modificar el artículo 10 de la Ley N° 24053, sin haberse sustentado en la respectiva Exposición de Motivos que, en el *iter legislativo*, el Poder Ejecutivo consintió la dación de la norma en cuestión y que el gasto que implicaría que los integrantes de la Operación Militar Pachacútec sean beneficiarios de dicha Ley, no vulnera el principio de equilibrio presupuestario.

- El artículo 4, propone reconocer a los miembros del ejército peruano que participaron en la Operación Militar Pachacútec como "Héroes de la Democracia"; habiéndose determinado que el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional regulado en la Ley N° 26841 y su Reglamento, **es una facultad asignada al Poder Ejecutivo** por dicha Ley, en específico, del Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el cual tiene la responsabilidad de calificar y de proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional.
- El artículo 5, propone otorgar a los miembros del ejército peruano que participaron en la Operación Militar Pachacútec la "Medalla al Defensor de la Democracia", habiéndose determinado que conforme a la Ley N° 29031, **es competencia del Poder Ejecutivo**, otorgar mediante resolución suprema la Condecoración "MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA".

➢ Sin perjuicio de lo indicado, en el supuesto de que el proponente reformule la fórmula legislativa planteada y subsane las observaciones de fondo detalladas en el presente informe, se recomienda que en adición a las disposiciones del Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, se observen los artículos del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, detallados en el numeral anterior, respecto a la estructura y contenido del Proyecto de Ley y su Exposición de Motivos.

6) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, formula **observaciones** en el ámbito estrictamente presupuestario, que se detallan a continuación:
   a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
   b) Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

c) Afecta las facultades de gestión presupuestaria y priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440.

f. Proyecto de Ley 3391

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** emite opinión del Proyecto de Ley 3391/2022-CR; concluyendo que por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 3391/2022-CR, Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

2) El **Ministerio de Economía y Finanzas**, ha emitido opinión del Proyecto de Ley 3391/2022-CR; concluyendo que no resulta competente para emitir opinión.

3) El **Ministerio del Interior,** emite opinión del Proyecto de Ley 3391/2022-CR; concluyendo que no es competente para emitir opinión.

4) El **Ministerio de Defensa**, emite opinión considerando la propuesta como **inviable**, entre otras, por las siguientes consideraciones:
   a) La **Oficina de Asuntos Nacionales**, concluye que **no es viable** la propuesta, entre otras, conforme a las consideraciones siguientes:
      - la norma legal vigente, designa las Unidades que recibieron la orden de movilizarse a la línea de frontera y otorga un reconocimiento meritorio por su participación con ocasión de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, según los planes estratégicos y tácticos dentro del teatro de las operaciones NORTE, lo cual no es congruente con la propuesta de incluir al personal que fue movilizado a la FRONTERA SUR, debido a que estuvieron fuera de la línea de frontera NORTE, donde se desarrollaron los conflictos con el Ecuador.
      - En ese contexto, se estaría desvirtuando el concepto primigenio de la intención de la ley N° 29562, ya que es exclusivamente para las Unidades que fueron movilizadas a la FRONTERA NORTE; es decir, donde se desarrolló el CONFLICTO CON EL ECUADOR EN LOS AÑOS 1978, 1981 y 1985.

   b) El **Ejercito del Perú**, en su opinión concluye que el proyecto **no resulta viable**, entre otras, por las siguientes consideraciones:
      - Conforme se desprende del inciso d) del artículo 6 del Reglamento de la Ley N 29562, se entiende como ZONA DE MOVILIZACIÓN al espacio terrestre, acuático y aéreo hasta donde se hayan movilizado las Unidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, como consecuencia de los conflictos armados

de 1978, 1981 y 1995, tanto en primera línea como reserva según los planes estratégicos y tácticos dentro del teatro de operaciones, siendo así el personal movilizado hacia el sur, no se encontraría dentro del teatro de operaciones.

- De otro lado, el representante de lo Jefatura de Reservas y Reemplazos del Ejército (JERRE COPERE), manifiesta que, en sus archivos no existe antecedentes ni registros sobre las unidades movilizadas al sur del país durante el conflicto con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995; por lo que, no se podría acreditar fehacientemente la participación de algún personal militar.
- Igualmente, se tiene como referencia que, durante el conflicto con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, varias unidades se movilizaron hasta Paita, los mismos que no fueron reconocidas por no encontrarse dentro del espacio geográfico o del teatro de operaciones, conforme lo establece la Ley N° 29562 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2021-DE

c) De la **Marina de Guerra del Perú**, formula recomendaciones, conforme a lo siguiente:
   - En cuanto a la propuesta de modificación del artículo 1 de la Ley N° 29562, (inclusión del segundo párralo), no se establece precisiones respecto a los límites del área de frontera entre el hito Punta Capones en Tumbes hasta el último hito en el departamento de Loreto, debiéndose aplicar las definiciones establecidas mediante el Reglamento de la citada Ley N° 29562, en la que, por ejemplo, el literal h del artículo 6, establece la profundidad de cinco (05) kilómetros paralelo a la línea de frontera; en este sentido, una norma de menor jerarquía efectúa precisiones que no ha definido la norma con rango de Ley, situación que ha generado reiterados reclamos por parte de los solicitantes del reconocimiento que otorga la precitada Ley N° 29562.
   - Conforme a lo expuesto, a fin de cumplir con el principio de jerarquía de las normas, respecto de que una norma de menor jerarquía no puede modificar o exceder en sus alcances a una norma de mayor jerarquía, deberían incluirse conceptos y definiciones del reglamento de la ley 29562, en el proyecto normativo.

d) La **Fuerza Aérea del Perú**, opina que el proyecto normativo puede ser observado por el Ejecutivo, toda vez que en la Segunda Disposición Complementaria, señala que no otorga beneficio económico; sin embargo, ello no se condice con los fundamentos que contiene con los fundamentos , según la cual se persigue asegurar la igualdad formal y material del personal comprendido en sus alcances, como el beneficio económico dispuesto por el articulo 10 de la Ley

24053, en virtud que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, conforme a Ley.

e) La **Dirección General de Recursos Humanos**, remite un informe lo considera que el proyecto no resulta viable, entre otras, por las consideraciones siguientes:

- El Reglamento de la Ley 29562, considera que únicamente fueron movilizados a la zona de frontera que se mantenía con el referido país (Ecuador), conforme a los planes estratégicos y tácticos del respectivo teatro de operaciones, **sin que ello haya implicado que tales efectivos hayan participado en forma activa y directa en misiones de combate y/o similares con riesgo de su vida**.
- Se advierte que se quiere incorporar como movilizados a los licenciados de las Fuerzas Armadas que fueron movilizados a la frontera sur; sin embargo, **ello colisionaría con los señalado en el articulo 6 del reglamento de la Ley 29562, que establece claramente como personal "movilizados" a los miembros de los IIAA o de la PNP integrantes de una Unidad correspondiente**, convocados con ocasión de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, esto es, **en la zona norte**, conforme a lo manifestado por el Comando Conjunto por las Fuerzas Armadas.

  CONCLUSION

  Por lo expuesto, esta Oficina General de asesoría Juridica opina que el Proyecto de Ley 3391/2022, que propone la Ley que modifica la Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al merito a excombatientes de los conflictos con el Ecuador de los años 1978, 1981 y 1995, **resulta inviable**.

5) La **Defensoría del Pueblo**, comunica que no ha realizado investigaciones y tampoco cuenta con casuística relevante vinculada al proyecto de ley materia de consulta, por lo que, en esta oportunidad no será posible realizar un análisis especializado de dicha iniciativa, excusándose de emitir opinión.

g. Proyecto de Ley 3500/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** ha emite opinión del Proyecto de Ley 3500/2022-CR que concluye que por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión.

2) Del **Ministerio del Interior,** emite opinión del Proyecto de Ley 3500/2022-CR; concluyendo que no es viable.

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** emite opinión formulando observaciones al Proyecto de Ley 3391/2022-CR; con las siguientes conclusiones:
   a) La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, formula observación al Proyecto de Ley N° 3500/2022-CR, debido a que no cuenta con la información sobre la magnitud de los recursos necesarios para respaldar la obligación del pago de los beneficios contemplados en la propuesta de Ley, en el tiempo e identificar la fuente de financiamiento que lo haga sostenible, ya que las obligaciones previsionales se caracterizan por tener un impacto sobre todo en el largo plazo, siendo por ello imprescindible que la forma de financiamiento garantice no solo su disponibilidad presupuestal, sino también su sostenibilidad en el tiempo sin afectar el equilibrio fiscal. Además, no cuenta con un informe técnico del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior que, en el marco de sus competencias, se pronuncie sobre el costo de la medida y la disponibilidad de recursos para su financiamiento.

   b) Por parte la Dirección General de Presupuesto Público desde el ámbito estrictamente presupuestario formula observación al referido Proyecto de Ley N° 3500/2022-CR, por lo siguiente:
      - No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
      - Contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
      - Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
      - Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.

4) El Ministerio de Economía y Finanzas señala que, la iniciativa en los términos propuestos es inviable, sin embargo en cuanto al artículo 4, que propone la modificación del artículo 3 de la Ley 30874, se recomienda considerar lo señalado en el literal c) del numeral 2.13 del informe.

   El mencionado literal c del numeral 2.13 señala que:
   - Mediante Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978,

1981 y 1995, se otorga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de la norma, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el ecuador, es decir, facultad vigente hasta el 30 de noviembre de 2023.

- Tal como se ha señalado, la Ley 31728, dispone que el CCFFAA reasuma hasta el 31 de julio de 2023 la evaluación, calificación, formulación de actas y emisión de resoluciones de reconocimiento. Siendo así, el término empleado conlleva a preguntar válidamente ¿qué entiende la norma por "reasumir"? ¿implica que el CCFFAA continúe con las calificaciones? O ¿implica que el CCFFAA durante el lapso de tiempo no ha podido efectuar las calificaciones?
- La Ley 30874, ha sido derogada tácitamente por el artículo 45 de la Ley 31728; por lo que el artículo 4 del proyecto normativo no resulta viable.
- No obstante lo señalado; y, teniendo en cuenta lo informado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se debe considerar el siguiente procedimiento para el reconocimiento y calificación de Defensores de la Patria:
  i. Las Instituciones Armadas y Policía Nacional del Perú, tienen como función la evaluación, formulación de actas y pre calificación de las solicitudes pendientes de atención.
  ii. El CCFFAA, tiene como función la evaluación, formulación de actas, calificación y el reconocimiento respectivo.
  iii. El Ministerio de Defensa, tiene como función el reconocimiento a que se refiere la Ley 28796.
  iv. Finalmente, a las Instituciones Armadas y Policía Nacional del Perú les corresponde la emisión de resoluciones de otorgamiento de pago de la bonificación respectiva.
- Bajo ese contexto, se recomienda que el Congreso de la república, evalúe la elaboración de un proyecto normativo, que otorgue nuevos plazos (expresados en meses y muy por debajo del tiempo propuesto a través del proyecto normativo bajo análisis) a favor de las instituciones antes descritas, con la finalidad de reconocer como Defensores de la Patria a los administrados que cumplan los requisitos establecidos por las normas legales correspondientes.

5) De la **Defensoría del Pueblo,** manifiesta que la Defensoría del Pueblo no ha realizado investigaciones y tampoco cuenta con casuística relevante vinculada al proyecto de ley materia de consulta, por lo que en esta oportunidad no será posible realizar un análisis especializado de dicha iniciativa.

6) De la **ASONADED,** pone en conocimiento que este Proyecto de Ley que busca modificar el artículo 10 d la Ley 24053, no contradice el manual de técnica legislativa y lo que busca es precisión y aclaración.

h. Proyecto de Ley 3645/2022-CR

1) El **Ministerio del Interior,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 3645/2022-CR; concluyendo que el Ministerio del Interior carece de competencia para emitir pronunciamiento.

2) La **Defensoría del Pueblo,** emite opinión del Proyecto de Ley 3645/2022-CR; solicita considerar su opinión, mencionando que:

a) Sobre el particular, nuestra institución considera que este tipo de reconocimientos puede contribuir positivamente e incentivar al personal militar a seguir esforzándose por el logro de sus objetivos personales, profesionales e institucionales, sabiendo que, seguramente, su labor meritoria será luego materia de reconocimiento por su esfuerzo, sacrificio o participación destacada; no obstante, corresponde precisar que el propósito del proyecto de ley en mención no guarda relación directa con las líneas temáticas de acción que promueve la Defensoría del Pueblo en materia de protección de los derechos humanos, especialmente, en favor de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores; niños, niñas y adolescentes, población migrante, pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ, entre otros.

b) Cabe recordar que las funciones de la Defensoría del Pueblo se encuentran señaladas en el artículo 162 de la Constitución, así como en su Ley Orgánica N° 26520. De igual forma, que sus procedimientos de intervención se rigen por diferentes principios, como el de defensa de los derechos humanos y el de discrecionalidad; esto es, que su actuación está orientada principalmente a la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, especialmente de quienes se encuentran en "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 2 situación de vulnerabilidad e indefensión; y determina discrecionalmente el ejercicio de la atribución que considere más conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

c) Por consiguiente, la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo en una comisión especial para calificar a un ex combatiente como un "Defensor de la Patria" -que se propone con el artículo 4° de la propuesta legislativa- no es una labor propia y compatible con el referido marco normativo de actuación que nos corresponde cumplir para la defensa de los derechos de las personas, sino más bien, a través de la supervisión del cumplimiento de los deberes de los distintos actores estatales.

3) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** ha emite opinión del Proyecto de Ley 3645/2022-CR; concluyendo que no es viable por las siguientes consideraciones:
   a) La creación de una Comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo constituye una potestad exclusiva de este poder del Estado, al realizarlo mediante norma de su competencia, no requiriendo de una Ley para llevar a cabo dicha acción.
   b) Para la creación de cualquier instancia en el ámbito del Poder Ejecutivo, que incluye las Comisiones, se debe tener en cuenta los principios, criterios y reglas contenidas en la LOPE, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y los LOE.
   c) El PL, al pretender crear una Comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo, vulneraría la LOPE y el Principio de Separación de Poderes toda vez que este es quien determina y propone la forma de organización que adoptará para el cumplimiento de los objetivos de política pública que persiga.
   d) El Congreso de la República, en el proceso de identificación del problema público y elaboración de distintas alternativas de solución al mismo, donde se incluya la elaboración de propuestas legislativas, debería hacer participar a las entidades públicas del Poder Ejecutivo vinculadas a la materia que se analiza, desde el inicio del proceso, a fin de poder encontrar la solución más idónea al problema identificado o, de ser el caso, encauzar su atención por la vía competencial correcta.
   e) La creación de una Comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo constituye una potestad exclusiva de este poder del Estado, al realizarlo mediante norma de su competencia, no requiriendo de una Ley para llevar a cabo dicha acción.

4) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** ha emitido opinión formulando observaciones al Proyecto de Ley 3391/2022-CR por la Dirección General de Presupuesto Público desde el ámbito estrictamente presupuestario, por lo siguiente:
   a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
   b) Contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
   c) Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
   d) Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto

Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.

5) **El Ministerio de Defensa**, considera que el proyecto de Ley 3545/2022, es inviable por las siguientes consideraciones:
   a) El reglamento de la Ley 28796, referido a los conflictos de 1978 y 1995, establece que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en base a las propuestas que eleve la Comisión de Evaluación, procederá a la calificación respectiva para el reconocimiento como "Defensor de la Patria".
   b) Que ya existe normatividad especial que regula los procedimientos, requisitos y restricciones para la calificación, reconocimiento y otorgamiento de beneficios tanto para los excombatientes en los conflictos con el Ecuador y para aquellos que lucharon contra el terrorismo denominados Defensores de la Democracia, por lo que se considera que carecería de objeto, aprobar un proyecto de ley que pretende regular la misma materia.
   c) Respecto a la exposición de motivos, solo es una narrativa, mas no se ha justificado el por que seria necesario modificar las normas legales que regulan la materia y el problema que se pretende resolver.

i. Proyecto de Ley 4549/2022-CR

1) De la **Defensoría del Pueblo,** emite opinión del Proyecto de Ley 4549/2022-CR; mencionando que dicho proyecto legislativo no versa sobre la protección de un derecho fundamental, en ese sentido, nos excusamos de emitir opinión sobre el fondo de dicha iniciativa en la medida que no guarda relación con las líneas de trabajo institucional.

2) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** emite opinión del Proyecto de Ley 4549/2022-CR; concluyendo que por competencia no corresponde emitir opinión.

3) **Del Ministerio del Interior,** emite opinión en el sentido que el Ministerio del Interior NO ES COMPETENTE para emitir opinión.

4) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** emite opinión del Proyecto de Ley 4549/2022-CR; por medio de la Dirección de Gestión de Pensiones, concluyendo que:
   a) Por disposición de la Ley N° 28411 se derogo todo mecanismo de indexación o reajuste; es decir, desde enero de 2005 ningún beneficio o bonificación puede ser reajustado o indexado, salvo que haya una norma con rango de Ley que lo autorice expresamente.
   b) Con la Ley N° 30879 se dispuso que el personal calificado como Defensor de la Patria, perciba a partir del 01 de enero de 2019 una

bonificación de S/ 2 550.00 mensuales el cual equivale a 3 RMV tomando como referencia la RMV del año 2018, el mismo que tiene carácter vitalicio e intransferible, así como que no es reajustable o indexable.

c) Con la Ley N°31365 se dispuso que el CCFFAA debía culminar con el proceso de calificación de Defensores de la Patria en marzo de 2022, quienes podrían percibir de forma excepcional la bonificación económica, siempre que se solicite su registro en el AIRHSP hasta el 31 de marzo del 2022; competencia que se le ha reasignado mediante la Ley N° 31728 la que culmino el 31 de julio del 2023.
d) La bonificación mensual que se otorga a los calificados como Defensores de la Patria es un reconocimiento estatal, el cual es una subvención que se otorga por haber participado en un conflicto armado, por una labor o contribución a la sociedad de trascendencia nacional en beneficio del país, y no es pensión.
e) Por consiguiente, dada su naturaleza, al tratarse de una transferencia monetaria que otorga el Estado por servicios prestados a la Patria, es un beneficio personal no transferible a los herederos; por tanto, carece de sustento para extender el beneficio a los derechohabientes.
f) El Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público, por cuanto supondría una injerencia en el manejo de la Hacienda Pública y, además, afectaría el principio de equilibrio fiscal. Para que se encuentre constitucionalmente justificada, requiere de la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo.

5) El **Ministerio de Defensa**, considera que el proyecto de Ley 4549/2022, no resulta viable por las siguientes consideraciones:
   a) La Dirección de Bienestar, la propuesta central del proyecto normativo es precisar la interpretación de las normas relativas a la bonificación que deben percibir los Calificados Defensores de la Patria que participaron en las campañas militares de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, y se dejen sin efecto las normas que se opongan al otorgamiento de dicha prestación económica. Sin embargo, no se ha considerado que la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, derogó todo mecanismo de indexación o reajuste de esa bonificación, señalando que, a partir de enero de 2005, ningún beneficio económico puede ser reajustado, salvo que una norma con rango de Ley lo autorice expresamente.
   b) No se ha observado lo previsto en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, ni el artículo 76.2 del Reglamento del Congreso de la República, que establece que las proposiciones de ley no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público.
   c) En cuanto a lo señalado por el proyecto normativo, en el extremo que el pago del beneficio económico -conforme a sus términos- no demanda recursos adicionales al Tesoro Público y que será asumido

con presupuesto del MINDEF, cabe precisar que la Dirección Previsional de las Fuerzas Armadas, en su condición de unidad orgánica encargada de conducir el presupuesto previsional del pliego, así como, los registros contables y los estados financieros presupuestarios, no cuenta con disponibilidad presupuestal que permita pagar beneficios correspondiente a nuevos Defensores de la Patria, conforme lo prevé la propuesta legislativa.

d) En cuanto a la propuesta que la bonificación económica se otorgue a los beneficiarios por cada campaña militar en la que participaron, cabe precisar que, esta Oficina General mediante Informe Legal Nº 184-2017-MINDEF/OGAJ del 03.02.2017, se pronunció respecto a la aplicación de la Ley Nº 30461 en lo que respecta al pago de la bonificación, concluyendo que " La Ley Nº 24053, Ley que denomina "Campaña Militar de 1941" a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor Oriente, y que declara el 31 de Julio Día Central Conmemorativo, y su modificatoria, otorga el beneficio de la bonificación mensual de tres (03) ingresos mínimos legales a los excombatientes de la Campaña Militar de 1941 y a los excombatientes de los Conflictos de 1933, 1978, 1981 y 1995 debidamente calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin hacer mención y/o precisión respecto al beneficio que asiste al excombatiente por su participación en diferentes conflictos, por lo que **no debe considerarse este beneficio como acumulativo por cada intervención**.
e) Bajo ese contexto, se tiene que el proyecto normativo, no implica la interpretación de la Ley N° 24053 (tal como lo establece su denominación), por el contrario, significa una modificación del marco normativo que reconoce a los Defensores de la Patria.
f) En cuanto al Análisis Costo – Beneficio, se señala que el proyecto normativo no irroga gastos adiciones al Tesoro Público, por cuanto pueden ser atendidos con los montos presupuestales de las entidades públicas involucradas. Al respecto, tal como se ha señalado (ver literal d) del numeral 2.15 del presente informe), el Ministerio de Defensa no cuenta con disponibilidad presupuestal que permita pagar beneficios correspondientes a nuevos Defensores de la Patria, conforme lo prevé la propuesta legislativa.

j. Proyecto de Ley 4601/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** emite opinión del Proyecto de Ley 4601/2022-CR, concluyendo que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 4601/2022-CR, formulando la Dirección General de Presupuesto Público observaciones que se detallan a continuación:

a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria establecidas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
b) Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
c) Contraviene la prohibición establecida en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, referida a la prohibición de iniciativa de gasto congresal.

3) El **Ministerio del Interior,** ha emitido opinión del Proyecto de Ley 4601/2022-CR, considera que no es competente para emitir opinión al respecto.

4) Del **Ministerio de Defensa**, considera que el proyecto de Ley 4549/2022, es inviable por las siguientes consideraciones:
   a) La Marina de Guerra del Perú, ha indicado que no es necesario ampliar las zonas ya establecidas por el Decreto Supremo N° 010-DE-SG. Extender las áreas de delimitación para beneficiar a los que participaron del conflicto armado, sin distinguir la condición de movilizados y combatientes directos en las acciones de armas, genera una situación de inequidad; así como, un impacto económico aún no determinado en el presupuesto institucional de los institutos armados, por los beneficios económicos que tendrían que otorgarse. no sería conveniente equiparar los beneficios del personal militar que participó directamente en las acciones de armas con el personal movilizado y recomienda que la propuesta sea reevaluada.
   b) El Ejercito del Perú, opina que conforme a lo establecido en los incisos c) y g) de artículo 3, y el inciso a) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 010-DE-SG, reglamento de la Ley N° 26511, para ser declarado/calificado como Defensor de la Patria, el personal militar y civil que haya participado en el conflicto armado de 1995, necesariamente debe cumplir con tres (3) requisitos, como son: territorio o espacio geográfico, periodo de tiempo y riesgo de vida; así también, en el artículo 4 del D.S. N° 005-2008-DE, reglamento de la Ley N° 28796, se establece que para ser calificado como Defensor de la Patria de los conflictos armados de 1978 y 1981 deben cumplir dos (2) requisitos que son: a) Riesgo de vida, dentro de las zonas de combate, b) Ser propuesto por una Institución de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú; por tanto, al personal militar, licenciados y personal civil de las FFAA del Subsector del Alto Cenepa y Cordillera del Cóndor de los conflictos armados de 1978, 1981 y 1995, a los que se refiere el

presente proyecto de Ley, no cumplen con dichos requisitos, por lo que no podrían ser calificados como Defensor de la Patria.

Por las consideraciones expuestas, el Proyecto de Ley N° 4601/2022-CR, Ley que extiende los beneficios de la Ley N° 24053, al personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto con el Ecuador del año 1978,1981 y 1995, resulta no viable en todos sus extremos

c) La Fuerza Aérea del Perú, opina que Los beneficios de la Ley N° 24053, en la actualidad ya son extensivos a los excombatientes de los Conflictos Armados de los años 1978, 1981 y 1995, esto a condición que sean calificados como Defensores de la Patria (requisito legal). En ese sentido, la materia propuesta en el proyecto de Ley, ya se encuentra regulada, siendo innecesaria la misma.
d) El Tribunal Constitucional ha señalado, a través de la sentencia recaída en el expediente N° 0007-2012-PI/TC, lo siguiente:

(...)

En tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos que escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno. (...)".

k. Proyecto de Ley 4602/2022-CR

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** concluye en el sentido que por competencia **no corresponde emitir opinión**.

2) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** hace de conocimiento en el sentido que se encuentra **fuera de sus competencias emitir opinión**.

3) El **Ministerio del Interior,** considera que **NO ES COMPETENTE** para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4602/2022-CR; sin embargo, se plasman algunas consideraciones, entre otras las siguientes:
   a) el Proyecto de Ley bajo análisis, se encuentra orientado a extender beneficios de la Ley N° 26511 y su modificatoria la Ley N° 27124, Ley que modifica la Ley N° 26511, que reconoce como Defensores de la Patria y otorga beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el Conflicto con el Ecuador.
   b) advirtiendo que la propuesta normativa está orientada a extender y ampliar las áreas de delimitación que corresponde a la Zona de Combate del Alto Cenepa que participaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles en el conflicto con el Ecuador del año 1995, esta Oficina General de Asesoría Jurídica es de la opinión que la materia recogida en el proyecto de Ley, no tiene vinculación con las competencias asignadas al Ministerio del Interior, delimitadas en el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del

Ministerio del Interior, ni con las previstas en el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

c) Sin perjuicio de lo antes indicado, el proyecto de Ley N° 4602/2022-CR está orientado a extender y ampliar las áreas de delimitación que corresponde a la Zona de Combate del Alto Cenepa que participaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles en el conflicto con el Ecuador del año 1995; que tiene implicancia presupuestal, contraviene lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

d) En el marco de lo indicado precedentemente, el proyecto de Ley trasgrede lo dispuesto en el párrafo 4 del numeral 2.2 del artículo 2 (Estabilidad Presupuestaria) de la Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, el cual señala que durante el Año Fiscal 2023, las entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deben cumplir con las siguientes reglas: "Los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y un análisis de costo-beneficio en términos cuantitativos y cualitativos. La evaluación presupuestaria y el análisis costo-beneficio del proyecto de norma deben ser elaborados por el pliego presupuestario respectivo". (el subrayado es nuestro).

CONCLUSIONES:

De acuerdo a las consideraciones señaladas, atendiendo a la naturaleza y alcances de las iniciativas legislativas y en el marco de las competencias y atribuciones que las indicadas normas señalan, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Ministerio del Interior NO ES COMPETENTE para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4602/2022-CR, que propone la "Ley que extiende las áreas de delimitación que corresponde a la zona de combate del Alto Cenepa que participaron los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles en el conflicto con el Ecuador del año 1995."

I. Proyecto de Ley 4738/2022-CR

1) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** comunica que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ejército del Perú,** emite opinión del Proyecto de Ley 4738/2022-CR, manifestando que es viable en parte, entre otras, por las siguientes consideraciones:

a) En relación a lo propuesto en el artículo 3, referido al Parte de Guerra, se expone que es un documento formulado en conflictos armados internacionales o guerra convencional, así encuentra soporte legal en el articul2 de la ley 31177, resultando **viable** lo propuesto en este punto.
b) Respecto al artículo 4 de la propuesta, a *"que acrediten su condición una constancia de haber cumplido el servicio militar....."*, por si sola no es documento suficiente para acreditar que dicho personal ha participado en operaciones militares, recomendando que debería ir acompañado de un parte o informe de patrulla, fotografías, recortes de periódico o revista, testimonios avalados por el superior jerárquico de eses entonces, pero por si solo, la constancia, no es documento suficiente para acreditar que dicho personal haya participado en operaciones militares en la lucha contra el terrorismo, tal como las consideraciones o requisitos establecidos en la RM N° 076-2014-PCM y en el artículo 2 de la Ley 31177, para alcanzar los beneficios d la Ley 24053, por lo cual resulta **NO viable** en este extremo.
c) Sobre el artículo 5 donde se propone criterios de prioridad para atender a los beneficiarios, **resulta innecesario**, ya que están dadas en el Estatuto del Consejo de la Condecoración.

3) El **Ministerio del Interior,** manifiesta que no es competente para emitir opinión.

m. Proyecto de Ley 4979/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** concluye que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ministerio del Interior,** hace de conocimiento que NO ES COMPETENTE para emitir opinión.

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas,** opina que el Proyecto de Ley 4979/2022-CR, es considerado inviable por las siguientes consideraciones:
a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
b) Contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
c) Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.

d) El Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, por cuanto una iniciativa de tal naturaleza supondría una injerencia en el manejo de la hacienda pública y, además, afectaría el principio de equilibrio fiscal, conforme lo establece el artículo 79 de la Constitución Política del Perú
e) Según el Tribunal Constitución la creación de gasto público en general por parte del Congreso de la República requiere de la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada.

4) La **Defensoría del Pueblo,** se excusa de emitir opinión sobre el fondo del asunto

5) De la **ASONADED**, pone en conocimiento que este Proyecto de Ley que busca modificar el artículo 10 d la Ley 24053, no contradice el manual de técnica legislativa y lo que busca es precisión y aclaración.

n. Proyecto de Ley 5032/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** concluye que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) El **Ministerio del Interior,** en la respuesta de opinión de fecha 28 de junio 2023, de la Oficina de Asesoría Jurídica el Ministerio del Interior, hace de conocimiento que NO ES COMPETENTE para emitir opinión por no tener vinculación con las competencias asignadas; sin embargo, con fecha 16 de enero 2024, emite otra opinión favorable, en base a la Hoja de estudio y opinión N° 527-2023-PNP/EQUAGA, formulada por la Policía Nacional.

3) El **Ministerio de Educación,** hace de conocimiento que esta fuera de su competencia emitir opinión.

4) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** emite opinión considerando técnicamente no viable el Proyecto de Ley N° 4979/2022-CR por las siguientes razones:
a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
b) Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
c) Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

d) Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.
e) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.

o. Proyecto de Ley 5167/2022-CR

1) La **Defensoría del Pueblo**, comunica que el proyecto legislativo no versa sobre la protección de un derecho fundamental, sino que implica una decisión que corresponde a las atribuciones propias del Congreso de la República. En ese sentido, nos excusamos de emitir opinión sobre el fondo de dicha iniciativa en la medida que no guarda relación con las líneas de trabajo institucional.

2) El **Ministerio de Educación,** hace de conocimiento que no le corresponde al MINEDU pronunciarse sobre el Proyecto de Ley; dado que, no es de su competencia determinar la conveniencia de incorporar a determinado grupo de ciudadanos a los alcances de la Ley N° 29031.

3) El **Ministro de Economía y Finanzas**, hace de conocimiento que el ministerio no resulta competente para emitir opinión.

4) El **Ministerio del Interior**, hace de conocimiento que el proyecto resulta viable, entre otras, por las siguientes consideraciones:
   a) la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política del Perú "tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras".
   b) Señala que, De lo señalado en el punto precedente, se desprende que existe un procedimiento establecido en la Ley N° 26841, Ley que crea el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 049-DE/SG, en los casos en los que la persona a la que se pretenda reconocer una acción heroica lo haya realizado en circunstancias distintas a una operación militar, como sería en el caso de la presente iniciativa legislativa, para lo cual es necesario que se presente ante el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas la documentación que justifica el pedido o, en su defecto, presentar testigos, debiendo este ser aprobado

por unanimidad. De lo contrario, se archivará el pedido, dando por concluido el trámite.

c) Conforme se advierte la propuesta normativa tiene como finalidad reconocer el sacrificio de los fallecidos a consecuencia del último conflicto social interno social en el Perú, donde se perdieron vida de compatriotas a los cuales se les tiene que dar un reconocimiento póstumo, se declare rostros y mártires de la democracia a los ciudadanos peruanos que dieron sus vidas en lucha de su creencia y valores patrióticos y políticos. No obstante, tal y como se ha desarrollado en el presente informe, para declararlos como tal es necesario seguir el procedimiento estipulado en la Ley N° 26841 y su Reglamento, presentando los requisitos exigidos por dicha normativa ante el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, instancia competente para estudiar, analizar y calificar las propuestas para el otorgamiento del título honorífico de Héroe Nacional, emitiendo el voto correspondiente. Posteriormente, propondrá el proyecto de ley ante el Ejecutivo para su presentación ante el Congreso de la República.
d) Cabe resaltar que mediante Ley N° 30655, SE declara Héroes de la Democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN - DIRCOTE -PNP; no ha sido considerado como marco normativo; es decir como referente para el presente proyecto de ley.
e) Por tanto, la propuesta legislativa no se adecúa al establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

Por lo que, en opinión de la Policía Nacional del Perú por su distinguido servicio a la Nación y valeroso accionar en la lucha contra el terrorismo con explosivos, en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia, debe ser considerada viable.

5) El **Ministro de Defensa**, hace de conocimiento que la propuesta, no se encuentra dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Defensa

p. Proyecto de Ley 5192/2022-CR

1) El **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación**, menciona que el proyecto de ley no tiene relación directa con la competencia del Ministerio Público.

2) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** emite opinión considerando **técnicamente no viable** el Proyecto de Ley por las siguientes razones:
   a) No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2023.
   b) Contravendría el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del

numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

c) Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
d) Se opone a la facultad de priorización que tiene el Titular de la entidad, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, al disponer la ejecución de acciones a cargo de las entidades públicas.

3) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** emite opinión del Proyecto de manifestando lo siguiente:
   a) En lo referente al párrafo inicial de la primera disposición complementaria que se pretende modificar: "Encargase al Consejo de la Condecoración, creado por el artículo 3 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente; la calificación para el reconocimiento como Defensores de la Democracia a los ex combatientes de la lucha contraterrorista, para ser beneficiarios de la presente ley [...]"; al respecto esta consideración resultaría VIABLE, aunque este Consejo de la Condecoración fue creado únicamente con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 1 de la Ley 29031 y sus modificatorias; sin embargo, según Ley 31177, ley que otorga beneficios a los ex combatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, modificando la Ley 24053 que denomina "Campaña Militar de 1941".
   b) En lo que se refiere a la segunda parte del primer párrafo de la primera disposición complementaria que se pretende modificar y que señala: "[...] se acredita con la sola presentación de la libreta militar o la constancia expedida válidamente por la Oficina de Inscripción del Registro Militar de la jurisdicción que prestó el servicio militar o la que haga sus veces. Y serán tramitadas por estas oficinas a nivel nacional [...]", al respecto, la sola presentación de la Libreta Militar o la constancia expedida válidamente por la Oficina de Inscripción del Registro Militar de la jurisdicción que prestó el servicio militar o la que haga sus veces, **no resultaría VIABLE**, pues necesariamente para acreditar haber participado en operaciones contrasubversivas debería considerarse en el análisis, variables fundamentales como ubicación, temporalidad y normatividad.

4) El **Ministerio de Relaciones Exteriores** informa que, luego de la revisión del proyecto, estima que el mismo no se encuentra relacionado directamente con una problemática específica relativa al derecho internacional púbico, entendida esta disciplina como la rama del derecho que se ocupa de la conducta de los Estados y de las Organizaciones

Internacionales y de sus relaciones entre si, así como de algunas de sus relaciones con las personas naturales o jurídicas.
Asimismo, indica que el proyecto tiene la finalidad de reconocer a aquellas personas que prestaron el servicio militar obligatorio luchando contra el flagelo del terrorismo. Considerando este fin, loque busca regular el citado proyecto se encuentra dentro de la esfera de discrecionalidad del Estado y, por ende, al ser una norma de perteneciente al plano del derecho interno, no contraviene algún tipo de obligación internacional.

5) El **Ministerio de Educación,** menciona que el proyecto de ley no tiene relación directa con la competencia por lo que no le corresponde pronunciarse.

q. Proyecto de Ley 5224/2022-CR

1) El **Ministerio del Interior,** hace de conocimiento que NO ES COMPETENTE para emitir opinión.

2) La **Presidencia del Consejo de Ministros,** hace de conocimiento que por competencia no corresponde emitir opinión

3) El **Ministerio de Economía y Finanzas,** hace de conocimiento que no emite opinión en razón que la bonificación económica de la Ley 24053 ya no forma parte de los beneficios, y el plazo del artículo 3 de la Ley 30874 fue dejado sin efecto por la Ley 31365, entre otras, por las siguientes consideraciones:
   a) Se pretende modificar el artículo 3 de la Ley N° 308744 para ampliar el plazo de cinco a seis años, esto es hasta el 30 de noviembre del 2024, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armada, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador.
   b) Al respecto, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 044-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público5 señala que es función de la DGGFRH emitir opinión de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, formados por ingresos de personal, pensiones, reconocimientos estatales, y los gastos por encargo.
   c) Se advierte que el Proyecto de Ley N° 5224/2022-CR pretende modificar el artículo 1 de la Ley N° 265116 para extender sus beneficios a quienes hayan participado de forma activa y directa en misiones relacionadas en la implementación y ejecución de los planes de guerra en la zona del Alto Cenepa durante el conflicto con el Ecuador en 1995, además de establecer un nuevo plazo para ese reconocimiento.

d) Sobre el particular, con la Ley 24053 – Ley que denomina "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor-Oriente y proyecto tiene por objeto ampliar las personas que son consideradas como beneficiarias de la Ley N° 24053, modificada por Ley N° 30461, lo que se encuentra fuera de las competencias de la DGP, por lo que no podemos emitir la opinión solicitada.
e) La bonificación económica de la Ley N° 24053 ya no forma parte de sus beneficios, y el plazo del artículo 3 de la Ley N° 30874 fue dejado sin efecto por la Ley N° 31365, declaran el 31 de Julio día central conmemorativo, y otras leyes que se emitieron posteriormente7 , se trata de reconocer el servicio a la Patria de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en forma activa y directa en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995.
f) Los beneficios que recibían los Defensores de la Patria, entre otros, son: atención médica gratuita y medicinas, nicho en cementerio, asignación por sepelio, trato preferencial para obtener vivienda y afectación de terrenos para fines agropecuarios y **el otorgamiento de una bonificación mensual**.
g) Con relación a la bonificación mensual debemos señalar que es una subvención que se otorga a los Defensores de la Patria por haber participado en un conflicto armado, es decir, por una labor o contribución a la sociedad de trascendencia nacional en beneficio del país, motivo por el cual estamos ante un reconocimiento estatal, sobre el cual la competencia de la DGGFRH comprende exclusivamente la evaluación del costo de la propuesta y el registro del otorgamiento de conceptos dinerarios.
h) De otro lado, mediante Ley N° 30874 se otorgó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) cinco años de plazo, contados desde la fecha de su publicación, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador.
i) **Vigencia de la bonificación económica**: La Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 308799 estableció que la bonificación económica de la Ley Nº 24053 era otorgada únicamente al personal calificado como Defensor de la Patria, que al 06 de diciembre de 2018 se encontraba registrado en Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del MEF. En ese sentido, el CCFFAA podía seguir calificando a nuevos Defensores de la Patria, **pero ya no se les podía otorgar la bonificación económica**, porque fue dejada sin efecto por la Ley N° 30879.

j) **Plazo para declarar a Defensores de la Patria**: El artículo 3 de la Ley N° 30874 otorgó 05 años de plazo (hasta el 29 de noviembre de 2023) al CCFFAA para emitir las resoluciones que reconocen a los Defensores de la Patria; sin embargo, mediante la Centésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N°3136510 se ordenó que el CCFFAA debía culminar con dicho proceso en marzo de 2022.

k) Como se advierte, el proyecto de ley tiene por objeto ampliar las personas que son considerabas como beneficiarias de la Ley N° 24053, lo que no comprende a ninguno de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, motivo por el cual se encuentra fuera del marco de nuestras competencias, y en esa medida no podemos emitir opinión al respecto.

l) Sin perjuicio de ello, se debe tener presente que la bonificación económica ya no forma parte de los beneficios de la Ley N° 24053, y que el plazo del artículo 3 de la Ley N° 30874 fue dejado igualmente sin efecto por la Ley N° 31365.

CONCLUSION

- El Proyecto de Ley N° 5224/2022-CR tiene por objeto ampliar las personas que son consideradas como beneficiarias de la Ley N° 24053, modificada por Ley N° 30461, lo que se encuentra fuera de las competencias de la DGP, por lo que no podemos emitir la opinión solicitada.
- La bonificación económica de la Ley N° 24053 ya no forma parte de sus beneficios, y el plazo del artículo 3 de la Ley N° 30874 fue dejado sin efecto por la Ley N° 31365.

r. Proyecto de Ley 5721/2023-CR

1) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, hace de conocimiento que El Proyecto de Ley N° 5721/2023-CR, Ley que revaloriza los servicios prestados por los licenciados de las Fuerzas Armadas, para la preservación la paz y seguridad de la Nación, durante la época de la lucha antiterrorista, no contiene materia de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento.

2) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, emite opinión en el sentido que la propuesta es **no viable**, entre otras por las siguientes consideraciones:

a) Del **Comité Evaluador del Consejo de la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia,** que concluye con lo siguiente:

- Que **resulta INVIABLE** la promulgación del referido Proyecto de Ley que tiene como finalidad la inclusión de personal licenciado que, durante la lucha contrasubversiva, resguardo y protegió las unidades militares en las cuales realizo su servicio militar obligatorio, pues no guarda relación alguna con la finalidad de Ley 29031,

específicamente su estatuto, en lo referente al grado de otorgamiento de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", cuando sea motivo de evaluación y calificación de las solicitudes.

- Asimismo, dicho Proyecto de Ley en beneficio de personal licenciado que, durante la lucha contrasubversiva, resguardo y protegió las unidades militares en las cuales realizo su servicio militar obligatorio, no solo conllevaría calificar a dicho personal, pues también bajo el mismo razonamiento, incluiría a personal de oficiales, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que también cumplieron dicha función durante la lucha contrasubversiva en otras regiones del país; además establece **una diferenciación por los grados jerárquicos**, trayendo consigo un tema inconstitucional por lo que **resulta INVIABLE**.
- Por último, el proyecto de ley señala que los beneficios establecidos en el artículo 3 de la Ley 31291, serán de aplicación a los licenciados de las Fuerzas Armadas que, durante la lucha contrasubversiva, resguardaron y protegieron a las unidades militares en las cuales realizaron su servicio militar obligatorio. Sobre el particular, resultaría INVIABLE, pues no se ha efectuado un análisis exhaustivo de los gastos económicos que produciría el mismo ya que no se ha efectuado una consulta a los sectores de Defensa e Interior, que de acuerdo a normas establecidas deben asumir con sus partidas presupuestales los costos que genera la Ley 29031. Por último, refiere la existencia de beneficios económicos para dicho personal, los mismos que no se hayan descritos en la Ley 29031 y la normatividad relacionada con ella.

RECOMENDACIÓN:

- La revisión más detallada del Proyecto de Ley que tiene como finalidad la inclusión de personal licenciado que, durante la lucha contrasubversiva, resguardo y protegió las unidades militares en las cuales realizo su servicio militar obligatorio, pues no guarda relación alguna con la finalidad de Ley 29031, específicamente su estatuto, en lo referente al grado de otorgamiento de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia"; la posible inclusión de personal de oficiales, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que también cumplieron dicha función durante la lucha contrasubversiva en todas las regiones del país; y, el análisis exhaustivo de los gastos económicos que produciría el mismo, ya que no se ha efectuado una consulta a los sectores de Defensa e Interior, que de acuerdo a normas establecidas deben asumir con sus partidas presupuestales los costos que genera la Ley 29031.
- Por último, tener mucha cautela en la emisión de constantes modificaciones a la Ley 29031, la cual parecería abierta por las constantes modificaciones que se efectúan y desvirtúan el espíritu de la norma bajo la cual fue promulgada."

b) De la **Oficina General de Asesoría Jurídica,** que entre otros aspectos menciona lo siguiente:

- **Falta de sustento en la exposición de motivos**: de acuerdo con lo señalado por el Consejo de la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia, se propone modificar el artículo 1 de la Ley N° 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, para establecer que la norma legal se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional del Perú, que sin necesidad de haber participado directamente en la lucha contra el terrorismo, resguardaron y protegieron las unidades militares a nivel nacional contribuyendo así con la preservación de la paz y seguridad en el país; no obstante, de la revisión de la Exposición de Motivos, no se encuentra una debida justificación para establecer dicha incorporación, la misma que no guarda relación con la finalidad de la norma, que es otorga la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia" como resultado de la lucha contra el terrorismo; además, no se sustenta, la inclusión de personal (oficiales, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional) en todas las regiones del país.
  En tal sentido, se puede afirmar que la exposición de motivos que acompaña a la propuesta legislativa, no se encontraría adecuadamente sustentado, en los términos señalados en las normas legales citadas.
- **Posible generación de gasto público**: se puede afirmar correctamente que los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público, salvo el que corresponde a su presupuesto; y, que la administración de la hacienda pública le corresponde exclusivamente al Presidente de la República. En ambos casos, ningún acto de los poderes públicos, ni la colectividad en general, pueden desvincularse de dichos preceptos.
  Asimismo, señala "contrario sensu, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, **sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita que en el procedimiento legislativo del que emanó la ley de la que nace la obligación pecuniaria, el Gobierno autorizó o consintió su dación."; "en tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos que escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno**. (...)
  CONCLUSION Y RECOMENDACION
- En n atención a las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica **considera no**

viable el 5721/2023-CR, Ley que revaloriza los servicios prestados por los Licenciados de las Fuerzas Armadas, para la preservación de la paz y seguridad de la nación, durante la época de la lucha antiterrorista.

- Al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Defensa, mediante Oficio N° D005490-2023-PCM-SC, se trasladó a dicho Ministerio el pedido de opinión formulado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.
- Se recomienda remitir el presente Informe y el Memorando N° D000012-2023-PCMCEMDD del Comité Evaluador del Consejo de la Condecoración Medalla al Defensor de la Democracia a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República.

3) Del **Ministerio de Defensa**, que pone en conocimiento que el proyecto de Ley **resulta inviable**, entre otras, por las siguientes consideraciones:
   a) Del **Ejercito del Perú**, considera que el proyecto normativo **no resulta viable**, conforme a las siguiente consideración:
   El párrafo que se sugiere agregar en la ley es muy genérico y podría generar confusiones, y además habilitaría para que cualquier licenciado que ha realizado su servicio militar a nivel nacional, pretenda ser considerado como Defensor de la Democracia, ya que estaría favoreciéndose a Licenciados de las FFAA, que cumplieron su servicio militar en zonas en estado de derecho (zonas que no arriesgan su integridad física), por lo tanto, resulta no viable dicha propuesta, puesto que no se estaría cumpliendo con la finalidad de la norma que se propone modificar, la cual es el reconocimiento determinado y/o individualizado de los miembros de las FFAA, que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo y a todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron eminentes servicios a la nación; además, estaría contraponiéndose a los dispuesto en Resolución Ministerial N° 076-2014-PCM, que aprueban el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", modificada con Resolución Ministerial N° 234-2022- PCM, que modifican el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla Defensor de la Democracia" en las cuales hacen conocer los requisitos para ser calificado como Defensores de la Democracia, para el personal de las Fuerzas Armadas y Licenciados de las Fuerzas Armadas.
   b) De La **Fuerza aérea del Perú**, opina que el proyecto normativo resulta **viable**, conforme a lo siguiente:
      - El proyecto normativo propone conceder al grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas (que realizaron su servicio militar obligatorio

durante la lucha contrasubversiva ejerciendo un rol activo y disuasivo en la defensa/resguardo de sus Bases y/o Unidades militares, pero que no participaron directamente en la lucha contra el terrorismo), el acceso a becas de estudio y/o a convenios educativos que el Ministerio de Defensa pudiera suscribir con instituciones educativas públicas o privadas (extendiendo incluso estos beneficios a los hijos, cónyuges o concubinos de tal grupo de Licenciados); ya que, según se aprecia del artículo 1 del proyecto, en concordancia con su artículo 3, el cual remite a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 31291, el cual prescribe "otorgase a los defensores de la democracia (...), así como a sus hijos, cónyuges o concubinos, el acceso a becas de estudio. El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, otorgan los beneficios de la presente ley y suscriben los convenios con instituciones educativas públicas o privadas para el otorgamiento de las becas. Los gastos que se irroguen serán cubiertos por los presupuestos de los ministerios de Defensa o del Interior, según corresponda"

- La aprobación del proyecto normativo implicaría beneficiar al citado grupo de licenciados, mediante la posibilidad de acceder a becas de estudio y a convenios que el Ministerio de Defensa pudiera suscribir con instituciones educativas públicas o privadas; por lo que, se considera que la propuesta legislativa es razonable y no se contrapone con la normatividad vigente sobre la materia.

c) Del **Viceministerio de Recursos para la Defensa**, informa que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra del Perú, no han emitido la opinión solicitada; asimismo, señala que el proyecto normativo **no resulta viable**, entre otros, por lo siguiente:
   - Es oportuno precisar que, el artículo 1 de la Ley N° 29031, ha sido modificado por distintas leyes, entre ellas, las Leyes Nros. 29960, 30554, 30655, 30758 y la 31291, donde el legislador ha ido incorporando a distintos grupos que han participado en la lucha contrasubversiva y prestaron eminentes servicios a la Nación.
   - Si bien la Ley N° 29031 y sus modificatorias, han buscado dar un valor agregado a aquellos grupos que han participado directamente en la lucha contrasubversiva, la propuesta en vez de revalorizar como su cuerpo normativo indica, busca generalizar en todos sus extremos dicho reconocimiento, siendo que se otorgaría un reconocimiento a alguien que no puso en riesgo su integridad personal; sino que dio cumplimiento a su deber militar, lo cual conllevaría a generalizar el reconocimiento de "Defensor de la Democracia"; perdiéndose así el valor que se ha otorgado en las distintas modificaciones; al involucrar únicamente al personal que ha participado en la lucha contrasubversiva.

     Debemos tener presente que el terrorismo vivido durante las épocas de los ochenta y noventa ha sido uno de los acontecimientos

determinantes en nuestra historia lo cual ha dejado una huella aún muy difícil de borrar y reparar. Sin embargo, luego de veinte largos años de lucha contrasubversiva contra grupos terroristas, nuestra sociedad ha quedado marcada con una gran cantidad de muertos, heridos y discapacitados, que arriesgaron su integridad por defender, proteger, resguardar y restablecer la paz y seguridad en el país; es debido a ese acto de valentía y coraje que se otorga el reconocimiento de Defensor de la Democracia.

La exposición de motivos adjunta al presente proyecto de ley, establece claramente que entre los miembros de las fuerzas militares, se encuentran los licenciados de las fuerzas, quienes son aquel personal civil que en el marco de la realización **de su servicio militar obligatorio contemplado en la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar, se enlistaron o fueron reclutados** en las distintas bases militares repartidas a lo largo del país (...)", descripción que permite conocer que el personal denominado "Licenciado de las Fuerzas Armadas" estaba sirviendo en estricto cumplimiento de su deber militar que lo faculta la Ley N° 27178 y no que se encontraba en una lucha contrasubversiva contra el terrorismo.

- Referente a la propuesta del artículo 3, que trata sobre la extensión de los beneficios establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 31291, informamos que el Licenciado de las Fuerzas Armadas, por ser personal que presta servicio militar, posee una serie de beneficios, descritos en el artículo 54 de la Ley N° 29248 – Ley del Servicios Militar; además que los beneficios establecidos en el presente marco normativo poseen una similitud con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 31291, evidenciándose esto en los numerales 8 y 13.
- Adicionalmente, de la revisión del proyecto de ley materia de análisis, esta Oficina General, opina lo siguiente:

  - En cuanto al artículo 2 del proyecto normativo, que propone considerar dentro de los alcances de la Ley N° 31291, a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que sin necesidad de haber participado directamente en la lucha contra el terrorismo, resguardaron y protegieron las unidades militares a nivel nacional contribuyendo así con la preservación de la paz y seguridad en el país; cabe precisar que la finalidad de la Ley N° 31291, es reconocer a los licenciados que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo y a todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron eminentes servicios a la nación. Siendo así, el pretender reconocer al personal que ha realizado su servicio militar a nivel nacional, se estaría favoreciendo a Licenciados de las FFAA, que cumplieron su servicio Militar en zonas de normalidad constitucional, donde no necesariamente hubo una declaratoria de estado de emergencia que

haya ameritado el despliegue de una lucha frontal contra los grupos terroristas.

- En cuanto al artículo 3 que, propone extender los beneficios establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 31291, al personal que se pretende incorporar a través de su artículo 2, cabe precisar que dicho personal conforme a lo establecido en la Ley N° 29248 – Ley del Servicios Militar, ya cuenta con diversos beneficios.

CONCLUSION:

Por lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica opina que el Proyecto de Ley Nº 5721/2023-CR, "Ley que revaloriza los servicios prestados por los Licenciados de las Fuerzas Armadas, para la preservación la paz y seguridad de la nación, durante la época de la lucha antiterrorista", **no resulta viable**; por lo que, recomendamos que el presente documento sea puesto en conocimiento de la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros para los fines pertinentes.

s. Proyecto de Ley 5884/2022-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros,** mediante los dos oficios hace de conocimiento que por competencia no corresponde emitir opinión.

2) La **Defensoría del Pueblo**, pone en conocimiento que dicho proyecto legislativo no versa sobre la protección de un derecho fundamental, sino que implica una decisión que corresponde a las atribuciones propias del Congreso de la República. En ese sentido, nos excusamos de emitir opinión sobre el fondo de dicha iniciativa en la medida que no guarda relación con las líneas de trabajo institucional.

3) El **Ministerio del Interior**, hace de conocimiento que no tiene vinculación directa con las competencias con el Ministerio; sin embargo lo considera **viable**, señalando los numerales del 3.18 al 3.21, pero estos no justifican con argumentos la propuesta, se adjunta link de esta opinión: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTYyODI2/pdf

t. Proyecto de Ley 6522/2023-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, hace de conocimiento que por competencias no corresponde emitir opinión.

2) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, hace de conocimiento que observa el proyecto de ley , entre otras por las siguientes consideraciones:

- Que, los reconocimientos estatales son subvenciones que, bajo cualquier denominación, otorga el Estado a cualquier persona natural por una labor o contribución a la sociedad de trascendencia nacional en beneficio del país; son creados por ley o norma del mismo rango del Gobierno Central y/o Decreto Supremo.
- De conformidad con el numeral 3.6 de las Disposiciones Complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 044-2021, aprobada con Decreto Supremo N° 153-2021-EF, en el caso de los reconocimientos estatales, la competencia de la DGGFRH comprende exclusivamente la evaluación del costo de la propuesta y el registro del otorgamiento de conceptos dinerarios; en ese sentido, la DGP realiza únicamente el costo de los reconocimientos estatales.
- Como se advierte, el PL pretende restablecer, actualizar y nivelar la bonificación mensual de los Defensores de la Patria con base a la RMV vigente en cada Año Fiscal; es decir, que sea reajustado a las variaciones que se den.
- Con la Ley 252087 publicada el 03 de mayo de 1990 se determinó que la bonificación que se otorga a los Defensores de la Patria sería equivalente a 3 Ingresos Mínimos Legales (IML) que se reajustaría según sus variaciones futuras; después el Ministerio de Defensa (Mindef) equiparó el IML a la RMV, a pesar de ser conceptos diferentes, pagándose 3 RMV, el cual se actualizaba ante cada incremento de la RMV.
- Posteriormente, el Decreto Supremo N° 094-96-EF incrementó "(...), a partir del 01 de setiembre de 1996, la Bonificación al personal calificado como "Vencedor de la Campaña Militar de 1941" en el monto de CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/. 50,00)" lo que no incluyó a los otros excombatientes de los conflictos de los años 1933, 1978, 1981 y 1995.
- Sin embargo, reajustar la bonificación económica cada vez que se incrementaba la RMV, constituía una indexación que no tomó en cuenta que el numeral 3 de la Sétima Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto disponía que:
  "3. Dejase sin efecto todas las disposiciones legales o administrativas que establezcan mecanismos de referencia o indexación, percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente, las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones, dietas y en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y Entidades del Sector Público". (Subrayado agregado)
- Es decir, desde enero de 2005, ningún beneficio o bonificación puede ser reajustado o indexado, salvo que una norma con rango de ley que expresamente lo autorice.
- Cabe precisar que, lo dispuesto por la Ley N° 28411 ha sido ratificado en el artículo 3-A, del Decreto de Urgencia Nº 044-2021, que establece.
  "Artículo 3-A.- Ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público

Se precisa que la prohibición de todo tipo de mecanismo de referencia o indexación de ingresos, se refiere a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad de quien la emite y/o apruebe, así como de la máxima autoridad administrativa de la entidad".

- Asimismo, la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 dispuso que el personal calificado como Defensor de la Patria, percibe, **a partir del 01 de enero de 20199 una única bonificación de S/ 2 550,00 mensuales**, con carácter vitalicio e intransferible; monto que no es reajustable o indexable. Dicha bonificación fue equivalente a 3 RMV, tomando como referencia la RMV con la que comenzó el año 2018 (S/850).
- **Vigencia de la bonificación económica**: La Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 3087911 estableció que la bonificación económica de la Ley Nº 24053 era otorgada únicamente al personal calificado como Defensor de la Patria que, al 06 de diciembre de 2018, fecha de publicación de dicha ley, esté registrado en Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del MEF, momento a partir del cual, la bonificación económica dejó de ser un beneficio.
- Por ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) que estuvo a cargo del reconocimiento, podía seguir calificando a nuevos Defensores de la Patria, pero ya no se les podía otorgar dicha bonificación.
- **Competencia para declarar a los Defensores de la Patria**: La Ley N°3136512 dispuso que el CCFFAA debía culminar con el proceso de calificación de los Defensores de la Patria en marzo de 2022, quienes podrían percibir de forma excepcional la bonificación económica, siempre que se solicite su registro en el AIRHSP hasta el 31 de marzo del 2022; competencia que se le ha reasignado con la Ley N° 3172813 la misma que se cerró el 31 de julio del 2023; por consiguiente, ya no se pueden reconocer a nuevos Defensores de la Patria.
- **Financiamiento de la bonificación económica:** Con las Leyes N° 30879, N°31365 y N° 31728 se dispuso que la implementación del pago de la bonificación económica que se otorga a los Defensores de la Patria se financia con cargo al presupuesto institucional del Mindef, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Es decir, corresponde al Mindef, y no al MEF, el pago de dichos reconocimientos.
- **Prohibición de iniciativa de gasto por parte del Congreso de la República**: Las medidas contenidas en el Proyecto de Ley Nº 6522/2023-CR, contravendría lo regulado por el artículo 79 de la Constitución, que dispone que los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que refiere a su propio presupuesto. En consecuencia, el proyecto de ley desconoce el mandato constitucional, que dispone que

los miembros del Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público.

- **Análisis Costo Beneficio**: La propuesta normativa no contempla un análisis cualitativo y cuantitativo de su implementación, al no realizar el costo estimado en los términos propuestos de la iniciativa del personal beneficiario de la medida, así como el costo de su implementación que sin duda generaría gasto al erario nacional.
- **Costo del PL 6522/2023-CR**: Según el AIRHSP, actualmente se tienen registrados 4 057 defensores de la patria, quienes reciben la bonificación mensual de S/ 2 550. El costo anual de esta bonificación económica alcanza la suma de S/ 124 144 200.
- Para determinar el impacto financiero de la propuesta, se consideraron los siguientes aspectos en el análisis efectuado:
  - El aumento de la bonificación mensual no percibida durante los incrementos de la RMV entre el periodo 2018-2023, el cual se ha estimado en S/ 91 465 065 (sin intereses),
  - El incremento del monto mensual de dicha bonificación a S/ 3 075 (equivalente a 3 veces la actual RMV: 3 x S/ 1 025), el cual regiría en adelante, cuyo impacto ascendería a S/ 25 559 100,
  - La evaluación de la inclusión de 2 000 beneficiarios adicionales, quienes, según la exposición de motivos del PL 6522/2023-CR, podrían ser calificados y atendidos una vez que la medida propuesta sea aprobada, con un costo anual estimado de S/ 73 800 000.
  - La extensión del beneficio de los Defensores de la Patria a los Defensores de la Democracia, que podría llegar hasta un costo de S/ 1 289 974 800 en atención al personal que participó en la lucha contraterrorista (419 504 ex - combatientes de las FFAA y PNP)15 . 2.23 En consecuencia, **el impacto económico total se estima en S/ 1,480,798,965 anuales**, que es adicional al presupuesto que actualmente se destinada.
- En ese sentido, cabe señalar que los proyectos de normas que generen gasto público deben contar, como requisito para el inicio de su trámite, con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como su sostenibilidad en el tiempo, y un análisis de costo-beneficio en términos cuantitativos y cualitativos.
- En esa línea, cabe tener presente que las obligaciones propuestas se caracterizan por tener un impacto sobre todo en el largo plazo, siendo por ello imprescindible que la forma de financiamiento garantice no solo su disponibilidad presupuestal, sino también su sostenibilidad en el tiempo, ello sin afectar el equilibrio fiscal.
- Asimismo, el propio Tribunal Constitucional en los fundamentos 24, 26, 29 y 35 de la Sentencia 00016-2021-AI/TC se ha referido a las limitaciones que tiene el Congreso de la República para crear gasto público:

"24. Al respecto, conviene tener en cuenta que este Tribunal ya ha emitido sentencias en las que se abordan problemas relacionados con la prohibición de los congresistas de aumentar o crear gasto público (artículo 79 de la Constitución), y ha desarrollado criterios relevantes para resolver este tipo de situaciones; por lo que, previamente, es importante hacer referencia a dicha jurisprudencia.

26. Para el Tribunal Constitucional, la ausencia de una coordinación previa con el Poder Ejecutivo constituye la omisión de un acto que, por imperio del artículo 79 de la Constitución, necesariamente debe formar parte del procedimiento legislativo que anteceda a la expedición de una ley que implique gasto público. Asimismo, dicha omisión acarrea una inconstitucionalidad de fondo, toda vez que el contenido de la ley así expedida será violatorio de la prohibición prevista en el artículo 79 de la Constitución; es decir, de la prohibición de que el Congreso tenga iniciativa en la generación de gasto público, salvo en lo que atañe a su propio presupuesto (cfr. sentencia recaída en el Expediente 00008-2015-AI/TC, fundamentos 45 y 46).

29. Ello presupone que los congresistas no tengan iniciativa para habilitar la generación o aumento de gastos públicos que afecten directa e inmediatamente el equilibrio presupuestal logrado para cada año fiscal. De este modo, el artículo 79 de la Constitución es un límite directo a la actividad del legislador, y que se sustenta en la preservación del equilibrio presupuestal, aspecto indispensable para evitar perjuicios irreparables en el conjunto de los principios, derechos y valores que se desprenden de nuestra Ley Fundamental. En efecto, la materialización de los derechos fundamentales requiere que el tesoro público sea administrado de forma responsable, ya que solo a través de la adecuada creación de gasto, y de su uso racional, es posible la satisfacción de derechos sin la necesidad de perjudicar otros. La eficiencia del funcionamiento del Estado depende, así, de una suerte de "Eficiencia de Pareto", lo cual implica que deba existir una distribución óptima de los recursos.

35. En consecuencia, el Congreso de la República no puede utilizar su facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, toda vez que dicha facultad constitucionalmente le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo. Esta competencia se establece, además, en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Según esta ley, forman parte de la competencia relacionada con la hacienda pública los temas referidos a:

i) El presupuesto público;
ii) La tesorería; y
iii) El endeudamiento público. (...)"

- En consecuencia, el Congreso de la República requiere la participación y aprobación previa del Poder Ejecutivo para que se encuentre constitucionalmente justificada la creación de gasto público en general. De lo contrario, las leyes que emita creando gasto público serán inconstitucionales.

CONCLUSION

Por lo expuesto, **se observa** el Proyecto de Ley N° 6522/2023-CR, Ley de restablecimiento, actualización y nivelación de la bonificación mensual de los ex combatientes, sobre la base de la Remuneración

Mínima Vital vigente en cada ejercicio fiscal, en el marco de la Ley 24053 y su modificatoria y la Ley 26511 y sus modificatorias.

u. Proyecto de Ley 6615/2023-CR

1) De la **Presidencia del Consejo de Ministros**, hace de conocimiento que por competencias no corresponde emitir opinión.

2) Del **Ministerio Publico – Fiscalía de la Nación**, pone en conocimiento que se advierte que el proyecto de ley no tiene relación directa con la competencia del Ministerio Público o la administración de justicia penal, conforme se infiere del texto normativo previsto en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; por lo que no corresponde emitir la opinión institucional solicitada.

3) Del **Ministerio de Economía y Finanzas**, pone en conocimiento que el proyecto es **observado**, entre otros, por lo siguiente:
   a) Con relación al Análisis Costo - Beneficio de la propuesta legislativa, si bien en la Exposición de Motivos se señala que *"(...) la propuesta legislativa no genera gasto alguno al Estado peruano"*; posteriormente se indica que su implementación *"(...) se efectuará con cargo al pliego presupuestal del Ministerio de Defensa y a los pliegos presupuestales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público"*, lo cual resulta contradictorio.
   Asimismo, la Exposición de Motivos del proyecto normativo no presenta un análisis costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos, indicando los costos que demandará la implementación de la medida y demostrando que existen recursos suficientes en los pliegos involucrados para financiar dicha implementación, a efectos que no implique una demanda adicional de recursos al Tesoro Público.
   En consecuencia, la propuesta normativa no cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que establece que todo proyecto normativo debe contar con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un análisis de costo beneficio en términos cuantitativos y cualitativos.
   b) Asimismo, considerando que no se demuestra la existencia de créditos presupuestarios en los pliegos involucrados que puedan ser destinados a la aplicación del Proyecto de Ley, la medida propuesta conllevaría a gastos que no se encuentran previstos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 31953, implicando demandas adicionales de recursos al Tesoro Público. En ese sentido, la propuesta normativa contraviene el Principio de Equilibrio

Presupuestario recogido por el artículo 78 de la Constitución Política del Perú2 y por el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440.

c) Finalmente, teniendo en cuenta que la propuesta legislativa es de iniciativa congresal es pertinente mencionar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece que *"Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (...)"*.

CONCLUSIONES

La Dirección General de Presupuesto Público formula observación desde el ámbito estrictamente presupuestario al Proyecto de Ley N° 6615/2023-CR, por lo siguiente:

- No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Contraviene la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

5) **El Poder Judicial** concluye señalando que la iniciativa no está comprendida dentro de los ocho lineamientos, por lo que **no es de su competencia.**

v. Proyecto de Ley 6773/2023-CR

1) El **Ministerio Publico,** pone en conocimiento que el proyecto de Ley **es inviable**, entre otras, por las consideraciones siguientes:
   a) Mediante el Proyecto de Ley in comento, se pretende realizar una asignación económica mensual, equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales, bajo el concepto de pensión y otros beneficios (salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros), a los licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas que lucharon contra el terrorismo; lo cual en buena cuenta constituye la reparación que le correspondería por los hechos de violencia que ocurrieron en nuestro país entre los años de 1980 a 2000, por causa de la violencia que ejerció el terrorismo.
   b) No obstante, mediante la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, se reconoce y establece el marco normativo del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia ocurrida durante el periodo de 1980 a 2000, conforme a las conclusiones y

recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

c) Cabe precisar que, la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, establece que el Plan Integral de Reparaciones está compuesto por: a) Programa de restitución de derechos ciudadanos. b) Programa de reparaciones en educación. c) Programaciones en reparaciones en salud. d) Programas de reparaciones colectivas. e) Programa de reparaciones simbólicas. f) Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional. g) Otros programas que la Comisión Multisectorial apruebe.

d) Es así que, conforme el artículo 6 de la Ley N° 28592, son considerados beneficiarios, los miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes de los Comités de Autodefensa heridas o lesionadas en acciones violatorias de los Derechos Humanos, durante mayo de 1980 a noviembre de 2000. Asimismo, en su artículo 7 de la citada Ley, también establece como beneficiario a las comunidades nativas afectados por la violencia que presenten determinadas características como: concentración de violaciones individuales, arrasamiento, desplazamiento forzoso, quiebre o resquebrajamiento de la institucionalidad comunal, pérdida de infraestructura familiar y/o pérdida de infraestructural comunal. Corroborando a este beneficiario, el Reglamento de la Ley N° 28592, en su artículo 50, literal a), considera como beneficiario a las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

e) En sentido, se tiene que los miembros de Comités de Autodefensa, afectados con la violencia ejercida por el terrorismo, durante los años 1980 a 2000, se encuentra reconocidos su derecho a ser pasible de reparación integral, dentro del marco de las normas de la Ley N° 28592 y el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS; por lo que reconocer una asignación económica, pensión, beneficios en educación, salud, entre otros a los Comités de Autodefensa, como lo pretende el Proyecto de Ley materia de análisis, significaría una doble reparación integral por los daños irrogados.

f) De otro lado, respecto a las Rondas Campesinas, las cuales constituyen organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, dentro del ámbito rural, conforme lo establece el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2033-JUS; han sido reconocidas como beneficiarios de reparación integral que señala la ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, pues las Rondas Campesinas están integradas por miembros de Comunidades Campesinas, siendo que éstos últimos son beneficiarios conforme expresamente lo reconoce el artículo 7, literal a) de la Ley N° 28592, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS; por lo que reconocer una asignación económica y beneficios en la educación, salud, trabajo y vivienda, como lo señala el

Proyecto de Ley, daría lugar a redundar en la reparación integral que ya se encuentra regulada.

g) Por su parte, la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, considera como beneficiario a los miembros de las Fuerzas Armadas; en este sentido, se debe aclarar que los licenciados de las Fuerzas Armadas son el personal dado de baja por tiempo cumplido en el Servicio Militar en el activo se denomina licenciado. Su grado es el obtenido durante la permanencia en el activo, conforme lo señala el artículo 59° de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar.

h) En ese mismo sentido, los licenciados de las Fuerzas Armadas son sujetos de reconocimiento de la reparación integral por los hechos de violencia a causa del terrorismo ocurrido entre los años 1980 al 2000, conforme el Plan Integral de Reparaciones regulado por Ley N° 28592 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, siendo que los sujetos beneficiarios pueden seguir acogiéndose a su registro único de víctimas y los que no estén incluidos en el Plan Integral de Reparación, y que reclamen un derecho a reparación, pueden recurrir a la vía judicial, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 28592, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS.

CONCLUSIONES

El Proyecto de Ley N° 6673/2023-CR, Proyecto de Ley que establece la Asignación Económica Mensual para los Licenciados de las Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas que lucharon contra el Terrorismo y contribuyeron a la Pacificación Nacional, **resulta inviable jurídicamente**; toda vez que, **la reparación integral para las víctimas de la violencia ocurrida, durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 2000, ya se encuentra regulada a través de la Ley N° 28592**, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS.

2) El **Poder Judicial**, hace de conocimiento que no corresponde emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N.° 6773/2023-CR por no estar comprendido dentro de los ocho lineamientos de selección de los proyectos de ley establecidos en la Resolución Administrativa N.° 437-2011-P-PJ, por no tener vinculación con el Poder Judicial y no ser de su competencia.

w. Proyecto de Ley 6955/2023-CR

1) La **Fuerza Aérea del Perú**, hace de conocimiento que la iniciativa resulta no viable, entre otras por las consideraciones siguientes:

a) La propuesta legislativa, en lo que respecta a la prórroga "por el plazo de dos años", encontraría justificación en el hecho de restituir el tiempo en que, por distintas razones, no ha sido posible que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los institutos armados (Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú y La Marina de Guerra del Perú) evalúen,

califiquen, formulen actas y expidan las resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentren amparados en las Leyes N° 26511 y 28796; y, de esta manera nuestro ordenamiento jurídico garantice la igualdad de tratamiento entre quienes a la fecha han sido reconocidos como Defensores de la Patria y vienen percibiendo los beneficios económicos establecidos por las normas de la materia (que resultaría aplicable también para aquellos Ex Combatientes que pese a haber participado en los conflictos antes mencionados, aún no han sido reconocidos como tales).

b) Tal pretensión de subsanar los inconvenientes para el reconocimiento de Defensores de la Patria y/o de Ex Combatientes que participaron en los conflictos antes mencionados; es una pretensión que (igualmente a partir de la expedición de diversa y subsiguiente normativa), ha tenido por objeto y/o finalidad suplir o restituir tiempos supuestamente insuficientes para el proceso de calificación y reconocimiento respectivo; sin embargo, dado el tiempo transcurrido es discutible el hecho de que, a la fecha, pueda ocasionarse un perjuicio a quienes no han sido reconocidos y/o excluidos de los beneficios correspondientes.
c) Por lo tanto, en este aspecto, la propuesta legislativa no es justificable y no encuentra sustento en el supuesto hecho de garantizar el reconocimiento de quienes deban resultar beneficiarios; sin perjuicio, además, de indicar que los recursos que demande el reconocimiento u otorgamiento de los derechos y/o beneficios, al ampliar la comprensión del Personal a ser favorecido, incidiría necesariamente en el presupuesto nacional (y del Sector), por la aplicación directa o indirecta de la normatividad sobre la materia; debiendo tenerse en cuenta la restricción al Congreso, contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política, sobre la facultad de legislar en lo que respecta a gasto público; lo cual no haría practicable de la Ley.
d) De otro lado, en relación con la inclusión del artículo 5 (Petición de Parte), en el sentido de que se podrá solicitar la evaluación a petición de parte (acompañando los documentos sustentatorios en los supuestos que exista personal que se considere con derecho y que no ha sido comprendido en la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento, establecidas en el artículo 4 de la Ley N° 30874); si bien no implica automáticamente un reconocimiento de los solicitantes, sí es cierto que de manera indirecta confirma lo expresado respecto de las razones que no hacen justificable la propuesta legislativa.
e) La propuesta legislativa, asimismo, contempla Disposiciones Complementarias Modificatorias, al respecto, en lo que concierne a la Tercera Disposición Final; en el mismo sentido que lo expresado respecto de la inclusión del artículo 5 a la Ley N° 30874, si bien ello no implica automáticamente un reconocimiento de los posibles

beneficiarios, el planteamiento no es justificable; y, sobre la Cuarta Disposición Final, si bien trata de cuestiones eminentemente técnico operativas, esto también supondría ampliar la comprensión de beneficiarios; lo cual, nuevamente, guarda relación con un objeto y finalidad de diversa normatividad, que a la fecha, no encuentra suficiente sustento y/o justificación para prórroga de plazos y/o consiguiente inclusión de beneficiarios; sin que además pueda obviarse, según se ha precisado, el hecho de que, por aplicación directa o indirecta de la normatividad sobre la materia, los recursos que tal acto demande (reconocimiento u otorgamiento de los derechos y/o beneficios en favor del Personal), incidiría en el presupuesto nacional (y del Sector), lo cual, reiterando, no haría practicable la Ley, atendiendo a la restricción del Congreso, contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política, sobre la facultad de legislar en lo que respecta a gasto público (además del artículo 76 numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, que dispone que las propuestas de ley de los congresistas no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público); argumento válido también para el supuesto comprendido en la Quinta Disposición Final.

f) Que, en mérito de lo señalado, el Proyecto de Ley Nº 6955/2023- CR, "Ley que establece la calificación a instancia de parte el reconocimiento de Defensores de la Patria al personal que participó en los conflictos armados con el Ecuador y prorroga la vigencia de la Ley 30874"; atendiendo a su objeto, finalidad y formulación, **no es viable.**

2) El **Ministerio del Interior**, hace de conocimiento que no es competente , entre otros, por las siguientes consideraciones:

a) La **Policía Nacional**, Que, resulta **VIABLE** conforme a lo opinado por la División de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos DIRASJUR PNP mediante su Informe Legal N° 205-2024-SECEJE/DIRASJURDIVDJP del 10ABR2024, en el sentido que es necesario, respecto a los beneficios y reconocimientos que tienen los Defensores de la Patria, revertir la desigualdad y discriminación que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador, así como la necesidad de efectuarse la prórroga de la Ley N° 30874 con la finalidad que los órganos competentes y comprometidos continúen efectuando las diligencias correspondientes para la evaluación, análisis y pronunciamiento de las peticiones gestionadas por los administrados peticionando los citados reconocimientos en los dispositivos legales pertinentes; asimismo teniendo en consideración lo opinado por el Departamento de Incentivos–DIRREHUM PNP mediante su Informe Técnico N° 197-2024-DIRREHUM–PNP/DIVPNIBPP-DEPINC del 04MAR2024, que conforme al fin supremo de la Sociedad y del Estado consagrado en la Constitución Política del Perú, así como que dicha propuesta no colisiona con ninguna norma vigente en la

legislación nacional y no irroga gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público, es FAVORABLE la continuación y aprobación del Proyecto de Ley N° 6955/2023-CR antes indicado. Salvo mejor parecer.

b) La **Oficina General de Asesoría Jurídica**, menciona que:

- Mediante Ley N° 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2018, se otorgó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de dicha norma, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador y que se encuentran amparados en las Leyes N° 26511, N° 28796 y N° 29562.
- Ahora bien, como se observa en las Leyes antes indicadas, la responsabilidad de la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en los conflictos con el Ecuador **recae en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.**
- En ese contexto, resulta relevante mencionar que el artículo 34 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, establece las funciones de la Oficina de Asuntos Nacionales, entre otras, "Nombrar y presidir la comisión de evaluación y junta de calificación según corresponda, a efectos de reconocer a los combatientes; defensores de la patria y ex combatientes movilizados, así como, atender propuestas para el ascenso en aplicación de las Leyes que otorgan beneficios a los miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y Civiles, que participaron en los conflictos de los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995"; y, "Expedir constancias, carnets, diplomas, medallas y resoluciones según corresponda, a los miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles calificados como Defensores de la Patria y Ex Combatientes Movilizados".
- Al respecto, cabe precisar que el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, señala que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas depende del Ministerio de Defensa y es comandado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del Ministerio de Defensa.

- En tal sentido, de conformidad con las indicadas normas, corresponde al Ministerio de Defensa, en el marco de sus competencias y atribuciones, emitir opinión respecto a los alcances de la incorporación de un segundo párrafo al artículo 3 y de los artículos 5 y 6 en la Ley N° 30874; y, sobre la incorporación del literal s en el artículo 3 de la Ley N° 26511, máxime si la Policía Nacional del Perú solo tramita las solicitudes de los administrados a la autoridad competente para su calificación y reconocimiento.
- Por su parte la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política del Perú "tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras".
- Ahora bien, como se ha indicado previamente, el ámbito de competencia del Ministerio del Interior se circunscribe a las materias de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley y es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- En tal sentido y remitiéndonos a las consideraciones desarrolladas en el presente informe, se advierte que, el Sector Interior carece de competencia para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 6955/2023-CR, toda vez que, en el marco del contenido de dicho proyecto de Ley, resulta de competencia del Ministerio de Defensa emitir opinión conforme a sus funciones, organización y estructura orgánica.

  CONCLUSION

  Esta Oficina General de Asesoría Jurídica, en atención a lo indicado en el presente informe, considera que el objeto materia de regulación propuesto en el Proyecto de Ley N° 6955/2023-CR, Proyecto de Ley que establece a instancia de parte el reconocimiento de defensores de la patria al personal que participó en los conflictos armados con el Ecuador y prorroga la vigencia de la Ley 30874" **NO ES COMPETENTE**, considerando los argumentos esgrimidos en el presente informe.

x. Proyecto de Ley 7112/2023-CR

Al momento de la formulación del presente dictamen no se han recibido opiniones.

3. Análisis técnico de las propuestas

Para efectos del análisis técnico, las propuestas han sido agrupadas de acuerdo a su pertenencia o relación con las Leyes bajo análisis, haciendo presente que

algunos proyectos de Ley consideran modificar/incorporar/derogar artículos de otras Leyes, por lo que se analizarán en la Ley que le corresponde, de acuerdo al siguiente detalle:

Ley 24053, Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo.

Se procede con las propuestas que guardan relación con la Ley 24053, que proponen modificar el acceso a los beneficios, incorporación de los calificados como "Defensores de la Democracia", de la actualización del monto equivalente a tres Remuneraciones Mínimas Vitales, modificación de requisitos para la calificación, entre las principales consideraciones; los que se describen a continuación:

a. **Proyecto de Ley 2958/2022**

Este proyecto propone en su artículo 3, una modificación del artículo 10 de la Ley 24053, en la cual solo considera a los integrantes de la patrulla que participo en la operación militar Pachacutec; al respecto, cabe mencionar que esta Ley, está siendo aplicada a los que tuvieron participación en los conflictos con el Ecuador de los años 1933, 1941, 1978. 1981 y 1995; por lo que, con esta propuesta se estaría dejando de lado a los defensores de la patria ya calificados, que son aproximadamente 4,090; ya que solo se considera a los integrantes de las patrullas que participaron en la operación Pachacútec, los mismos que no tienen la calificación como Defensor de la Patria y solo algunos tienen la calificación medalla al Defensor de la Democracia.

En conclusión, solo se propone calificar a una patrulla de una Unidad. Por otro lado, la propuesta no cuantifica la cantidad de beneficiados y la fuente de recursos financieros en la que se sustenta esta propuesta.

b. **Proyecto de Ley 3500/2022-CR**

Esta iniciativa propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, adicionando como sustento para la calificación como Defensor de la Patria, la libreta de licenciamiento u otro medio probatorio; al respecto, señalamos que son calificados como producto del cumplimiento de los requisitos y uno de ellos es de haberse encontrado en la "zona de combate del Alto Cenepa" y estar en el Parte de Guerra; con esta situación, se pretende que el recurrente, sea calificado como Defensor de la Patria, con cualquier otro medio, que no es especificado en la propuesta, dejando abierta la posibilidad para que cualquier sea calificado.

Asimismo, se propone que, con tan solo presentar su Libreta de licenciamiento (Libreta Militar o constancia de servicio), al respecto señalar que en este documento no se detalla "las acciones o los lugares geográficos" que realizó el

licenciado o donde prestó servicios, por lo tanto, no lo ubica en la zona de combate.

En ese mismo artículo, se propone incorporar a los excombatientes contra el terrorismo, otros medios probatorios para ser calificados como defensores de la democracia y acceder a los beneficios, es decir retiran el término "Parte de guerra formulado en su oportunidad"; al respecto de este extremo, la calificación está a cargo del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", cuya Presidencia está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros, y esta se da a propuesta de cada Instituto Armado o Policía Nacional, según lo especificado en el artículo 12 de la RM 076-2024-PCM, por lo que no es una función de este poder modificar aspectos detallados en normas de menor rango e incorporarlos como Ley; no corresponde la modificación de normas de inferior nivel jerárquico..

También se propone incorporar un párrafo final a aquellos que se encontraron en el Teatro de Operaciones, situación que incorporaría a todos los que estuvieron en esta área geográfica (TO) como Defensores de la Patria; sin embargo, esta propuesta no ha sido cuantificada la demanda dineraria y de ser así estaría generado gastos al tesoro público. Adicionalmente no se establece una diferenciación entre quienes estuvieron en combate arriesgando su vida, con aquellos que estuvieron en tareas administrativas con el mínimo de riesgo.

Precisa que, en este artículo se vuelve a proponer incorporar o modificar una Ley que tuvo como propósito *"Reconocer a la Asociación "Vencedores de la Campaña Militar de 1941" como la institución que a nivel nacional agrupa y representa a los ex - combatientes de este conflicto de conformidad a su Estatuto y Reglamento Interno*, es decir un conflicto de guerra convencional con el Ecuador, mas no la lucha contra el terrorismo, lo que está generando **confusión, incertidumbre y demasiada expectativa.**

También se propone, en la modificación de la primera disposición complementaria de la Ley 31177, que modifica la Ley 24053, el encargar al Consejo de la Condecoración, este aspecto; sin embargo, se considera tácito, en razón que si en el supuesto se apruebe la propuesta de modificación al artículo 10, se infiere que esta actividad se dará. Hacer notar que esta actividad, si bien es cierto pertenece a la Ley 29031, la consideramos en esta análisis por incidir en la Ley 24053.

Referente al aspecto financiero, este proyecto no cuenta con la información sobre la magnitud de los recursos necesarios para respaldar la obligación del pago de los beneficios contemplados en la propuesta de Ley en el tiempo, así como identificar la fuente de financiamiento que lo haga sostenible, ya que las obligaciones previsionales se caracterizan por tener un impacto sobre todo en el largo plazo, siendo por ello imprescindible que la forma de financiamiento

garantice no solo su disponibilidad presupuestal, sino también su sostenibilidad en el tiempo sin afectar el equilibrio fiscal. Además, no cuenta con un informe técnico del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
Sobre esta propuesta, el Legislativo no tiene injerencia en modificar los requisitos determinados por Decreto Supremo, asignación presupuestal, calificación correspondiente este aspecto corresponde a los sectores de Defensa, Interior, Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros.

c. Proyecto de Ley 3645/2022-CR

Esta iniciativa está relacionada a los mecanismos y procedimientos para el reconocimiento para los que combatieron contra el terrorismo entre los años 1980 al 2000, así como a los que participaron en los conflictos con el Ecuador los años 1978, 1981 y 1995, para lo cual presenta la propuesta de instalar una Comisión Especial de Calificación del Defensor de la Patria (CEC-DEP), conformada por dos representantes de cada Instituto Armado y dos de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, mencionamos que la creación de comisiones es una potestad del Ejecutivo tal como lo especifica el artículo 35 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, existen comisiones ya conformadas e instaladas que vienen trabajando para la calificación de los Defensores de la Democracia, cuya presidencia está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros.

Para la calificación de los Defensores de la Patria, esta funciona en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; por lo que no es pertinente crear esta comisión, por no corresponder al Legislativo y para evitar duplicidad con las ya existentes.

En relación a esta propuesta, consideramos no evaluar la conformación del Comité propuesto, por no ser pertinente su creación, siendo esta del Ejecutivo según Ley Orgánica 29158.

d. Proyectos de Ley 4549/2022-CR y 6522/2023-CR

Las propuestas tienen como objetivo, la actualización del monto que perciben en la actualidad que es de S/. 2,550.00 proponiendo se pase a S/. 3,075.00 y que esta sea acumulativa a la remuneración, pensión o bonificación y que sea asignada por cada campaña militar.

Vemos que el propósito de establecer que la actual bonificación de S/. 2,550.00 sea por cada campaña militar y reajustada según las variaciones. Al respecto a esta bonificación ya fue establecida en la cifra descrita anteriormente, mediante la Ley 30879, Ley del Presupuesto del año fiscal 2019, que dispuso que el personal calificado como Defensor de la Patria, perciba a partir del 01 de enero de 2019 una bonificación de S/ 2,550.00 mensuales el cual equivale a 3 RMV

tomando como referencia la Remuneración Mínima Vital (RMV) del año 2018; monto que hasta la fecha se mantiene.

Respecto a la propuesta de implementación que indica en el artículo 2 del Proyecto de Ley, esto no es necesario, en razón que el artículo 47.-. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático del Decreto Legislativo 1440; ya que en el numeral 47.2, indica que: *las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano.* Por lo tanto, esta propuesta, es innecesaria, por estar normada.

En lo referente a la precisión de términos indicado en el artículo 3 del proyecto, debido a la diversidad de Leyes que se han emitido relacionados a los conflictos e incidente fronterizo que ha tenido el Perú los años 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, así como a la incorporación en estas Leyes a los Defensores de la Democracia con la Ley 31177, han generado diversas denominaciones que generan confusión, por lo que esta debe ser normada en el respectivo Reglamento, tarea que corresponde al Ejecutivo. En relación a la denominación de los ingresos, en la Ley 24053, este se inicia con la denominación de "sueldo mínimo vital", posteriormente lo denominan "ingresos mínimos Legales"; la Ley 26511, lo denomina "Remuneraciones mínimas (RM)"; sin embargo, en la Centésima Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879:- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2019, ya la precisa y determina que el personal calificado a que hace referencia la Ley 24053, percibe una única bonificación equivalente a S/. 2,550.00 soles mensuales, con carácter vitalicio e intransferible. Finalmente en lo que respecta al termino a los "deudos de los fallecidos", estos términos están considerados en el artículo 2 de la Ley 26511, que en el titulo describe que es para los Defensores de la Patria cuyo título es **Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador;** asimismo, el artículo es preciso; Por lo que esta propuesta no es necesaria modificarla por estar ya está normada y ser precisa.

En cuanto al artículo 4 de la propuesta que propone aclarar lo dispuesto a la Cuarta y Sétima Disposiciones Transitoria, refiere que esta corresponde al régimen a las remuneraciones y pensiones pertenecientes al régimen contributivo; al respecto, la Cuarta Disposición Transitoria que está referida al *Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público, textualmente dispone que para efectos de las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el*

Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

En cuanto a la Sétima Disposición Transitoria, que está referida a la distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y mecanismos de indexación, en el numeral 3, señala que: *"Dejase sin efecto todas las disposiciones legales o administrativas que establezcan mecanismos de referencia o indexación, percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente, las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones, dietas y en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y Entidades del Sector Público".*

Respecto a la propuesta para que la bonificación sea del régimen no contributivo, sobre este aspecto, mencionar que existen mecanismos de financiamiento que aseguren la atención de sus afiliados en las instituciones prestadoras de salud autorizadas tres regímenes: contributivos, subsidiado, semicontributivo y un Fondo Intangible Solidario (FISSAL) para enfermedades de alta complejidad en el régimen de subsidio que están considerados en la ley de seguro universal de salud (ley 29344, de abril de 2009), en esta propuesta afecta a los que no son del régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas, siendo aplicable a aquellos que laboran fuera de este régimen; sin embargo, al guardar relación con el sistema de salud, es necesaria que esta se mantenga para beneficio de los aportantes a este sistema.

En relación a lo propuesto en el artículo 5, está referida a los que participaron en el conflicto de 1995; sin embargo, los que participaron en los conflictos de 1978 y 1981, también tienen beneficios que están señalados en el artículo 3 de la Ley 28796, adicionales a los económicos; por lo que esta propuesta no se admite.

En cuanto a la propuesta de la Disposición Complementaria final, sobre la derogación de la centésima cuadragésima y centésima primera disposición complementaria final de las leyes 30879 y 31365 referidas a leyes de presupuesto anual respectivamente, en aplicación del artículo 13.3 del DL 1144, están fuera de vigencia, por lo que no amerita mayor análisis.

En relación al Proyecto de Ley 6522, que propone aplicar el artículo 2, en los beneficiados por la Ley 24053, este no presenta los estimados en cantidad de personal, ni impacto financiero, no contando con los montos que se requerirán, por lo tanto, no cuenta con elementos suficientes para su evaluación. Respecto a la propuesta de modificación a la ampliación de la fecha se analiza en la Ley respectiva.

En conclusión, de lo propuesto en este proyecto, es factible que se revise y detalle en relación a la definición de términos, el incremento de la bonificación para que alcance a la suma de las tres RMV en razón que esta se da con

Decreto Supremo con la participación del MEF y si es factible la incorporación de beneficios adicionales, los mismos que generan gastos.

e. <u>Proyecto de Ley 4601/2022-CR</u>

La propuesta busca incorporar a todo el personal militar, licenciados y personal civil de las Fuerzas Armadas, que participaron en los incidentes con el Ecuador los años 1978, 1981 y 1995, en los beneficios de la Ley 24053; al respecto cabe mencionar que el personal militar, licenciados (que es personal militar) y civil que participaron en los conflictos del 78, 81 y 95,siempre y cuando sean calificados, tienen los siguientes beneficios referentes a bonificación económica mensual, indemnización excepcional, atención médica, medicinas, nichos, vivienda propia, afectación de terrenos, los que están detallados en las siguientes artículos de las Leyes:

- Ley 24053, en los artículos 5,6, 7,8 y 10.
- Ley 28796, en el artículo 3, que refiere a los artículos 6 y 8 de la Ley 24053 y artículo 4 de la Ley 26511.
- Ley 26511, en los artículos 2 a) y b), 3,4, 5, 6,7 y 8.
-

Sin embargo, en el proyecto no se hace distinción a quienes se refiere, es decir, a los integrantes del Teatro de Operaciones, del Teatro de Guerra; asimismo, no considera la cuantificación de efectivos y el monto de dinero que representa, le pone una traba en los "accesos a beneficios" al considerar que debe cumplir con los requisitos y plazos determinados, estos ya terminaron.

Mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas la considera inviable por vulnerar reglas de estabilidad presupuestaria, equilibrio presupuestario y la prohibición de iniciativa de gasto congresal.

Por parte del Ministerio de Defensa, mención a que la iniciativa en su sustento manifiesta que no genera gastos adicionales al Estado; sin embargo es lo contrario, por lo que señala que la dirección de la política económica se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, lo que se plasma en las normas que desarrollan la Administración Financiera del Estado, y es función del Congreso controlar y fiscalizar dicha acción, mas no puede sustituirlo en dicha dirección.
Por lo tanto, esta iniciativa, no se toma en cuenta al no considerar elementos de sustento razonables para ser tomados en cuenta.

f. <u>Proyecto de Ley 4738/2022-CR</u>

La propuesta propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, en el sentido que a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo se les modifique los requisitos para la calificación como Defensor de la Democracia para poder acceder a los beneficios de la Ley es decir a las tres (03), al respecto estos requisitos están ya determinados por el Presidente del Consejo de la Condecoración "MEDALLA AL DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA que están

plasmadas en el Estatuto y modificada con la RM 234-2022-PCM; en el artículo 4 de la propuesta, propone que la "Oficina Central de Registro Militar" emitirá una constancia con la cual acreditara; sobre este aspecto, mencionar que no existe esta oficina, siendo la **Jefatura de Reemplazos y Reservas del Ejército** quien administra las Oficinas de Registro Militar quien son las encargadas de administrar a Los licenciados del Servicio Militar Activo.
Por otro lado en el artículo 5 de la propuesta propone criterios de priorización para la atención, esta es innecesaria, ya que se cuenta con los procedimientos actualizados.

En tal sentido, al ya encontrarse normado los requisitos y los propuestos no resultan efectivos como lo señala el Instituto Ejercito, esta propuesta es inviable.

g. Proyecto de Ley 4979/2022-CR y 5192/2022-CR

Se consolidan estos dos proyectos, porque ambos proponen modificar el artículo 10 de la Ley 24053, en el sentido que para el otorgamiento de los beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de la lucha contraterrorista, no es necesario contar con Parte de Guerra; al respecto, este personal excombatiente para que se les otorgue el beneficio económico, primero deben ser calificados como Defensor de la Democracia, para lo cual deben seguir el proceso correspondiente estipulado en el respectivo Estatuto.

Mencionar que la propuesta no cuantifica los costos que generaría esta modificación, por lo que la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas lo considera técnicamente inviable al vulnerar reglas de estabilidad presupuestaria, equilibrio presupuestario y la prohibición de iniciativa de gasto congresal.
Por lo tanto esta propuesta no resulta viable, al ya existir procedimientos de calificación para los Defensores de la Democracia.

h. Proyecto de Ley 5032/2022-CR

La propuesta propone modificar el artículo 10 de la Ley 24053, asignándole el mismo benéfico económico a quienes fueron calificados como "combatientes" en la Zona del Alto Cenepa durante el conflicto de 1995, al respecto la propuesta no cuantifica la cantidad de personas y tampoco los recursos financieros que demandaría.

Precisar que la calificación que se otorga a los que participaron en el conflicto con el Ecuador el año 1995, está segmentada en Defensor de la Patria y Combatiente, otorgándole solo al calificado como Defensor de la Patria la Bonificación, esto se da en razón a las acciones que realizaron en combate y a la ubicación que les correspondió de acuerdo al dispositivo de combate adoptados en base a los planes de operaciones o directivas, la misma que no puede ser modificada por que se dio en el momento que ocurrieron los hechos.

Precisar que el ministerio de Economía y finanzas concluye que es inviable de acuerdo a las normas legales al vulnerar reglas de estabilidad presupuestaria, equilibrio presupuestario y la prohibición de iniciativa de gasto congresal.

Por lo que resulta inviable esta propuesta, al no poder modificar el dispositivo de combate adoptado en esa oportunidad.

CONCLUSIONES PARCIALES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERIDAS A LA LEY 24053

Las conclusiones parciales de las iniciativas legislativas referidas a la Ley 24053, que otorga bonificación económica de 3 RMV a los calificados como Defensores de la Patria que participaron en los conflictos armados con el Ecuador de los años de 1941, 1978, 1981 y 1995 y con Colombia en 1933:

- Hay propuestas que buscan modificar, particularmente el artículo 10 de la Ley, pero éstas perjudican a los actuales y a los potenciales beneficiados con las tres RMV.
- Los tiempos de calificación por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvieron un límite para la presentación que ya concluyó, pero no hay un plazo para la calificación al presentar sus documentos.
- No se ha estimado la cantidad de posibles beneficiarios y ni han sido cuantificados los recursos financieros para satisfacer esta demanda, ni está determinada la fuente de recursos que soportará estos beneficios.
- Se propone la modificación de reglamento, lo que no corresponde hacer por Ley, siendo ésta una atribución del Ejecutivo.
- Los requisitos para la calificación como Defensores de la Patria, no están debidamente definidas, al sustentarse solo en el Parte de Guerra, el mismo que adolece de otras informaciones, como descripciones de los que condujeron las operaciones tácticas, operacionales y estratégicas, manifestaciones de comandantes de teatro de guerra, de operaciones, Divisiones (hoy Brigadas), miembros de los Estados Mayores de las Divisiones, Batallones, Compañías, Secciones y Patrullas, pilotos, Destacamentos, que tienen la data.
- Se propone la creación de las Comisiones de calificación, las que ya existen y de hacerse seria redundante.
- El Ejecutivo para la asignación de beneficios y montos, no está considerando que las leyes de Presupuesto tienen una vigencia anual.
- Se propone la asignación de más de una bonificación si es calificado por otra acción, tal como defensor de la patria y defensor de la democracia.
- No se está actualizando el monto determinado por la asignación económica, al encontrarse vigente algunas disposiciones transitorias de la Ley 28411.
- Se pretende incorporar en los beneficios a todos los que estuvieron en el teatro de guerra, no haciendo distinción del nivel de esfuerzo y riesgo.
- Se propone incorporar de manera independiente a una sola patrulla, la misma que es integrante de una fuerza constituida por Unidades y Grandes Unidades

de Combate, dejando de lado a los demás que tuvieron mayor esfuerzo y riesgo.

- Se propone modificar los requisitos establecidos de acuerdo a "conveniencias" particulares de patrullas, Unidades, pero no del conjunto de la fuerza y de sus Comandantes que actuaron en provecho de conseguir los objetivos de los planes de operaciones previstos.

Ley 26511, Ley que Reconocen como Defensores de la Patria y otorgan beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador

i. Proyecto de Ley 2628/2021 y Proyecto de Ley 4602/2022

Ambas propuestas, proponen modificar y extender los límites de la zona del Alto Cenepa y zona de combate del alto Cenepa, con el propósito de incorporar a Unidades y Pequeñas Unidades que estuvieron presentes en el teatro de Operaciones y que no se encuentran en la zona de combate del alto Cenepa, por lo tanto no son objeto de los beneficios de la Ley 24053.

Al respecto, estos límites están detallados en el Decreto Supremo 010-DE-SG, Reglamento de la Ley 26511, situación que no es factible modificar por Ley, tampoco se puede modificar el DISPOSITIVO que adoptaron las Grandes Unidades, Unidades y Pequeñas Unidades que intervinieron en este conflicto; sin embargo, el DISPOSITIVO adoptado es para alcanzar el o los OBJETIVOS determinados en los planes de operaciones establecidos, es decir, cada elemento de maniobra, apoyo de combate o poyo administrativo CONTRIBUYE en la consecución para alcanzar los objetivos.

Por otro lado, en este conflicto al parecer hubieron Unidades que su dispositivo inicial estuvo fuera de la Zona de combate del Alto Cenepa, pero en el desarrollo de las operaciones pueden haber sido misionadas a objetivos dentro de la zona de combate, esta situación solo es de conocimiento de los conductores de las operaciones de este conflicto.

En tal sentido, corresponde que el Comando Conjunto reevalúe los límites y las misiones asignadas a las Unidades a efectos que obtengan el beneficio establecido por Ley.

j. Proyecto de Ley 5224/2022

El Proyecto de Ley propone modificar el artículo 1 de la Ley 26511, el reconocimiento adicionalmente *"...o hayan participado en forma activa y directa en las misiones relacionadas en la implementación y ejecución de los planes de guerra...."*, al respecto, en el art 3, literal d. del Decreto Supremo N° 010-DE-SG, que reglamenta la Ley 26511. Define el termino Combatientes como: ***"Son todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Civiles, que participaron en forma activa en las operaciones, incluyendo a quienes las***

dirigieron, condujeron y/o cooperaron en su preparación y desarrollo, compartiendo sus vicisitudes y riesgos".

Es decir ya está considerada esta propuesta en el reglamento; sin embargo, mencionar que para ser calificado como Defensor de la Patria, se debe reunir una serie de requisitos detallados en el reglamento.
Esta propuesta no es incorporada al ya estar considerada en el reglamento de la Ley.

k. <u>Proyecto de Ley 5884/2023</u>

La propuesta legislativa, propone modificar el artículo 3 del Reglamento de la Ley 26511, al respecto este articulo está referido a las <u>definiciones para la calificación</u> como Defensor de la Patria, propuesta de ascensos y otorgamiento de beneficios al personal militar y civil que participo como combatientes en la zona del alto Cenepa; sin embargo, la propuesta no determina que termino será incorporado y/o modificado.

La propuesta propone que sea extensivo a los que participaron en las operaciones militares durante los conflictos de 1978, 1981 y 1995; sin embargo, la norma es específica para año 1995.

Se entiende que la propuesta es para aquellos que no se encuentran en el "Parte de Guerra", de los conflictos con el Ecuador de 1978, 1981 y 1995, pero este término solo está considerado para los "Defensores de la Democracia" de la Ley 29031, que fueron incorporados en la Ley 24053 mediante la Ley modificatoria 31177.

Por lo tanto, esta propuesta no es tomada en cuenta al no tener precisión y ser confusa.

<u>CONCLUSIONES PARCIALES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERIDAS A LA LEY 26511:</u>

Ha continuación se presentan las conclusiones parciales de los Proyectos de Ley referidos a la Ley 26511 por la que se reconocen como defensores de la patria a los que participaron en el conflicto con el Ecuador en 1995, como Defensor de la Patria y otorga 3 RMV:

- Proponen modificar mediante una Ley los límites de la zona de operaciones y dispositivo de combate, así como las misiones asignadas a las Unidades a efectos de obtener el beneficio establecido por Ley; sin embargo, este aspecto corresponde al Comando Conjunto que reevalúe estos detalles por medio de los comandantes en el respectivo nivel.
- Es necesario que se revisen los requisitos establecidos para que se les otorgue las calificaciones correspondientes.
- Es el Ministerio de Defensa, por intermedio del Comando Conjunto, quien tiene esta tarea.

- Es necesario que se revise los requisitos para ser calificados y que se obtengan las calificaciones respectivas.

Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente

I. Proyecto de Ley 1783/2021

La propuesta contiene varios artículos, el primero de ellos es reconocer por su distinguido servicio a la patria a los integrantes de la Patrulla "Miguel", que participo en el "Plan de Operaciones Cerco", desde el inicio vemos que esta Patrulla es parte de una fuerza militar constituida por una magnitud (cantidad de patrullas) de fuerza desconocida, siendo ella una de las tantas que actuaron en la consecución del objetivo, que era la captura/neutralización del delincuente terrorista.

Sobre la declaratoria de "Héroe de la Democracia", no se cuenta con esta calificación en la Ley vigente; sin embargo, el Decreto Supremo N° 049-DE/SG, que reglamenta la Ley N° 26841, define como héroe a "la persona que, **ofrendando su vida en forma voluntaria y consciente**, lleva a cabo una acción extraordinaria de gran valor cuya trascendencia e importancia haya sido de magnitud nacional", ***situación que no realizo estos integrantes de patrulla***, situación que es señalada por la Comandancia general del Ejército, ya que "*la captura del delincuente terrorista Oscar Alberto Ramírez Durand, "camarada Feliciano", en el interior de un vehículo de transporte público, hecho ocurrido el 14 de julio de 1999 aproximadamente a las 05:30 horas en el sector de Cochas Chico de la provincia de Huancayo, habiéndose advertido que en dicho accionar no se produjo un enfrentamiento armado, ni mucho menos como consecuencia de dicha intervención militar hubo derramamiento de sangre (no hubo herido o muertos), por lo cual no constituye una acción heroica*".

En el artículo 3 de la propuesta legislativa, señala que se otorgue la medalla al Defensor de la Democracia, al respecto esta entrega está prevista según el grado que le corresponda una vez que sean calificados, de acuerdo al Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", que es presidido por el Presidente del Consejo de ministros. Sin embargo, propone que se le entregue esta medalla a los comandos "Chavín de Huántar"

Las propuestas en los artículos 4 y 5, referidos a beneficios, se pretende otorgar becas y facilidades económicas para instituciones educativas de nivel superior, así como a la esposa o concubina y a los hijos, este aspecto no está cuantificado en cantidad de perdonas ni recursos financieros, tampoco está sustentado la fuente que asumirá estos gastos. Sin embargo, mencionar que las Entidades educativas gozan de autonomía para el otorgamiento de becas por lo tanto la gestión es directa.

En conclusión, esta propuesta no viable por no tener sustento real de la cantidad de beneficiados y recursos financieros, así como no ser preciso en su propuesta (artículo 3).

m. Proyecto de Ley 2171/2021

La propuesta propone incorporar como Defensor de la Democracia al personal militar y policial en actividad o retiro que haya recibido una condecoración de algún Instituto Armado distinto al que pertenece, por haber puesto en riesgo su vida, en enfrentamientos y capturas importantes en la lucha contra el terrorismo en el proceso de pacificación y defensa de nuestra democracia; al respecto, el artículo 1 de la Ley 29031, particularmente en el tercer párrafo ya los considera textualmente al mencionar lo siguiente "*Adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa* ***que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física*** *aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados*". Por lo que se precisa que esta propuesta ya está considerada en las consideraciones de la medalla en el grado de "Gran Cruz".

Adicionalmente, existe un proceso establecido para la calificación y otorgamiento de la Medalla al Defensor de la Democracia, que si el recurrente se encuentra en la descripción propuesta en el Proyecto de Ley, le será otorgada la de más alto grado, tal como lo detalla el artículo 2 del Estatuto.

Los artículos 3 y 4 de la propuesta, al no ser viable el artículo 2, no amerita su evaluación.

Mencionar que el párrafo que se pretende incorporar **es similar** al que figura en numeral 1 del artículo 2 del Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", aprobado con la Resolución Ministerial 076-2014-PCM.

Por lo tanto, no es viable esta propuesta, por estar ya considerada en del Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", aprobado con la Resolución Ministerial 076-2014-PCM.

n. Proyecto de Ley 2958/2022

Este Proyecto de Ley propone en el artículo 1,incorporar al personal militar que participo en la operación militar Pachacutec, en la misma condición que los participantes de la operación de rescate Chavín de Huantar y de los integrantes el GEIN; sobre esta propuesta, si bien es cierto que la acción realizada obtuvo resultados favorables, y sin minimizarla, es similar a otras que se realizaron en las diferentes zonas declaradas en estado de emergencia y que estaban con presencia de elementos terroristas; es por eso que en su oportunidad fueron

objeto de felicitación, condecoración y otros beneficios por el Instituto Ejercito y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, con la creación de la Condecoración medalla al Defensor de la Democracia, esta establece requisitos para su acceso, y estos integrantes por la acción pueden acceder para su calificación así como para el otorgamiento de la medalla y los beneficios.

En tal sentido, no es viable por las consideraciones expuestas.

o. **Proyecto de Ley 5167/2022**

Este Proyecto de Ley propone en su artículo 3, incorporar a los miembros policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, en la misma condición que los participantes de la operación de rescate Chavín de Huantar y de los integrantes el GEIN; sobre esta propuesta, las acciones que realizaron los integrantes de esta unidad, sin desmerecerlas, fueron ejecutadas en cumplimiento de su misión y/o tareas asignadas, mencionar que al igual que todos los que participaron en las operaciones contraterroristas, es decir a los que tuvieron la responsabilidad del planeamiento, apoyo administrativo (personal y logístico), acciones de inteligencia y acción cívica, que se realizaron en las diferentes zonas declaradas en estado de emergencia y que estaban con presencia de elementos terroristas; es por eso que en su oportunidad fueron objeto de felicitación, condecoración y otros beneficios por la Policía Nacional.

Respecto a lo propuesto en su artículo 4, por las consideraciones expuestas en el párrafo anterior se desestiman.

En relación al artículo 5, los integrantes de la Unidad de desactivación de Explosivos de la PNP, están considerados en la norma vigente.

Sin embargo, con la creación de la Condecoración medalla al Defensor de la Democracia, esta establece requisitos para su acceso, y estos integrantes por la acción realizada, tal como lo describen en la fundamentación, pueden acceder para su calificación, así como para el otorgamiento de la medalla y los beneficios correspondientes.

En cuanto a la propuesta del artículo 6 referido a beneficios, estos son consecuentes a lo propuesto en el artículo 3.

En tal sentido, no es viable por las consideraciones expuestas anteriormente.

p. **Proyecto de Ley 5721/2023**

La propuesta presentada busca modificar el artículo 1 de la Ley 29031, en el sentido de incorporar en el último párrafo lo siguiente: "*o que sin necesidad de*

haber participado directamente en la lucha contra el terrorismo, resguardaron y protegieron las unidades militares a nivel nacional contribuyendo así con la preservación de la paz y seguridad en el país"; sobre esta propuesta; mencionar que los efectivos militares o policiales que protegieron las instalaciones o dependencia militares o policiales, están en condiciones de ser considerados como Defensor de la Democracia y se le otorgue la medalla en el grado correspondiente, en razón que fueron parte de los planes de seguridad de instalaciones, por ser objeto de sabotaje, atentados y otras acciones, es pertinente recordar que las instalaciones estaban protegidas por diversas barreras físicas, porque en estas se protegía al personal, armamento, municiones y la logística para sostener las operaciones contraterroristas, no solo eran objeto de ataques las instalaciones que se encontraban en zonas declaradas en estado de emergencia, sino todas las instalaciones estaban en riesgo,

Por lo tanto, es recomendable que la PCM incorpore otro grado en la Medalla al Defensor de la democracia; sin embargo, por Ley no es factible incorporar este grado por ser una norma de menor rango.

q. <u>Proyecto de Ley 7112/2023</u>

Esta propuesta, busca incorporar a los integrantes de la denominada patrulla "Miguel" que participaron en el "Plan Cerco 99", en la misma condición que los participantes de la operación de rescate Chavín de Huantar y de los integrantes el GEIN; sobre esta propuesta, este personal fue parte de un plan de operaciones, con igual o menor responsabilidad que las otras patrullas. Las acciones que realizaron los integrantes de esta patrulla, sin desmerecerlas, fueron ejecutadas en cumplimiento de su misión y/o tareas asignadas, propia de sus funciones al igual que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía nacional que en esos momentos se encontraban en la lucha contraterrorista en las diferentes zonas declaradas en estado de emergencia; quienes en su oportunidad fueron objeto de felicitación, condecoración y otros beneficios por parte del Ejercito.

Respecto al artículo 3 del proyecto de Ley, que propone el reconocimiento como Defensor de la Democracia, mencionar que este personal está en las condiciones y reúne los requisitos para hacerse merecedor a la medalla en el grado correspondiente, en razón que existe el estatuto. Solo deben iniciar o continuar sus trámites correspondientes.

En tal sentido, la propuesta es desestimada por las consideraciones expuestas.

<u>CONCLUSIONES PARCIALES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERIDAS A LA LEY 29031:</u>

Ha continuación se presentan las conclusiones parciales de los Proyectos de Ley referidos la Ley 29031 (otorgan beneficio de 3 RMV de igual manera que los defensores de la Patria):

- La propuesta busca darle un título que no está contemplado en las Leyes y ponerlos al mismo nivel por lo realizado por la fuerza que intervino en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón, no cuantifican cantidad de beneficiarios, no presentan sustento de recursos financieros y fuente de egreso y por no ser precisa en su propuesta (art 3).
- Proponen que se les considere como Defensores de la Democracia, directamente; sin embargo, sus acciones ya están consideradas en el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia", aprobado con la Resolución Ministerial 076-2014-PCM.
- Proponen ser considerados como Defensores de la Democracia, sin realizar gestión, es decir evadiendo la calificación, a pesar de tener todos los atributos (UDEX).

Es pertinente que el presidente del Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia, proponga la creación de otro grado en la Medalla para alcanzar la condecoración a aquellos que se desempeñaron en puestos "aparentemente" administrativos, estuvieron en las mismas condiciones de riesgo.

Ley 29562, Ley que otorga reconocimiento al mérito a ex combatientes de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995

r. Proyecto de Ley 3391/6522-CR y 3500/2022-CR

La propuesta propone modificar el artículo 1 de la Ley 29562, en el sentido de incorporar a los licenciados movilizados en la frontera sur, durante los conflictos con el Ecuador los años 1978, 1981 y 1995.

En primer término esta norma legal, concede reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad y retiro, oficiales, técnicos, suboficiales y tropa, licenciados y jubilados, entendiéndose a todos aquellos que se encontraron en el teatro de operaciones, no contempla a otros teatros de operaciones, en razón que el esfuerzo que demando las operaciones en este teatro de operaciones Norte y Nor-Oriental, por lo que le otorga un reconocimiento meritorio al esfuerzo desplegado con motivo de los conflictos. También están considerados los integrantes de las Unidades y Grandes Unidades que producto de los planes de despliegue estratégico concurrieron a los teatros de operaciones considerados en esta norma legal.

No fueron reconocidos los otros teatros de operaciones por que no estuvieron en las mismas condiciones, por eso la norma es específica para los teatros de operaciones que estuvieron en operaciones activas, a diferencia de los otros teatros de operaciones que estuvieron en cobertura (vigilancia).

Es necesario mencionar que la propuesta es discriminatoria, ya que solo considera a los licenciados, debiendo ser para todo el personal militar es decir Oficiales, técnicos, Suboficiales y Empleados Civiles.

s. Proyecto de Ley 3500 (Disposiciones Complementarias Finales)

Respecto a la propuesta del Proyecto de Ley 3500 (Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias Finales), que propone derogar el artículo 2 de la Ley 29562, el mismo que se refiere a la entrega de diplomas y carnes, así como no otorga beneficio económico, no es viable en razón que no presenta el sustento que generaría la propuesta, contraviniendo las normas legales al vulnerar reglas de estabilidad presupuestaria, equilibrio presupuestario y la prohibición de iniciativa de gasto congresal.

En conclusión, no es viable el reconocimiento meritorio a quienes no estuvieron en o los teatros de operaciones donde no se realizaron las operaciones militares, ni derogar el artículo 2 de la Ley 29562 por las consideraciones expuestas; asimismo las propuestas son no viables, en razón de no contener la cantidad real de personal a beneficiar y la cuantificación de dinero, teniendo en cuenta que la fuente presupuestal de ingresos (saldos no ejecutados) que hace referencia no es real.

CONCLUSIONES PARCIALES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERIDAS A LA LEY 29562:

Ha continuación se presentan las conclusiones parciales de los Proyectos de Ley referidos la Ley 29562, que otorga reconocimiento al Mérito al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad y retiro; así como al personal civil que participo en los conflictos de 1978, 1981 y 1995:

- Proponen modificaciones discriminatorias al solo considerar a los licenciados, dejando de lado a Empleados Civiles, Técnicos , Suboficiales y Oficiales
- Se propone derogar el artículo 2, pero no presentan opción alguna que sustituya o modifique este artículo.
- Proponen otorgar beneficios económicos, pero no están estimadas la cantidad de beneficiados y ni cuantificados los recursos financieros para satisfacer esta demanda, ni está determinada la fuente de recursos que soportara estos beneficios.

Ley 30874, Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995

t. Proyecto de ley 2302/2021

Esta iniciativa, propone ampliar por noventa días, para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de calificación a los que participaron en los conflictos con el Ecuador los años 1978, 1981 y

1995; asimismo, propone una serie de sanciones y denuncias a los funcionarios que excedan a límites de calificación; sin embargo, la calificación es un proceso metodológico que hay que respetar; sin embargo, el tiempo propuesto es reducido, para la magnitud de trabajo a realizar.

u. Proyecto de Ley 3500/2022

En el artículo 4 del Proyecto de Ley, propone establecer un nuevo plazo que consiste en ampliar a siete (07) años a partir de la entrada en vigor de la Ley, al respecto, es de conocimiento que existe personal militar y ciudadanos, que aún no han sido calificados por las instancias correspondientes, debido a diversos motivos, particularmente del conflicto de 1995, por lo que resulta necesario esta ampliación.

v. Proyecto de Ley 5224/2022

Esta iniciativa propone modificar el artículo 3 de la Ley 30874, ampliando el plazo de seis años, es decir hasta el 30 de noviembre del 2024, al respecto esta propuesta es factible tomarse en cuenta en razón que, de modificarse el reglamento y los requisitos, tendría que ampliarse la fecha para acoger las solicitudes.

w. Proyecto de Ley 6522/2023

Propone en las Disposición Complementaria Modificatorias y Derogatoria, ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre del 2025, al igual que las otras propuestas resulta necesario.

x. Proyecto de Ley 6615/2023

Esta propuesta menciona un plazo adicional hasta el 29 de noviembre del 2025, para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de calificación a los que participaron en los conflictos con el Ecuador los años 1978, 1981 y 1995; al igual que las anteriores propuestas resulta necesaria su ampliación.

y. Proyecto de Ley 7992/2023

Esta propuesta menciona un plazo hasta el 28 de noviembre de 2026, para continuar con la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento.

CONCLUSIONES PARCIALES DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REFERIDAS A LA LEY 30874:

Ha continuación se presentan las conclusiones parciales de los Proyectos de Ley referidos a la Ley 30874, que estableció un nuevo plazo de 5 años para la evaluación, calificación, formulación de actas y expedición de resoluciones de reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y personal civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años

1978, 1981 y 1995 reconocidos en las leyes pertinentes y concluyo en noviembre del 2023:

La calificación es un proceso metodológico muy técnico y sustentado en varios elementos probatorios, que deben ser de cumplimiento, por lo que es necesario que se revisen los requisitos para las calificaciones correspondientes y darles el tiempo correspondiente para que acumulen lo necesario y logren de ser el caso la calificación, por lo que resulta necesario dejar sin límites la fecha de presentación de solicitudes y de ser calificado, se le otorgue los beneficios de Ley; sin embargo, si es conveniente considerar límites para que los encargados de realizar las calificaciones den los resultados correspondientes.

z. Actividades realizadas por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas

La comisión con el propósito de abordar la problemática de falta de calificación de| los Oficiales, Técnicos, Suboficiales, licenciados, ciudadanos de las comunidades nativas y señoras que manifiestan que participaron y apoyaron en este conflicto con el Ecuador, concurrió a la ciudad de Bagua el 9 de mayo del 2022, con el propósito de reunirse y obtener de ellos su versión, también fueron invitados los representantes del Ejercito, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa, los mismos que no concurrieron.

Al término de la reunión, se trasladó al sector Defensa las inquietudes, problemas, quejas, requerimientos y denuncias a fin que el sector les dé solución o la respectiva respuesta; las que se detallan a continuación:

- La falta de calificación de los integrantes de la Patrulla de la Compañía Especial Contra Subversiva "Tigre", que se encuentran en el parte de guerra.
- La falta de calificación a los nativos y empleados civiles, que contribuyeron con las operaciones.
- La actualización y/o modificación, según corresponda, del parte de guerra con testimonios de los participantes.
- La necesidad de que las comisiones de calificación, de los Institutos armados y CCFFAA, tengan permanencia en el tiempo; y cuenten con los mismos criterios de calificación.
- La falta de calificación de la totalidad de los integrantes de las unidades y/o patrullas.
- Las unidades que fueron en refuerzo y que, a pesar de estar en la zona de combate del Alto Cenepa, no han sido calificadas como defensores de la patria.
- El excesivo e injustificado retraso en las calificaciones; y, la falta de respuesta a los peticionarios.
- La falta de reconocimiento del personal de licenciados por errores materiales en nombres o apellidos en el parte de guerra.
- El personal condecorado con la medalla Cáceres, que no ha sido calificado.
- La ampliación de la zona de combate del alto Cenepa e inclusión de Unidades.

- La necesidad de descentralizar la oficina de calificación; solicitando se instale una oficina en Bagua.
- Se cumpla con el pago de los devengados.
- La actualización del monto del bono, de conformidad con lo dispuesto por ley.
- La situación de las presuntas denuncias por irregularidades en la calificación del personal que no participó en el conflicto del Cenepa; así como la situación de las denuncias por presuntos cobros de miembros de las diferentes Comisiones Calificadoras.
- La situación de un grupo de señoras que apoyaron en la confección de alimentos para las tropas; considerando que, según ellas algunas ya fueron calificadas, quedando pendiente otras señoras.
- Atención inadecuada a licenciados que gestionan sus derechos.

CONCLUSIONES GENERALES

Teniendo en consideración las conclusiones parciales de la evaluación de las iniciativas legislativas, podemos concluir señalando lo siguiente:

1. Existen diversos casos de personal militar y civil que no accedió a la calificación por diversos motivos, adicionalmente el plazo para la presentación de los documentos para ser calificado concluyo en el mes de noviembre del 2023.
2. Las dependencias encargadas de la evaluación, calificación y emisión de los documentos que acreditan como Defensor de la Patria, Combatiente o movilizado, no tienen un plazo determinado, por lo que es necesario considerar un periodo a efectos de la conclusión y emisión de la calificación correspondiente.
3. Existen casos que personal militar o civil que participó en alguno de los conflictos con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995 y que ha sido calificado como Defensor de la Patria, no ha sido registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del sector Publico (AIRHSP), aplicativo que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
4. Se ha insertado en la norma legal que otorga beneficios a los Defensores de la Patria por su participación en conflictos fronterizos, a los que participaron en la pacificación nacional; por lo que resulta necesario se revise la normatividad respecto a los Defensores de la Democracia.
5. Se propone realizar la "indexación" del beneficio económico que se les otorga a los Defensores de la Patria, pese a que existe normatividad que prohíbe esta acción.
6. Se propone modificar el monto del beneficio económico otorgado a los Defensores de la Patria, que está determinado por ley, en el sentido de "actualizarlo" al valor de tres (03) Remuneraciones Mínimas Vitales.
7. Que la normatividad vigente, existe la posibilidad que personal militar sea objeto de más de una calificación, por lo que es necesario asignar un incentivo.
8. Que producto de las visitas realizadas por la Comisión, se ha recibido observaciones y quejas, así como se ha determinado una serie de aspectos a corregir y modificar en los requisitos y procedimientos para ser calificado como

Defensor de la Patria, Combatiente o Movilizado, por lo que es necesario una revisión y actualización de los requisitos para la calificación.

9. Que el Congreso de la Republica no tiene injerencia en modificar los requisitos determinados por Decreto Supremo, asignación presupuestal, aspectos que corresponde a los sectores de Defensa, Interior, Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros.
10. Existe una inflación de normatividad
11. El Legislativo no puede determinar la conformación del Comités para evaluación de cumplimiento de requisitos, primero porque ya existe esta comisión y segundo porque es potestad del Ejecutivo su creación, de acuerdo a Ley Orgánica 29158.
12. No es factible modificar los límites de las zonas del Ato Cenepa y de la Zona de Combate del Alto Cenepa, mediante Ley.
13. El Parte de Guerra, del conflicto con el Ecuador del año de 1995, no contiene los detalles suficientes para la calificación del personal militar y civil, lo que viene generando trabas en la clasificación, ya que no se acepta otras alternativas como prueba de la participación en este conflicto.
14. Las iniciativas legislativas que proponen incorporar beneficios, ninguna cuantifica el personal beneficiado, tampoco cuantifica la cantidad de recursos financieros, ni fuente de financiamiento.
15. Proponen obviar la calificación del Consejo de la Medalla al Defensor de la Democracia
16. Se propone modificar artículos de normas de menor rango, es decir mediante Ley cambiar aspectos dispuestos mediante Decreto Supremo.
17. Ha Es necesario que el Entidades del Ejecutivo involucradas en la Calificación de los Defensores de la Patria, Combatientes, movilizados y Defensores de la Democracias en los diferentes grados, revisen los requisitos.
18. Respecto a la reunión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, en la ciudad de Bagua el 9 de mayo del 2022, con los recurrentes a obtener la calificación de Defensores de la Patria determino una serie de hechos, los mismos que fueron puestos en conocimiento del Ministerio de Defensa – Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que les den solución; sin embargo, a la fecha poco o nada de ha hecho al respecto, por lo que es necesario se revisen, revalúen y se modifican, para lo cual es necesario que el Ejecutivo reformule aspectos relacionados a los reglamentos.
19. Que producto de la evaluación de las iniciativas y de la normatividad vigente, se recomienda retirar un párrafo de la Ley 29031, por mantener vigente en una norma legal a terroristas que causaron muertes y perdidas al país.
20. De la evaluación de diversas propuestas se determina que el personal militar que fue objeto de una condecoración por su Instituto Armado u otro o Policía Nacional durante el proceso de pacificación, estos sean propuestos de oficio para ser considerados como Defensor de la Democracia en el grado correspondiente.
21. De acuerdo a la función fiscalizadora que le corresponde a la Comisión de Defensa, Orden Interno, desarrollo Alternativo y Lucha Contra las drogas del

Congreso de la Republica, esta debe recibir información del ejecutivo del desarrollo sobre las calificaciones como Defensor de la Patria o de la Democracia.

aa. **Análisis general que sustenta la fórmula legal propuesta**

La comisión luego de la revisión de las veinticinco iniciativas legislativas presentadas sobre defensores de la democracia y defensores de la patria, de las opiniones recibidas, reuniones de trabajo y de la legislación vigente consideramos lo siguiente:

La mayoría de las iniciativas bajo análisis tienen como fin último la incorporación de mayores beneficiarios como defensores de la patria y de la democracia, para recibir la asignación de la bonificación inicial equivalente a 3 remuneraciones mínimas vitales y ahora establecida en dos mil quinientos cincuenta soles (S/. 2,550.00); en algunos casos tantas bonificaciones como campañas o calificaciones tengan; o el incremento del monto de la bonificación, entre otros.

Casi todas las opiniones recibidas consideran a los proyectos bajo análisis como inviables; las mismas que en su mayoría conllevan iniciativa de gasto, colisionando con el artículo 79 de la Constitución Política.

En la actualidad la problemática planteada es la siguiente:

- Los Defensores de la Patria son calificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a propuesta de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú.
- Mediante la Ley 24053 -modificada con la Ley 25208 de 1990- se otorgó una bonificación de tres remuneraciones mínimas vitales para los calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los ex combatientes de la Campaña Militar de 1941; los mismos que se extienden a los excombatientes del conflicto de 1933.
- En junio de 2016, Ley 30461, se incorporan a los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, para ser calificados como Defensores de la Patria.
- En abril de 2021, con la Ley 31177, se incorporan a los calificados como Defensores de la Democracia, que cuenten con parte de guerra formulado en su oportunidad.
- La Ley 29031 establece como Defensores Calificados de la Patria, cuya evaluación está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros; y comprende a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; Comandos del Operativo Chavín de Huántar; Grupos Especiales de Inteligencia (GEIN); la Dirección contra el terrorismo (DIRCOTE); los comités de autodefensa; ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo; militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva

prestaron evidentes servicios a la Nación; mineros y personal auxiliar de la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaros el operativo Chavín de Huántar; rehenes que contribuyeron en acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar; miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú, comité de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.

La cantidad de personas que podrían ser calificadas como defensores de la democracia, es indeterminada; por ello es difícil incorporarlos al otorgamiento de la bonificación; además de la necesidad de que cumplan con el requisito de "parte de guerra emitido oportunamente"; este último es un requisito que a la fecha no es alcanzado por ninguno de los solicitantes.

Como podemos ver, sería una irresponsabilidad de la comisión aprobar las iniciativas legislativas que buscan otorgar una o más bonificaciones a los defensores de la patria o de la democracia; ya que ello afectaría los recursos públicos, adicionalmente que no se cuenta la estimación dineraria.

Pero a su vez consideramos que la situación actual de aquellos que están a la espera de ser calificados como Defensores de la Patria, o que ya están calificados pero que no reciben la bonificación, debido a su no incorporación al Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP); o aquellos que han reunido sus documentos y ya no pueden presentarlos para calificación; entre otros, debe dársele una solución.

Por ello, proponemos la fórmula legal de acuerdo al detalle siguiente:

Defensores de la Patria

1. Plazo de calificación: se establece en seis meses el plazo para la calificación, contado desde la presentación de la solicitud, hasta la notificación al solicitante y al Instituto Armado o Policía Nacional.
2. Plazo para el registro en el AIRHSP: los ministerios de defensa e interior solicitan el registro de alta del personal calificado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP); el Ministerio de Economía y Finanzas registra las altas
3. Requisitos calificación: se otorga un plazo de 120 días para revisar y actualizar los requisitos de calificación.

Defensores de la Democracia

4. Revisión de la legislación: seis meses para que la presidencia del Consejo de Ministros revise la legislación para viabilizar los beneficios.
5. Condecorados: el Comando Conjunto, los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú remitirá a la Presidencia del Consejo de Ministros la relación de condecorados por la lucha contra terrorismo para su calificación.

Bonificación mensual

6. Características de la bonificación: mensual, única, vitalicia e intransferible.
7. Monto: se fija en S/ 2550.00

Bonificación por calificación adicional

8. Bonificación mensual: es únicamente por la primera calificación.
9. Calificaciones adicionales: por las calificaciones adicionales se entregará una única bonificación equivalente a dos unidades impositivas tributarias por cada una.

c. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO

La aprobación del dictamen que acumula los 24 proyectos de ley dará lugar a gastos adicionales al tesoro público, ya que al continuar con las calificaciones como Defensor de la Patria, que otorga beneficios económicos; por lo que, los sectores involucradas actuarán con el presupuesto asignado que gestionan actualmente; el mismo que se trata de beneficios económicos que se han venido aplicando desde el año 1985 y varia año a año; sin embargo de darse el caso de otras calificaciones los sectores correspondiente realizarán las demandas presupuestales, pero es un justo reconocimiento a la labor realizada por aquellos que estuvieron en los momentos que estaba en riesgo la soberanía e integridad territorial.

No obstante, los sectores involucrados tienen partidas en sus presupuestos para cubrir estas bonificaciones; las que implican un justo reconocimiento a nuestros valerosos militares y policías que lucharon para defender a nuestra patria en el frente interno en la lucha contra el terrorismo, y en el frente externo en los conflictos contra el Ecuador.

Asimismo, es importante que la Patria reconozca a los militares y policías otorgándoles una bonificación única para las calificaciones adicionales; las mismas que constituyen un aliciente por su defensa a la pacificación.

El beneficio es realmente importante ya que permitirá que nuestros militares y policías sepan que su esfuerzo es reconocido y valorado; por ello, proponemos iniciar una solución a la problemática planteada con los defensores de la Patria y de la Democracia. Este primer paso busca una revisión de la legislación por parte del

Poder Ejecutivo, para sincerar el problema del reconocimiento y evitar que sigan dándose falsas expectativas en aquellos que consideran deben ser reconocidos como defensores y que debido a limitaciones en la legislación no lo han podido concretar hasta la fecha.

VI. CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1783/2021-CR, 2171/2021-CR, 2302/2021-CR, 2628/2021-CR, 2958/2022-CR, 3391/2022-CR, 3500/2022-CR, 3645/2022-CR, 4549/2022-CR, 4601/2021-CR, 4602/2022-CR, 4738/2022-CR, 4979/2022-CR, 5032/2022-CR, 5167/2022-CR, 5192/2022-CR, 5224/2022-CR, 5721/2023-CR, 5884/2023-CR, 6522/2023-CR, 6615/2023-CR, 6773/2023-CR, 6955/2023-CR, 7112/2023-CR y 7992/2023-CRcon el siguiente texto sustitutorio:

LEY QUE PRECISA EL PROCESO DE CALIFICACION Y LOS BENEFICIOS DE LOS DEFENSORES DE LA PATRIA Y LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto precisar los beneficios y los plazos de calificación y de incorporación al Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), para los defensores de la patria y los defensores de la democracia.

Artículo 2. Plazo para calificación como defensor de la patria

El proceso de calificación como defensor de la patria establecido en la Ley 24053 -que otorga beneficios al personal señalado en el artículo 10 de dicha ley- tiene una duración máxima de seis meses contados desde la presentación de la solicitud. Este plazo incluye la elaboración y la presentación de la propuesta por el Instituto Armado o la Policía Nacional, la calificación por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las notificaciones al solicitante y al Instituto Armado o la Policía Nacional.

Artículo 3. Plazo para el registro de los calificados como defensores de la patria en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)

3.1. El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, solicita el registro de alta del personal calificado como defensor de la patria en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos

Humanos del Sector Público (AIRHSP), en un plazo máximo de treinta días luego de haber recibido la notificación señalada en el artículo 2 de la presente ley.

3.2. El Ministerio de Economía y Finanzas registra las altas a solicitud y en coordinación con el sector correspondiente.

Artículo 4. Revisión de la legislación sobre defensores de la democracia

La Presidencia del Consejo de Ministros, en un plazo máximo de seis meses contados desde la entrada en vigor de la presente ley, revisa la legislación sobre defensores de la democracia y, de ser el caso, viabiliza los beneficios señalados en el artículo 10 de la Ley 24053 - Denominan "Campaña Militar de 1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor Oriente; y declaran el 31 de Julio Día Central Conmemorativo.

Artículo 5. Bonificación mensual

Las personas calificadas como defensores de la patria o como defensores de la democracia perciben una única bonificación mensual con carácter vitalicio e intransferible, indistintamente de la cantidad de calificaciones que hayan adquirido.

Artículo 6. Monto de la bonificación mensual

El monto de la bonificación mensual que se otorga a la persona calificada como defensor de la patria o como defensor de la democracia asciende a S/ 2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta y 00/100 soles); de conformidad con la centésima cuadragésima disposición complementaria final de la Ley 30879 -Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019.

Artículo 7. Bonificación por calificación como defensor de la patria o defensor de la democracia

7.1. La persona calificada como defensor de la patria o como defensor de la democracia percibe la bonificación mensual señalada en el artículo 6 de la presente ley, solamente por su primera calificación.

7.2. En el caso que la persona tenga más de una calificación señalada en el artículo 10 de la Ley 24053, recibe adicionalmente, por única vez, una bonificación equivalente a dos unidades impositivas tributarias (2UIT) por cada calificación adicional.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Revisión y actualización de requisitos de calificación como defensor de la patria

El Ministerio de Defensa, en un plazo máximo de ciento veinte días desde la entrada en vigor de la presente ley, revisa y actualiza los requisitos para ser calificado como defensor de la patria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Informe semestral

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: JULON IRIGOIN Elva Edhit FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/06/2024 16:39:33-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2024 12:52:00-0500

El Ministerio de Defensa o la Presidencia del Consejo de Ministros informa semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República del Perú sobre las calificaciones como defensor de la patria o como defensor de la democracia, según sea el caso.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación de los artículos 2 y 4 de la Ley 29031, Ley que instituye el día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente

Se modifica el párrafo segundo del artículo 2 y se incorpora un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley 29031, Ley que instituye el día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, en los términos siguientes:

"Artículo 2. Actividad conmemorativa

[...]

Las instituciones educativas, estatales y particulares, el primer lunes de cada mes, deben recordar y resaltar las virtudes de los peruanos que luchan contra los delincuentes terroristas, condenar los actos criminales del terrorismo, recordar aquellas fechas en que este hizo daño al país y las capturas de los principales cabecillas del terrorismo.

Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161749126 [soft]
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/06/2024 14:28:59-0500

Artículo 4. Medalla al defensor de la democracia

[...]

Los ministerios de Defensa y del Interior, según corresponda, remitirán a la Presidencia del Consejo de Ministros la relación de los condecorados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional del Perú por la lucha contra el terrorismo durante el proceso de pacificación, para su calificación como defensores de la democracia".

Dese cuenta.
Sala de sesiones.
Lima, 10 de junio de 2024

Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2024 12:22:55-0500

Firmado digitalmente por: ARAGON CARREÑO Luis Angel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 15:53:33-0500

Firmado digitalmente por: ROSPIGLIOSI CAPURRO Fernando Miguel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 16:18:11-0500

Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 12:49:12-0500

Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 10:59:26-0500

Firmado digitalmente por: UGARTE MAMANI Jhakeline Katy FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 15:46:49-0500